ADELANTE CON LA NUEVA LEY DE AMPARO

LICENCIADO PEDRO OJEDA PAULLADA
PRESIDENTE DEL COLEGIO MEXICANO DE ABOGADOS, A. C.

Señores Presidente y miembros de la directiva de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados. Señores diputados, distinguido maestro Burgoa, distinguido maestro Arellano, distinguido abogado Velázquez, por allá lo están entrevistando; distinguidos compañeros y amigos: Para el Colegio Mexicano de Abogados que me honro en presidir, adquiere especial significado contar con la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la actualización del marco normativo que rige el Sistema de Amparo y Protección Constitucional pues se trata de una materia altamente sensible y trascendente para la ciudadanía al referirse a instituciones profundamente enraizadas en la tradición jurídica nacional que tienen que ver con la vigencia del respeto de los derechos humanos y las garantías individuales de los mexicanos.

El Colegio Mexicano de Abogados ha tenido la oportunidad de seguir de manera cercana los esfuerzos que en los últimos años se han venido dando en los medios académicos y profesionales, así como en el propio Poder Judicial Federal para integrar un adecuado paquete de reformas a las disposiciones vigentes en materia de amparo, o en su caso, para valorar la conveniencia de que se configure un nuevo ordenamiento.

En este contexto cabe destacar los foros convocados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal desde finales de 1999, reuniones que congregaron a un número significativo de profesionales del Derecho para exponer sus puntos de vista en torno a la renovación del amparo. Dichas actividades culminaron en noviembre de 2000 en el Congreso Nacional llevado a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán.

De los diversos trabajos que con este fin se han elaborado adquiere especial relevancia la propuesta integral de renovación de la Ley de Amparo concluida por la Comisión que al efecto integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuyo texto fue oportunamente entregado a esta Honorable Comisión de la Cámara de Diputados, mismo que viene a representar en buena medida la base sobre la cual se está platicando sobre el tema.

El Colegio Mexicano de Abogados comparte el sentir general del foro, la Academia y la judicatura sobre la necesidad de llevar adelante una transformación profunda de las bases y el procedimiento de juicio de amparo.

En efecto, se percibe esta necesidad de renovación de la Ley de Amparo por varias razones como son, principalmente, los excesivos tecnicismos y complicaciones en que ha caído su tramitación procesal que lo han vuelto un instrumento legal complejo y de difícil acceso a los grandes grupos sociales cuyo manejo requiere de alta especialización, lo que redunda frecuentemente en costos onerosos para quejosos y terceros perjudicados. Se llega al extremo de que se necesita ser amparista y no sólo abogado para poder manejar, a veces, un juicio de amparo.

Debemos tomar en cuenta también que la prolongada vigencia de la actual Ley de Amparo el ordenamiento ha tenido un elevado número de adiciones y reformas, sobre todo para buscar su adaptación a los criterios jurisprudenciales que cotidianamente definen los tribunales.

Dentro de estos razonamientos debemos considerar igualmente el impacto y la trascendencia que en la materia ha tenido la nueva estructura y organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de las reformas de diciembre de 1994 que dieron nueva integración del Pleno constituido ahora por 11 ministros.

Las reformas señaladas crearon igualmente el Consejo de la Judicatura Federal cuyo órgano administrador del Poder Judicial Federal, excepción hecha de los asuntos de administración directa de la Suprema Corte de Justicia.

Por otra parte, las reformas de 1994 ampliaron la competencia de la Suprema Corte para conocer las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que le sean planteadas por la Federación, los estados y los municipios así como el Distrito Federal, ampliando con ello la esfera de la justicia constitucional del país. Claro está que esto lo digo sin desconocer que existen leyes específicas para estas nuevas materias.

Por las anteriores razones es de considerase que la instrumentación idónea de los cambios que requiere el marco legal del Amparo y Protección Constitucional habrá de lograrse de mejor manera si se configura un nuevo ordenamiento a fin de que las innovaciones y transformaciones a que eludimos encuentren adecuadamente armonía, congruente distribución interna y la debida concordancia en este nuevo texto legal.

Hacer todo este cúmulo de modificaciones al texto actual de la Ley de Amparo si bien es posible, resulta complicado en cuanto a que la ubicación de los nuevos textos de reforma entrarían en varios casos forzados o discordantes con las redacciones normativas vigentes en el resto de este ordenamiento legal.

En este panorama reiteramos nuestra percepción y opinión de que es más conveniente, más conveniente, insisto, integrar un nuevo texto de la Ley de Amparo; no desconocemos desde luego que se han vertido muy valiosas opiniones de distinguidos juristas y maestros que estiman innecesaria la renovación integral del ordenamiento en comentario, aún cuando todos ellos o quizás la mayor parte de ellos sí estiman necesarias varias modificaciones importantes a la Ley de Amparo.

Bajo esta perspectiva de la lectura y análisis de la propuesta que a manera de nuevo texto de Ley de Amparo ha entregado la Comisión Redactora de la Corte, que ha sido objeto de cuidadosos análisis de los integrantes del Colegio Mexicano de Abogados, se observan interesantes avances de innovación dignas de ser considerados por el legislador.

Estimo también que en otras partes del texto deberá de tenerse especial cuidado para mejorar la redacción y claridad en la regulación de varios aspectos delicados de ese ordenamiento.

En primer término resaltamos algunos de los aspectos que se estiman positivos y dignos de ser discutidos y en su caso aprobados por el órgano Legislativo como son entre otros los siguientes: La ampliación del término genérico para la promoción del Amparo que pasa de 15 a 30 días hábiles, y en el caso de normas autoaplicativas, a 45 días.

La desaparición del Ministerio Público como parte en algunos de los juicios de amparo, reservándose esta participación exclusivamente en los amparos en que se promuevan en contra de normas generales. De esta forma se evitarán dilaciones ya que la práctica el desahogo de la vista que se hacía prácticamente como un mero formulismo en la que pocas veces el Ministerio Público ejercía una opinión completa sobre cada asunto; y se manejaba como se dice, con formas de machote, y lo que es peor, muchas de ellas se decía que no tenía interés el Ministerio Público cuando yo no estoy de acuerdo con esa idea que se manejaba como se dice, con formas de machote y lo que es peor, muchas de ellas se decía que no tenía interés el Ministerio Público, cuando yo no estoy de acuerdo con esa idea que: " distinguidísimos juristas sean sustentados", porque si tenía la obligación de participar tenía que tener interés

en dar su opinión y no quedarse sin darla y esto, perdónenme que lo diga, pero sí son cosas pasadas.

Yo fui procurador general de la República y les dije entonces a los Ministerios Públicos que no podían decir que no tenían interés, porque todo asunto de la ilegalidad o la funcionalidad, es de interés público.

La desaparición de las normas especiales de amparo agrario, toda vez que se estableció como órgano jurisdiccional en la materia al Tribunal Superior Agrario, quien actualmente cumple con esa responsabilidad.

El establecimiento renovado de requisitos de forma y de fondo en la estructura de las entidades de amparo que daría mayor claridad y congruencia a su contenido.

La reordenación de los recursos dentro del proceso, distinguiendo a estos de manera precisa de los incidentes, según su particular materia procesal, por naturaleza procesal.

La nueva denominación de la figura actual del tercero perjudicado por el de Tercero Interesado que denota una mejor posición que abre mucho como lo hemos notado todos, este asunto y cuyas consecuencias, según se opina pudieran ser malas pues yo creo que serán buenas cuando se sepa bien a qué le llamamos ese Tercero Interesado.

La desaparición de la figura de la caducidad de la instancia, lo que resulta conveniente para evitar que las partes se vean afectadas por la Entidad Procesas que en muchas ocasiones no le es imputable.

La reordenación de los impedimentos procesales a fin de disminuir con mayor cuidado las excusas y las recusaciones. Es de destacar la incorporación del concepto de interés legítimo, tema también muy discutible pero que yo opino que sí debe incluirse para que se abra la posibilidad de interponer amparo en los lugares en donde ahora todavía no es posible hacerlo.

Dada la extensión del tiempo con el que cuento para mi exposición, paso a referirme de forma especial a cuatro de los temas de mayor novedad en pacto que adapta la propuesta de Nueva Ley, como son: el alcance de protección de las acciones de amparo, el concepto de autoridad responsable, la suspensión, su tramitación procesal y efectos, y los efectos de la Sentencia de Amparo alrededor de la llamada fórmula Actor-Otero que es la actualmente vigente.

Alcance de la protección de las acciones de amparo.- La propuesta de Nueva Ley da un giro notable a esta protección, toda vez que en su artículo primero precisa el objeto del Juicio de Amparo, señalando que tendrá por fin resolver las controversias que se susciten por normas generales o actos de autoridad que violen las garantías que consagra la Constitución General del país, agregando también de manera novedosa y de avanzada, que procederá el Juicio de Amparo cuando se violen los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales generales en la materia y que se hayan acordado por las autoridades mexicanas, cumpliendo los requisitos que al efecto señale la propia Constitución.

Estamos frente a una norma de largo aliento para nuestra legislación toda vez que día a día cobran mayor vigencia las modernas teorías en torno a los derechos humanos, que si bien esencialmente coinciden con las garantías individuales, con frecuencia están más explícitos en sus alcances en esos instrumentos internacionales que se recogerían según exposición expresa de la Ley correspondiente.

Esto amplía de manera exponencial la protección de los derechos subjetivos de los habitantes del país, pues no olvidemos que en materia de protección de derechos humanos se habla de la primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación, tecnisismos también no al alcance de todo mundo.

En dónde quedan comprendidos los denominados derechos difusos o el titular no es una persona física particular, sino colectividades o grupos sociales lo que de aprobarse impondrá un reto formidable para nuestro sistema legal. De ahí que algunos opinen que es demasiado arriesgado abrir tanto esta posibilidad.

Concepto de autoridad responsable.- Una de las partes en el Juicio de Ampara que menos ha evolucionado en el ámbito de la interpretación jurisprudencial, lo es sin duda el de la autoridad responsable.

Han existido actos privativos o de molestia que por no ser atribuibles a una autoridad que encuadre en el molde el actual artículo 11 de la Ley vigente, en el que nota distintiva es que se puedan realizar actos unilaterales imperativos y coercitivos, quedando desprotegidos los afectados por no ser recurribles en la vía del Amparo.

Constituye un gran acierto que se conceptúe como Autoridad Responsable, la que dicta, ordena, ejecuta, trata de ejecutar y omite el acto que crea; modifica o extingue situaciones jurídicas en forma obligatoria, pues es un concepto flexible, amplio e integral que permitirá la naturaleza del acto, más que el carácter formal de la autoridad.

Sabemos toda la jurisprudencia que ha habido sobre si es o no, la propia Universidad Nacional Autónoma de México autoridad y cuando puede considerarse que lo es. Sabemos también que en algún tiempo, nuestra jurisprudencia ha tratado este asunto y sabemos también que en este momento no está claro y tendría que aclararse con la nueva Ley.

La suspensión, su tramitación procesal y efectos.- Una de las instituciones de Amparo cuyas bondades han sido más reconocidas, lo es sin duda la figura del acto reclamado, lo que ha sido producto genuino en su evolución de la interpretación judicial.

Es preciso recalcar que tiene el objetivo de preservar la materia de Ampara o sea, mantenerla vida, bien sea de oficio o a petición de parte, dependiendo del nivel de daños y perjuicios que se trate de impedir.

Es de sobra conocido que una condición para su procedencia consiste en que su otorgamiento no se violen normas de orden público ni se afecte el interés social, estableciendo una serie de supuestos en lo que se considera se vulneran estas disposiciones, con lo cual de manera taxativa, la autoridad de amparo norma su criterio.

En el proyecto en comento subsiste este listado, pero además se adiciona el supuesto que dice que de permitir la naturaleza del caso y opere a favor del quejoso la apariencia del buen derecho.

Ya sabemos que el Derecho es bueno, no es bueno ni malo, es Derecho ya lo sabemos bien pero hay que ver cómo se podría frasear.

Esta última figura es producto de una jurisprudencia muy controvertida de la Corte Suprema por la denominación empleada. Consideramos que dicho concepto debe entenderse en el sentido de que el solicitante tiene un derecho subjetivo de evidencia notoria y clara sin embargo, para evitar confusiones deberá manejarse con extremo cuidado para el caso de la procedencia de la suspensión.

La técnica que de tal sistema pretende establecer, supone el otorgamiento de facultades, repito facultades, que de manera prudente y repito también prudente y ponderada, deberá ejercer el Juez, cosa que quizás algunos piensen que no debe dejarse en manos del funcionario judicial, pero yo creo que es la naturaleza de los jueves que sepan integrar bien sus resoluciones tomando en cuenta los principios de justicia y no quedar amarrados indebidamente con actos que impiden hacer la justicia, de tal manera, que esas intervenciones del Juez deben de conservar la anterior vigente, relativa a la valoración de la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que se causen con la ejecución del acto al quejoso para que de esta forma se pueda obtener un equilibrado sistema en materia de suspensión.

Si bien la inclusión del concepto que se comenta es un avance en la materia no debe perderse de vista que el otorgamiento de la suspensión con base en él, constituya una excepción a la regla general sobre su procedencia.

Los efectos del Amparo y la actual llamada Fórmula Otero o conocida como tal.- La concesión del Amparo contra leyes tiene por efectos declarar la inconstitucionalidad de una norma que contraría a la Ley Fundamental y proteja exclusivamente al quejoso, impidiendo su aplicación al mismo pero no deroga la norma ni declara una invalidez general.

Sin duda, la incorporación de la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, constituye el aspecto más novedoso en la propuesta de Ley de Amparo, ésta procederá cuando la Suprema Corte de Justicia haya establecido los juicios de Amparo y directo, jurisprudencia por reiteración mediante los requisitos ya señalados en la que se determine la inconstitucionalidad de una Norma General.

La consecuencia de la emisión de tal declaración es la de derogar la Norma General, este efecto no opera con el tercer precedente formativo de jurisprudencia, sino que deberá elaborarse un documento por el órgano citado, donde se indicará la fecha de su entrada en vigor, la general, sus alcances y condiciones y que tenga efectos retroactivos, salvo en materia penal. Tal declaratoria deberá publicarse en Diario Oficial de la Federación o en el órgano oficial donde se hubiere publicado la Norma General respectiva; obvio es decir que éste es uno de los temas más polémicos.

Similar procedimiento habrá de seguirse cuando, impugnada una norma la Suprema Corte decida que su contenido se ajusta al dictado constitucional, pudiendo emitir en su caso una declaración general de interpretación conforme, otra cuestión que los abogados todavía no han alcanzado a saber y desde luego el Foro ignora qué quiere

decir eso de Interpretación Conforme, pero yo ya más o menos entendí de qué se trata y creo que es válida la figura.

Se entiende por un importante sector de juristas interpretación conforme, pero yo ya más o menos entendí de qué se trata y creo que es válida la figura.

Se entiende por un importante sector de juristas, que el establecimiento de una facultad de esta naturaleza podría dar lugar a considerar a la Corte como un suprapoder, porque estaría invalidando normas elaboradas por el Poder Legislativo Federal o Local, lo cual es inexacto, don Carlos Arellano te estoy viendo, porque simplemente está declarado que dicho otro poder fue al que extralimitó sus facultades, accediendo a las facultades que le daba la Constitución, lo que hace posible en la realidad la fórmula, uno le llaman checan, valan, otros le llaman pesos y contra pesos, es la esencia del sistema federal.

De alguna manera, el sistema de justicia constitucional que se ha venido estableciendo, ya previeron una situación similar para invalidar leyes, pero ocurre, como es nuevo, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

La fórmula Otero, entre comillas en su manifestación clásica, subsiste en los casos de actos de autoridad, distintos de amparo contra leyes, rigiendo su aplicación en lo individual sólo para los beneficiados con la protección de la justicia federal.

Sin duda este tema de tanta profundidad de trascendencia en nuestro sistema de derecho, tendrá que ser valorado con detenimiento y buen juicio, con la prudencia necesaria.

Tenemos la seguridad que el Congreso de la Unión en el ejercicio de su representación soberana habrá de dar el justo matiz que equilibre las facultades de los poderes federales y que beneficie a la ciudadanía.

Finalmente, el nuevo ordenamiento que resulte de la aprobación del Congreso, será seguramente el instrumento moderno, flexible y justo, al que habrá de apegarse nuestro sistema de amparo y posición constitucional que vendrá a renovar los esfuerzos de aquellos preclaros creadores de la Institución, como lo fueron Rejón, Otero y Vallarta.

Reiteramos que el Colegio Mexicano de Abogados, seguirá pendiente y de cerca de todo esto, el gran esfuerzo de juristas y legisladores. Estamos comprometidos en ello, para que participemos en la manera en que seamos requeridos, pero confió que el Congreso cumplirá su papel debidamente.

Muchas gracias.

LA SUSPENSIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA

LIC. LUIS ARGÜELLES MERAZ
ABOGADO POSTULANTE

Buenos días, señores. Con su venia, señores diputados. Agradezco la oportunidad concedida para exponer algunas consideraciones sobre el proyecto de la nueva Ley de Amparo y en lo relativo a la suspensión en materia a administrativa.

Nada mejor para la nación que el imperio de la ley, mejora aún la posibilidad de perfeccionar los medios por los cuales se haga afectivo el Estado de Derecho.

El acceso a la justicia significa la posibilidad del gobernado de oponerse a los actos de autoridad que considere vulnere sus garantías individuales y ante la violación de ellas, la sentencia que corrija y se confirme así la voluntad del constituyente representativo de la voluntad del pueblo.

En tanto se dicte esa sentencia, no es posible que siga ejecutando actos de autoridad sujetos a juicio y que ante la conciencia del gobernado vulneran sus garantías constitucionales y para ello el constituyente plasmó en nuestra máxima ley la institución jurídica de la suspensión de los actos reclamados, la cual y tomo texto del maestro Burgoa, revista una importancia trascendental, a tal grado que en muchas ocasiones sin ella nuestro medio de control sería nulatorio e ineficaz, dado que en mediante la suspensión del acto reclamado, como se mantiene viva la materia del amparo constituida por las situaciones concretas y específicas que el agraviado pretende preservar.

Constantemente se escucha que se abusa del juicio de amparo y refieren al número de juicios que se instauran y se escuchan voces que pretenden limitarlo. La única fuerza de quienes lo dicen estriba en el volumen que le imprimen a su voz, más omiten analizar que el número de juicios de amparo obedece al número de violaciones de garantías constitucionales que a diario se cometen y que en su mayoría quedan impunes.

Puede decirse también y con la experiencia de quien ocurre al juicio de garantías que existe otro abuso del amparo, hecho por los encargados de su resolución y que es el sobreseguimiento del juicio, de tal suerte que en aras de lamento a nuestro medio de control constitucional se le denomina el juicio de sobreseguimiento.

Se pretende el acceso a la justicia y no se logra si se limita el medio legal para obtenerla, menos aún si se limita arbitrariamente la institución jurídica, que sin ella nuestro medio de control, reitero, sería nulatorio e ineficaz.

La suspensión de los actos reclamados en la Ley de Amparo vigente y en los casos de la competencia de jueces de distrito, tratándola de la materia administrativa puede decretarse de oficio o a petición de la parte agraviada.

De oficio entre otras hipótesis normativas, cuando se trate de algún acto que si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

Fuera de la de oficio, la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, así mismo que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

La norma contenida en el segundo párrafo, de la fracción segunda, del artículo 124, inútilmente relaciona los casos donde se considerará que sí se sigue perjuicio al interés social o se realizan contravenciones de disposiciones de orden público, dado que el propio párrafo dicen que son, entre otros.

Inútil, porque permite una liberalidad en el juez para negar la suspensión y el proyecto de ley incide en esa liberalidad. La suspensión provisional conforme al artículo 130 de la ley actual, sujeta a los requisitos antes mencionados, se decreta hipotéticamente si hubiera el peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para el quejoso, ello con la sola presentación de la demanda.

En tanto no se pronuncie sentencia ejecutoriada, el juez del distrito nuevamente con liberalidad, puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurre un hecho superviniente que le sirva de fundamento.

No es necesario el transcurso de mucho tiempo, para que un Estado de Derecho se rompa aún parcialmente. Puede suscitarse ese rompimiento en el tiempo que pase entre la negativa de la suspensión y el dictado de la sentencia definitiva que ampare y protege al gobernado.

Del breve análisis tenemos que el sistema actual de suspensión en materia administrativa, está sujeta a la estricta voluntad del juez del distrito. No tiene ni la más

mínima restricción normativa y el mismo sistema incrementado se encuentra en el proyecto de la ley.

Con solo argumentar el juez distrito, que con la suspensión se sigue perjuicio al interés social, basta para que aparezca como motivada la negativa de la suspensión, dado que de la lectura del artículo 124 de la Ley de Amparo vigente no se tiene una definición de lo que se entiende por interés social.

El requisito de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causan al agraviado, con la ejecución del acto reclamado, se elude con el simple argumento de que el juzgador no considera que la ejecución de esos actos causen al gobernado daño y perjuicio difíciles de reparar.

Si todos debemos ajustarnos a la ley y el juicio de amparo tiene como fin la primacía constitucional, no existe motivo alguno para dejar en mano de quien juzga la liberalidad a efecto de decidir sobre lo que es el interés público ni cuál es el interés social, siendo que el legislador en el momento de dictar las normas de la no procedencia de la suspensión, atenderá precisamente al interés público y al interés social, para determinar cuándo son los casos en que no procede la suspensión de los actos reclamados, precisamente al interés público y al interés social, para determinar cuándo son los casos en que no procede la suspensión de los actos reclamados.

Existen principios doctrinales y la jursiprudencia ha sido constante en ese sentido, que la suspensión no tiene efectos restitutorios, porque esto corresponde a la sentencia del juicio de amparo y ello nos indica que tampoco puede prejuzgarse en el incidente de suspensión respecto de la procedencia del juicio. El prejuzgamiento se da en forma constante en los juzgados de distrito, y es la base para la negativa de la suspensión. Cuando exigen al quejoso y que aún presuntivamente se acredite el denominado interés jurídico en el amparo, cuando de la lectura de la Ley actual no se desprende, ni aún presuntivamente, que sea requisito para la procedencia del otorgamiento de la suspensión.

El juicio de amparo, desde su creación como medio de control constitucional, es para que ante el acto de autoridad, el gobernado tenga la posibilidad de asistir a una autoridad constitucionalmente facultada para que ésta, a la luz de la Constitución, juzgue si ese acto es adecuado o no a la misma.
Si el juicio tiene como fin la vigencia de las garantías individuales, otorgadas a los mexicanos y a los que se acogen a nuestro territorio, ante el acto de autoridad que le afecte sus garantías individuales, tienen interés para combatirlo, garantías individuales que la propia Constitución sabiamente limita su ejercicio.

Acontece, que por interpretación que la autoridad judicial ha hecho de la Ley de Amparo, sólo procede el juicio cuando el quejoso acredita su interés jurídico, y éste se entiende, según la jurisprudencia, como el derecho otorgado por la ley secundaria. De esa manera se ha sujetado la vigencia de la Constitución a la ley secundaria y más aún, a reglamentos administrativos.

Para nadie es ajena la excesiva regulación de la actividad de los particulares por parte del Estado, la excesiva reglamentación de actividades garantizadas por nuestra Constitución, y que hacen posible por ese medio administrativo, limitar las garantías individuales. Entonces, queda en manos de la autoridad administrativa el otorgar o no el derecho que la Constitución otorga al individuo y si ese otorgamiento es la base para hacer procedente el juicio de garantías y conforme al proyecto de ley necesario para obtener la suspensión, llegamos a la apariencia de un constitucionalismo mexicano. Como ejemplo, tal vez vergonzoso, tenemos el criterio sostenido de que aún en el caso de que la ejecución de los actos reclamados dejara sin materia el juicio de amparo, resulta improcedente la concesión de la suspensión provisional, cuando tuviera como efecto impedir la función encomendada al Ministerio Público, para la investigación y persecución de los delitos y se dice, en ese criterio, que ante el conflicto del interés del peticionario con el de la sociedad y el Estado, debe prevalecer el interés colectivo.

Efectivamente, debe prevalecer el interés colectivo ante el interés individual, pero no puede afirmarse que la sociedad no tenga interés en que nuestra Constitución sea vigente, no puede válidamente afirmarse que no importa que un juicio de amparo quede sin materia y la Constitución violada por la investigación y la persecución de los delitos.

Tampoco puede afirmarse, de la misma manera, que la sociedad esté interesada, que quede violada la Constitución, dejando sin materia el juicio de amparo, por el acto arbitrario de cualquier autoridad administrativa.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, se dice que una de las más frecuentes críticas al juicio de amparo, es precisamente la paradoja de que la rigidez en su reglamentación impide la paralización de innumerables actos arbitrarios; pero por otro lado, propicia abusos en la suspensión de los reclamados.

El proyecto pretende establecer un sistema equilibrado, que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvíen su objetivo natural.

En la propia exposición de motivos dice, que se contemplan múltiples reformas al sistema de suspensión, en las que por un lado se privilegia la discrecionalidad de los jueces, pero por otro, se establecen elementos mínimos, formales y sustantivos, que deben cumplir las resoluciones suspensivas para facilitar su control a través de los recursos que se prevén en el proyecto.

No puede existir el equilibrio, cuando el juzgador no tiene ningún contrapeso, al privilegiarse su discrecionalidad, salvo que por discrecionalidad no se entienda como la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas.

Si no está reglada la procedencia o la improcedencia de la suspensión, quiere decirse que el juez de distrito puede optar bajo su arbitrio, el negar o conceder la suspensión. Y el órgano revisor ante el recurso, puede optar discrecionalmente también, por confirmar o revocar la suspensión, pues nada les obliga legalmente a actuar en determinada forma.

Paradoja es que la autoridad encargada de que los actos reclamados en el amparo, sean motivados y fundados, no tienen en qué ni el por qué motivar y fundar sus actos en contravención de la propia Constitución, sujeta a su cuidado.

Con la discrecionalidad apuntada, en el proyecto se introduce una figura que se contemple en la reforma constitucional, que es la referente a la apariencia de buen derecho.

Esta figura, dice la exposición de motivos, implica un conocimiento preliminar del juzgador, con el objeto de resolver acerca de la probable existencia del derecho discutido. Dice que el estudio previo que hace el juez, tiene sin duda el carácter de provisional, ya que se funda en hipótesis de probabilidad y no en la certeza, como sucede en la resolución de fondo y que con esto se lograría una eficaz y pronta protección de los gobernados, frente a actos de autoridad arbitrarios y al tiempo se impediría la paralización de actos que en un primer análisis tienen apariencia de constitucionalidad o legales. Salvo casos extremadamente excepcionales, los actos de las autoridades administrativas, son aparentemente constitucionales o legales; más aún, son difíciles de probar cuando no constan por escrito y éstos son la mayoría.

Ninguna autoridad administrativa le notifica previamente a un gobernado que será objeto de inspección y se ejecuta el acto de inspección. Aparentemente la inspección es constitucional, por lo cual se le negaría la suspensión en el juicio.

Las autoridades administrativas también, generalmente y aparentemente, hacen lo que la ley les faculta hacer, pero también, generalmente violan normas del procedimiento y causan daños y perjuicios al gobernado.

Como actos reclamados, esas violaciones no serían susceptibles de suspensión, porque aparentemente es constitucional el actuar de la autoridad responsable.

En el proyecto de nueva ley, se dice que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Igual hipótesis normativa la encontramos en el artículo 122 de la Ley actual.

Dice el citado proyecto, que la suspensión se concederá de oficio y de plano, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Nada aporta, igual lo dice el artículo 123 de la Ley actual.

Como se norma el artículo 123 de la Ley actual, el artículo 125 del proyecto, dice que el incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto, para la suspensión, a instancia de parte en los casos de deportación o extradición y siempre que se trate de algún acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.

El artículo 126 del proyecto, reitera las hipótesis normativas del artículo 124 de la Ley actual y tampoco ha operado.

El proyecto introduce, en el artículo en cita, las hipótesis jurisprudenciales que fueron dictadas para que los jueces negaran la suspensión, cuando dice que de permitirlo la naturaleza del caso, opere a favor del quejoso la apariencia de buen derecho. Imposible es de que opere a favor del quejoso la apariencia del buen derecho, dado que la jurisprudencia agregó un requisito más para otorgar la suspensión de los actos reclamados, obstaculizó más la ingenua esperanza del quejoso, de que se le otorgue la suspensión en materia administrativa.

La jurisprudencia dice que el requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso. De modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Tradúzcase lo anterior, en que el quejoso de acuerdo con el proyecto, no tan sólo tiene que salvar el obstáculo de la discrecionalidad del juez, si no de aprobarse el proyecto, tendría que acreditar el interés jurídico, dado que la jurisprudencia lo traduce así con su sola lectura y otra norma que tiene el proyecto.

Bien sería que la apariencia del buen derecho así, con su sola lectura y otra norma que tiene el proyecto.

Bien sería que la apariencia del buen derecho fuera entendida en base al derecho que otorga la Constitución al gobernado, no el derecho emanado de una ley secundaria; derecho que está sujeto en su otorgamiento material a la autoridad administrativa, misma que resulta responsable de los actos reclamados.

Sin lugar a dudas, no debe concederse la suspensión cuando se siga a perjuicio el interés social o se contravengan disposiciones de orden público; pero la norma del proyecto relaciona los casos y permite la calificación del juez de entre de otros casos; sujeta la calificación a su arbitrio y remata la norma del proyecto.

Para que no haya lugar a dudas, en la fracción 10; que existe esa afectación al interés social en los demás casos análogos a los expresamente citados.

El Poder Judicial Federal está constituido por juzgadores no por árbitros, por lo cual, de la misma forma que todas las autoridades de nuestro país, sus actos deben ser motivados y fundados, y si como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia en interpretación del artículo 16 de la Constitución, que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate.

Tenemos entonces, que al no existir norma legal que defina los casos en que con la suspensión se ataque al interés social, no tiene porqué el juez de Distrito aludir a alguna norma legal, porque así se le permite y menos aún, adecuar su resolución a una hipótesis normativa que no existe y el juzgador puede, fácilmente, olvidarse de la garantía constitucional aludida, entonces, el encargado de que subsista la garantía la desaparece.

Bien se saben los casos de improcedencia de la suspensión, porque esos casos, definidos perfectamente por los estudiosos de la materia, tienen una lógica palmaria en el sentido de la improcedencia en comento.

Ante la disposición de la ley, en los casos de la no procedencia de la suspensión, no contaría el temor de firmar una resolución de suspensión ante la falta de disposiciones que rijan la suspensión y dejar las discrecionalidades de procedencia, el temor operará en no otorgarla. La fuerza de la ley es la que impone la moral y las del juzgador.

El texto del artículo 129 del proyecto suele plasmar lo que la jurisprudencia impuso como requisito para la procedencia de la suspensión. La ley actual no lo exige, pero la jurisprudencia sí; lo del interés jurídico.

No es ajena la conducta de los jueces de negar por trámite la suspensión a la profusión de organizaciones no gubernamentales y de comisiones de derechos humanos, es la muestra palpable de la falta de eficacia y de respuesta inmediata a los gobernados por parte del Poder Judicial Federal, contra los actos de autoridad que aún, temporalmente, limitan las garantías constitucionales y esa eficacia se encuentra en la suspensión.

No se puede permitir que nuestro medio de control constitucional sea sólo la apariencia de un buen derecho. El legislar sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, reviste la importancia de hacer eficaz el medio de control, es hacer que funcione y, con ello, llevar las garantías constitucionales al grado superior legal que por su naturaleza tienen y no el que su goce dependa de leyes secundarias, reglamentos administrativos o discrecionalidades que ante el embate informativo desnivelan la balanza de la justicia, gracias.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LA LEY DE AMPARO

DOCTOR CARLOS ARELLANO GARCIA

CATEDRATICO DE LA FACULTAD Y AUTOR DE OBRA JURIDICA.
"EL JUICIO DE AMPARO" Y "PRACTICA FORENSE DEL JUICIO DE AMPARO"

Distinguidos miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, distinguidos maestros, distinguidos señores y señoras.

Constituye un honor singular haber recibido la invitación de la mencionada Comisión, a efecto de que se emitiese una opinión jurídica respecto del proyecto de ley de amparo formulado por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como punto de partida, expresamos que la temática jurídica, por su propia naturaleza, es debatible y se pueden proliferar opiniones diversas, algunas de ellas antagónicas, pero lo que interesa es el aquilatamiento del valor de los argumentos que se esgrimen, unas veces en la exposición de motivos, otras veces en las ponencias, para señalar lo que en la teoría y en la práctica, pudieran no ser totalmente conveniente, porque en última instancia lo que prevalece es el interés de la colectividad.

Particularmente, la materia de amparo que representa un proceso final en donde se da el desenlace a una controversia, tiene relevancia suma por esa característica de ser la última palabra que suele decirse en procedimientos de diversas ramas del derecho y, además, porque también se plantea la legalidad o no legalidad de los actos de autoridad.

Nosotros no pretendemos, de ninguna manera la exhaustividad, sino solamente queremos dar a conocer algunas observaciones respecto al proyecto de ley de amparo.

En primer término nos preocupa que se haya hecho una falta de atención hacia una tradición mexicana que tiene 144 años, la existencia del denominado amparo-competencia.

La procedencia del amparo prevista en el artículo 103 constitucional y en el artículo primero de la legislación de amparo establece que el amparo procede por violación de garantías individuales, y esto es lo que se conserva y se agregan derechos humanos que ya estaban tutelados.

Pero el problema aparece en el hecho de que se piensa erróneamente que la modificación 94 al artículo 105 constitucional, en el sentido de establecer la controversia constitucional, ya determina la posibilidad de enfrentar la invasión competencial de federación a facultades de entidades federativas o viceversa, y esto tiene que permanecer en el amparo. Es decir, no hay la argumentación necesaria para hacer desaparecer este amparo competencia cuando hay una afectación de la esfera jurídica al gobernado por invasión de competencias.

En efecto, son múltiples las facultades de las entidades federativas, estados y Distrito Federal, son múltiples las facultades de la federación, pero la barrera a sus facultades estaba prevista en las fracciones segunda y tercera del 103 y previstas en las fracciones segunda y tercera del artículo primero de la Ley de Amparo, y se eliminan de un solo golpe sin razón suficiente, y voy a decir que esto debe ser conservado en virtud de que cuando el quejoso plantea un problema de invasión competencial, el amparo debe ir ante juez de Distrito como lo establece la fracción respectiva del artículo 114 de la Constitución.

El amparo, según lo exige el artículo 116, debe hacer el planteamiento de la controversia competencial respectiva y cuando ha sido dictada la sentencia, le compete la revisión al más alto órgano jurisdiccional del país: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; artículo décimo vigente actual de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículo 10º vigente, actual, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En esa virtud, esta es una de las observaciones que nos permitimos formular en primer término, porque en el orden numérico está el artículo primero de la Ley de Amparo proyectada y está el artículo 201 constitucional.

El otro tema recurrente que conviene que nosotros abordemos, es el referente a la llamada declaración general de interpretación conforme.

Se alude en las diversas posiciones de motivos, la existencia de la denominada "Fórmula Otero", es decir, de una disposición que ha mantenido incluso su relación, desde la antigua época de la reforma de 1847 y más aún, aunque se llama "Fórmula Otero" es producto, la inventiva, porque ya aparecía en artículo 53 de la constitución yucateca de 1840, que entró en vigor en 1841.

Las Fórmula Otero de una manera sencilla expresa la labor que corresponde al Poder Judicial, que es el desempeño de la fusión jurisdicción y no el desempeño de la fusión legislativa. Dice la Fórmula Otero en su texto respectivo, la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de líos particulares, limitándose, amparados y protegerlos en el caso especial, sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivara.

Esta Fórmula de Otero, con una tradición mexicana de 154 años, quiere ser eliminada a través de una innovación que no es lo acertada que decíamos nosotros, aunque partimos la base de que todo es opinable y que podemos como humanos estar equivocados.

Tengo yo, no sé si el tiempo me lo permitiera, porque todavía hay otros puntos, pero yo tengo aquí y entregaría el trabajo escrito respectivo, 23 argumentos de sustentación de la Fórmula Otero, y pienso que ésta, tendría que superar esos 23 argumentos de apoyo a la Fórmula Otero, porque de otra manera habría una imposición en contra de la lógica y en contra de lo que conviene a los intereses de la colectividad que son los que quieren servirse a través de esa máxima institución, llamada al juicio de amparo y que algo inaudible en nuestro país y que no ha entrado en decadencia en lo más mínimo.

Entonces, sus argumentos que podríamos nosotros exponer, diríamos que en primer término, habría que establecer que constituye la Fórmula Otero un pilar de sustentación, una columna vertebral, una regla básica del juicio de amparo, que no debe de ninguna manera soslayarse, porque al Poder Judicial de la Federación le corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional, y la función jurisdicción consiste en adecuar la Norma Jurídica General abstracta, impersonal, coercible, a dos situaciones jurídicas concretas que se hayan en posición de antagonismo y ahí llegar a una solución, pero concreta, respecto del caso concreto que ha sido llevado al ejercicio de esta función jurisdiccional, *mutatis mutandis*, podríamos nosotros decir que hay una regla contenida en el estatuto de la Corte Jurisdiccional Internacional, exactamente los mismo términos, la resolución son obligatorias, respecto del caso concreto y de quienes fueron partes en la controversia respectiva, esto se denomina “desempeño a la función jurisdiccional”.

En segundo término, creemos que no es inútil al verter el paso de los años y la constatación de la virtud de esta Fórmula de Otero, a través de sus 154 años, si tomamos como punto de partida, el acta de reformas de 1847. El antiguo catedrático de la entonces llamada “Escuela Nacional de Jurisprudencia”, hoy prestigiada facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también antigua ex-ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Marino Suela, aludía al principio denominado inaudible, los actos jurídicos producen efectos entre las partes y no respecto a terceros, como se pretende con la innovación legislativa respectiva y para reforzar esto de don Mariano Azuela, padre, decía… "hay otro postulado romano intrapartes, la cosa juzgada sólo tiene el carácter de verdad legal para quienes fueron partes en la controversia y no para terceros ajenos".

La Fórmula Otero continuó su trayectoria de aceptación, que fue recogida por el artículo 102 de la constitución de 57, y posteriormente el artículo 107 de nuestra Carta Magna; la sentencia definitiva que se dicta al final de un litigio, solamente puede beneficiar o perjudicar a las personas que solicitaron el amparo y de ninguna manera,

ni en forma expresa, ni tácita, puede hacerse extensiva la resolución de un amparo a quienes no tuvieron el carácter de partes en ese amparo.

Al determinarse que se haga una declaratoria general respecto de la ley o acto, que la motivare, según lo establecía la Fórmula Otero, el legislador constitucional y el legislador ordinario, enfatizaron claramente los límites justificados y procedentes a la sentencia de amparo que se dicte. Nuestro país, en el pasado, ya sufrió la experiencia, decía Ortega, "Pueblo que no obedece, que no acata la lección de la historia, como penitencia deberá volver a vivir las amarguras de época pretéritas".

Nosotros ya vivimos ese problema, cuando existió el supremo poder conservador, que pretendió ser un poder superior y también lo veo, Francia con el famoso poder constitucional de. En la medida y el amparo, se ha considerado que en la sentencia, en el capítulo de considerandos, pueden hacerse especulaciones de carácter general, pero los efectos concretos están limitados a ese juicio de amparo, solamente puede protegerse a quien pidió el amparo, la protección de la justicia general, sólo debió extenderse al caso especial sobre el que verse la demanda, y no quedaban comprendidas las autoridades que no han sido señaladas como responsables en la sentencia de amparo.

Además la sentencia amparo solamente deber considerar tal, respecto del acto ley que forma materia al juicio de amparo y no respecto de actos o leyes distintas.

La Fórmula Otero, tiene un prestigio tan antiguo como lo es el prestigiado "derecho romano", tenemos nosotros entre los principios generales de derecho que se han conservado a través de los años en su original idioma latín, principios que determinan que las sentencias no pueden producir efectos más allá de quienes fueron partes y respecto del caso dilucidado, de esa manera tenemos el principio, sentencia es conforme nivel, la sentencia debe ser congruente con la demanda.

El juez debe sentenciar con arreglo a lo legado y probado, tanto debe ser juzgado, cuanto se ha debatido y litigado, la potestad del juez no puede extenderse más allá de lo que se dedujo en el juicio, si el juez pronuncia sentencia en la demanda, aquella es nula por el mismo derecho, no va la sentencia proferida sobre cosa no reclamada, tantos interesados, tantas sentencias, la cosa hecha, juzgada, entre unos, no aprovecha ni perjudica a terceros. Y si atendemos al antiguo, nos encontramos con el ilustre y actualmente válido pensamiento de Aristóteles, el auténtico autor de la teoría relativa a la emisión de poderes, que en su obra de la política, en forma muy previa a la obra, respecto a la ley, establecía la división de poderes, para que el poder no sea absoluto, se estableció el principio de división de poderes y establece el artículo 49 de

nuestra Constitución, que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, y el Poder Judicial no debe invadir las tareas que corresponden al Poder Legislativo, con la pretensión de hacer declaratorias de carácter general.

Además el 9º párrafo del artículo 94 de nuestra Constitución vigente, establece la misión de la jurisprudencia, que no es derogar leyes, no es crear leyes, no es modificar leyes, no es abrogar leyes, no es privar defectos a las leyes, únicamente interpretar las leyes, la jurisprudencia interpreta las leyes. De tal manera, no por establecerse determinaciones con validez de carácter general, como se pretende; porque en la propia Constitución establece la omisión de la jurisprudencia y que es la interpretación de las leyes, ni siquiera una tarea integradora; si a caso, existe la preocupación de la existencia de una ley inconstitucional, que pudiera continuar su vigencia, respecto que no solicitará un amparo. Hay una fórmula dada por una persona de familia de inteligentes, descendiente del sonido 13, Julián Carrillo. Y además, tuvo la oportunidad de conocer a los descendientes de él, Antonio Carrillo Flores, quien en su obra la defensa de los particulares, enfrente de la administración establece la solución. El momento en que hay una jurisprudencia de la corte, en la que se determina que una ley es contraria a la Constitución, que la comunicación respectiva se haga del conocimiento del Poder Legislativo, para que si lo estima pertinente de acuerdo con el ejercicio de su soberanía, vuelva sobre sus propios pasos y examine el problema de la constitucionalidad.

Porque el Poder Legislativo no quiere que existan leyes inconstitucionales, porque está por debajo de la Constitución y porque quiere servir a los gobernados y a la sociedad en general; así es de que esa sería la solución, que vuelva a reconsiderar el Poder Legislativo, si debe perdurar o no esa norma, que se ha estimado por la Suprema Corte de Justicia inconstitucional.

Pero además, por otra parte, existe un argumento que hemos recogido de la exposición de motivos, en el sentido de que, puede suceder que una ley declarada inconstitucional sea aplicable a individuos carentes de la capacidad económica, suficiente para poder interponer un juicio de amparo, buscar el patrocinio suficiente y conveniente en momento respectivo.

La verdad es ésta, en México no existen costas judiciales, ya está considerada la situación de los económicamente débiles, ya existe un derecho social tutelar de los económicamente débiles; pero además, existe una defensoría de oficio federal, que actúa de toda la República y cada entidad federativa tiene sus defensorías de oficio que actúan en los diversos lugares, en los que se expande la geografía de nuestro país. Y también, existen bufetes jurídicos gratuitos, de universidades públicas y

privadas, en instituciones del servicio social y también existe una procuraduría de defensa del trabajo. Y ha habido ocasiones, en las cuales los representativos de esos bufetes jurídicos gratuitos, de esa asociación de oficio, son de mejor calidad profesional, que abogados muy bien remunerados, que presuntamente patrocinarían a los ricos; pero además, existe la institución de suplencia, la queja deficiente, así es de que no puede hablarse de que estén en situación de desamparo, los económicamente débiles.

No voy a exponer los 23 argumentos, porque esto cobraría el tributo de que no viera yo otros puntos y brevemente voy a hacer referencia a otro punto, me remito por supuesto, a los 23 argumentos y a este argumento toral, que hago construir lo siguiente: Si quieren hacer desaparecer la fórmula de Otero, respecto a la cual nos pronunciamos, de acuerdo con la tradición mexicana, acérrimos partidarios, que lo hagan, pero que primero superen los 23 argumentos escritos, que me voy a permitir dejar en manos de los señores padres patricios de la Honorable Cámara de Diputados.

Una cuestión que aparentemente podría tener una envergadura de menor magnitud, sería el cambio del término para reclamar una sentencia condenatoria en el proceso penal. Alguna vez se habló de un mes, como término para impugnar una sentencia dictada en materia penal, en segunda instancia y actualmente el proyecto habla de dos años, parece mucho tiempo dos años, pero cuando es una sentencia de 20 años o de 30 años, o de 40 años, y se interpone el amparo, los tres o cuatro, o cinco años; y el delito que era intencional se considera culposo, seguramente la penalidad será por compurgada. Y si el individuo es inocente, ni siquiera se le va a pedir una disculpa por los tres años o dos años que haya pasado en prisión, de esa manera debe mantenerse el sistema actual, en sentido de que la sentencia de segunda instancia en la materia penal privativa de la libertad, debe ponerse interponer en cualquier tiempo, esto es un tema mucho más breve, pero creo yo que es de trascendencia.

Otro tema interesante, es algo que está vinculado con aquella declaratoria de inconstitucionalidad o declaratoria de conforme, para completar el cuadro, se establece el artículo 59 del proyecto en la fracción sexta, que el amparo es improcedente, cuando se interpuso amparo y hay de por medio una declaratoria de inconstitucionalidad o de interpretación conforme; esto significa que el criterio ya emitido por la corte y que adquirió el carácter de declaratoria de inconstitucionalidad o de conforme, no va a volver a ser examinado y la jurisprudencia es susceptible de ser interrumpida.

Si ya no es posible interponer el amparo, cómo se va a interrumpir la jurisprudencia y cómo se va a cambiar el criterio, si las circunstancias habrán cambiado. De esa manera, creo yo que tampoco debe prosperar ese complemento, a la declaración de inconstitucionalidad o declaración de conforme. Ahora, hay otra cuestión que parece que es simplemente terminológica, pero no se expresan razones en la exposición de motivos, para cambiar la palabra términos o la palabra de plazos, simplemente en todas partes donde se decía términos, que es la expresión a la que estamos acostumbrados nosotros en toda la legislación procesal de toda la República y las anteriores leyes de amparo, la palabra términos y se quiere cambiar por plazos. Será la doctrina italiana, la inspiradora de esta tendencia satanizadora de una expresión, que es sinónima de la palabra términos.

En el trabajo hago una exégesis de significación gramatical de las palabras plazo y términos, que son sinónimas hasta condicional de sinónimos, en donde se relata que son sinónimos, no nos explicamos, él por qué no les gusta la palabra términos; nada más faltaba que también a la laguna de términos, se le llamara laguna de plazos, lo que sería todavía más excesivo. Y, desde otro ángulo, se ha introducido la noción del interés legítimo; es decir, se menciona que además del interés jurídico, personal y directo, que es el derecho subjetivo, que por eso está contemplado por derechos humanos, por garantías individuales o por distribución competencial, exista ahora lo que se denomina el interés legítimo, el propio expositor de motivos de la legislación secundaria, establece que la jurisprudencia se encargará de darle un contenido.

Realmente situación insólita, de que el legislador reconozca que no existe la suficiente claridad terminológica y remita al Poder Judicial; pero su tarea no es de integración, ni es de clarificación. La tarea de la jurisprudencia es exclusivamente de interpretación de la ley y si la ley misma no es clara y no se sabe cuál puede ser ese interés legítimo. Se menciona para apoyar el interés legítimo, que esto es una situación que impera en otros países, a través del derecho comparado, pero no dicen de qué país, ese derecho, ni qué normas jurídicas, qué ordenamientos de qué país.

Pero además, tampoco se toma en cuenta lo que decía el mejor comparatista de todos los tiempos, René David; quien decía: Para hablar con autoridad de un derecho extranjero, es necesario dominar el idioma del país de que se trata. Segundo, trasladarse físicamente a ese país; y tercero, asesorarse por dos juristas de la localidad. No podemos nosotros, aceptar una institución indeterminada, ambigua, con base en un presunto derecho comparado, sin pensar que el derecho comparado es eso y si realmente está bien hecha la traducción y si debe interpretarse de esa forma, de acuerdo con los criterios los juristas respectivos.

Pero, nosotros también no podemos aceptar la noción del interés legítimo, tomando en consideración que eso representase una innovación de trascendencia, en virtud de que contraería lo que establece la procedencia del amparo. El amparo procede, por interferencia de la esfera jurídica del gobernado y el interés legítimo no está dentro de la esfera jurídica del gobernado; y se habla, de que esto está consagrado por el derecho administrativo.

Pero, ¿en qué parte del derecho administrativo está esto contemplado?.. es legítimo, no está dentro de la esfera jurídica del gobernado y se habla de que esto está consagrado por el Derecho Administrativo, pero en qué parte del Derecho Administrativo está esto contemplado y conste que durante 14 años fui profesor de Derecho Administrativo y realmente no sé dónde se inspiraron para hablar de la existencia de una posibilidad de impugnación a través del interés legítimo, que no entraña la existencia del derecho subjetivo correspondiente, que es el que está tutelado de acuerdo con la procedencia del juicio de amparo.

No es, como lo mencionaba, una referencia exhaustiva, a través de observaciones, a toda la legislación que se propone, pero se escogieron algunos de los temas que se estimaron de mayor impacto social y, desde luego, nos congratulamos con hacer valer nuestra modesta voz en esta oportunidad y nos hace recordar aquella vieja proposición del diputado Emilio Sánchez Piedras, que consideró la conveniencia de abrir audiencias públicas, si no me equivoco, en la época del presidente López Mateos. Y no queda sino agradecer la atención de los presentes y de la distinguida Comisión.

Muchas gracias.

ARTICULO 136 DE LA LEY DE AMPARO

LICENCIADO JUAN VELÁZQUEZ EVERS
ABOGADO POSTULANTE.

Honorable Comisión de Justicia, de la honorable Cámara de Diputados, señores asistentes, quiero decir, primero, que me siento verdaderamente honrado de que se me haya invitado, de que se me permita exponer mi punto de vista respecto de este proyecto para una nueva Ley de Amparo.

Quisiera tener, no tengo, desgraciadamente, la preparación, la academia, la maestría, los doctorados de quienes me han precedido y de los que van a seguir. Pero vengo como un defensor, simplemente, de la libertad de mis defendidos y para exponer algo de critica, respetuosamente, lo que se aduce comúnmente, del interés de la colectividad.

No he tenido la oportunidad de defender a la colectividad, pero sí he defendido, ya por más de 30 años, a los individuos que integran esa colectividad y que cada vez, me parece que muy desgraciadamente, tienen una menor oportunidad de defensa.

Todos sabemos de una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra en su artículo primero, las garantías de las que todos los individuos gozarán. Esas garantías que son, al final de cuentas, los derechos de nosotros los gobernados, frente al poder público.

Una de esas garantías, importantísima, de seguridad jurídica, contenida en el artículo 16 de la Constitución y que exige a los señores jueces y para que libren órdenes de aprehensión, que haya las pruebas, los datos suficientes del cuerpo de un delito y de la probable responsabilidad del indiciado.

Nosotros sabemos que, desde 1847, me parece, 1869, después, justamente por don Mariano Otero, dos Crescencio Rejón, don Ignacio Vallarta, se creó, en los artículos, ahora, 103 y 107 de la Constitución, ese juicio del que presumimos internacionalmente. Ese juicio de amparo, que procede contra los autos de autoridad violatorios de nuestras garantías individuales. Ese juicio, que luego también está en la Ley Reglamentaria, en sus artículos 103 y 107, que es nuestra Ley de Amparo.

Sin embargo, yo no entendería ese maravilloso juicio de amparo, sin el incidente de suspensión. Ese incidente de suspensión, que según me parece, data, y por primera vez, de 1869, en virtud del artículo quinto de la Ley Orgánica, de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857.

Un incidente de suspensión, que está actualmente regulado por el artículo 107, por la fracción décima de la Constitución, y que habla justamente de que podrán ser objeto de suspensión, los actos reclamados en el juicio de amparo. Y luego, posteriormente, en el capítulo tercero y a partir del 122 y 123, artículo 122 y 123 de la Ley de Amparo.

Qué maravilla, diría yo y simplemente como defensor, que si hay un acto de autoridad violatorio en mis garantías individuales, que es justamente el libramiento de una orden de aprehensión sin pruebas del cuerpo de un delito o de mi probable responsabilidad, pueda yo acudir ante un señor juez de Distrito y a reclamar, en juicio de amparo, esa orden de aprehensión que viola mis garantías.

Antes había un artículo 136 de la Ley de Amparo, que permitía que ese incidente de suspensión procediese en contra de cualquier orden de aprehensión, la que sea, librada por delito grave o no grave. Un artículo 136, que después fue interpretado por la Jurisprudencia de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 675 y 661, que decía justamente, que la suspensión procedía en contra de cualquier orden de aprehensión, con independencia del delito por el que se hubiese librado.

Todos nosotros teníamos, en esas épocas, la seguridad de no ser aprehendidos en tanto un juicio de amparo, en tanto ese juicio se resolviera, en tanto se nos amparara o no, en virtud de ese incidente de suspensión.

Hasta que en 1955 sucedió un caso famoso, que los abogados antiguos seguramente recordarán, el caso Alarcón, el caso de una persona a la que se le libró una orden de aprehensión, como probable responsable de la autoría de un homicidio. Esa persona mantuvo su libertad durante todo su proceso y hasta que al final de su proceso se le absolvió. Y justamente, por ese maravilloso incidente de suspensión, en un juicio de amparo, contra la orden de aprehensión y luego el acto de formal prisión que se le habían dictado.

En aquella época hubo un clamor furibundo de toda la sociedad, de toda una sociedad, me parece que ciega, que se abalanzó en contra de ese personaje, por el hecho de que era rico y de que le reclamó, a ese juicio de amparo pero y sobre todo, a ese maravilloso incidente de suspensión, el que no hubiese sido encarcelado. En vez de que todos nosotros nos hubiéramos congratulado suspensión el que no hubiese

sido encarcelado, en vez de que todos nosotros nos hubiéramos congratulado de que por esas instituciones a una persona, a la que al final se le había declarado inocente, no se le hubiera apresado.

En aquella época hubo un estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se argumentó el abuso del amparo, del que los probos y más experimentados jueces de distrito han sido víctimas, y que ha provocado que individuos presuntivamente responsables de haber cometido delitos graves estuvieran en libertad; presuntivamente, no individuos que ya habían sido declarados culpables, sino presuntivamente.

A esos individuos presuntivamente inocentes, ¿cómo es que no se les había encarcelado? Precisamente por el abuso del amparo del que se había hecho víctima a los señores jueces de distrito. Yo no entendería que nosotros, los individuos, nos decidiéramos a abusar del juicio de amparo: vamos a abusar del juicio de amparo, como si se tratara, o quizá por el nombre de amparo, vamos a abusar de amparo, vamos a abusar del juicio de amparo; vamos a ser víctimas de nuestros abusos a los señores jueces de distrito, ¿o no más bien nosotros, los individuos, promovemos esos juicios de amparo por los abusos de la autoridad, por los actos abusivos de la autoridad violatorios de nuestras garantías individuales?. Pero al final de cuentas, por esa historia, primero en 1988, el 5 de enero de 1988, y luego el 10 de enero de 1994, se reformó ese artículo 136 de la Ley de Amparo; y para que a final de cuentas no se permitiera el incidente de suspensión, no procediera una suspensión en ese incidente, no se concediera esa suspensión si el delito por el cual la orden de aprehensión se había librado, no permitía libertad provisional bajo caución. Que los delitos, a final de cuentas, graves, no tengan libertad provisional bajo caución.

Ahora, en el proyecto, en el artículo relativo, que ya no es el 136 sino el 164, se aduce exactamente lo mismo que se adujo en aquella época muy anterior de 1955. Es visible, se dice, que en la actualidad se ha estado abusando del amparo por las bondades de la suspensión. Y por esto que se dice nuevamente, el proyecto de la Ley de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación insiste en prohibir que se conceda la suspensión contra las órdenes de aprehensión libradas por delitos graves.

Si se trata de delito considerado como grave no procede la suspensión provisional, excepcionalmente, de acuerdo con las circunstancias del caso, podrá concederse la suspensión definitiva. A mí me parece, y con todo respeto desde luego a la sapiencia indudable de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus muy prominentes asesores, que esto es gravísimo. Y lo digo, desde luego, no como colectividad sino como defensor de los individuos; gravísimo.

Gravísimo porque entonces ahora si se libra una orden de aprehensión, porque entonces ahora continuará el hecho de que si se libra una orden de aprehensión, la suspensión procede solamente si se trata de delito no grave. ¿Y entonces para qué a final de cuentas querría yo esa suspensión, si tratándose justamente de delito no grave la fracción primera del artículo 20 de nuestra Constitución permite la libertad provisional bajo caución? Bueno, sí, quizá mi defendido será aprendido y pasará unas horas encarcelado en tanto un señor juez penal otorgue esa libertad provisional bajo caución.

¿Qué gran mal habrá en eso? Probablemente ninguno, pero en cambio, qué grave que esa libertad provisional bajo caución restrinja a los delitos graves, y que precisamente porque no tiene libertad provisional bajo caución, tampoco tengan suspensión en un juicio de amparo.

Quiero advertir lo que probablemente muchos de nosotros no sepamos, nosotros los habitantes del Distrito Federal. Hubo una reforma al artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y por esa reforma se vuelve a la libertad provisional bajo caución, cuando el término aritmético medio de la pena no exceda de cinco años. Es decir, ahora yo diría que en el Distrito Federal casi casi cualquier acusado de un delito, por ejemplo, patrimonial de un cierto monto, va a tener que enfrentar sus procesos sin libertad provisional bajo caución. Ya los enfrenta sin libertad provisional bajo caución y ya los enfrenta también sin la posibilidad de una suspensión en un juicio de amparo en donde se reclame esa orden de aprehensión, no hay suspensión porque no hay libertad provisional bajo caución.

Además, en el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 142, se obliga a los señores jueces de distrito a librar órdenes de aprehensión o a negarlas, en su caso, tratándose de delito grave, en el término de 24 horas contadas a partir de que el señor juez radica el expediente. Es decir, nos encontramos con la situación siguiente: el ministerio público ejercita acción penal en contra de cualquiera de nosotros por un delito patrimonial, pero que por su monto se considera grave. El señor juez que recibe el proceso tiene 24 horas para resolver si libra o no la orden de aprehensión. ¿El señor juez tendrá el tiempo suficiente para conocer de ese asunto cuando se trata a veces de docenas, decenas, cientos de tomos?

El señor juez va a librar la orden de aprehensión, va a haber una orden de aprehensión en contra de cualquiera de nosotros por un delito grave, que no tiene libertad provisional bajo caución y no tiene tampoco suspensión en un juicio de amparo.

¿Cuál va a ser el efecto de esa historia? Simplemente la de que cualquiera de nosotros va a tener que enfrentar sus procesos como ahora se enfrentan: en la cárcel por seis meses, por un año, por dos, por tres, o prófugos. Vimos un ejemplo, público, y por eso me permito mencionarlo, caso en el cual no tuve nada que ver, la señora Silvia Pinal, que por una acusación tuvo que irse de la República Mexicana hasta que ganó su juicio de amparo, porque si no, hubiera tenido que estar presa. Las personas acusadas van a tener que estar presas o prófugas y no hubiera tenido que estar presa. Las personas acusadas van a tener que esta presas o prófugas.

Todo esto que se está haciendo me parece que es con el muy lamentable propósito de que la simple presunción de que alguien cometió un delito sea suficiente para que el Ministerio Público lo persiga, para que un señor juez le libre una orden de aprehensión, para que más tarde le dicte un auto de formal prisión, para que mientras tanto esa persona, insisto, tenga que estar prófuga o presa.

Yo me permitiría someter a la consideración de la honorable Comisión lo que para muchos parecerá un horror. Bueno, algo ya superado desde aquellas épocas remotas, que justamente y tratándose de delito grave, sea procedente la suspensión.

¡Ah!, bueno, pero siempre y cuando, desde luego, el señor juez que la conceda, tome, como se hacia antes, las medidas necesarias para que esa persona a la que se le concede la suspensión, no se sustraiga de la acción de la justicia.

En aquella época, por ejemplo en 1954, a ese hombre rico se le impuso una caución y en efectivo, de un millón de pesos. Si te vas, te la hago efectiva y ordeno y dejo sin efecto la suspensión y para que la autoridad responsable ordene tu reaprehensión, ¿qué habría de malo en eso?

A mi me parecería que así como está esto, estamos proponiendo un antibiótico que resulta maravilloso en la medicina, maravillosa. Ah, pero si tienes una pequeña enfermedad que casi amerite que no te la prescribamos. Pero que en cambio, cuando tengas una enfermedad casi mortal, entonces sí te dejemos sin esa medicina.

Insisto, en que tal y como está esta historia y como parece que continuará, cualquiera de nosotros el día de mañana y por una acusación, nos veremos prófugos o en la prisión, cuando las prisiones actualmente están sobrepobladas, en una celda de dos, tres o cuatro, hay a veces 12, 15, 20, 25 presos.

Pero, además, cuando esos presos son en su inmensa mayoría procesados, a los que después de largos encarcelamientos se les deja en libertad con el: "Usted dispense". Lo hemos visto todos los días, lo vemos todos los días en la televisión.

Cuando esas prisiones son, además, escuelas del crimen.

Estamos justamente por esto, exponiendo a los individuos a la extorsión de sus acusadores.

Muchos de los delitos por los que las órdenes de aprehensión se libran, son de querella y consecuentemente admiten perdón. Oye, oye, diría un acusador, ¿no quieres irte prófugo? ¿no quieres irte a la cárcel? Mira, aquí tengo en este escrito tu perdón. Oye, ¿quieres salir de la cárcel?, porque no tienes libertad condicional bajo caución, porque no hubo suspensión en tu juicio de amparo. Mira, aquí tengo en este escrito tu perdón, pero, pero tienes que darme diez veces ó 20, ó 50, ó 100, de lo que es el monto del juicio, si quieres salir y si no, quédate prófugo o quédate preso.

En esa repetición de las tesis antiguas, de los abusos, se dice que es por la falta de capacidad o descuido de quienes administran la justicia. ¿No más bien debiéramos en todo caso capacitar a esos administradores de justicia? ¿Hacerlos cuidadosos?.

Quiero terminar mi punto de vista, retomando las palabras, que también se han publicado, y en ocho columnas de los periódicos, del señor presidente de esta Comisión, del señor Licenciado Romero Apis: es absolutamente erróneo culpar a la ley de nuestras fallas. Es absolutamente erróneo que con el pretexto, bueno, con el motivo de una delincuencia desbordada, tengamos leyes de esta naturaleza.

La solución, dice el señor licenciado Romero Apis, está en que simplemente apliquemos las penas al noventa y ocho o al cien por ciento de los delincuentes y no al dos por ciento de esos delincuentes como ahora sucede.

Yo me permitiría, para concluir, mencionar las palabras de un ex-procurador general de la República, pero que al final de cuentas es un jurista notable, don Sergio García Ramírez, que nos advierte a todos nosotros de que con reformas como estas simplemente se están reduciendo las garantías de los individuos a favor de tendencias más autoritarias. Y un García Ramírez que nos pregunta si de verdad las necesitamos, si no deberemos de tener el mayor cuidado con esas oscuras legislaciones. Si no deberemos prevenirnos con esos métodos que ahora se utilizan, disque legalmente, para facilitar la persecución.

Si no, a través de todas estas historias estaremos negando la presunción de inocencia de los individuos. Estas acusado de un delito y además grave, te vamos a enjuiciar. Y como te presumimos culpable, durante tu juicio, te encarcelamos. Y si el día de mañana te liberamos, qué buena suerte. Gracias, señores.

Se ofrece el uso de la palabra a la licenciada Odette Movarak, Vale, presidenta de la Federación de Abogadas Colegiadas de México, con el tema: El sentido humano del juicio de amparo.

EL SENTIDO HUMANO DEL JUICIO DE AMPARO

LIC. ODETTE MOVARAK VALE
PRESIDENTA DE LA FEDERACION DE ABOGADAS COLEGIADAS DE MÉXICO.

Respetable auditorio, agradezco al Presidente de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, licenciado José Elías Romero Ápis, esta oportunidad que se brinda para que los abogados postulantes, quienes luchamos diariamente en el campo del litigio, podamos hacer ciertas reflexiones, en mi caso particular, sobre el aspecto humano del juicio de amparo, en relación con el proyecto que presenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Manuel Crescencio García Rejón y Mariano Otero, precursor y creador, respectivamente, del juicio de amparo, presentes en esta consulta nacional, ya hubiesen levantado su mano para poner su planta en este foro y recordarnos las breves palabras que expuso el propio Mariano Otero en 1847, con su memoral: Excelencia y magistral que expuso el propio Mariano Otero en 1847, cuando su memoral, excelencia y magistral alegato con el cual justificó la existencia del procedimiento de amparo; basa él en el aspecto humano la existencia del propio juicio, con el objetivo y el fin real e ideal de la protección del hombre y sus derechos, porque no se conformó con que en la Constitución de 1824 sólo se hubieran catalogado y establecido y enumerado los derechos del hombre y las garantías individuales.

Es en el estatuto de 1856, en donde se enumeran las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad, derechos y los cuales se consideraron inmutables y además, tenían que ser protegidos por un medio de control constitucional.

Es así que surge la necesidad social de crear un medio jurídico de control constitucional que garantizara al pueblo de México esa defensa de esos derechos individuales y de esas garantías.

Se estableció en la Carta Magna por primera ocasión en su artículo 25 ese juicio de amparo, que tanto requerían los mexicanos, en el que se estableció: “Los tribunales de la federación ampararán a cualquier persona, contra cualquier ataque del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”. Por lo que los mexicanos tenían la conciencia y la certeza jurídica de que existía un medio de control que los defendiera, contra cualquier arbitrariedad o hasta contra cualquier sospecha inusitada.

Es clásico el tema, por ejemplo, que aún cuando no supiéramos de qué se tratara o de quién se tratara o por qué, a la simple afirmación de que te están buscando, era casi inmediata la respuesta o la pregunta, ¿por qué no te amparas antes de ir?

Y nos ha sucedido a todos los abogados, a todos los abogados litigantes; llegan nuestros defendidos, licenciado, necesito un amparo, no saben por qué ni por qué, ni con qué motivo, aún cuando a veces necesiten simplemente una contestación de la demanda. Necesito que usted me ampare. Usted.

¿Qué tan importante no será este medio de control constitucional, que nuestros defendidos o mucha personas traen consigo una suspensión en el bolsillo, y no saben por qué motivo? Sin embargo, dicen: traigo este documento; es un papel que me dio un abogado. Y la ironía de la vida, la contradicción de la vida, coinciden en extremo la ignorancia del contenido de ese papel, sin embargo, saben que los ampara.

Así se fueron reiterando estas conductas, posiblemente por desconocimiento de las formalidades legales o de las formalidades sin los procedimientos, o por falta de cultura jurídica, sin embargo, daba resultado.

Vine a declarar, pero vengo amparado; no me puede clausurar usted mi establecimiento porque está amparado. Hasta los testigos o las personas que son citadas en calidad de testigos llegan con una suspensión a declarar, innecesariamente, ante una agencia del Ministerio Público, y esta es precisamente la función del amparo, imprimir la seguridad de que puedo transitar libremente, porque lo establece mi Constitución, de que puedo presentarme a declarar sin tener ningún problema y que sé que no me va a pasar nada, porque así lo garantiza mi Constitución.

De que puedo trabajar tranquilamente, porque también así lo garantiza mi Constitución, a lo que el Estado le ha mal llamado abuso del amparo, sin saber que el hecho de utilizar frecuentemente un instrumento jurídico de control de garantías constitucionales tiene una causa motivadora, y que es precisamente los excesos del ejercicio de las funciones de la autoridad; funciones que no cumplen con esas formalidades legales, obligadas, y que violan constantemente las garantías individuales, argumentando cúmulo de trabajo, disfrazado de negligencia, a veces de cobardía, o de que son cuestiones de carácter político; entonces, con el simple movimiento caprichoso de una pluma en la mano, se decide erróneamente sobre la libertad o sobre el patrimonio de una persona, que después de la vida son los bienes jurídicamente tutelados más importantes por el derecho.

En la medida en que la Constitución y sus leyes reglamentarias han sido reformadas, en esa misma proporción también los abusos de autoridad han ido creciendo, y sin embargo han crecido y reiterado esos excesos violando garantías, bajo el fútil argumento de las palabras discrecional o testativo, relevante, con características especiales, elementos suficientes y bastantes. Ahora entra la apariencia del buen derecho y a veces traen a colación un tema o un argumento supuesto interés público, en violación directa con el artículo 14 constitucional, porque violan las garantías y las normas de interpretación y la garantía de aplicación de estricto derecho, establecida precisamente en el artículo 14 constitucional.

Por lo que el hombre se ha visto cada vez más en la necesidad de recurrir aún con plena desventaja ante la maquinaria oficial a interponer amparo contra todo, porque vivimos en un Estado de Derecho lleno de incertidumbre, en el que a diario se violan nuestras garantías individuales.

Referiré un tema directamente que trasciende al aspecto humano, a la fracción novena del apartado a, del artículo 20 constitucional, concerniente a nuestra garantía de defensa y de adecuada defensa.

Que en mi calidad de abogado defensor, siempre de abogada defensora, considero que con el proyecto de la Ley de Amparo que presenta la Honorable Suprema Corte de Justicia, se vulnera directamente la garantía de defensa y de adecuada defensa de nuestros defendidos y del sentenciado en concreto, específicamente la fracción segunda del artículo 16 del proyecto, que establece lo siguiente: “Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal, el plazo para interponer la demanda de amparo será de dos años naturales”. La ley vigente señala en su artículo 22, fracción segunda, que: “La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier momento”.

Si bien es cierto, los argumentos que establecen y que hacen valer la exposición de motivos del propio proyecto de ley, que sostiene que la víctima y el ofendido se le deben de garantizar sus derechos en cuanto a la reparación del daño, y también argumentan el proyecto, la exposición de motivos, que ese tiempo sea utilizado por los sentenciados para evadir un pago o para evadir la responsabilidad, o para no cumplir, pero que ambas partes deben ser protegidas por el sistema garantista, pero también es cierto que no se le puede limitar al sentenciado el término para interponer su demanda de amparo, la demanda de amparo directa, ¿por qué? Porque en primer lugar los términos corren en perjuicio del procesado.

Segundo, por lo regular, las sentencias condenatorias confirmadas en segunda instancia, que son la gran mayoría, carecen de estudio profundo y técnico sobre valoración de la prueba, directamente en violación a la garantía exacta aplicación de la ley.

Situémonos en el lugar de un sentenciado, privado o no privado de su libertad; bueno, me detuvieron sorpresivamente, sin haber sido citado nunca en averiguación previa en la Procuraduría del Distrito Federal o donde sea. Violación a la garantía de audiencia y de legalidad. Bueno, me libraron una orden de aprehensión sin tener acreditado elemento del tipo delictivo alguno, ni mi probable responsabilidad ni cuerpo del delito; violación al artículo 16 constitucional. Además, me obligaron unos policías judiciales a confesar, ustedes ya saben cómo, un delito que no cometí. Mi expediente tiene más de cinco tomos, a parte de que en primera instancia tú, juez, me nombraste un defensor de oficio que me mal defendió mi expediente tiene más de 5 tomos, aparte de que en primera instancia tú, juez, me nombraste un defensor de oficio que me mal defendió, me mal defendió y me hizo declarar cosas que no eran reales, y luego me dictan una sentencia condenatoria de 25 años, para que luego, en segunda instancia, la sala o el Tribunal de Apelación confirme la resolución porque la Suprema Corte de Justicia en la Jurisprudencia establece que mis declaraciones primigenias son las que tienen mayor valor probatorio.

Y ahora me dices tú, Ley de Amparo, que tengo dos años para presentar mi demanda de Amparo directo en contra de esas resoluciones, ¿dos años? La última instancia en donde puede decidirse en forma definitiva y hasta fatal sobre mi libertad. No.

Señores legisladores, por favor, déjenme estudiar mi asunto; permítanme, denme tiempo de trabajar para poder conseguir unos abogados, permite que mis abogados además estudien el caso ahora que ya tiene 12 tomos; déjame defenderme y además, quiero defenderme adecuadamente.

El que se encuentra privado de su libertad es el procesado, es el sentenciado, y muchas veces en forma injusta y por lo regular, sin dinero. Algunos hasta sin conocimiento de la existencia del derecho para presentar una demanda de amparo. La garantía de defensa se inspira y responde al derecho que tiene el procesado y aún sentenciado de defenderse de las imputaciones hechas en su contra con el lógico propósito de que cuente con un marco apropiado de enjuiciamiento, y por tanto entonces, este señor tenga o esté en aptitud de probar su inocencia para poder obtener una sentencia justa.

Un punto importante que también pienso que debemos cuidar, sobre todo en la redacción de nuestras normas; el artículo 16 del Proyecto establece: Son dos años naturales sin establecer si hay una distinción donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir. No conozco los años hábiles ni tampoco si se toman en cuenta los bisiestos, pero bueno.

Por lo anterior, considero que no debe limitarse en tiempo la garantía de defensa y de adecuada defensa. Todo gobernado debe tener derecho de demostrar en cualquier momento su inocencia.

Hay otros medios para garantizar al ofendido la reparación del daño; además, éste se encuentra libre y muchas veces ha acusado al sentenciado sin derecho alguno, y en otras ocasiones ni siquiera la calidad de ofendido tiene.

No obstante la exposición de motivos del proyecto, si se tratara de utilizar como lo argumenta la exposición de motivos, que ese plazo indefinido es para eludir un pago o una responsabilidad, cuento también con una garantía constitucional establecida en el artículo 20, fracción VIII, que me da el derecho de renunciar a los plazos para que yo sea juzgado.
Si se tratara de una artimaña precisamente para entorpecer mi propio procedimiento, renuncio a los términos para que me juzgue el juez en el tiempo que quiera, si lo que quieren los jueces son precisamente pretextos para no resolver.

Es verdad que todos los juicios, y los juicios en concreto no deben quedar indefinidamente abiertos; pero siempre en un justo medio. No considero razonable la postura de la Honorable Suprema Corte de Justicia de que se limite el derecho a la defensa. Sería absolutamente inconstitucional.

No encuentro tampoco la razón en la exposición de motivos del porqué se establecieron dos años como plazo para la interposición de la demanda de amparo directo en materia penal.

Hubiese sido a lo mejor más razonable tomar en cuenta la regla general en materia penal, la media aritmética de la pena del delito de que se trate. Mas sin embargo, lo mejor es conservar el texto que guarda la ley vigente sin plazo alguna para así salvaguardar la garantía de defensa en un país como el nuestro, en el que es increíble todavía que aún teniendo la razón jurídica y *de facto,* los tribunales todavía nos sorprenden con fantasiosas sentencias sostenidas de un débil y artificioso supuesto indicio; tribunales en los que no sabemos nunca, aún con la razón legal en la mano, cómo nos va a ir.

Con el sistema judicial que México tiene tenemos que reconocer tristemente que el cúmulo de trabajo no permite a los jueces resolver con prudencia, con conciencia o con cierto criterio. Las sentencias sólo son firmadas por los jueces, y pongámonos en los casos concretos, siendo realistas y objetivos. En el 99 por ciento de los casos el juez nunca está presente en las audiencias, aun tampoco en los careos constitucionales, que es una obligación.

Por lo que las teorías de individualización de la pena son obsoletas y se aplican desproporcionadamente. No es cierto que los jueces conozcan a todos los procesados. Es imposible, jurídica y materialmente.

Entonces, vale la pena que dejemos libre el tiempo para la interposición de demanda de amparo en materia penal, el amparo directo. Finalmente es preferible tener un delincuente libre, que hay muchos, que no sabemos, pero finalmente, que un inocente dentro de la cárcel, y a lo mejor, no sabemos por cuantos años.

Señores legisladores: No podemos dejar en manos del Poder Judicial el manejo exclusivo de nuestras garantías constitucionales, de las que sólo tiene obligación de proteger. No las restrinjamos de antemano porque se pierde el fin real e ideal del juicio de amparo.

No cedamos las funciones del Estado al Poder Judicial porque estaríamos cayendo en lo que don Manuel Herrera y Lazo le llamó *el gobierno de los jueces*, que es la causa primaria del desequilibrio entre los poderes de una nación.

Debemos reconocer también que el proyecto tiene cuestiones muy positivas. Lo importante es que exista realmente ese elemento dinámico y regulador de toda ley. Es un tema que se llama eficacia de la norma jurídica, porque toda reglamentación por mil veces justa y útil que fuese para la humanidad quedará prácticamente sin valor en la vida de un pueblo mientras sus principios no se hayan convertido en los principios esenciales, básicos, fundamentales, emanados de una exigencia social necesaria.

México no tiene problema de redacción de normas jurídicas y menos fundamentales, ni necesidad de una Ley de Amparo nueva. El problema de nuestro país radica principalmente en un problema de carácter social que debe ser resuelto con el interactuar, primeramente, por medio del acto administrativo de gobierno que emana del Ejecutivo Federal, para posteriormente el Judicial. y luego, el Legislativo.

Este proyecto de Ley de Amparo que hoy se discute no perfecciona en esencia al juicio de garantías. Sería inocua su aplicación por las limitaciones y restricciones que principalmente recaen sobre la sustancia del amparo que es la suspensión provisional, la cual ya casi no existe, y en concreto también el tema que les expuse.

Mas sin embargo, llegamos al Palacio de Justicia Federal y encontramos que nos recibe orgullosamente una placa de bronce que a la letra reza que: Todo el que se queje con justicia, que tenga un Tribunal que lo ampare y lo proteja contra el arbitrario. Si se llegara a aprobar esta Ley en los términos que se encuentra, en consecuencia también habría que quitar esa placa. Gracias.

A continuación se ofrece el uso de la palabra al querido maestro, al Doctor Ignacio Burgoa Orihuela, presidente del Colegio de Profesores de Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM, Presidente del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM; Presidente del Instituto Mexicano del Amparo, con el tema ¿Una Nueva Ley de Amparo o la renovación de la vigente?

¿UNA NUEVA LEY DE AMPARO O LA RENOVACIÓN DE LA VIGENTE?

DOCTOR IGNACIO BURGOA ORIHUELA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES DE AMPARO
DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Honorable Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Debo decir lo que siempre he dicho en torno a esta cuestión tan trascendental que estamos tratando y que ustedes, señores diputados, como miembros de la mencionada Comisión de Justicia deben de dictaminar.

Estamos ante un dilema: O una Nueva Ley de Amparo, como lo pretenden los señores ministros de la Suprema Corte, o la renovación de la Ley de Amparo vigente a través de importantes reformas que requiere su texto para seguirla como se ha hecho, actualizando. Ése es el dilema.

Si esta Honorable Comisión dictamina en el sentido de obviar el proyecto que se atribuye a la Suprema Corte, entonces deberá entrar al estudio de las diferentes reformas que diferentes juristas, maestros, legisladores, jueces, han postulado para perfeccionar, mejorar jueces, han postulado para perfeccionar, mejorar nuestra Ley de Amparo actual. Pero yo quisiera hacer una importante aclaración: el proyecto que se discute no es de la Suprema Corte, constitucionalmente hablando.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ninguna facultad para elaborar proyectos, recordemos nada menos sus facultades constitucionales y legales y llegamos a esta apodíctica y evidente conclusión.

La Corte no es un órgano del Estado, repito para elaborar proyectos de Ley, para enviarlos o integrarlos al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo de la Unión. Por eso este proyecto no es de la suprema Corte, aunque indebidamente con violación a la Constitución, se le ha atribuido.

Lo que se está discutiendo, evaluando, examinando es un proyecto sí, pero de los señores ministros de la Suprema Corte, que es distinto. Los ministros de la Suprema Corte al homologar este proyecto elaborado por una comisión que los mismos ministros nombraron no lo han hecho en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, porque tampoco un Ministro de la Suprema Corte puede en conjunto y en nombre de la Corte, elaborar un proyecto.

Si recorremos verbigracia la historia de las reformas al Amparo, encontraremos que ha habido ministros distinguidísimos, que con su saber, su experiencia, su sentido de justicia han formulado proyectos de reforma que han sometido a la consideración de sus colegas en el Pleno y que sus colegas minoritaria o mayoritariamente los aprobaron, pero no es posible admitir, con respeto a nuestra Constitución que este proyecto sea un proyecto de Nueva Ley de Amparo de la Suprema Corte.

Es un proyecto de Nueva Ley de Amparo homologado por los 11 ministros, mejor dicho 10 y la señora Ministra Olga; un proyecto homologado por ellos, pero que ellos no elaboraron, lo elaboró una Comisión integrada por juristas o individuos respetables, pero que como lo he dicho por escrito en mis conferencias, en mis clases en la Facultad de Derecho ninguno de ellos se especializa en nuestro glorioso Juicio de Amparo ni como investigador ni como profesor ni como postulante, pero de todas maneras son personas los integrantes de tal función, que merecen todo mi respeto y con los cuales me liga una leal amistad, la cual no es ningún impedimento para decir que este proyecto es de ellos y que fue homologado el 23 de abril ó 25 de abril de este año, por los 11 ministros de la Suprema Corte, eso es fundamental.

Ahora bien, desde que tuve conocimiento de este proyecto de los señores ministros de la Corte, cuando me entregó amablemente un ejemplar mi buen amigo y lo confieso con orgullo, el señor presidente de la Corte, don Genaro David Góngora y Pimentel, comencé a estudiarlo, a evaluarlo críticamente, a descubrir sus errores, rayados en absurdos y en despropósitos y desde luego en subrayar sus aciertos, que sí los tiene.

Y nada menos, que a través de una nutrida correspondencia con el señor Presidente de la corte, le hice ver cuántos yerros, disparates y dislates contiene este proyecto del cual no es responsable nuestro órgano Jurisdiccional Federal Supremo.

Voy simplemente a aludir a alguno de ellos. Los autores del proyecto creo que ignoran la Historia de México, sobre todo en materia de Amparo y constitucional, porque les pareció una proeza ampliar la procedencia del Amparo contra actos de autoridad y normas generales que violaran no solamente las garantías individuales, sino los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República con la aprobación del Senado.

Ignoran o ignoraron, tanto los autores del proyecto, los comitentes como los homologadores, señores ministros de la Corte, el precioso artículo primero de nuestra Constitución Federal de 1857. Su texto es el siguiente: "…el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones

sociales, declarando que toda autoridad del país debe respeto y observancia a tales derechos y para este objetivo, esta Constitución establece las siguientes garantías individuales, las garantías individuales tienen como objetivo esencial proteger los derechos humanos que como contenido de los derechos subjetivos públicos elementos de las garantías, éstas recogen con el rango supremo que tienen todas las disposiciones constitucionales…".

Podemos decir que las garantías establecidas en la Constitución son los medios sustantivos para proteger los derechos humanos y que el Juicio de Amparo, al proteger las garantías individuales contra cualquier Ley, Norma General o Acto de autoridad que las viole, simultáneamente imprescindiblemente, inseparablemente está protegiendo también los derechos humanos; fenómeno éste que se registra en nuestra historia desde el 5 de febrero de 1857.

Entonces no había necesidad de incurrir en esta ignorancia, esta distinción entre garantías individuales y derechos humanos por qué, porque al hablar de la protección de garantías individuales, se protegen los derechos humanos incorporados a ellas.

He preguntado públicamente en mis clases, en mis conferencias, todos los derechos humanos consagrados en los diferentes documentos internacionales, tratados y convenios, convenciones, se encuentran dentro de nuestras garantías individuales. Es cuestión de conocer las garantías individuales y recordar su texto y si hay algún derecho humano que no esté dentro del conjunto de garantías individuales, de todas maneras están protegidas por el Amparo y por unas garantías formidables, que son las garantías de seguridad jurídica.

Recordemos, señores legisladores..que no esté dentro del conjunto de garantías individuales, de todas maneras está protegido por el amparo y por unas garantías formidables que son las garantías de seguridad jurídica.

Recordemos señores legisladores, entre otros preceptos, el artículo 14 de la Constitución, párrafo segundo, que dice: "Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, cualquiera que sean, sino mediante juicio, etc., etc., y a través del bien jurídico, persona que tutela la garantía de legalidad del artículo 16 de la Constitución, se protege todo lo que los documentos internacionales hablan del respeto a la dignidad y al nombre y a la familia", pues que se les olvidó a los autores el proyecto de lo que es una persona.

Es un ente con capacidad de tener, adquirir derechos y contar con obligaciones, todos los derechos, y al protegerse por el 16 a la persona, se protegen todos sus derechos,

sean derechos nacionales o derechos internacionales y la violación de ellos hace procedente el amparo, sin necesidad de ampliar su procedencia, porque sería inútil su ampliación y además revela un despropósito histórico muy grave.

Otro error, hay muchos, pero no voy a abusar de su tiempo señalándolos. Yo les recomiendo, a este respecto, a los señores legisladores y a todos los abogados aquí presentes y abogadas, interesados, que lean un estudio formidable que transcribo en este librito, que se titula Nueva Ley de Amparo o Renovación de la Vigente y que proviene tal estudio de un insigne ministro jubilado ahora de la Suprema Corte, admirado por todo el foro nacional, nada menos que don Arturo Serrano Robles.

En ese estudio que está transcrito aquí va analizando precepto, por precepto, del proyecto, de la seudoautoría de la Suprema Corte, lo critica, lo evalúa y llega a la conclusión, que en vez de una nueva Ley de Amparo, debería mejorarse a través de reformas pertinentes y necesarias, la ley vigente, eso dice don Arturo Serrano Robles, uno de los ministros de la Corte más relevantes, entre el grupo de muchos, que tienen también su relevancia, pero no tanto como don Arturo Serrano Robles.

Voy a autoerror. Necesito cambiar de gafas, porque unos son para ver de lejos y otros para ver de cerca.

Se ha hablado aquí por distinguidos expositores, para la procedencia del amparo el proyecto que se discute, establece que la acción de amparo es ejercitable contra leyes o actos, normas generales o actos de autoridad, que lesionen un interés jurídico o un interés legítimo y esta disposición se inspiró en sistemas jurídicos extranjeros, creo que holandeses o belgas, sin que la exposición de motivos diga en qué sistemas jurídicos se basan, pero qué no se sabe que un interés legítimo es al mismo tiempo un interés legal, por Dios; que vean un diccionario.

Vamos a invocar a Cicerón y a tantos otros pensadores, que dicen: "Interés legítimo, es el interés conforme a las leyes". El interés legítimo se identifica con el interés legal y el interés legal no es otro que el interés jurídico, para qué embarazar al amparo con expresiones provenientes de un extranjerismo totalmente e inadecuado, interés legítimo como habla la Constitución de Portugal o cualquiera que sea de Tailandia o de Siam. No, nosotros tenemos una buena Constitución, una buena Ley de Amparo, una gran institución, para qué vamos a recurrir a los extranjeros.

Qué es lo que se entiende por interés jurídico, es un derecho legalmente protegido. Yo pregunto, el interés legítimo no está protegido por la ley, si me contestan no, entonces

no es legítimo. Si me contestan sí, pues entonces es legal, entonces para qué tanto brinco, estando el piso tan parejo.

Hay que rechazar esa, entre comillas, innovación valiosa, de grande invención intelectual de que el amparo también procede contra actos de autoral que lesione un interés legal y un interés legítimo. No hay definido ni se puede definir lo que es un interés legítimo, salvo a través de la ley.

Yo tengo interés, por ejemplo, en un amigo que tiene una tintorería y que arbitrariamente se le clausura la tintorería, él como es timorato para poco, como dijera José Ingenieros, no se atreve a acudir al amparo, ¡ah!, pero yo sí como su amigo y le digo al juez de distrito: "Señor, yo tengo interés legítimo en que usted proteja a mi amigo, porque la legitimidad precisamente, el vínculo de amistad que me une con él, que es el quejoso, pero yo vengo a sustituirlo por mi propio derecho, invocando ese interés legítimo que proviene de la amistad", y le invoco a Cicerón, diciendo que la amistad es nada menos que el vínculo que une a los hombres virtuosos y firmo feliz la demanda y la presento, ya se convirtió en ley este proyecto.

Qué hace el juez, el juez del distrito, en ausencia de la comprobación de un interés jurídico de mi parte, me manda una prevención, que en términos de tres días diga en qué baso mi interés legítimo y luego una sarta de consideraciones y entonces el juez qué me hace, me manda, pero me manda a un manicomio, por qué, por la sencilla razón de que el interés legítimo fuera de su dimensión legal, no está legítimo, es un interés simple, es otro error grave de proyecto.

Veamos otro. Hay esta interpretación conforme, conforme a qué, yo creo que les falta asindéresis a los que la sostienen, porque dice, les voy a leer el precepto. Voy a permitirme ver un porque estoy de la emoción muy sofocado, pero con mi misma vehemencia, en defensa a nuestro amparo.

Es el artículo 76 del proyecto, que dice: "Cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá decidir si es constitucional, claro, cuando está de acuerdo con la Constitución, eso hasta un niño de primaria lo sabe; o si puede considerarse conforme con la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, entonces, o puede considerarse constitucional, por estar conforme con la Constitución al aplicarse, según una determinada interpretación, qué determinada interpretación, interpretación de qué, de la Constitución o de la ley reclamada o de las circunstancias de facto o de la personalidad del quejoso.

Vean ustedes qué vaguedad encierra este precepto, o si es inconstitucional, O sea, una norma secundaria es constitucional cuando no viola la constitución, eso todo mundo lo sabe.

Es inconstitucional cuando la viola, lo sabe todo el mundo, pero no hay ninguna situación intermedia. Puede ser constitucional, según una determinada interpretación aplicada en un caso concreto en el es inconstitucional cuando la viola, lo sabe todo el mundo, pero no hay ninguna situación intermedia, puede ser constitucional, según una determinada interpretación aplicada en un caso concreto.

En este caso, la Suprema Corte se va a erigir en un dictador en materia de amparos contra leyes o normas generales, ¿por qué?, porque si se llega a la conclusión de que el quejoso tiene razón, la ley impugna, viola tales y cuales preceptos de la Constitución por tales y tales motivos.

Ah, pero vamos a sustentar una interpretación de esta ley conforme a la Constitución, y como ya comenzamos a determinar la finalidad de esa interpretación, luego vamos a abolir la procedencia del amparo contra normas generales, porque todas resultarán de acuerdo a la Constitución, interpretación conforme. Ay, señores ministros, ¿cómo no han pensado en todo esto?

Otro error, esta es una fórmula que se la oí a mi buen amigo, Genaro Góngora y Pimentel en algunas conferencias en las que coincidimos en alguna universidad de provincia.

Es la fórmula de la invención de Genaro, que dice, apariencia del buen derecho. El que tiene un derecho aparente no tiene derecho, pues es aparente y además, buen derecho, ¿qué hay derecho malo? ¿Y el juez de distrito va a poder determinar hasta dónde llega la apariencia, porque pude ser un derecho falso, inexistente, un derecho ajeno?

Esta fórmula debe suprimirse, simplemente para decir, nada menos, que la suspensión para concederse, requiere como primera condición que el quejoso presuntivamente presente su interés jurídico y se acabó. Nada de apariencia del buen derecho, nada más complicaron o tratan de complicar la Ley actual.

Pero vayamos a otra, esta es de maravilla. Todos sabemos que la suspensión en amparo indirecto debe negarse cuando con ella se violen normas de orden público o se afecte el interés social.

Lo dice así, claramente, el artículo 124, fracción II de la Ley de Amparo, desde luego, la Ley de Amparo con mayúscula, la vigente, no hay proyecto. Y sigue diciendo esta fracción II en su párrafo segundo, entre otros casos se considerará que sí se causan violaciones a normas de orden público y afectación al interés social, cuando de concederse la suspensión continúen los centros de vicio, la campaña contra el alcoholismo, etcétera. Eso está perfecto.

El artículo 127 del proyecto, reitera el 124 de la Ley de Amparo vigente, pero le agregaron un párrafo los señores miembros de la Comisión con la aquiescencia de los señores ministros, que dice, este párrafo, es hermoso.

El órgano jurisdiccional, o sea el juez de distrito, de amparo, excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, violación al interés social, si a su juicio, del juez, con la negativa de la medida suspensional, pueda causarse mayor afectación al interés social.

Por eso, en vista de todas estas vaguedades, expresiones equívocas, con todo cariño y respeto y amistad, le envíe varias cartas que reproduzco aquí en mi librito, al señor presidente de la Corte, don Genaro Góngora y Pimentel, invitándolo a él y a los demás señores ministros, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitación que cursé como presidente del Colegio de Doctores de Derecho en dicha Facultad y como presidente del Colegio de Procesos de Amparo y de presidente del Instituto de Amparo, lo invité para que en un plan de altura y de respeto académico, oyéramos su conferencia para explicarnos estos y estos y estos términos, que nos diera luz en estas expresiones.

Me quedé como Juan el Bautista, nada menos, predicando en el desierto o como Simón Bolívar, aré en el mar. Nunca atendió mis invitaciones, ni él ni los demás ministros de la Corte ni los miembros de la Comisión, dieron la respuesta como o sea, sin hablar.

Pero es una respuesta contraria a ellos, el que tiene la razón no le teme al combate, al contrario, defiende su razón, pero el que está atemorizado tiene miedo de que sus razones se desvanezcan, se queda callado.

Y que no se diga que no pueden descender los señores ministros de la Corte a nivel de la Facultad de Derecho, para poder externar una conferencia respetuosa, académica, en la cual nos pudieron haber instruido muchísimo pero no se hizo.

Me voy a permitir señalar otro error y son varios, pero no voy a cansar la paciencia de ustedes.

Ya no lo tengo aquí anotado, pero sí estaban aquí, pero debo decirles a ustedes que ante los errores, muchas veces ya rayamos en dislates que contiene el proyecto de los señores ministros de la Corte, está la garantía añosa de nuestra Ley de Amparo vigente, del 10 de enero de 1936, claro, tiene muchos años.

En ese mes comenzaba yo a estudiar el segundo año de la carrera de derecho en la ilustre y siempre egregia, Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esa Ley de Amparo que a través del tiempo ha experimentado utilísimas reformas que la han mejorado, por eso es una Ley de Amparo antigua, no vieja, porque hay que distinguir entre lo antiguo y lo viejo, lo viejo es lo que ya no tiene vida, lo antiguo es lo que tiene vida y sigue viviendo como la Ley de Amparo.

¿No a caso rige los miles de amparos que se promueven todos los días ante los tribunales federales? ¿No se invocan los preceptos de la Ley de Amparo por miles de sentencia que dictan tales tribunales, y los quejosos, y los ministros de la Corte y los magistrados de circuito? Entonces, ¿dónde está lo desfasado de la actual Ley de Amparo? ¿No saben lo que es desfasado, por Dios? Les falta algún diccionario.

Desfasado quiere decir, lo que ya no está de acuerdo con la realidad, lo que se opone a la realidad y la Ley de Amparo no se opone a la realidad, sino que rige la realidad dinámica, permanente, añosa, lustrosa, de tantos lustros del juicio de amparo.

¿Dónde está lo desfasado?, como en la exposición de motivos de este proyecto se dice, y que es obsoleta, ¿qué entendemos por obsolescencia?, lo que está en desuso, lo que ya no sirve, ¿qué no sirve la Ley de Amparo?, el que tenga muchos errores, muchas fallas, muchos despropósitos, eso es propio de toda obra humana por obsolescencia lo que está en desuso, lo que ya no sirve. ¿Qué no sirve? La Ley de Amparo, que tenga muchos errores, muchas fallas, muchos despropósitos, eso es propio de toda obra humana.

Nuestra Ley de Amparo ha sido víctima de diatribas por parte de los seguidores de proyecto, los ministros de la Corte, de calificativos despectivos, que yo no puedo tolerar y nadie que ame el amparo puede tolerar.

Nuestra Ley de Amparo sigue vigente, la debemos defender frente a estos impactos que provienen de este proyecto, pero sí tenemos la obligación social y, sobre todo, atañere a los señores legisladores de mejorarla, de renovarla, de perfeccionarla.

Por eso, estos foros que la Honorable Comisión de Justicia abrió, son utilísimos porque se han recibido puntos de vista de varios juristas, abogados litigantes, jueces, estudiosos, maestros para señalar qué es lo que debe corregirse en la actual Ley de Amparo.

Porque debo decirles a ustedes, señores legisladores, que a la nueva Ley de Amparo la respalda, desde luego, don Genaro Góngora Pimental, que actuó no como presidente de la Corte, sino como jurista que es; lo respaldan los 10 ministros restantes, la homologación fue unánime, la respaldan los miembros de la Comisión y la respalda algunos jueces de Distrito y magistrados de Circuito, que por simpatía, creo yo, más que al proyecto, a sus autores, tienen que respaldarlos, son inferiores jerárquicos de los señores ministros.

Vamos a hablar pero con todo aplomo y franqueza. Pero esta tendencia de la renovación de la Ley de Amparo vigente, nada menos la respaldan los maestros de amparo de todo el país, de toda la República.

Pregunten, ustedes, señores legisladores ahí en la Facultad de Derecho de la UNAM si están o no están de acuerdo con el proyecto; habrá uno que otro despistado, sí; pero la mayoría dice: no, y así en todas las universidades del país.

En el mes –si no mal recuerdo- de abril o mayo de este año se efectuó, nada menos que, un coloquio patrocinado por el Colegio de Doctores en Derecho de la Facultad y al que fue invitado todo profesor de todas las universidades, tuvo lugar antes del famoso Congreso Nacional de Juristas, en noviembre en Mérida.

Acudieron los más brillantes y destacados especialistas en amparo y todos, sin excepción, estuvieron en contra de este proyecto y todos, sin excepción, postularon una serie de reformas importantes que deben introducirse a la Ley de Amparo.

No voy a hablar del famoso Congreso Nacional de Juristas en Mérida, porque en ese Congreso, yo pregunto: ¿Qué facultad de Derecho estuvo presente? ¿Qué amparista? ¿Qué investigador en amparo? ¿Quiénes intervinieron ahí? Pues, intervinieron los mismos miembros de la Comisión, encabezando mesas, todo estaba perfectamente arreglado.

Por eso no es nacional, porque no abarcó toda la nación de los juristas del país y, sin embargo, tratan de sorprender al señor presidente Fox, diciendo: “No, este proyecto

está respaldado por el consenso general de los juristas de México", no es cierto, es al revés.

Entonces, señores legisladores, ustedes tienen una maravillosa labor en beneficio de la justicia en México, de nuestro país. Pueden tomar algunos puntos de vista del proyecto, no todo es malo en la viña del Señor, dice el refrán, ni todo es bueno en la viña; entonces, haciendo una labor de evaluación de los aciertos que contiene el proyecto, fuera de estos errores garrafales que acabo de exponer, y de las ponencias, los puntos de vista que se han expuesto aquí, se puede elaborar, no una nueva ley de amparo, sino un conjunto de reformas enriquecedoras de la Ley de Amparo, quitándole las contradicciones que tiene y que yo no he descubierto a pesar de mis sesenta y tantos años que tengo de lidiar en el amparo, y entonces, sí tendremos un ordenamiento que responda, nada menos que a la teleología del amparo, a las exigencias de justicia de nuestro pueblo, porque también se ha dicho y ahí tengo unas declaraciones de mi querido Genaro, en la prensa, que dice: "No, a la Ley de Amparo vigente se le debe la delincuencia, que anden los delincuentes ambulando por las calles, a la Ley de Amparo actual se debe que el amparo, nada más, sea acceso de los ricos y no de los pobres…"

Me dejó lelo ese comportamiento del señor Presidente de la Corte. Precisamente andan sueltos los delincuentes que han cometido delitos graves, pero no por la Ley de Amparo, sino por otras leyes que el juez de Distrito tiene la obligación de acatar. Ahí tienen ustedes la fracción primera del artículo 20 de la Constitución y otras. Eso de que el amparo se hizo para los ricos y no para los pobres, se confunde el amparo con una defensoría de oficio que no cumple con su deber, por favor.

De tal manera, que no hay absolutamente ninguna razón para sostener, en términos generales, este proyecto. Yo les he preguntado, por escrito, que nos digan en qué aspecto, nuestra actual Ley de Amparo está desfasada, y no responden, o es obsoleta o protege a los delincuentes en la calle, y no contestan. Pero sí tenemos necesidad de aclarar estas expresiones.

Con estas expresiones se dañaría muchísimo al juicio de amparo y dañar al amparo es como herir uno de los factores fundamentales de nuestra nacionalidad mexicana, es como ultrajar a la virgen de Guadalupe.

Eso quería yo decirles, las reformas que propongo están en este librito y, además, ahí, en él, expongo otros errores de menor importancia que los que breve y deshilvanadamente he expuesto ante ustedes.

Muchísimas gracias por tolerar mi apasionamiento y mi sofocación, que ya se me está quitando.

Tiene la palabra el licenciado Gabriel Reyes Oroná, procurador fiscal de la Federación y representante del Poder Ejecutivo Federal, con los comentarios a la Ley de Amparo.

COMENTARIOS A LA LEY DE AMPARO

LIC. GABRIEL REYES ORONA
PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL.

El día de ayer, tuvimos la oportunidad de platicar, muy brevemente, la posición y la preocupación sustantiva de los abogados que representan diferentes dependencias del Ejecutivo Federal.

Platicábamos ayer, y me gustaría insistir en el tema, de que estos abogados de las dependencias no defienden sus intereses, no defienden un derecho subjetivo que acuda o no o asista o no a un quejoso.

Defienden, como hemos estado señalando, el interés de la Federación, esta figura de la autoridad responsable, de la autoridad infractora, de la autoridad culpable, de la autoridad victimaria, que debe ser tratada con desprecio y con un ánimo totalmente parcial al quejoso, pienso yo que ya no es la fórmula que debemos acatar hoy.

Yo sí considero que es muy valiosa la propuesta, creo yo y lo digo ya en pláticas con diversos abogados, que el amparo es, como se acaba de decir en este foro, una de las instituciones centrales del país, es una de las instituciones fundamentales del sistema jurídico mexicano, y por ello, debe de renovarse, debe de actualizarse no solamente en los aspectos materiales que comentábamos el día de ayer por ello, debe de renovarse, debe de actualizarse, no solamente en los aspectos materiales que comentábamos el día de ayer y ya no seguir engrosando pilas y pilas de documentos y de papeles que circulan en los archivos y que aparecen y desaparecen.

Creo yo, que ya no es el México rural de los 2000 amparos, ya es el México de cientos de miles de amparos, la capacidad de la autoridad no debe ser restringida, la capacidad disminuida de la autoridad para hacer valer en sus informes la posición de la federación, y como dije ayer, la federación somos todos, el interés de la federación es el interés de todos en coordinación o articulación, con interés del quejoso, igual del legítimo, igual de tutelable, pero no debemos de ver el informe con justificación de la autoridad o en cualquier otra promoción de la autoridad, el informe de la autoridad culpable, tenemos que ver la protección del interés de la federación.

Y es por ello que ese instrumento debe ser hábil, para poder manifestar oportuna, suficiente y caramente, cuáles son los puntos de la administración, creo yo que las aportaciones que a lo largo de diferentes foros, documentos y pláticas que han dado

los señores ministros de la corte, quedan en manifiesto valiosas aportaciones que se pueden hacer para configurar un mejor amparo en nuestro país.

Sin embargo, esta institución tan noble, tan central en nuestro país, ha acogido a otros procesos que seguramente ya no debiera sustanciarse por la vía de amparo, es así, que el amparo se ha convertido en un mecanismo y vehículo, no solamente para proteger las garantías individuales, se ha convertido en un control de legalidad, en un control casi administrativo de las acciones y de la gestión pública.

Creo yo que la mención, alusión que se hace al interés legítimo, es cierto que puede tener cuestionamientos o puede tener apoyadores; sin duda alguna, lo que yo sí creo, es que el procedimiento de amparo no es procedimiento útil o el procedimiento directo para la protección de ese tipo de intereses colectivos o sociales.

Creo yo, si la idea es proteger o dar causes a algunas preocupaciones o algunas instancias que no tienen fácil representación, deberá establecerse un proceso a *doc*, un proceso que tenga características de defender y de permitir la legítima defensa de intereses que no son estrictamente jurídicos, no tanto por la afección o por la representatividad que podamos tener, sino por la posibilidad de que el interés sea colectivo y demostrar el interés colectiva, ciertamente no es lo mismo que demostrar el interés jurídico en un procedimiento de amparo.

Es por eso que volvemos a hacer el planteamiento, de que esta Comisión, que no es una comisión redactora, no es una comisión postulante, no es una comisión proponente, el mejor esfuerzo y la mejor buena fe, seguramente (inaudible) en esa comisión, pero no es el deber, no es la capacidad y no es la competencia de esa comisión, el darle el lustre jurídico, el lustre técnico, ahora se encuentra ya frente a esta soberanía, se encuentra frente al Congreso de la Unión y esta Comisión es responsables de establecer un justo equilibrio entre el interés de los quejosos y el interés de la federación.

Tenía este sentido, creemos que es muy importante que el esfuerzo que se haga, recoja los puntos de vista que el día de ayer vertimos por parte del Ejecutivo Federal, particularmente en el asunto de una necesaria revisión de la suspensión y sus efectos, en este sentido, yo también me pregunto, si es o no contrario al interés social, que el interés fiscal se puede garantizar, si es o no de interés social, que los recursos lleguen oportunamente al estado y se puedan efectuar los gastos públicos, esto me lleva también a la reflexión relacionada con la declaratoria de inconstitucionalidad.

En contra sentido o en contra oposición, también como decíamos en el ánimo de imparcialidad, tenemos que revisar la declaratoria de lascividad, hay ocasiones –como recientemente ha sucedido- que la Corte apegada estrictamente a derecho y apegada estrictamente a la norma, ha declarado constitucional una norma y ahora la declaratoria de lascividad, de los intereses de la federación, queda a las labores de fiscalización; no es entonces ahora que también la corte pueda declarar que esa disposición, en caso concreto, el 80, genera una lesión al estado y que por lo tanto tenemos que encontrar en ejecución, una forma en la que los contribuyentes, no solamente los quejosos, sino todos aquellos contribuyentes que no hayan pagado, restituyan a la federación, los ingresos que hacen falta para cubrir los gastos públicos.

Yo creo que la ley de amparo debe dejar de ser vista como un acto, como un arma, en la que se contrapone el interés del quejoso contra una autoridad victimaria. Creo yo que los que tenemos que ver es el amparo, un mecanismo de restitución del control de legalidad, un mecanismo del control del ordenamiento jurídico, en donde las dos partes concurren en igualdad de oportunidades, para poder afirmar, probar, alegar y demostrar, que determinada acción es o no apegada a nuestro ordenamiento jurídico.

Otero no es el monopolista de la razón, Otero no fue el que enunció razón por primera vez, él simplemente recogió un principio que es lógico y razonable, se ataca, yo no sé si por antiguo o por viejo, pero parece que la fórmula es mala por desusada, parece que la fórmula es mala por vieja, sin embargo yo creo que no es la fórmula de una persona, no es la idea original de una persona.

Esta idea, expresada en esta fórmula, tiene una razón de ser y esa razón persiste, esa razón no puede ser cambiada del blanco al negro, del pendulazo de una banda hacia otra; esta fórmula tiene que ser considerada en función a lo que hoy en día vivimos.

Cómo podríamos vivir ante jurisprudencias generadas, redactadas y publicadas, que tienen en consideración ciertas particularidades de un caso y que ahora al libre albedrío de los particulares, se va a aplicar o se va a dejar de aplicar la ley, porque ha habido una manifestación que va quedar al criterio, va a quedar a la interpretación de los particulares, dado que no hay reglamentación, dado que no hay normas administrativas que nos señalen cómo y en qué casos sí procede la aplicación del criterio jurisprudencial, va a quedar entonces al arbitrio de las personas, va a quedar al arbitrio de los particulares, si surten o no el supuesto que fue analizado por la Corte.

Es preciso por eso que encontremos un esquema que articule a los poderes de la unión, necesitamos encontrar un esquema en el cual, si lo declarado inconstitucional, es obra del Legislativo, sea el Legislativo el que encuentre el mecanismo para reponer

o restituir esa norma a la legalidad, pero también si fue un reglamento, debe ser el ejecutivo el que pueda poner los medios administrativos para su observancia, porque no podemos dejar al libre albedrío la interpretación de las declaratorias de constitucionalidad.

En este sentido simplemente, creo yo que tenemos que encontrar un mecanismo en el contexto de nuestra Constitución, tenemos que encontrar un esquema que permita articular los esfuerzos de los poderes de la unión. Es así, que vuelvo a hacer un llamado a esta Comisión, para que a lo largo del ordenamiento o de la propuesta de ordenamiento que se encuentre en análisis por parte de ustedes, revisemos estos temas que son del más alto interés nacional, es urgente, es necesario que el país cuente con una buena ley de amparo, pero que también distingamos, separemos, esos otros procedimientos que han estado encubiertos en el amparo.

Sí va a haber, porque así lo decide el Legislador Federal, una acción popular, una llamada ahora o cobijada ahora bajo el interés legítimo, creo yo que no es la ley de amparo la que la debe cobijar, si va a haber o no un mecanismo de interrelación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, respecto de las declaratorias de constitucionalidad o lo que pedimos, la declaratoria de lascividad de la federación, no creo también que sea materia de la ley de amparo, esa sería quizá una consecuencia de las resoluciones de amparo, pero particularmente y lo más importante en el ordenamiento que me parece es dotarlo de imparcialidad.

El proceso existente y el proceso propuesto, mantienen un gran vicio que es una parcialidad, una inequidad en favor del quejoso, no agravia nadie, no daña a nadie, que la federación, que el interés de todos tenga la oportunidad y plazos que tiene el quejoso, para hacer ver con suficiencia al juez, cuál es la materia que motivó o fundó las razones de su actuar.

En este sentido, creo yo, que en la medida que los procedimientos permitan hacer llegar al Poder Judicial oportunamente eficiencia al juez, cuál es la materia que motivó o fundó las razones de su actuar, en este sentido creo yo, que en la medida que los procedimientos permitan hacer llegar a la autoridad judicial oportunamente todas estas razones, nos van a evita largos procesos en los cuales, en la revisión y en la revisión y en la revisión, volvamos a hacer análisis de las situaciones concretas.

Es por eso, que como lo comentábamos también, recientemente con el señor presidente de esta Comisión, creo yo que tiene que articularse mejor la justicia administrativa y la justicia de pleno, la (ininteligible) que a mí es el Poder Judicial; en ese sentido nos ponemos desde luego y los comentarios los haremos llegar a esta

Comisión, puntualmente respecto de diferentes aspectos de la función pública que preocupan a la administración pública federal. Muchas gracias.

A continuación, se ofrece el uso de la palabra al doctor Baltazar Cavazos Flores; quien es presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, presidente del Colegio de Derecho del Trabajo, de la Facultad de Derecho de la UNAM; miembro de la asociación de abogados litigantes de la República Mexicana y quien diserta, sobre la necesidad de reformar y adicionar, tanto la Ley de Amparo, como la Ley de Trabajo vigente.

“LAS NECESIDADES DE REFORMAR Y ADICIONAR TANTO LA LEY DE AMPARO COMO LA LEY DE TRABAJO VIGENTE”

DOCTOR BALTASAR CAVAZOS FLORES
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE DERECHOS DEL TRABAJO, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE DERECHO DEL TRABAJO DE LA FACULTAD DE DERECHO, UNAM, MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE ABOGADOS LITIGANTES DE LA REPUBLICA MEXICANA.

Distinguida mesa de honor, amigos todos. Yo he estado creyendo, que el exceso de democracia nos está conduciendo a la ingobernabilidad; ¿por que? Porque no nos ponemos de acuerdo y realmente, hay elementos que se requieren fundamentalmente con fecha de ayer, reformar.

En materia de amparo, yo no me dedico al derecho de amparo, pero tenemos algunos conocimientos o el particular por repercusión con lo laboral, estimo que resulta indispensable, porque no veo que la Ley Federal de Trabajo tenga posibilidades de reformarse a corto plazo, que se establezca un precepto en donde se determine categóricamente, que las resoluciones de calificación de huelgas, tengan el carácter de definitivas, para que puedan ser impugnadas por medio del amparo directo ante los tribunales colegiados.

Porque actualmente, tenemos la barbaridad increíble, de que estas resoluciones son interlocutorias y en consecuencia, se tiene que interponer un amparo indirecto y luego ante los juzgados de distrito, y posteriormente ante los tribunales colegiados. Cuando los tribunales colegiados resuelven, la empresa quebró y los trabajadores se murieron de hambre; creo que esto es inaplazable, definitivamente.

Hablé con el licenciado Salvador Rocha, compañero de toda la vida y le hice saber mi preocupación, pero que mejor que esta magnifica ocasión, de poder comentar a viva voz estos pequeños puntos que considero que ya no se pueden aplazar, porque las palabras se las lleva el viento, pero esto tiene que ser con fecha de ayer, tenemos que ser prácticos y tomar nota, lo que vamos a hacer, de lo que se puede hacer, no de lo que pensamos que va a ser únicamente palabras huecas, de las que de familia nunca se hizo caso.

Junto con esto, también pienso, fíjense una cosa muy discutible; pero yo creo que las resoluciones de los juzgados de distrito, en cuanto al fondo, tienen que ser definitivas; porque es una burla la que se hace de los jueces de distrito. Lo que diga el juez de distrito no me importa hombre, pido la revisión ante el Tribunal Colegiado y de ahí la gano y entonces, hay abogados que hacen su agosto, el juzgado de distrito

consiguiendo ciertas pre-ventas y después para llegar a un arreglo, porque saben que en el amparo directo lo van a perder. La resolución es de fondo, del juzgado de distrito, creo que deben tener el carácter de definitivas; es un punto para mí muy importante, que he recogido ahí de la facultad de derecho, en donde también, pues ya tengo más historia que futuro, tengo 48 años de dar la clase de derecho del trabajo y son ideas que hemos recogido y que, que mejor oportunidad de plantearlas a ustedes con toda formalidad.

Otro punto fundamental, es de que, si es que se llega a reformar la Ley Federal del Trabajo, en el aspecto procesal; porque en el aspecto sustantivo, no se va a reformar nunca jamás, porque creen los trabajadores y quizá con toda razón que cualquier reforma va a ser en contra de los trabajadores. Yo soy abogado patronal, nadie es perfecto, son pecadillos de juventud; pero realmente pienso que cualquier reforma, no va a ser en beneficio de ni uno ni del otro, sino de la justicia social.

Sin embargo, como presidente del Colegio de Profesores del Derecho Procesal del Trabajo, pienso y hemos hablado con algunos políticos importantes de la Secretaría de Trabajo, con el mismo señor Presidente, de que sí es posible un código procesal del trabajo, así como hay Código Civil y Procesal Civil, Código Penal y Procesal Penal, creo que es necesario un código procesal de trabajo, para que nos quite la barbaridad de artículos que tenemos, porque nuestra Ley Federal del Trabajo padece de articulitis aguda. Tenemos mil 10 artículos, que es increíble y todavía tenemos tiempo para transitorios.

El código de trabajo japonés tiene 48 artículos, el código de trabajo alemán tiene 60, los exagerados japoneses 130, y nosotros mil 10, es una vergüenza. Cuando yo era magistrado en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, Karla Hills, me decía: No lo creo Doctor, que tenga tantos artículos. Dije, es que somos muy cuidadosos, lo que pasa es que tenemos artículos repetidos hombre, es vergonzoso; el 448 y el 902, tenemos artículos que el segundo párrafo contradice al primero, el de los trabajadores de confianza, que nadie sabe quienes son y que cada día vamos a saber menos quienes van a ser.

Entonces, sí pienso que habrá que reformar en materia de huelgas, fundamentalmente esto que es importante, que las huelgas se declaren procedentes o improcedentes, en un plazo máximo de 15 días. Ya no es posible permitir las huelgas pereternum, y conste que parece que soy líder obrero, porque a ellos son a los que les conviene que las huelgas se les resuelvan pronto, porque son los que, son actores en el juicio; 15 días, para bien o para mal. Si los trabajadores tiene razón, que se les den; y si no, que los desengañen, tenemos que hacerlo y no lo hacemos, hombre.

Yo estoy pidiendo esto hace 20 años y no hay caso, a nadie le interesa nada. Por eso es por lo que es una gran oportunidad está, de veras, platicar con ustedes sobre este punto, porque una huelga de más de 15 días, es contra México, ya no es contra la empresa. Y además que se declaren procedentes o improcedentes, porque tenemos una barbaridad que es sacrílega, las huelgas se declaran, y fíjense nada más, iba a decir mariconamente, pero no lo digo, existentes, inexistentes, lícitas o ilícitas, es vergonzoso, hombre. La huelga existe desde el momento en que se suspendieron las labores, sin necesidad de que se declaren inexistentes. ¿Inexistente? Pues, sí existió, por favor, hombre.

Yo llegue a las 2:00 de la mañana de Brasil, que fui a dar unas conferencias, a las 2:00 de la mañana, ya se imaginarán. Y allá, ya te cambiaron, lo logré cambiar, fíjense, en la Cámara de Diputados en Brasilia; las huelgas se van a declarar procedentes o improcedentes, lo logro en Brasil y no lo logro en México. "Farol de la calle y oscuridad en la casa".

Pues, nos debería dar vergüenza, fíjense ustedes; por eso que esto es una oportunidad muy importante, pues para hacer valer estas cosas. Procedentes o improcedentes y la razón, a lo mejor tiene razón, que se la den y si no, que lo desengañen; pero en cuanto al fondo. Porque fíjense, todavía hay otra cosa más grave, si las huelgas se declaran existentes, el trabajador no gana nada, porque tiene que promover un interminable juicio de imputabilidad; o sea que aquí desengañan por igual a patrones que a trabajadores. Una legislación laboral que da vergüenza, fíjense ustedes.

Entonces, pienso eso, que sería reformar la Ley Federal del Trabajo, en donde se establezca que la calificación de las huelgas es procedente o improcedente en un plazo máximo de 15 días. Otra cosa que ya también allá, más o menos se me hizo caso, porque estoy yendo cada seis meses; que no haya huelgas en las universidades, que en las universidades haya un tribunal universitario de conciliación y arbitraje obligatorio, es una vergüenza que tengamos huelgas en las universidades, lo que pasó en la nacional hace dos años, tuvimos 15 días de clases hombre, por exagerar la nota.

Yo creo que es necesario que haya un tribunal universitario, de conciliación y arbitraje obligatorio, integrado en forma plural, por representantes de todos los intereses que puedan ser afectados. Yo acabo de mandar una carta a todos los rectores de la República, diciendo que, a ver si le entran al trancazo porque, ya en la Secretaría de

Trabajo, me dijeron que estaban de acuerdo. Lo que querían saber, es la opinión de los rectores.

Entonces, espero ya que los rectores puedan estar de acuerdo. En la universidad de Coahuila, yo soy de Coahuila, ese glorioso estado, como ustedes saben; ya la aceptaron, ya tenemos una universidad, donde hay un tribunal universitario de conciliación y arbitraje obligatorio, en donde todos los problemas se van a resolver en conciliación.

¿Universidades autónomas? Pues, cuáles hombre. Si tenemos que acudir ante las juntas de conspiración y argumentaje para que nos resuelvan los problemas. Una universidad que no pueda resolver sus propios problemas, no merece el nombre de autónoma, vamos a hablar claro. Entonces, que haya ese tribunal universitario; y para evitar el problema constitucional, aquí está mi querido maestro Burgoa, pues que se hagan impugnables la resolución de ese tribunal, por medio del amparo directo ante los tribunales colegiados. vamos a hablar claro, entonces, ya hay ese tribunal universitario y para evitar el problema constitucional, aquí está mi querido maestro Burgoa, que sean impugnables las resoluciones de ese tribunal, por medio del amparo directo ante los tribunales colegiados.

Yo creo que esto sí es importante, esto es importantísimo, pero veo que no se le da la importancia debida. Entonces, yo estoy muy preocupado por esto. Ahora, en Brasil, allá sí los convencí, fíjense, estuve una semana hablando allá, en todo Brasil, y el avioncito llegó a las 2 de la mañana, ya se imaginarán ustedes, y salimos de allá desde las 7 de la mañana, de Río de Janeiro, pero yo pienso que no podía desperdiciar esta oportunidad para poder cambiar estas preocupaciones con ustedes, porque creo que son fundamentales.

En materia laboral, ni digo nada, porque fíjense, por ejemplo, en materia de revisión de los contratos colectivos, es increíble, se habla de un término mínimo, luego de un término máximo. Se dice: “La revisión de los contratos procede cada dos años y se pide la revisión, cuando menos, con 60 antes”.

Quiere decir que se puede pedir al día siguiente la revisión, porque quien tiene lo más, tiene lo menos.

Un sindicato puede decir: “Te la pido con 600 días, porque soy temeroso, no se me vaya a pasar el tiempo”. Y la revisión de los contratos, en cuanto a los salarios, con 30 días antes del vencimiento, o sea, siempre, menos los últimos 30 días.

Sí necesitamos que en el Poder Legislativo se tomen estas ideas, que son pequeñas, pero son claras, precisas y concretas, porque yo creo que tenemos que sacar adelante, cuando menos, algo de esto. Porque de otra manera, vamos a seguir hablando, vamos a seguir platicando, muchos aplausos y no vamos a hacer absolutamente nada.

Yo creo que la finalidad del derecho del trabajo, tendrá que seguir siendo protectora del trabajador, obviamente, pero también, fundamentalmente, coordinadora de los actores de la producción, porque yo creo que justicia social, sin progreso económico, es demagogia. Pero desarrollo económico, sin justicia social, es desarrollismo.

Muchas gracias, señores diputados.

Se ofrece el uso de la palabra al licenciado Fabián Aguinaco Bravo, quien pertenece a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y Aguinaco Zaldívar y Araburo, Sociedad Civil, y nos plantea su ponencia: ¿Es necesaria una nueva Ley de Amparo?

¿ES NECESARIA UNA NUEVA LEY DE AMPARO?

LICENCIADO FABIÁN AGUINACO BRAVO
BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS AGUINACO, ZALDIVAR Y ARABURO, S. C.

Agradezco al licenciado José Elías Romero Apis, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a ustedes, señores diputados integrantes de la Mesa Directiva, su amable invitación para participar en las jornadas de la Consulta Nacional sobre el Sistema de Amparo y Protección Constitucional. Es para mí un gran honor compartir esta Tribuna para expresar nuestros argumentos de carácter jurídico en torno al tema que hoy nos convoca.

El cuestionamiento que hoy nos hacemos acerca de una nueva ley de amparo, gira en torno a una pregunta medular, ¿constituye la vigente Ley de Amparo un instrumento eficiente de protección jurisdiccional, que colme las necesidades de justicia de la sociedad contemporánea en ese conjunto? La pregunta que nos formulamos, sólo puede resolverse si tomamos en cuenta la práctica cotidiana del juicio de amparo y la interpretación judicial correlativa, alejados por completo de apasionamientos, posturas dogmáticas, descalificaciones y consideraciones emotivas.

Un primer intento por contestar esta interrogación que aquí nos enunciamos, nos lleva a responder negativamente. Esta idea la sustenta el surgimiento de la más variada índole de instituciones, que proclaman como su principal objetivo la protección fácil y pronta de los derechos del hombre, frente a las autoridades que los desconocen o conculcan.

Podemos mencionar, a título de ejemplo, las diversas comisiones de derechos humanos, las procuradurías de defensa del consumidor, del trabajo, del menor, de la ecología, los tribunales agrarios, etcétera. La aparición de los aludidos organismos estatales obedece, a nuestro parecer, a la insatisfacción de la sociedad con el único medio de que tradicionalmente ha dispuesto para lograr el respeto y cabal observancia de los derechos del hombre, que asegura la Constitución federal de la República y los tratados internacionales.

En efecto, se percibe en el horizonte de hoy día, una significativa pérdida de confianza en el juicio de amparo. El cuestionamiento parecerá todavía más apremiante, si consideramos el constante alejamiento de la sociedad hacia el juicio de amparo, que tan sólo nominalmente es suyo. Se ha separado de tal manera la sociedad de los limitados beneficios que otorga ese instrumento jurisdiccional, que realmente se

puede hablar de una desconfianza, cuando no de un verdadero repudio a la situación actual.

Entre los fenómenos que influyen en esa pérdida de confianza, se encuentran los que se refieren a su estructura y funcionamiento, pudiendo citar, a grandes rasgos, los siguientes: En primer término, la substanciación del juicio de amparo, con sus incidentes, es compleja y azarosa; sus formulaciones suelen abundar en oscuras referencias o en sobreentendidos que sólo pueden comprender los especialistas. También es frecuente que la Ley se desborde en tecnicismos, clasificaciones y distinciones que hacen complicada su lectura y dificultan su comprensión, aún para los abogados, no digamos ya para el lego.

En segundo lugar, la caprichosa regulación de los recursos procesales, ha provocado el surgimiento de múltiples y variados criterios jurisprudenciales. La gravedad de este problema, ha sido objeto de distinción en diferentes épocas y foros, pero es en nuestros días cuando sus consecuencias se antojan inaceptables. Ello, en razón de la incertidumbre jurídica que ha provocado en los justiciables.

Por otro lado, es de notar el cauce cada día más estrecho en que sobrevive la suspensión del acto reclamado, olvidando el juzgador, la obligación que le impone la Ley de conservar la materia del amparo hasta su terminación del juicio. Si examinamos, aunque sea someramente, el capítulo de la suspensión, en la vigente Ley de Amparo, podemos advertir con facilidad, que regula el primitivo texto del artículo 107, fracción décima constitucional, no así su vigente redacción, que rebasa, hace palidecer y torna inaplicables las disposiciones del artículo 124 de la Ley Reglamentaria, que por inercia se invoca reiteradamente por los tribunales, para otorgar o denegar la medida suspensional.

De hecho, si nos despojamos de ideas petrificadas e intentamos analizar objetivamente el problema planteado, nos percataremos de que el primitivo texto de la fracción décima, del artículo 107 constitucional, no expresaba las características y peculiaridades conforme a las cuales la suspensión del acto reclamado se otorgaba.

De ahí, que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de 10 de enero de 1936, disponga en su artículo 124, que no ha sufrido modificación alguna a pesar del tiempo y de nuestras necesidades, los requisitos que el juzgador debe observar para el otorgamiento de la suspensión: Que lo solicite el agraviado, que no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden

público, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado, con la ejecución del acto.

Sin embargo, el artículo 107 constitucional, reformado por primera vez, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al 19 de febrero de 1951 con la ejecución del acto; sin embargo, el artículo 107 constitucional, reformado por primera vez, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 19 de febrero de 1951, establece en su fracción X la prelación lógica y sucesiva de los requisitos que el juzgador necesariamente debe observar para el otorgamiento de la suspensión. Esto es la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros y el interés público.

Así las cosas, fuerza es concluir que la literalidad del artículo 124 de la vigente Ley de Amparo, no armoniza ni comulga con la prelación lógica jurídica de los requisitos que establece la fracción décima del artículo 107 constitucional, por lo que carece de fuerza normativa y aplicabilidad, al estar derogada implícitamente por dicha norma de jerarquía normativa superior.

En un tercer aspecto, estimamos que la ambigüedad de las disposiciones legales convierten la tramitación del juicio en una verdadera trampa procesal para los justiciables, sobre todo cuando su interpretación es letrista y en el sentido más desfavorable para el gobernado.

Como un cuarto punto a considerar, encontramos que a pesar de que los artículos 103 y 107 constitucionales sientan como regla general la procedencia del juicio de amparo contra actos violatorios de los derechos del hombre, la vigente Ley de Amparo y su interpretación a través de la jurisprudencia, han trastocado esta regla general en excepción; dicho de otro modo, han crecido a tal grado los motivos de improcedencia, que ahora integran en conjunto un principio básico que torna la procedencia del amparo en una regla de excepción.

Otro problema insoslayable en la Ley de Amparo, que sólo reproduce la sanción de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, es el carácter draconiano de la destitución del cargo respecto de la autoridad que rehusa el cumplimiento de la ejecutoria, ya sea por que repite el acto reclamado, o bien, por retardo en su cumplimiento; sanción que desde luego robustece el desacato de la ejecutoria, porque semejante castigo no se aplica sino en contadas ocasiones y siempre que se trate de funcionarios de menor jerarquía.

Observamos otro problema, que tal vez por estar demasiado inmersos en el desarrollo del proceso del amparo no apreciamos en toda su magnitud, nos referimos a la jurisprudencia, que día a día se torna más complicada. En efecto, la jurisprudencia, que no tiene otra naturaleza que la de ser una interpretación de la ley en el caso especial sobre el que versa la queja, la han transmutado los tribunales de amparo en una norma legislada, que aplican como parte del ordenamiento legal y extienden su alcance a situaciones diferentes de las que originaron la interpretación judicial.

Todavía peor, las llamadas tesis se confeccionan y destinan a ser observadas como disposiciones legisladas, pasando por alto que la expedición formal de leyes es privativa de las cámaras del Congreso de la Unión, salvo los casos en que la Constitución determine otra cosa.

Bajo estas circunstancias y otras más que por respeto al tiempo que se me concede no quiero puntualizar, considero que el porvenir del juicio de amparo bajo la ley reglamentaria vigente no es halagüeño, sino que muy por el contrario, se encamina al ocaso.

¿Qué podríamos sugerir para que el juicio de amparo responda apropiadamente a las exigencias constitucionales de una justicia pronta, completa, para todos, y de manera eficaz que reclama nuestra sociedad contemporánea? Nos parece razonable afirmar que es necesario promulgar una nueva ley de amparo y las reformas constitucionales que le den sustento, pues no basta la modificación reiterada de dichas normas para remediar los graves problemas que provoca la aplicación de una ley obsolescente, que no responde a los reclamos de un acceso eficaz a la justicia.

Al enfocar nuestra atención sobre los graves problemas que genera la Ley de Amparo vigente, los barristas participantes en el Sexto Congreso de Abogados, organizado por el Consejo Directivo de la Barra, que se llevó en la ciudad de Querétaro los días 28 al 30 de septiembre del año 2000, llegamos a la decisión mayoritaria de apoyar con las modificaciones y adiciones pertinentes el proyecto de una nueva ley de amparo, elaborada por la comisión designada por acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nuestra adhesión no fue por simpatía ni mucho menos por compromiso, porque en ella se nos explicó el proyecto, no por desconocidos, sino por el propio doctor Héctor Fix Zamudio y por el doctor Arturo Zaldívar, ambos estudiosos; uno dedicado a la enseñanza, otro a la cátedra y al ejercicio constante y único del juicio de amparo.

La Barra Mexicana Colegio de Abogados decidió apoyar el proyecto de una nueva ley de amparo, además por lo ya expresado, en las siguientes razones: En primer término, porque estamos convencidos de que la vigente ley se encuentra anquilosada y no satisface los reclamos se justicia; y porque además se ha convertido en un valladar que dificulta la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 17 constitucional.

En segundo lugar, porque el proyecto de la nueva ley de amparo contiene efectivamente avances significativos que permiten el pleno control de la constitucionalidad de todos los actos de autoridad, y porque da vigor al estado de derecho.

El precitado proyecto de la nueva ley de amparo propone, entre otros temas relevantes, ampliar el ámbito proyector del juicio de amparo, abarcando de manera clara y precisa los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales de carácter general; abandona el interés jurídico para acceder al juicio de amparo, por el interés legítimo que comprende los derechos colectivos; amplifica el concepto de autoridad responsable para los efectos de juicio de amparo, permitiendo el pleno control constitucional de los actos violatorios de los derechos humanos.

La medida suspensional es asequible mediante la apariencia de buen derecho, que no es un término novedoso, sino que tiene una historia importante que contar. Establece la declaración general de inconstitucionalidad y de interpretación conforme. En los amparo directos busca evitar que se pronuncien las llamadas sentencias, para efectos que sólo retardan la resolución total y definitiva de la controversia planteada.

En torno al proyecto de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 25 de abril del 2001, que reforma y adiciona el proyecto presentado por la comisión ad hoc, respetuosamente nos permitimos formular los siguientes comentarios:

Las causas de improcedencia deben ser de aplicación estricta y quedar plenamente probadas. Segundo.- Especialmente grave resulta la redacción del artículo 130 y 131 del proyecto modificado, pues elimina injustificadamente la facultad del legislador para fijar discrecionalmente el monto de la garantía, a fin de que surta efecto la suspensión cuando los derechos que se puedan afectar al tercero no sean estimables en dinero, tornando así improcedente la contra-garantía.

Semejante modificación deja al quejoso en una situación más desfavorable que la contemplada en la vigente Ley de Amparo, amén de provocar la inoperancia de la garantía constitucional a la suspensión de los actos reclamados, y por ende, la frustración de los fines proteccionistas del amparo.

Uno de los grandes avances del proyecto consensuados por parte de la comunidad jurídica, no por toda, pero que sí incluye a muchos maestros universitarios también pues por parte de la comunidad jurídica, no por toda, pero que sí incluya muchos maestros universitarios también, es la posibilidad de que la suspensión procede excepcionalmente contra órdenes de aprehensión y autos de formal prisión en casos de delitos calificados por la ley, calificados como graves.

Resulta sorprendente su desaparición en el proyecto modificado. Los abusos en cuanto a la tipificación de delitos graves, como en la fabricación de delitos, hacen urgente un mecanismo de defensa eficaz. Sin suspensión, en estos casos, poco se habrá avanzado en la materia penal, en una nueva ley de amparo.

Cuarto. Se modifica el artículo 106, fracción V, del proyecto de la Comisión, que entendía por actos de ejecución irreparable los que afecten derechos sustantivos. Decidan sobre presupuestos procesales o constituyan violaciones procesales relevantes, para entender por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos.

Consideramos que la redacción modificada constituye un serio retroceso. Incluso respecto de la ley vigente, por las siguientes razones: la práctica demuestra que hay ciertas violaciones procesales que son de tal naturaleza y relevancia, que lo más conveniente es que se puedan, desde luego, impugnar a través del juicio de amparo en directo, ya que la espera al amparo directo en contra de la sentencia definitiva, implicará para el afectado la necesidad de soportar un proceso costoso y largo que se ha continuado sobre bases frágiles.

Así mismo, provocará el retraso en los procesos al reponerse algunos juicios desde sus orígenes en constantes ocasiones.

Por esas y otras razones, el máximo tribunal de la República, abandonó el criterio sostenido en anteriores integraciones, de que los actos de ejecución irreparable sólo afectan derechos sustantivos. Hoy se acepta, de conformidad con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procedencia del amparo en directo, por lo menos en las violaciones procesales siguientes: falta de personalidad, recusación

improcedente, desistimiento tácito de la acción laboral, competencia, prueba pericial médica.

Por otra parte, los tribunales colegiados de circuito aceptan la procedencia del amparo en directo en contra de diversas violaciones procesales relevantes. Por ejemplo: improcedencia de la vía, nulidad de notificaciones de multas, nulidad de actuaciones por indebido emplazamiento, admisión de prueba documental de informes, incidente de reducción de embargo, resolución que dispone no llamara juicio a terceros, admisión de demanda laboral que no se pronuncia sobre ciertos codemandados, levantamiento parcial de embargo, etcétera.

En el proyecto de la Comisión, se conserva el sistema de los autorizados en términos del artículo 27 que ha funcionado adecuadamente hasta hoy. La desaparición de este tipo de autorizados por los apoderados a que se refiere el artículo 11 del proyecto modificado, complicará los asuntos, ya que por un lado, obligará a los particulares a acudir a los juzgados a nombrar a sus apoderados judiciales o a gastar en poderes notariales.

Por otra parte, implicará múltiples comparecencias que distraerán los trabajos de los tribunales y les quitarán tiempo para la tramitación y pronta resolución de los juicios.

En la fracción II, del artículo 110 del proyecto modificado se establece un plazo de ocho días para ampliar la demanda, cuando del informe con justificación aparezcan datos no conocidos por el quejoso o cuando en dicho informe se trate de fundamentar o motivar el acto reclamado.

Con independencia de la contradicción que surge con el artículo 116, que establece para el último caso un plazo de quince días. Vale observar que es demasiado breve el plazo de ocho días, máxime si se considera que para formular una nueva demanda se cuenta con treinta días.

Por último, estimamos pertinente insistir en que se recojan las propuestas que seguidamente esbozamos:

Primero. Sugerimos que se introduzca en la Constitución y en la Ley de Amparo, una disposición que diga que las sentencias que se conceden en amparo, tendrán, además del efecto restitutorio, el de generar responsabilidad civil contra la autoridad que emitió el acto violatorio de garantías, la cual conlleva la obligación de reparar los daños y perjuicios materiales y morales que resienta el quejoso.

En segundo término, en tratándose especialmente de amparos directos y en algunos bisustanciales, la ejecutoria puede quedar incumplida si el referido proyecto no prevé los instrumentos jurídicos idóneos que permitan llevar a cabo una ejecución completa de la sentencia protectora en estos amparos directos.

Tercero. El deber de cumplir con la sentencia de amparo incumbe primariamente, a la autoridad violadora de garantías, siendo sujeto solidario de la misma obligación el superior inmediato de aquellas o simplemente el superior, aunque sean diferentes sus grados de responsabilidad, situación que no contempla el multicitado proyecto del 25 de abril del año en curso.

Toda vez que el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridades está confiado a los tribunales federales, consideramos que la intervención que al Ministerio Público da la vigente Ley de Amparo y el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta intervención resulta inútil y ociosa.

Muchas gracias, señores diputados.

PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE AMPARO.

LIC. ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA
REPRESENTANTEDE LA COMISION REDACTORA

Quiero una vez más, expresar mi gratitud y reconocimiento a la mesa directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por permitirnos, a la comisión redactora del Proyecto Nueva Ley de Amparo, participar en este importante foro.

De manera especial quiero destacar las atenciones del señor diputado José Elías Romero Ápis, presidente de la Comisión y de los señores diputados David Sotelo y Gustavo Buenrostro, gracias por todas sus atenciones.

Así mismo, quiero destacar que este proyecto que elaboró la comisión redactora y que modificó la Suprema Corte de Justicia, ha contado, en este mismo foro, con el apoyo creativo de dos de los más importantes colegios de abogados de México, el ilustre y nacional Colegio de Abogados y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Barra, por ciento, que participó de manera muy cercana con la Comisión y que en muchas de las propuestas que se recogieron en el proyecto, vienen precisamente de este Colegio.

Así mismo, es importante destacar que en el proceso de reflexión y revisión del primer proyecto, se recibió también el apoyo decidido en los lineamientos fundamentales de varias de las más importantes instituciones de educación e investigación superior de México, como son: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Autónomo de México y la Escuela Libre de Derecho, entre otras.

Así mismo, como les consta a varios de los aquí presentes, en el Congreso Nacional de Juristas de México participaron de manera libre y decidida varios de los más importantes profesores de Amparo y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional.

El día de hoy me referiré a la figura del interés legítimo, que es otro de los aspectos relevantes del proyecto que se somete ahora a su consideración.

Como ustedes saben, el concepto de legitimación en el juicio de amparo se encuentra hoy sumamente limitado, ya que la Corte ha sostenido que el interés jurídico se identifica con el derecho subjetivo, de tal manera que quedan fuera de control constitucional de amparo una gran cantidad de actos de autoridad que lesionan no solamente intereses difusos y colectivos, sino otro tipo de intereses y de derechos que no se identifican con el derecho subjetivo.

Hoy, frente a los retos de una sociedad dinámica y un intereses y de derechos que no se identifican con el derecho subjetivo.

Hoy, frente a los retos de una sociedad dinámica y un derecho moderno, no podemos seguir aplicando el amparo, aceptando su procedencia exclusivamente cuando afecte derechos subjetivos.

Debemos resaltar que curiosamente y contra lo que se piensa, la figura del interés jurídico identificada como derecho subjetivo, no es consustancial a nuestro juicio de amparo; si analizamos los criterios de la Suprema Corte en el siglo XIX, a través del análisis del Semanario Judicial de la Federación en su primera época, veremos que la Corte tenía criterios mucho más amplios y modernos, aceptando el amparo, no sólo por la afectación a derechos subjetivos, sino a intereses urbanísticos, estéticos e incluso, de comodidad.

Con la llegada de Vallarta a la Corte, el amparo se empieza a hacer cada vez más técnico y desaparece esta idea, por eso he sostenido que Vallarta es uno de los mitos de nuestro amparo, muy citado y pocas veces leído.

De tal suerte, que reitero, no hay en México un control jurisdiccional de los actos que afectan intereses difusos o colectivos, pero tampoco de los actos de autoridad que afectan de manera económica o de alguna otra forma grave a los particulares, sin que se identifique con el derecho subjetivo. Cuantas veces vemos asuntos en que se dice: no importa que este acto de autoridad lleve a la quiebra al quejoso o lo afecte de manera grave, si no te altera, si no lesiona el interés jurídico como derecho subjetivo no es procedente el amparo.

Para proresponder a esto, se propone en el proyecto la instauración del interés legítimo, que tiene un importante desarrollo en la doctrina más moderna del derecho público contemporáneo y en el derecho comparado.

Se establece en el proyecto que podrá promover el juicio de amparo quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado viole las

garantías o los derechos previstos en el artículo primero, que son las garantías y derechos a que me referí en la primera sesión, y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Sobre este artículo se han hecho dos críticas principales, la primera dice que a los autores del proyecto se nos olvidaron los intereses difusos. No se nos olvidaron, proponemos que se defiendan a través del interés legítimo; quien realice esta crítica sin duda desconoce lo que es el interés legítimo.

No sólo eso, sino varios autores del proyecto, como el maestro Fig Zamudio y un servidor, por escrito y en conferencia sostuvimos desde hace varios lustros la necesidad de que el amparo procediera para la protección de intereses difusos o colectivos, quien nuestro crítico en aquella época se burlaba diciendo que no había intereses difusos, sino confusos como la mente de quienes los defendíamos.

La segunda crítica dice que no se entiende el artículo. Es obvio que si no se sabe qué es interés legítimo, no se va a entender el artículo. El derecho es en gran medida un lenguaje, si se ignora el significado de los conceptos jurídicos, no es factible comprender el precepto que los utiliza. Así, por ejemplo, si un artículo se refiere a la capacidad de ejercicio e ignoramos el significado de ese concepto jurídico, sería imposible desentrañar el sentido normativo de ese precepto.

Si nos enfrentamos a una norma que aluda al interés jurídico y no sabemos qué es el interés jurídico, no entenderemos el artículo.

Por ello, el presupuesto básico es el conocimiento y el estudio de lo que significa el interés legítimo. Este concepto no lo estamos inventando, reitero, existe en la doctrina contemporánea y en el derecho comparado una rica experiencia sobre el particular.

Por último, se ha dicho y escrito con ignorancia, que el interés legítimo se identifica con el interés jurídico, lo cual obviamente es falso.

El interés legítimo consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Se ha desenvuelto de manera preferente en e derecho administrativo y parte de la base de que existen normas que imponen una conducta obligatoria de la administración, pero tal obligación no se corresponde con el derecho subjetivo de que sean titulares determinados particulares.

Si se tratara proteger de un interés simple, cualquier persona podría exigir que se cumplan esas normas por conducto de la acción popular; este tipo de interés no es el

que se quiere proteger, pero puede haber gobernados para que la observancia o no de este tipo de normas de la administración pública, resulte una ventaja o desventaja de modo particular, respecto de los demás. Esto puede ocurrir por dos razones, en primer lugar, puede ser el resultado de la particular posición de hecho en que alguna persona se encuentre, que la hace más sensible que otras frente a un determinado acto administrativo.

En segundo lugar, puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los designatarios del acto administrativo que se discute. Esta es la noción del interés legítimo; es decir, que ciertos gobernados pueden tener un interés cualificado, respecto a la legalidad de determinados actos administrativos.

La posibilidad de acudir al amparo mediante el interés legítimo abre enormes oportunidades de control de actos de la administración pública que hasta ahora sólo en algunos casos es factible proteger.

El interés legítimo no requiere de la afectación a un derecho subjetivo, aunque sea la esfera jurídica entendida en sentido amplio, así mismo, la referencia su especial situación frente al orden jurídico tiene una connotación técnica; el interés legítimo puede ser requisito de procedibilidad y un procedimiento únicamente por afectación directa o puede comprender el agravio derivado de una situación particular que tenga el quejoso en el orden jurídico.

En estos casos, la afectación no es directa o inmediata, deriva de la situación especial en el orden jurídico en la que se encuentra el quejoso. El proyecto establece la procedencia del juicio de amparo en ambos supuestos, ante la afectación directa o frente al perjuicio derivado de la particular posición del quejoso.

¿Por qué entonces no hablamos de intereses difusos o colectivos?; ¿no hubiera sido más sencillo? No, por lo siguiente. La defensa de los intereses difusos o colectivos en el mundo presenta distintas formas de protección, que no vendría al caso ahora referir por razones de tiempo, desde las acciones de clase, pasando a acciones específicas como el caso de Brasil, y el interés legítimo en España.

Creemos que técnicamente es mejor hablar de interés legítimo, porque estamos en presencia de un juicio de control constitucional, y la protección de los intereses difusos o colectivos no siempre engloba un problema de constitucionalidad.

Por eso, en algunos países en ocasiones esta protección se da primero en esfera administrativa y después del sede judicial. De tal suerte, es un concepto abierto, lo

que buscamos es que los jueces en cada caso concreto decidan a partir del concepto de interés legítimo si el acto de autoridad afecta realmente la esfera de esos derechos, si genera un problema de constitucionalidad o no; esto no se puede definir a priori en la ley, tiene que ser una creación jurisdiccional.

Para evitar equívocos, es importante puntualizar algunos aspectos que dibujen los elementos del concepto en cuestión. No es un nuevo interés por la legalidad de la actuación administrativa, requiere la existencia de un interés personal, individual o colectivo, que de prosperar la acción se traduce en un beneficio jurídico a favor del accionante.

Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. No hay potestad frente a otro.

Debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, lo contrario de la acción popular en la cual no se requiere afectación alguna a la esfera jurídica.

Los titulares tienen un interés propio distinto del que cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento cuando con motivo de la persecución de fines de carácter general incide en el ámbito de ese interés propio.

Se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético, en suma, es un interés jurídicamente relevante. La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado.

Sin embargo, debemos destacar que en tratándose de procesos, sigue subsistiendo la necesidad del interés jurídico, entendido como derecho subjetivo, en razón de que sería inconveniente que en un proceso, en un juicio donde hay dos partes que están litigando con idéntico interés, venga un tercero a obstaculizar el ejercicio de sus derechos, con lo cual se crearía un caos ante la imposibilidad de que se ejecutaran las decisiones judiciales.

Por ello, en el proyecto se hace la diferenciación entre lo que son procedimientos judiciales, para los cuales se exige interés jurídico y los demás actos, para cuya impugnación basta el interés legítimo.

Señoras y señores diputados.

Los juristas de México tenemos hoy una cita con la historia, nos encontramos reunidos para discutir el futuro de la institución jurídica más importante de nuestro país.

El juicio de amparo fue durante mucho tiempo motivo de legítimo orgullo para los mexicanos y ejemplo para un número importante de sistemas de justicia constitucional en el mundo; sin embargo, por diversas causas, el amparo detuvo su evolución hacia varias décadas, lo que inevitablemente lo desfasó en relación con la dinámica social y los importantes cambios experimentados en el ámbito del derecho público.

El amparo se convirtió así, en un mito, más que en una protección eficaz para los gobernados, en leyenda para el discurso, más que en justicia viva, en historia, más que en presente.

El proyecto de nueva Ley de Amparo elaborado por la Comisión Especial y modificado por la Suprema Corte, contiene trascendentes modificaciones a nuestra institución de control constitucional, como las que hemos referido durante estas jornadas, que no sólo justifican, sino requieren ser explicitadas a través de una nueva ley, cambios sustanciales y de gran envergadura, que retomando los orígenes del amparo, lo proyectan hacia el futuro, que lo actualizan y le permiten responder a las necesidades del derecho moderno en beneficio de todos los gobernados, avances que de ser aprobados se traducirían en una defensa eficaz de los particulares, frente a la arbitrariedad y los abusos.

En efecto, la protección directa de los derechos humanos consagradas se traducirían en una defensa eficaz de los particulares frente a la arbitrariedad y los abusos.

En efecto, la protección directa de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales de carácter general ensancha el ámbito de protección del juicio de amparo.

La superación del rígido concepto de interés jurídico a la instauración del interés legítimo permite la defensa de intereses difusos y colectivos, así como de una gran cantidad de afectaciones a la esfera jurídica de los particulares que no se reducen al mero Derecho subjetivo.

La ampliación del concepto de autoridad para los efectos del amparo que atiende a la naturaleza del acto reclamado y no al carácter formal de quien lo emite logran no sólo la protección en contra de actos de organismos descentralizados sino de cualquier entidad que de manera unilateral y obligatoria afecte la esfera jurídica de los gobernados.

La declaratoria general de inconstitucionalidad y de interpretación conforme recupera la vigencia del principio de supremacía constitucional, instaura plenamente el principio de igualdad ante la ley y supera serias injusticias derivadas de la relatividad de las sentencias de amparo en tratándose de normas generales.

El establecimiento de una suspensión más eficaz en materia administrativa combate la arbitrariedad e impide que los derechos de los gobernados sean avasallados impunemente. La suspensión de materia penal permite el debido equilibrio entre el principio de presunción de inocencia y la eficaz persecución de los delitos.

Asimismo, las importantes reformas que se proponen en materia de amparo directo contribuyen a que la impartición de justicia sea verdaderamente expedita.

Todos estos aspectos entre otros avances que se proponen en el proyecto significarían una justicia constitucional que respondería eficazmente a los retos del mundo moderno.

Estamos en presencia de un proyecto que, sin desconocer la esencia del juicio de amparo lo impulsa hacia el futuro, que parte de la confianza en los jueces y que aspira a devolver a los órganos jurisdiccionales la facultad inherente a la justicia constitucional moderna de recrear el derecho, de actualizar la norma a la realidad, de constituirse en el necesario equilibrador de la democracia representativa.

El proyecto que nos ocupa requiere modificar ideas superadas sobre la actividad que desempeñan los jueces, exige una mentalidad diferente, abrir la mente a nuevos conceptos y a una forma distinta de hacer las cosas. Sólo así lograremos que el juicio de amparo vuelva a ser un instrumento eficaz de defensa de los derechos fundamentales de todos los gobernados.

Estamos ante un México distinto del de principios del Siglo XX. Hoy el país requiere instrumentos jurídicos sólidos de solución de controversias, sobre todo en el ámbito constitucional. Los retos del juego democrático, la diversidad, el pluralismo y el dinamismo de la sociedad moderna no pueden enfrentarse a través de mecanismos que responden a circunstancias sociales diversas.

El derecho debe adecuarse a la realidad para ser factor que fortalezca los avances democráticos, coadyuve a la estabilidad social y defienda eficazmente los derechos fundamentales de todos, sin excepción.

No podemos darnos el lujo de que nuestra institución procesal de amparo siga rebasada por la realidad. Abandonemos la mitología decadente y anquilosada que pretende hacer del amparo una entelequia cuasirreligiosa, y como tal, intocable.

El amparo o se transforma o en poco tiempo será pieza de museo de antigüedades: Bello pero inservible. Avancemos hacia la plena justiciabilidad de todos los actos del poder público. Retomemos los orígenes del amparo para que vuelva a ser valuarte de justicia y libertad. Caminemos hacia un nuevo juicio de amparo que responda a las necesidades de la sociedad, que la justicia sea una realidad y lo sea para todos. Que el amparo deje de ser propiedad de unos cuantos y se convierta en un instrumento al alcance de quienes menos tienen y más lo necesitan.

Los mexicanos estamos inmersos en un profundo proceso de cambio; nadie escapa a esta inercia social. El juicio de amparo no puede permanecer estático ante el nuevo orden de cosas. La profunda reforma al juicio de amparo es una exigencia que brota de la realidad. Tenemos la obligación de responder a ella.

Avancemos hacia una Nueva Ley de Amparo producto de la reflexión de toda la comunidad jurídica nacional en beneficio de todos los mexicanos. Por todos, una Nueva Ley de Amparo. Muchas gracias.

EL REENVÍO EN EL AMPARO.

LICENCIADO SALVADOR QUEZADA CASTREJÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA ABOGACÍA

Honorables miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, es un honor verdaderamente estar en esta tribuna gracias a su interés por escuchar en algo inédito a los abogados de México, en un proyecto que desea llevarse al pueblo.

Los saludo con el gran afecto y reconocimiento a sus esfuerzos, al señor presidente de la Comisión, don José Elías Romero Apis, señora Diputada, señor diputado Salgado, quienes han estado casi todos los días, muy interesados en esto.

La agrupación que hoy me honro en representar no viene a ser escuchada por mi conducto; es una opinión personal. Por qué razón; porque diferimos en algunas cuestiones de fondo, en algunas cuestiones de interés en este tema; mas sin embargo, de las reuniones que hemos tenido hemos llegado a una conclusión de buscar algo muy práctico, un tema muy sencillo para exponerlo a ustedes.

Agradezco el interés de los maestros respetados y queridos, los señores abogados distinguidos del foro, quienes también han dejado su tiempo para participar en esto.

Estas inéditas reuniones que se han celebrado, desde la del 2 de agosto, donde por primera vez estuvieron todos los colegios registrados, la Federación de Colegios y las principales agrupaciones, se debe a esta Comisión, por lo cual me siento obligado a dar ese reconocimiento; porque además la expresión libre y sin cortapisas en esta honorable tribuna, jamás, que yo recuerde, se había dado esa invitación abierta para venirla a exponer.

Aquí también ha habido otra cuestión muy importante que vale la pena, perdonen que esté un poco fuera de tema, la colegiación se ha tratado en varias ocasiones, y esto nos llevará también al fin último que queremos todos los abogados: Una impartición de justicia en todos los órdenes, mejor, para todos los mexicanos.

El esfuerzo que se ha venido realizando aquí es digno de encomio, pues como digo, se ha logrado esa reunión que tal vez por intereses diversos en las concepciones del Derecho o en otros órdenes, no se había dado; primer paso para que probablemente algún día se logre realmente esa unión de los abogados. No en los criterios, porque seguramente tendremos diversidades en ellos, pero sí en propósito de obra.

Al escuchar las diversas opiniones hemos encontrado que existe polarización en los temas. Hemos escuchado quiénes proponen una Nueva Ley, la defienden tan sabiamente con la pasión que escuchábamos al maestro Zaldívar; y hemos escuchado a otros compañeros que dicen que no es necesario, que bastarán algunas reformas, que el problema que vivimos es precisamente de malas reformas y de peor aplicación a esas reformas por cuestiones de tipo humano; pero de estas contradicciones habrá de salir la luz.

Mi tema en concreto al que adelante me referiré, quisiera aprovechar, por lo mucho que he aprendido además de escuchar a tantos sabios del Derecho, unas pequeñas reflexiones que sí, en grupo de amigos hemos hecho.

En caso de que se promulgue, que se apruebe esta Nueva Ley, la por algunos llamada fórmula Otero, dicen que deberá desaparecer. El problema está, según lo vemos nosotros, en meras reglamentaciones en el fondo, porque no estaríamos enfrentándonos en el caso, ya sea con tres decisiones judiciales en el mismo sentido, con cuatro, con todas las fórmulas que se han presentado, no nos enfrentaríamos a una inexistencia de ley, cuál ley quedaría entonces en vigor, la anterior, o cómo quedaríamos si es que se llega a aprobar por esta soberanía. Vale la pena esa reflexión, insisto, para reglamentación de ello.

Igualmente en el caso de la propuesta de protección de derechos, que ahorita nos dio una excelente cátedra el Presidente de la Comisión de Redacción de este tema, de los derechos, porque en días anteriores el mismo maestro Zaldívar recordará que se habló de derechos difusos y se refirió mucho al tema de las cuestiones ambientales. Se habló mucho en relación a la existencia o exigencia, primero, de revisar la Constitución para pasar a una ley reglamentaria como la propia Ley de Amparo lo es; y se habló del derecho al medio ambiente. Valdría la pregunta: Si se van a proteger esos derechos, con los nombres como vaya a quedar, el interés legítimo, los derechos difusos, en fin, etcétera, no estaríamos en el riesgo de una cauda interminable de iniciación de juicios de amparo, que además podrían tener vigencia diferente. En qué momento me enteré yo…valdría la pregunta, si se van a proteger esos derechos con los nombres como vaya a quedar el interés legítimo, los derechos difusos, en fin, etcétera no estaríamos en el riesgo de una cauda interminable de iniciación de juicios

de Amparo, que además podrían tener vigencia diferente. En qué momento me enteré yo que el renglón de mi medio ambiente se afectó y cuándo se enteró mi vecino, la acumulación que según se ha planteado va a ser la solución, probablemente no lo sea porque los juicios de Amparo probablemente tuvieran diferente momento de tramitación donde ya no cabría esa aplicación y todo esto además, en un desmérito de la prontitud que es el llamado indudable, la exigencia indudable de toda la ciudadanía por la lentitud que sentimos en el trámite, particularmente de los amparos directos y sobre todo, en Derecho Común, Derecho Civil que afecta en mayor forma a la mayoría de la ciudadanía.

En el mismo caso estaríamos si consideramos que en el concepto de Autoridad que también han manejado aquí, inclusive el señores exjueces de Distrito, en fin etcétera, para ampliarlo en el entendido de quién tendrá la calidad para efectos de Amparo de Autoridad, ahora abrirlo a organismos de Gobierno, a órganos de Gobierno que no lo tenían con anterioridad, también nos va a traer como consecuencia un exceso de tramitaciones de Juicio de Amparo, como se va a reglamentar dentro de la propia Ley Reglamentaria, para evitar eso y no se deteriore a futuro la prontitud que exigimos para la impartición de justicia.

El de la suplencia de la queja e incluso de su inexistencia, se podría repetir también la pregunta que ya se hizo: qué diferencia hay entre un empleado de alto nivel, un funcionario de alto nivel que a final de cuentas es trabajador, con un alto coeficiente intelectual, una alta capacidad cultural y económica, comparado con un patrón de una empresa pobre, en el sentido de capacidad económica o financiera o incluso de cultura jurídica; a quién se deberá proteger en esa suplencia de queja, para que una persona reciba adecuadamente lo que se ha entendido como la justicia en su caso o para que inclusive se proteja a un centro de trabajo , a un centro de producción que tal vez puede afectar no a uno, sino a varios.

Estas preguntas que yo me hago son tratando de compartirlas con ustedes para esa reflexión, porque curiosamente lo que por ahí conocemos como la Primera Sentencia de Amparo que está cumpliendo 153 años, si la recuerdan dicen que la emitió un Tribunal en San Luis Potosí para proteger a un ciudadano que iba a ser desterrado y el Secretario de Acuerdo en funciones de Juez dijo que lo concedía, que le informaran al Gobernador, y ante la ausencia de reglamentación se tomaran todas las medidas para evitar el destierro.

Seguimos a más de 200 años todavía comentando cómo vamos a reglamentar una serie de cuestiones y ése es precisamente mi tema. Trataré de ser muy breve porque

la importancia no radica de en esto, en una trascendencia jurídica en sí, sino en una practicidad para efecto de servir al justiciable.

Se dijo aquí mismo, inclusive se empleó una palabra de las sentencias de ping-pong de que hay casos, refirieron alguno de 7 juicios de Amparo tramitados sobre una misma Sentencia de Apelación. Qué sucedió, cuando se resolvió ese juicio las partes ya no vivían, ya no existían, ya los sucesores estaban peleando ese tema.

Por eso llamamos, con toda intención, tratando de llamar un poquito la atención al tema, a riesgo de la crítica que vamos a recibir por el nombrecito del reenvío que tal vez está muy mal aplicado pero para que recordemos, que a final cuentas el fondo final de lo que pretendemos es darle justicia pronta y que los Tribunales estén expeditos para el ciudadano.

La Corte en su proyecto, atinadamente está señalando en el artículo 71, que la sentencia deberá contener y si ustedes me permiten lo voy a leer; deberá contener: "los puntos resolutivos, los efectos de la sentencia y en el último considerando de la sentencia que concede el Amparo para efectos, el juzgador deberá precisarlos para su estricto cumplimiento". Yo aplaudo esta inclusión en el artículo, ojalá se apruebe ya sea como una reforma o como todo un cuerpo legal si así se determina por esta Soberanía, pero en el caso me atrevo a proponer que ésta misma fórmula tenga su propia reglamentación porque a final de cuentas vamos a encontrar que son hombres sabios del Derecho pero a final de cuentas, con el deseo de imponer su criterio y no siempre el Magistrado del Tribunal de fuero común va a acatar exactamente lo que le va a decir el Funcionario Federal y por eso encontramos que la sentencia nueva que se dicte, en cumplimiento de la que concedió, sigue teniendo sus pequeños problemitas y ahí viene otra sentencia y así vamos a seguir y con todas las maravillas que estamos encontrando y con todas las críticas que también se han hecho, vamos a seguir con juicios de Amparo eternos.

La proposición es muy concreta y es muy simple, yo invito a los queridos maestros en lo particular que ojalá la enriquezcan con los conceptos teóricos que sólo ellos pueden dar realmente para efecto de que efectivamente se precise el efecto, pero que además se obligue a la Autoridad Responsable y me estoy refiriendo a la mayoría de sentencias que afectan a la ciudadanía para que la nueva sentencia que emita, sea precisamente cumpliendo esos lineamientos y en caso de que no lo haga así, esa Autoridad Responsable quede sujeta a las amonestaciones, sanciones y las mismas responsabilidades que ya la Ley prevé, para quien incumple una Sentencia de Amparo porque de otra manera, los señores magistrados vuelven a dictar una sentencia, pues ahí vendría otra vez y muchas veces los hacen por omisión, otras veces por intereses

tal vez oscuros y no me permito decir palabras por no ser ofensivo a nuestros Tribunales.

Es muy resumida esta propuesta pero si la analizamos en forma concreta, probablemente podríamos ayudar muchísimo y sobre todo también a descargar de trabajo a los propios Tribunales Colegiados de Trabajo, que pudieran dedicarse a estudiar otro asunto, porque ése donde hay otro nuevo Amparo ya fue estudiado.

Lamentablemente, los conceptos de quién tiene la jurisdicción para tratar el fondo del asunto y efectivamente, nada más el Tribunal Federal va a resolver sobre Protección Constitucional, restituir en el goce de los derechos violados, nos va a tener en el mismo tema que hemos seguido diciendo y acusando, probablemente en forma indebida a los Tribunales, particularmente a los Colegiados, de lentos, de impropios en la impartición de su trabajo, cuando que en realidad que tienen propiciada también por los elementos que se dedican a tramitar Amparo sobre Amparo como decimos, han impedido que realmente sea pronta la impartición de justicia.

Quisiera simple y sencillamente para concluir, por respeto también a su tiempo, dado que el tema como les repito tenía esa simpleza, que ojalá se analice en lo que pudiera realmente tener aparte de simple, una grandeza para servirle al ciudadano en general ajusticiable, agradecer la oportunidad de haber estado con todos ustedes. Gracias por su paciencia y buenas tardes.

INTERESES DIFUSOS, PARTES Y JURISPRUDENCIA.

LICENCIADO JESÚS ÁNGEL ARROYO MORENO
ABOGADO POSTULANTE

Señores miembros del *presidium*, estimado Maestro, compañeros abogados, señores y señoras. Cuando me han anunciado para hablar con ustedes, solamente que soy abogado; debo justificar de alguna manera el por qué estoy aquí.

Desde que era yo estudiante y de esto hace más de 50 años, he estudiado el Amparo y he dado cátedra de Amparo en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM y en otros lugares más, la Panamericana por ejemplo. He escrito sobre Amparo y me he dedicado a estudiar Amparo por eso me atrevo a dirigirme a ustedes bajo la base de que mis palabras van a eliminar los adjetivos.

Para mí los adjetivos no sirven en el Derecho. Perdón, licenciado Zaldívar no hay Derecho Moderno o Derecho Antiguo, hay Derecho. Por qué razón, porque el Derecho rige la conducta del hombre y el hombre siempre igual perdón, licenciado Zaldívar, no hay derecho moderno o derecho antiguo, hay derecho.

Por qué razón, porque el derecho rige la conducta del hombre y el hombre siempre igual. Unas veces traía taparrabo, otras trae traje, ayer se vestía con la toga, pero sigue siendo el hombre.

Puedo decirles en una prueba que hice hace años en mi cátedra, tomé un texto sumerio que hoy tiene cinco mil años de antigüedad, le quité los nombres, lo leí, le pregunté a mis alumnos de posgrado, qué más o menos en qué fecha estaba ahí, todos me lo fecharon a mediados del siglo XX.

La conducta humana es siempre conducta humana. Todos tenemos hoy y ayer y las tendremos mañana, las mismas necesidades, entonces, sentado esto vamos a tratar de los temas reales.

Primer lugar. La necesidad de una modificación de la Ley de Amparo, se sintió hace muchos años. En primer lugar una de las cosas que se resentían es el hecho de la llamada fórmula de Otero.

La fórmula de Otero, responde a un viejo principio del derecho romano. La sentencia perjudica o beneficia a los que litigan, pero el efecto de la sentencia va a depender de la universalidad de su objeto.

En materia civil yo les voy a citar hoy dos ejemplos de efectos universales. Primer efecto o primer caso, mejor dicho. Si a mí un juez me cambia el nombre, esa sentencia tendrá efectos universales, todos tendrán que llamarme por el nuevo nombre, por qué, porque el objeto del juicio era ése.

Si un juez me declara dueño de este edificio, todos, tendrán que reconocer que yo soy dueño del edificio, por qué, porque el derecho de propiedad tiene efectos universales.

Otero, o por mejor decir Rejón, porque ya Rejón tenía esta fórmula, Rejón primero y Otero después, hacen la fórmula por una necesidad. Si la hubieran dejado sin hacerla, simple y sencillamente hubiera habido efectos universales en el amparo y el amparo hubiera muerto prácticamente nonato y la razón era muy sencilla, los estados no querían el amparo, había resistencia.

Recuerdo una anécdota que cuenta Pascual Rojas en su libro, de cómo para que un juez del distrito, para poder hacer eficaz su sentencia, tuvo que recurrir al Ejército, porque lo había recibido a tiros un juez local.

Lógicamente, si se vio este punto, se empezaron a ver otros, por ejemplo, la autoridad responsable, era demasiado estrecho el concepto, el concepto también de tercero perjudicado, resultado, a esto se agregan voces que decían: "El amparo es demasiado técnico. Se ha convertido en un coto de especialistas y es elitista", desgraciadamente, soy sincero, no he podido encontrar cómo el juicio de amparo puede dejar de ser juicio de especialistas.

Un juicio de arrendamiento es un juicio de especialistas. Un juicio ejecutivo mercantil es juicio de especialistas, por qué, porque somos los abogados los que tenemos que hacerlo y somos especialistas. No es un juicio que puede llegar a un policía de la esquina.

Ante estos hechos y podía señalar otros muchos, la Suprema Corte de Justicia una comisión, hizo un proyecto, el proyecto sometió un Congreso, este Congreso hizo multitud de observaciones al proyecto. Se hizo un nuevo proyecto que fue presentado a la Corte, que a su vez modificó.

Este anteproyecto de Ley de Amparo, organiza mejor la materia de amparo, eso es indudable. En general mejor la actual ley, pero hay algo que no creo que se ha hecho mucho, comparar institución, por institución, y debo de serles sincero, son las mismas.

Amparo directo, amparo indirecto, suspensión, recurso de revisión, recurso de queja, recurso de reclamación, etc., es lo mismo, con un tratamiento distinto y mejor en el nuevo proyecto, pero si el sol tiene manchas, como no ha de tener la zona urbana, errare humanu *es*, es de humanos errar.

Y hay varios puntos, no son los únicos, pero tampoco puedo pensar en tener toda una tarde, todo un día, toda una semana para tratar uno, por uno, voy a fijarme en varios.

Primero. El ámbito de protección del juicio del amparo que se refiere el artículo primero del proyecto, el tratamiento que se le da al ofendido por el delito, la participación del Ministerio Público Federal en el amparo contra leyes, el llamado interés legítimo individual o colectivo a que se refiere el artículo cuarto, fracción primera del proyecto de ley y la jurisprudencia.

Miren, hay un aspecto en el amparo que a mí me ha llamado la atención en los tratadistas de amparo, aún cuando en el Instituto de Derecho Procesal llamamos al juicio de amparo como parte integrante del derecho procesal constitucional, lo cierto es que a los tratadistas se les olvida que el amparo es ante todo un proceso.

Es decir, un conjunto de actos concatenados con la finalidad de que se pronuncie una sentencia que declare si una ley o un acto son conformes o no con la Constitución de la República y como tal proceso le son aplicables al juicio de amparo las reglas del proceso y esto es importante.

Porque el amparo no es una ley de fondo, es una ley del proceso, es una ley formal, es una ley que va a reglamentar procedimientos, esto parece de perogrullo, es de perogrullo, pero no se hace referencia a ello.

Los elementos más básicos de cualquier juicio, cualquier juicio, díganme el que sea, arbitral, civil, penal, el que sea, son un actor que pretende, un demandado que se defiende, un juez que juzga y ya el fuero juzgo y estoy hablando del siglo octavo de

nuestra era, decía que el juez es el que juzga y ejecuta lo juzgado, no es un concepto nuevo.

Y si me apuran les diré que entre los sumerios el juez hacía lo mismo y que entre los egipcios se hacía lo mismo, en los romanos, todos los sabemos. Prueba de lo que ya decía, no hay derecho antiguo, no hay derecho moderno, hay derecho.

En materia penal que pudiera parecer lo más alejado de este concepto les diré, hay un actor que pretende, el Ministerio Público como acusador; hay uno que se defiende, el reo y hay un juez que juzga, todo esto dentro de un procedimiento que en esencia es una petición que llamamos demanda en muchos casos, que se llama consignación en otros.

Una vista al contrario para que se defienda, un período llamado de pruebas, ofrecimiento, desahogo y por último una sentencia con valoración, posteriormente vendrán recursos.

Sigo hablando verdades de perogrullo, pero es bueno recordarlas, porque estamos hablando de un proceso en el que se han puesto ciertas cosas, que en mi concepto son desacertadas, advirtiendo lo que ya dije, creo que el proyecto mejora lo anterior, pero toda obra humana tiene manchas y ésta no podía faltar.

Obviamente dentro de esa triada, actor demandado juez, hay quienes tienen intereses en lo que se resuelve en el juicio. En el juicio penal el ofendido que se resuelva en el juicio, en el juicio penal el ofendido; en un juicio civil, el tercero, coadyuvante, excluyente, de preferencia o de dominio; en el juicio de amparo, todo aquel que tiene un beneficio de la subsistencia del acto reclamado.

Aún cuando la Ley de Amparo actual y el proyecto también, nos están hablando del tercero perjudicado en esta materia, en aquella y en la otra, si analizamos los conceptos de cerca veremos: Es tercero perjudicado la contraparte en el juicio, por la simple y sencilla razón de que esa contraparte tiene interés en que se sostenga la sentencia que se combate.

Es tercero perjudicado en materia administrativa quien va a recibir un beneficio de la existencia del acto, pero en esta materia, dentro de la Ley de Amparo actual y dentro del proyecto, hay un defecto grave en relación con el tercero.

Bien, el objeto del juicio. El juicio de amparo tiene como objeto y hasta ahí creo que estaremos de acuerdo prácticamente todos, la protección de las garantías individuales

como objeto primario, como objeto secundario o mejor dicho, como objeto derivado, se tiene la protección de todo el ordenamiento general a través de la garantía de legalidad.

¿Cuántas veces he oído a abogados, a maestros, a presidentes de tribunales quejarse de la garantía de legalidad?, pero dije antes que había derecho y ahora agrego, el derecho es uno.

No hay muchos derechos, no hay un derecho mercantil y un derecho civil y un derecho penal, hay el derecho; es decir, si por comodidad para estudiarlo o para aplicarlo hemos dividido el derecho en ramas, lo cierto es una cosa, hay un solo derecho y en nuestro país, ese derecho se unifica a través de la Constitución, porque es la Constitución la que señala cuáles son los límites, los valladares que tienen las autoridades, cuáles son sus facultades, quiénes son las autoridades y cómo pueden o deben actuar.

Nuestro referente en el derecho mexicano se llama Constitución, no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de derecho vigente, la doctrina es otra cosa. En doctrina nos metemos a muchos caminos, a veces son autopistas y a veces son brechas, a veces las autopistas nos llevan a una capital y a veces las brechas nos llevan a un precipicio, pero en derecho vigente en México, hay una Constitución. Esa Constitución tiene valladares para la autoridad, entre esos valladares están dos garantías.

Ningún acto de privación puede realizarse si no existe un juicio en que el afectado pueda ser oído. Se completa, claro, con la garantía de retroactividad.

La otra garantía de legalidad, importantísima, ninguna autoridad puede actuar si no es competente, pero además de su competencia, debe explicar por qué motivos realiza el acto, debe decir con qué fundamentos legales lo hace.

Esto es lo que protege el amparo, estas dos garantías, y a través de ellas, va a declarar el juez de distrito a la Corte, según el caso, o el Tribunal Colegiado, si es inconstitucional el acto de la autoridad A o de la autoridad B o de la autoridad Z, va a declarar si es inconstitucional el reglamento, que digo reglamento, el bando de buen gobierno del municipio y quieren quitar la garantía de legalidad.

En el Congreso de Mérida discutí más de una vez con presidentes de los tribunales de los estados, que todos decían que debía quitarse el amparo en materia judicial para reclamar la sentencia según la instancia. La razón fundamental que me daban, era

que la justicia debía empezar y terminar en el estado correspondiente, mi respuesta fue muy sencilla y no la di yo, la expresó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año de 1861, cuando se presentó un primer amparo que revisó la Corte, con una ley en cuyo artículo 8º se prohibía el llamado amparo judicial.

Y la Corte dijo: La Constitución, es el artículo 101 de la Constitución de 57, nos dice que el amparo procede contra actos y leyes de las autoridades. Es así que los jueces son autoridades, luego el amparo procede contra los jueces y el razonamiento no tiene vuelta de hoja. Si queremos que eso no suceda, de acuerdo, cambiemos la Constitución, es lo más sencillo.

Entonces, el objeto del juicio va a hacer posible la realización posterior de la serie de actos concatenados para llegar a una sentencia.

Y nos dice el proyecto, que el objeto del juicio debe comprender los derechos humanos que protegen instrumentos internacionales generales que estén de acuerdo con la Constitución.

Y señores, creo que aquí hay una falta grave de técnica legislativa, les voy a decir por qué, recuerden, estoy hablando de una ley de procesal, de una ley de procedimiento, no me estoy refiriendo al fondo.

Dice: Toda ley se expide con la pretensión de que sea cumplida y para que una ley sea cumplida, se requiere que sus normas sean precisas, claras, sin ambigüedades, sin anfibologías, repito, precisas, claras, sin ambigüedades, sin anfibologías, si hay estos defectos en la ley, no va a ser cumplida o cada quien la cumplirá *ad libitum*, como quiera.

Y el proyecto, en el artículo 1º incluido en este defecto, hablar de los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales, a la postre no significa nada, porque los tratados internacionales que ha celebrado el presidente con la aprobación del Senado, al referirse a los derechos humanos los matizan de manera tal, que se refieren al mismo derecho en una forma distinta y voy a dar un ejemplo, adviértoles, no cito, sería difícil en un trabajo de este tipo, cuando salió el proyecto primario que enumeraba cinco tratados, tuve la curiosidad de leer los cinco tratados y me encontré con maravillas, voy a dar una de ellas, no cito los tratados. En uno de ellos dice lisa y llanamente que se protege la vida, pero en otros dice que se protege la vida a partir del momento de la concepción, aparentemente es lo mismo, de todas maneras la vida es protegida, pero aquí hay dos concepciones filosóficas distintas, para muchos la vida existe y por tanto, debe ser protegida a partir de que se concibe.

Para otros esto no es verdad, hay que darle a la mujer el derecho de abortar y pregunto, ¿a cuál tratado me voy?, ¿a éste o aquél? Doy un ejemplo, puedo dar más.

Ahora, es bueno que se amplíe el objeto del amparo, es indudable, no estoy criticando la intención del proyecto, estoy criticando la forma de llevar a cabo una ley procesal de muy difícil aplicación en muchos de sus puntos.

¿No sería más fácil, desde luego, hubiera sido más trabajo, no sería más fácil haber tomado esos tratados, haber hecho una enumeración de los derechos que cada tratado tiene?, ¿haber descartado los que ya están en nuestra Constitución?, ¿descartado los iguales y poner una tabla de derechos? Repito, es más trabajo, pero así no hay líos.

Este defecto que doy en este precepto no es particular de él, hay otros. Evidentemente es muy bueno, pero creo también que en este precepto hubo una falta de reflexión, pero también algo que he advertido en esta última década, tal vez últimas dos décadas, a nuestros juristas, nuestros jueces, nuestros tribunales y aquí exceptúo en muchos casos a la Corte que sí lo hace, se les olvida interpretarlo. Si leyeran .nuestros jueces, nuestros tribunales, y aquí, exceptúen muchos casos a la Corte, que sí lo hace, se les olvida interpretar.

Si leyeran el primer capítulo del Código Civil que contiene varios de los principios generales de derecho, encontrarían una norma para los jueces que dice, creo que es el artículo 18, cito de memoria, que dice que el juez no puede dejar de fallar, a pesar de que no tenga una norma concreta, debe integrar la norma y para ello está la regla constitucional del 14 que lo manda a los principios generales de derecho. Pero nuestros jueces ya no lo hacen, nuestros juristas ya no lo hacen.

Si se cae por descuido un vaso, no falta quien diga que se haga una ley para impedir que se caigan los vasos. Hay en México, perdonen, señores legisladores, un exceso de legislación porque se nos olvida interpretar, no se requieren tantas leyes, se requieren leyes que se cumplan.

Debo decirles: tengo más de 50 años de recibido, otros tantos de maestro. Cito esto no por presunción, sino por una sola cosa: “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Leo diariamente el Diario Oficial, y debo confesar, no conozco nuestra legislación, es imposible, es una selva imposible.

Tengo la Colección de Andrade, que no tiene todas las leyes de México, solo algunas de las federales y son treinta y pico, creo que cuarenta y tantos tomos con más de 500 páginas por tomo. ¿Hay alguien capaz de conocer eso? Nadie.

Y cuando vi yo esto del objeto del amparo, me puse a pensar: ¿Qué sus derechos no están protegidos? ¿Qué los tratados internacionales han creado derechos nuevos de protección? ¿Qué se requiere una ley para proteger mi derecho a comer? Yo diría que no, porque si tengo derecho a la vida, que es el bien fundamental, tengo derecho a aquellos bienes que hacen posible la vida, o sea, el alimento, el vestido y la casa.

¡Ah!, pero necesitamos una ley a fuerza que nos diga esto, y creo hubo aquí este defecto en este primer precepto, que mucho de lo que se quiere ampliar no se amplía. Tal vez si se hubiera hablado de los derechos de tercera generación, hubiéramos estado de acuerdo, pero para ese caso se requería, repito, simplemente un catálogo.

Hay algo, que soy sincero, desde el primer momento discutí con el señor licenciado Zaldívar, él trató de convencerme del interés legítimo, no pudo. Yo traté de convencerlo de el interés simple, no pude. ¿Qué significa esto? El juicio se inicia, vuelvo a las verdades de Perogrullo, con la formulación en forma oral o en forma escrita de una pretensión y el escrito o la comparecencia constituyen la demanda, que acogida por el juez, implica el ejercicio de la acción. Para que haya acción se requiere, se exige que el actor quejoso en el amparo tenga un motivo válido y suficiente para hacerlo.

En el curso del tiempo se ha afinado el concepto de la acción. En el Derecho romano, Celso decía que la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Se ha definido también como un derecho subjetivo público para obtener la tutela jurídica a los derechos subjetivos, concepción que en buena medida, coincide con la de nuestro artículo 17 constitucional.

Puede decirse, que la acción es un derecho subjetivo público que tiene todo individuo para acudir a los tribunales solicitando su intervención para la protección de sus derechos.

Mucho trabajaron, mucho han trabajado Bach, Vinshaid, Iovenda, Carneluti, para llegar a esto, y hemos encontrado un derecho autónomo, un derecho que no depende, como dependiente de la época romana, del derecho material. Yo pido la intervención de los tribunales y los tribunales me la dan o me la niegan, y ese derecho no depende –repito- ni de la existencia del derecho material, y la mejor demostración es nuestro amparo.

El sobreseimiento que se dictan muchos por inexistencia del acto reclamado. Si el derecho de acción dependiera del derecho objetivo, del derecho material, no cabrían juicios de amparo en que se pide la protección de la justicia federal contra actos que no existen.

Nuestro Código de Procedimientos Civiles, nuestro humilde Código Federal de Procedimientos Civiles dice que debe ejercitar la acción, aquel que tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y el que tenga el interés contrario.

Y encontramos la palabra interés. Advierto esta definición es la del Código Federal de Procedimientos Civiles que copia, en una de tantas reformas, el Código local, porque el Código anterior del Distrito Federal decía otra cosa. El que tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario.

Esto significa que para efectuar la acción se requiere un interés que los códigos procesales nombran sin adjetivos, pero que implica que se demuestre que existe, así sea –repito- presuntivamente.

En el juicio de amparo se ha entendido que la acción solamente puede ejecutarla quien tiene interés jurídico, o sea, ¿a quién? A quien se le viole un derecho protegido por la ley, lo que en doctrina se conoce como derecho subjetivo, y ya dije que esta concepción es relativamente falsa. Porque el juicio de amparo se ejercita mediante la acción, sin que exista derecho sustantivo que haya sido violado.

Lo que pasa es que el interés va a ser una condición para la sentencia, no para el ejercicio de la acción. Si yo demuestro en el amparo que existe el acto reclamado y que ese acto reclamado afecta mi derecho, por decirlo así, de la propiedad, el juez entrará al estudio de los conceptos de relación para determinar si el acto que reclamo sentencie expropiación o lo que sea; eso no acorde con la Constitución.

Entonces, el interés es importante destacarlo, no es un condicionante del ejercicio de la acción, es una condición para que el juez pueda entrar al fondo del negocio. Claro, hay casos en los cuales, por la ley, en unos casos, pero fundamentalmente por la ley, no se admite la acción si no se demuestra la existencia del derecho objetivo.

Ejemplo: Yo no puedo demandar en juicio hipotecario si no presento el título de hipoteca y tiene que ser, además, el primer testimonio. Yo no puedo demandar en

juicio ejecutivo mercantil si no presento el documento de crédito. Pero no son la regla, la regla es lo contrario.

Si esto es así, vamos a ver qué ha ocurrido. Desde hace algunos años, en los países nórdicos, primero en Estados Unidos, después en Canadá y, posteriormente, en países latinos, se ha hecho énfasis de los llamados derechos difusos, que yo he definido como los derechos de todos y de nadie.

Puede ser el derecho a las condiciones ambientales adecuadas para la vida, el derecho a la conservación del patrimonio histórico o artístico o arqueológico, derechos que, de alguna manera, están contemplados en nuestra Constitución.

Si los derechos son de todos y de nadie, y se pretende protegerlos mediante la Ley de Amparo, hay que hacerlo abriendo una puerta, un interés distinto al interés jurídico, que sea considerado como el único que puede dar lugar al juicio de garantías. Y advierto; cuando un acto a la autoridad administrativa, afecta la situación jurídica de una persona, el juicio del amparo puede promoverse sin necesidad de requerir ningún otra cuestión.

Me están diciendo que me calle. Le suplico al presidium, me permita terminar este punto nada más. En el proyecto de ley de amparo se habla de un interés legítimo, que en la exposición de motivos se dice que es la legitimación intermedia e interés jurídico y el interés simple; y parte de la base, de que existen normas que imponen una conducta obligatoria a la administración, pero tal conducta no se corresponde con el derecho subjetivo, de que sean titulares de determinados particulares.

Esta noción de interés legítimo, la toman los autores del derecho administrativo, básicamente el español. Cuando salió el proyecto busque en todos los diccionarios posibles, nadie tenía nada, empece a buscar otros, me encontré con el diccionario enciclopédico civitas -perdón- y ahí encontré noción de interés jurídico; que nos dice, que la Constitución española, si empezamos por ahí, ampara el derecho fundamental de todas las personas a la tutela jurídica desea buscar otros, conté con el diccionario cívico, perdón, y ahí encontré noción de interés jurídico, que nos dice, que la Constitución Española, empezamos por ahí, ampara el derecho fundamental de todas las personas a la tutela judicial efectiva, no sólo en sus derechos, sino también de sus intereses legítimos y define estos, como los de cualquier persona pública o privada, reconocidos y protegidos por ordenamiento jurídico y para diferenciarlos del derecho subjetivo, se afirma que no existe una obligación (inaudible), de dar, hacer o no hacer exigible de otro, pero comporta la facultad del interesado, de existir, el respeto al ordenamiento jurídico y en su caso de exigir una reparación de los daños antijurídicos.

¿El derecho subjetivo lleva una obligación correlativa de dar a hacer o no hacer? no lo sé, no lo conozco, yo tengo el derecho subjetivo a la vida, hay una correlativa, de todos, de respetarlo nada más.

Posteriormente, hay otra definición, también española, porque el derecho entre legitimase en Italia, en Italia fundamentalmente se toma como un medio para distinguir la jurisdicción ordinaria de la jurisdicción del Consejo de Estado, esto es lógico. Italia tiene un Consejo de Estado, copia del Consejo (inaudible) Francés y esto también existe, porque en la concesión europea, los tribunales no podían revisar ni los actos del Ejecutivo, ni los actos del Legislativo, por eso se creo el Consejo de Estado, para que el propio estado, a su vez, cuidara sus propios actos, es decir, vigilar a sus propios actos, en México no tenemos eso, desde 1857 fecha de nuestra Constitución, el Poder Judicial Federal ha tenido facultades para revisar todo, actos del Ejecutivo, actos del Legislativo, el amparo procederá contra actos o leyes de las autoridades.

La definición final nos dice, "interés legítimo en derecho administrativo, repito, es cuando una conducta administrativa determinada y susceptible a causar un perjuicio o generar un beneficio en la (inaudible) del interesado, tutelada por el derecho", siendo así este no tiene derecho de su objetivo, poner esta conducta o en poner otra distinta; yo digo, en México si está tutelada por el derecho, es un derecho que puede pedirse en el amparo, y si es un acto, como en el caso a perjuicios, es un derecho que puede pedir el amparo.

Consecuentemente la definición coincide con lo que la jurisprudencia dice, ya para no hacer más largo, porque ya noto cierta impaciencia en la mesa, les diré una cosa, los intereses difusos deben protegerse, eso es evidente. El primer camino es el más difícil, sería mediante leyes ordinarias, pero se requerirá en muchas ocasiones tantas leyes, cuantos estados más el Distrito Federal, más la federación, 33, entonces más fácil es a través del camino, que es el amparo, para ese efecto simple y sencillamente hay que decir, en tales casos, casos concretos y sólo en estos el amparo puede ser promovido por cualquier persona o entidad interesada en esos derechos.

Yo nada más quiero saber que tutela protegida tiene aquel interés de proteger una especie que y está extinguiéndose, como el borrego cimarrón o a quién, etc., les interesa proteger, que sé yo, la bahía en donde van a desembocar las ballenas grises, para mí es un error; no es el único que tiene la ley, en b que ya no he dicho, yo diría otra cuestión, el ofendido por el delito es actualmente el indefenso total, debe darse en el amparo la posibilidad de promover el amparo contra todo, me dicen, "es que el amparo procede contra actos que se refieren a la represión del daño" y pregunto, y si

hay un (inaudible) libertad, qué reparación, si el autolibertad se fue por dinero, por corruptela, por tontería, cuál reparación del daño, y si la sentencia absolutoria, cuál reparación del daño.

Otra cuestión es, que critico, el Ministerio Público en el amparo siempre ha sido –perdón la expresión- un estorbo, yo digo, en el proyecto quítenla de plano y no simplemente diciendo para las leyes federales; critico la legislación de conforme, conforme con qué, nuestra doctrina de amparo a la poste procede de una cosa que se llama, o mejor dicho, que creó el en 1805.

El acto de una autoridad constituida, es nulo, porque la autoridad constituida deriva su competencia del acto que la constituye que en el caso de la constitución, y si un acto, el Tribunal será, dice, que sin constitucional es inconstitucional, punto, porque es nulo no es nulo según el modo.

Señores, muchas gracias por su paciencia, señores iba yo a decir, señor del presidium, perdónenme que me haya tardado más de la cuenta, gracias señores.

PROCESO DE JUICIO DE AMPARO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS LITIGANTES

LICENCIADO ARMANDO LEVY AGUIRRE
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LITIGANTES DE MÉXICO

La Asociación de Abogados Litigantes de México, hace, está muy complacida de que nos hayan invitado a estos foros, a expresar los puntos de vista de toda una serie de compañeros que nos reunimos generalmente todos los jueves en el Hotel Diplomático, a discutir cuestiones estrictamente sobre litigio, sobre cuestiones procedimentales y de lo que vivimos todos los días en los tribunales.

Así es que cuando nos enteramos de que la Suprema Corte de Justicia había hecho este nuevo proyecto de la Ley de Amparo, nos abocamos a leerla con detenimiento, para ver cómo afectaría nuestros derechos como litigantes, desgraciadamente nos hemos percatado de que el Poder Judicial Federal o la Corte, hizo el proyecto desde su punto de vista, no tomó en cuenta la óptica de los abogados litigantes y sobre todo, que no se compadeció de los dolores de cabeza que nos producen los juzgados de distritos y los tribunales colegiados, todos los días, por un insuficiente procedimiento que nos complica la existencia.

El actual proyecto carece de una serie de lagunas y otras aberraciones que nos afectan mucho como litigantes, quiero aclarar que nosotros vemos esta reforma, desde el punto de vista estrictamente de litigio y no nos interesa verlo desde el punto de vista filosófico, ni académico, ni teológico, porque esto lo han hecho ya otros expositores con verdadera brillantez.

Diría yo en nombre de mis compañeros, porque esto no es exclusivo mío, sino de todos los compañeros, que en relación a los días inhábiles a que se refiere el artículo 18 del proyecto, para la interposición del juicio de amparo, se debe de incluir lo que la Corte ya ha reconocido en diversas jurisprudencias, en el sentido de que no deben de correr los términos cuando las oficinas de la autoridad responsable se encuentra encerrada, porque hemos padecido muchas veces que no coinciden los periodos de vacaciones con el de los tribunales y nos encontramos indefensos, porque no tenemos los expedientes ni las pruebas en nuestras manos, que ha sido un gran batallar, lograr que se haga esta jurisprudencia y por lo tanto pensamos que ya debe de incluirse en la ley de amparo.

Por lo que se refiere al artículo 19, es realmente aberrante lo que está aquí, porque es un artículo realmente romántico, pero que no tiene ningún efecto práctico, en el sentido de que se puede promover el juicio de amparo en horas inhábiles, cuando se trate de los actos del artículo 22, privación de la libertad, privación de la vida, etc., pero la pregunta es, porque ya lo vivimos, muchos de nuestros compañeros, en dónde interpongo el amparo a las 3:00 de la mañana en la Ciudad de México.

Alguna vez tuve un cliente que le querían poner una celada a agentes de la judicial que le rodearon su casa y concurría ver al juez del Distrito a su casa a las 11:00 de la noche, con fundamento en este artículo del actual código, el señor juez no se encontraba, llegó a las 3:00 de la mañana de una fiesta, le dije, "señor, tengo el problema de que van a detener a mi cliente sin ninguna orden y quisiéramos tener una suspensión, acorde a esto, son hábiles las 24 horas del día", "mire compañero yo no tengo los sellos aquí, yo no tengo nada, así es que, por qué no va usted mañana a presentar al juzgado el amparo. Señor, muchas gracias, para mañana ya no me sirve el amparo, para mañana mi cliente ya está en la cárcel, de nada me sirve que me diga este artículo. ¿En dónde voy a poner el telegrama en la Ciudad de México?, ¿quién sabe dónde a las 3:00 de la mañana esta abierto un telégrafo?, ¿en dónde está un juez despierto a esas horas? En provincia.

Por eso proponemos para darle eficacia a este artículo, real y verdaderamente, que se creen los juzgados de guardia, como existen en las juntas de conciliación y arbitraje, juntas de guardia, pues debe haber juzgados de guardia para estos efectos; porque a las 3:00 de la mañana no hay justicia en México, no existe esto, no es cierto, es una mentira lo que se dice aquí.

Ahora bien, en relación a los plazos, nos está diciendo que nos dará el juez, 40 días por cada kilómetro, es decir, que no podrá exceder de un día por cada 40 kilómetros. Aquí también queda a criterio del juez, si nos va a dar el día o no nos va a dar el día para el término de los 40 kilómetros. Pregunto, si el quejoso radica en Cuernavaca, si nos va a dar el día por los 40 kilómetros, si son 65 kilómetros, si me va a dar dos días, o bien, considera que el medio de comunicación es muy idóneo y no me da nada, o me da una hora, y esto va a estar siempre sujeto al capricho del juez, a los volados; vamos a ver si el juez quiere, si considera, si es medio idóneo, si no es medio idóneo; y nos va a producir, que vamos a llenarnos de recursos y vamos a atrofiar la velocidad del juicio de amparo.

En relación, a que la demanda se puede presentar por correo, los que lo hemos vivido en la vida profesional, no solamente en el amparo, en las demandas fiscales, en los recursos de inconformidad ante el IMSS, en los recursos de revocación, que se

pueden presentar por correo, ya lo vivimos muchos de los litigantes que llegamos y presentamos nuestro medio de defensa por correo; y la oficina por correo simplemente nos da un taloncito.

Se mandó la demanda de amparo a Parras, Coahuila, nada más que lo mandaron a Parral, Chihuahua. Y nunca se pudo comprobar que se metió una demanda de amparo en correo, porque no existe disposición expresa, de que las oficinas de correo, deben de sellar una copia de la demanda, para comprobar que se puso; porque nada más entra en un sobresito y se rotula, y se perdió el papelito o se perdió el sobre, quedamos en estado de indefensión.

Entonces, hay que obligar por ley, a que las oficinas de correo pongan un sello en la copia de la demanda, para poder acreditar que la hemos hecho en forma y en tiempo. En relación a la autorización, para hoy recibir notificaciones, hay verdaderas contradicciones que nos han puesto aquí a sufrir mucho; en primer lugar, nos habla de que debería de ser una persona con capacidad legal. Bueno, la persona con capacidad legal, es toda aquella que puede ejercitar derechos y obligaciones.

Pero más adelante, nos dice que solamente en materia civil, penal, administrativa o laboral, podrán ser abogados. Bueno, la pregunta es esta; la Ley General de Profesiones habla de licenciados en derecho, no de abogados. Por otra parte, es privilegiar a la libre de derecho, porque la libre de derecho, esos títulos son de abogados, los de la nacional somos licenciados en derecho.

Entonces, estas situaciones deben afinarse, para evitar contradicciones. Y además, si está diciendo que solamente en materia civil, en materia penal, laboral, etc., debe ser abogado; quiere decir que en materia marítima, en materia espacial o en otras ramas del derecho, entonces debe de ser, no un abogado, sino alguien que tenga capacidad legal y un carnicero tiene capacidad legal, estaría autorizado precisamente para interponer recursos, etc.

Pero además, la expresión es rara, porque nos está diciendo todavía aquí, que en el precepto relativo, de que se deberán de aportar los datos ¿cuáles datos? Nada más dice, se aportarán los datos de la autorización ¿cuáles datos? Debo de entender el número de la cédula profesional. Ah, eso es lo que entendemos; pero en la práctica, cuantas veces sean promovidos los amparos, Armando Levy Aguirre, con cédula profesional tal, tal, se promueve el recurso, se desecha ¿por qué? Porque no indico el folio libre y donde está registrado su cédula profesional en este juzgado. ¿En qué parte de la ley lo dice?, ¿en dónde está? Invenciones que saca el juez de distrito,

como decía don Alberto Vázquez de Melcado, la ley del encaje, que son todas las cosas que se mete el juez en la cabeza sin tomar en cuenta la ley.

Entonces, nos encontramos que no nos dice qué datos, debemos dar nuestra fecha de nacimiento, debemos dar nuestro número de cédula, debemos de expedir una copia fotostática de la cédula. Y si nos registramos en el libro del juzgado, quién me da una constancia de que se recibió, porque ya también tuvimos el problema, de que hay abogados que dicen: Afojas tanto y dicen que no hay nada. Y hay que ir a la revisión y hacer la inspección y nos vuelven la vida de cuadritos los señores magistrados y los señores jueces, y los señores ministros de la corte, porque hicieron esto con su óptica; porque no saben la prepotencia que estamos sufriendo todos los días de sus empleados.

Ahora bien, en relación a las notificaciones personales, se dice que la sentencia que se dicte por lista, no será notificada, perdón, la sentencia que se dicte en la audiencia, no será notificada personalmente, sino por lista. Por favor señores, que les cuesta señores diputados, decir que todas las sentencias deben de notificarse personalmente. Porque una notificación, una sentencia dictada en la audiencia, se puede dictar el día primero, pero me la notifican porque necesita 15 días después y tengo que estar 15 días yendo todos los días al juzgado, para ver si sale la sentencia, para que no me vayan a afectar en mi término si tengo que recurrirla.

Es decir, piensan muy bien en el juez, piensan muy bien en su comodidad, en la autoridad, pero nosotros los abogados litigantes ¿cómo?, ¿tú mexicano?, ¿tú?, ¿vas a tener derecho a esto? No, esto no lo vamos a poder permitir, de que se sigan ultrajando los derechos de los abogados litigantes.

Y asimismo, continúa diciendo. Ah, otra situación, en relación a las notificaciones personales en materia de amparo, nunca se nos notifica el informe justificado. Por dios, quien litiga en esto, sabe lo que es sacar una copia, nada más simple de un informe justificado. Debe de precisarse en la ley, que hay obligación de la notificación personal del informe justificado, porque es el equivalente a la contestación de la demanda.

Y saben perfectamente bien muchos abogados, que cuando van a ver el informe justificado, muchas veces se encuentran un libro así. Y la audiencia esta para tres días, ni siquiera puedo ampliar la demanda porque tengo que estudiar todo eso. Nos dejan en verdadero estado de indefensión. Todo porque, no se le ocurre al Poder Legislativo, poner simplemente, se notificará también el informe justificado y el informe previo.

Quedamos en desigualdad con en cambio, yo sí tengo la obligación de mandarle su copia a la autoridad, a ella sí se la llevan a su casa, se la ponen en su mesa, les ponen su café y resuelven el asunto muy cómodo. Y yo tengo que ir al juzgado y me dice la secretaría: Nada más entregamos copias licenciado, de 10 a 11 y ya son las 12, véngase mañana. Eso no lo ven, más que los que estamos todos los días sacándonos los cayos caminando.

En relación a los requisitos para la notificación, hay un verdadero absurdo, porque nos dice el artículo 26, dice: Que si el actuario considera que se negaron a recibir la notificación, se tendrá por hecha. Ni siquiera le obliga a dejar pegado en la puerta el acto que se va a notificar o dárselo a un vecino. Simplemente dice, se tendrá por no hecha porque te negaste, y se va el señor y nadie se entera de nada. Otra vez en perjuicio del litigante y perjuicio del gobernado, pero muy cómodo para el Poder Judicial.

Y otro absurdo, que están actualmente en la ley y que viene aquí en el mismo artículo 26, dice que los citatorios deberán dejarse para dentro las 24 horas. He visto actuarios cínicos y perversos, que llegan a dejar el citatorio a las 9:00 de la mañana y ponen la cita para las 9:30. Cuando en todos los procedimientos legales, señores diputados, que ustedes han legislado, se ha señalado siempre que la cita será para el día siguiente, no para dentro de las 24 horas. Para que dan 24 horas, si el actuario simplemente pone dentro de dos minutos o tres minutos o una hora; es un absurdo, nos complica la existencia, nos limita nuestros términos, nos afecta en nuestros derechos de defensa.

Es absurdo, que en la primera notificación se pueda hacer por exhorto, y las restantes se deba señalar el domicilio en el lugar de la jurisdicción del juez; es decir, puedo poner el amparo de aquí por correo para Tijuana, después del juez de Tijuana, vendrá y por exhorto me manda decir: Ahora, señálame el domicilio en Tijuana. Ahora, me tengo que trasladar a Tijuana, a 6 mil pesos de avión y gastos, para señalar un domicilio, regresarme y tener un fuerte conflicto, cuando estamos en la era de las comunicaciones, siglo XXI y todavía quieren notificar con señales de humo y con sábanas.

Señores, estamos en la época de la electrónica; y es más, es inconcebible que el coro señala mi domicilio en Tijuana, ahora me tengo que trasladar a Tijuana, 6 mil pesos de avión y gastos, para señalar un domicilio, regresarme y tener un fuerte conflicto, cuando estamos en la era de las comunicaciones, siglo XXI y todavía quieren notificar con señales de humo y con sábanas.

Señores, estamos en la época de la electrónica, y es más, es inconcebible que la Corte no haya previsto, que en el Código Fiscal de la Federación ya se prevén las notificaciones por Fax, y nosotros seguimos atrasados en este procedimiento, porque es muy cómodo para el señor juez no hacerlo.

Así es que no estamos conformes con esta disposición, debe de permitirse señalar el domicilio en el lugar donde se encuentra el quejoso y ahí notificarle todas las actuaciones, como sucedió en el juicio fiscal y que desgraciadamente las reformas del 2001, también para castigar al litigante, para castigar al mexicano, para que le cueste más, hay que cambiarle el domicilio en la zona de la jurisdicción.

Y todavía las cosas van más allá, habla de que no se hará la notificación, en la fracción tercera, cuando se haga en un domicilio inexacto, cuando se señale un domicilio inexacto, ¿qué es un domicilio inexacto?, les voy a decir a ustedes lo que es un domicilio inexacto para un actuario o para un juez, es dar una razón de decir: "No pude notificar, porque la numeración está salteada, no encontré la calle y además, no me dio el código postal, por lo tanto, notifíquese por lista".

No, no, no, señores, momento, una cosa es el domicilio inexacto y otra cosa es el domicilio inexistente o falso. El inexacto, vayan a recorrer la Calzada de Tlalpan, para ver cuántos números 80 encuentran. En mi caso particular, en mi despacho, la calle se llama, por un lado, Comunal y, por otro lado, se llama Carlos Pellicer, es la colonia Hacienda Guadalupe de Chimalistac y por otro lado dice: Colonia Agrícola, y en la otra esquina dice: Colonia Chimalistac y en la otra, Ex Hacienda Guadalupe de Chimalistac.

Yo no invento esos datos, pero los da el gobierno del Distrito Federal, los proporciona el juez y me dice el actuario: Es inexacto y me notifican por lista, y ya me reventaron, reventaron al gobernador, reventaron al quejoso.

Ahora bien, en el artículo 29, se dice que las notificaciones surtirán efectos al día siguiente al de la notificación personal. En todos los códigos de procedimiento, señores diputados, ustedes lo han legislado así, menos en éste, siempre se ha manejado la siguiente posición, cuando debe de ser al día siguiente en que surta efecto al de la notificación personal, como acontece en todos los procedimientos. Yo no veo porqué no lo quieran legislar igual, no hay razón, no hay razón más que la de molestar al gobernado, no hay más que esa razón.

Con relación a la suspensión. Con relación a la incompetencia, el artículo 44 simplemente dice que el órgano jurisdiccional se declara incompetente y se enviará al expediente y yo regreso a los dos días y me encuentro un acuerdo que me dice: Tu expediente ya se encuentra ahora en Chetumal. Ni siquiera me dieron vista, ni me dejaron defenderme, ni siquiera pude alegar.

Nada más entre ellos hicieron el arreglito de quién es competente y quién no, y se traen el expediente para arriba y para abajo y va para la Suprema Corte, si no lo aceptó el otro, y nos complican la existencia. Eso lo vivimos los litigantes todos los días. No los académicos, no los filósofos, los que sí estamos camellando, como se dice vulgarmente.

Con relación a la suspensión, es verdaderamente trágico que el Poder Judicial no se haya dado cuenta que el principio vital del amparo, la otra pierna con la que funciona, es precisamente la suspensión. Un procedimiento de amparo sin suspensión, limitado, trampeado, no sirve para nada. Y fíjense ustedes, aquí empezamos. El juez solamente tiene tres alternativas ante la demanda: desecharla, admitirla o prevenirla. Si hay admisión, no hay problema, proveerá sobre la suspensión.

Pero cuidado conque encuentre algún pequeño detallito con relación a la prevención, porque no me provee sobre la suspensión y cuando ya cumplí, ya me ejecutaron, ya me mataron, el amparo quedó sin materia: Muchas gracias, señor juez, muchas gracias Poder Judicial, muchas gracias justicia mexicana, a eso me condujiste.

Y les voy a platicar dos casos concretos y les voy a decir dónde y cómo. El señor Juez de Distrito en Tlaxcala, con una verdadera perversidad, no sé si siga siendo el mismo, porque ya no he litigado por allá, me requirió en una demanda de amparo en la que me urgía la suspensión provisional, por una extracción de bienes, y me dice: "Requiérase al promovente, para que señale su domicilio". Promoví, señor, aparte del daño que me hizo, porque se tardó la notificación, me pone: "Señor, mi domicilio es el que señalé para oír y recibir notificaciones". No se admite la demanda por no haber cumplido, porque yo te pedí el domicilio del promovente, no del quejoso".

Porque el artículo con relación a los requisitos de la demanda, dice: "Se señalará el nombre y domicilio del quejoso y del promovente". Yo soy el promovente y quería mi domicilio particular. Me desechó la demanda. Y Ahí tengo que ir para arriba y tengo que regresar, y admitieron la demanda y la suspensión. Muchas gracias, señor Juez, mi cliente ya está muerto. Le agradecemos mucho su impartición de justicia, señor Juez.

Por eso, debe de señalarse en la ley, que si el juez va a prevenir, debe de proveer sobre la suspensión, negando o admitiendo, por lo menos en la provisional, mientras que se cumplen todas las prevenciones y no nada más para los efectos del artículo 22, los demás casos que se señalan.

Y lo mismo sucede, porque no hay razón de ser, en la incompetencia, cuando se declaran incompetentes, sí proveen sobre la suspensión cuando se trata de actos del artículo 22, pero si no son del artículo 22, entonces no proveen sobre la suspensión. Pero sí proveen sobre la suspensión, cuando se excusa al juez.

¿Cuál es la razón o la diferencia, para que en la prevención de la demanda el juez deje de proveer sobre la suspensión? Todavía podríamos pensar en el desechamiento de la demanda, no hay nada, pero prevenir, está diciendo el juez que hay posibilidad de que nazca, de que exista y debes de conservar mis derechos tutelares, porque me puedo equivocar por una copia.

Otro caso también, de un requerimiento absurdo. Me contestó el juez, en una prevención, que le dijera yo quién era el director general del IMSS, porque puse las iniciales del IMSS, y le dije: "Señor juez, lamento mucho que usted no conozca estas siglas tan populares en el país, todo mundo las conoce, es Instituto Mexicano del Seguro Social", porque decía que no se permitía utilizar siglas, y entonces le dije en la contestación: "Ahora quiero que usted me explique porqué razón pone usted: México, D. F." Él sí podía utilizar las siglas, nosotros no, los otros mexicanos no. El juez extraterrestre, él sí puede.

Ahora bien, por qué razón, acorde al artículo 175, se va a exentar a la Federación, a los estados, Distrito Federal y municipios a dar garantía en la suspensión. Por qué razón: "Es que es muy solvente". Por favor, señores, los que nacimos en México sabemos cómo es la autoridad, cuántos juicios se quedaron sin pagar las indemnizaciones por expropiación y todos los que no han podido cobrar, porque el Gobierno es muy solvente. Todos los del Ajusco no cobraron y les quitaron todo.

Así es que no existe ninguna razón para que, precisamente, la persona moral más solvente, que es en el país, que es el Estado, deje de tener la obligación de garantizar en el caso de la suspensión. Porque si no me paga, lo que están haciendo es que me están invitando a la corrupción, porque después de que yo tenga mi sentencia voy a tener que irme a arreglar con la autoridad para que me pague. Y si no hablamos claro, sabemos cómo se arreglan las cosas en este país.

Tiene que hablarse con la verdad, si no, no tiene caso estar por aquí, Si se resolvió una suspensión en otro expediente, como el 143, dice: “No deberá declararse sin materia, si es que no se dio para el efecto solicitado”. Porque está diciendo, que si me da la suspensión en este expediente y hay otra suspensión solicitada en otro expediente, se tendrá por desestimado el segundo.

Pero espérame tantito, acláralo, por favor, en el artículo. Siempre y cuando sea para el mismo efecto, porque del mismo acto pueden suceder varias cosas. En un acto fiscal, le pueden llegar a hacer un embargo administrativo, una extracción de bienes, pido una suspensión, pero viene un segundo acto en donde me nombran un interventor. Entonces promuevo el amparo y me dicen: “No, es que se trata del mismo acto, la misma suspensión”, entonces me desechan la suspensión por la interventoría y nada más me la admiten por la del embargo precautorio, cuando son efectos distintos. Debería aclararse perfectamente bien esto, en esta situación.

En la reposición de autos, se condenan los daños y perjuicios a las partes. Es decir, quejoso, tercer interesado, ministerio público, que sean culpables de la pérdida del expediente. Pero es injusto, señores, que cuando el juzgado o tribunal pierda el expediente o las pruebas, también debe de pagar los daños y perjuicios y no con un: “Usted disculpe que sean culpables de la pérdida del expediente. Pero es injusto, señores, que cuando el juzgado tribunal pierda el expediente o las pruebas, también debe pagar los daños y perjuicios, y no con un “usted disculpe”.

Y sabemos perfectamente bien que cuando los expedientes se desaparecen, siempre es con contubernio, con alguien del personal de ese juzgado; los expedientes no tiene pies, no se van solos; los expedientes los sacan los empleados de los juzgados, reciben dinero por ello. ¿Y dónde quedó la sanción para ellos? Ah, para el quejoso o para la otra parte. El juez o el Poder Judicial debe ser responsable de los actos que hacen sus empleados, así debe de asentarse.

Con relación a la suplencia de la queja, ya lo comentó aquí el compañero Salvador Quezada, con relación al patrón. No hay ninguna sola razón lógica, jurídica, ética, moral, para decir que al patrón no se le puede suplir la deficiencia de la queja, a pesar de que el juzgador está viendo la violación. Parece ser que se trata de que los patrones son mexicanos de segunda.

Y la tesis esa que se está manejando de que el trabajador es la parte débil y el patrón la parte fuerte, eso allá en los años de 1930, señores. Ahorita hay trabajadores que son más poderosos que los patrones, porque quiero decirles que el 50 por ciento del

producto de ingreso bruto de este país se maneja a través de la microempresa, pequeños patrones.

Mientras que para el director general de Santander sí le suplirían la queja porque es trabajador, para la señora que tiene un puesto de quesadillas en la calle y una sopladora, para ella no hay suplencia de la queja. Y luego la contradicción, hay suplencia de la queja en materia civil, en materia administrativa; pero cabe preguntar qué el patrón cuando concurre a poner su demanda de amparo en materia administrativa o en materia civil, ¿por qué ahí sí se le suple la deficiencia de la queja, si es el mismo sujeto, la misma persona, su mismo patrimonio? No hay ninguna razón.

No sé dónde lo puedan aquí ver los señores diputados o los señores ministros de la Corte. Por tradición histórica, por captar votos en el régimen anterior hay que favorecer a los trabajadores y a los campesinos; eso ya pasó, ya no tiene sentido.

Con relación a los recursos, los reconocidos son revisión, queja y reclamación. Se debe de incluir una disposición que indique que si en el acto recurrible se señala erróneamente el nombre del recurso no debe ser motivo de desechamiento, sino de tramitarlo por el que le corresponda. Se trata de impartir justicia y no que el Poder Judicial se convierta en el campeón mundial de desechamientos y sobre seguimientos.

Y quiero decirles a ustedes que si alguien promueve ahorita un recurso de queja porque no se le concedió la suspensión provisional, que tiene esas 24 horas, y si por equivocación puso recurso de revisión se lo desechan, a pesar de que esté en término y a pesar de que esté bien planteado. Esto es injusto.

Como se denomina el recurso, si lo que estoy pidiendo es que me ayuden, que me salven. "Ah, no; no dijiste títere, mácara, cúcara fue; perdiste, no dijiste las palabras mágicas. Por eso te lo desechamos". No pueden seguir aquí las cosas.

Con relación a la repetición del acto reclamado, en ejecución de la sentencia o defecto o exceso en el cumplimento de la misma, si cualquiera de estas figuras no llegare a darse, debe de tramitarse, debe el órgano jurisdiccional ordenar que se tramite como juicio de amparo. Esto no lo invento yo, señores diputados, lo inventaron ustedes.

Si leen ustedes su Código Fiscal de la Federación que entró en vigor el año 2001, claramente dice que el recurso de queja en materia fiscal, cuando se trate de repetición de acto reclamado y cuando se trate de inejecución de sentencias, etcétera,

deberá tramitarse como juicio. ¿Por qué en materia de amparo no? Debe tramitarse el juicio, si no, me van a dejar indefenso.

Porque luego tenemos la discrepancia entre los términos entre las apreciaciones; si hubo repetición, si no hubo repetición; que le cambió el numerito, que le cambió la filita, el detallito, y nos ponen en un verdadero estado de angustia en que nos estamos jugando el patrimonio del mexicano, que es el que va recibir el perjuicio, y no se trata de perjudicarlo, se trata de ayudarlo; se trata de que se imparta justicia.

Por último, con relación de la ampliación de la demanda, nos dan 15 días; sí, pero si nada más que se rindió el informe justificado el último día de la audiencia constitucional, y como dice la ley, al siguiente día dictó la sentencia, pues ya qué amplió, si no me corrió el término, ya me mataron, muchas gracias, señor juez.

Y por último, decirles a ustedes y vuelvo a insistir, por favor, señores, tomen en cuenta que se nos deben notificar los informes justificados. Tómenlo en cuenta, de veras, lastiman al pueblo de México privándolo de esos documentos. El juicio de amparo es un juicio en el que andamos a ciegas, siempre, nunca nos notifican nada.

Con relación a la testimonial, es absurdo lo que se está diciendo, de que se debe exhibir el interrogatorio por adelantado, como si supiéramos cómo nos va a contestar el testigo. Y si las preguntas que yo le formulo al testigo en el juicio me las desechan, ya no puedo formular las verbales, porque está diciendo claramente que no se aplicarán las leyes supletorias en materia de pruebas, ¡estoy muerto!; ¿para qué quiero al testigo? Y ni siquiera le dan derecho a la otra parte de preguntar. Es una verdadera aberración esto del estado de indefensión.

Y por último, señores, para cerrar y agradeciendo su atención, solicitamos se acabe la nefasta costumbre que tienen los tribunales colegiados dados a deliberar a puerta cerrada para dictar la sentencia, pues es absurdo que se publique la sentencia y después se hagan los considerandos con el baladí pretexto de que están en engrose; cuando sabemos en casos que después de la sesión, en el engrose, cambian muchas cosas después de haber tomado la decisión. Es una posición muy cómoda para los magistrales, pero nefasta para el derecho.

Muchas gracias, señores, por su atención y espero tomen en consideración estas opiniones.

LA AUTORIDAD AGRARIA EN RELACIÓN AL AMPARO.

LIC. JESÚS CORTÁZAR MURPHY
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
DE COLEGIOS DE ABOGADOS, AS OCIACIÓN CIVIL

Hace un momento el señor licenciado Romero Apis, mi amigo, me mandó una notita y me dijo que yo intervendría al final. Sentí que era un gran honor, pero recordé que en cierta ocasión que me pasó lo mismo, estaba yo hablando y de repente vi que se empezó a dormir uno de los oyentes y yo le hacía señales; hasta que se recargó en el hombro del de junto y se quedó dormido. Le dije: "Oye, despiértalo". Y él se volteó y me dijo: "Despiértalo tu; tu fuiste el que lo dormiste".

Entonces, empiezo a tratar un tema sumamente interesante, más desde el punto de vista humano, social, que desde el punto de vista jurídico: las primeras reformas al artículo 27 constitucional, porque no podemos apartar el procedimiento o el movimiento agrario del amparo en materia agraria.

Después de que termina el movimiento revolucionario, se reparten las tierras, los grandes latifundios, en producción para beneficiar a las clases campesinas que no tenían tierra. Esto trajo como consecuencia un reparto acelerado de tierras, y consecuentemente, una irrespetabilidad con relación a las leyes.

Fue hasta cuando el general Lázaro Cárdenas emitió el primer código agrario, es decir, reglamentó la materia agraria; y por otra parte, dentro de las reformas al 27 constitucional, declara y dice que se quedará un departamento especial para la aplicación de las leyes agrarias, y es cuando se crea el departamento de asuntos agrarios, que años después, muchos años después, entro yo como titular del mismo y me toca, sin tener derecho ni razón de ser, participar en un movimiento tan interesante, vivirlo, sentirlo, manejarlo, como ése.

Un grupo de jóvenes de aquel entonces vimos con gran realidad lo que ahí sucedía, las caravanas de campesinos que venían a solicitar tierras; que pasaban años y años solicitándolas; no respetaban los términos de los que habla el licenciado Levy, ellos sí tenían vimos con gran realidad lo que ahí sucedía, las caravanas de campesinos que venían a solicitar tierras, que pasaban años y años solicitándolas y no respetaban los términos de los que habla el licenciado Levy, ellos sí tenían que sufrir, lógicamente el tiempo por generaciones. Sin embargo, nunca se escuchó la voz de ellos en una

forma de réplica, sino solamente de agradecimiento cuando se les daba la posesión de las tierras.

En ese entonces nos acercamos a varios maestros nuestros para que nos ilustraran para poder hacer lo que le llamamos el Manual de Tramitación Agraria, que se publicó. Y uno de los aspectos más importantes fue el amparo en materia agraria, en el que nos acercamos al joven maestro, querido maestro en aquel entonces, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela.

En esa ocasión el nos mandó un documento referente al amparo, me estoy refiriendo al año de 1964, que me voy a permitir leerlo con toda emoción, por tratarse de una gente a quien tanto queremos, respetamos y le agradecemos la vida que ha entregado a favor de los abogados de México.

Dice: "Nuestra Constitución Política reconoce derechos a favor de todos los hombres y mujeres. A esos derechos se les denomina garantías individuales. Los derechos fundamentales, protegidos por nuestra Constitución, son la libertad, la igualdad y la seguridad contenidos en una serie de disposiciones que se refieren a casos concretos". Vamos a tratar de interpretar algunas consideraciones importantes para los hombres del campo y se que se les han dado diversas denominaciones o nombres y que hacen referencia en sentido determinante a lo que se ha dado en llamar el amparo agrario o comunal, la suplencia de la queja, y con los nombres conocidos por recursos o constitucional de los campesinos y como nosotros señalamos, el amparo en materia agraria.

Antes de referirnos a los motivos que inspiraron este juicio, es preciso indicar que es verdadera y real conquista que ha logrado el campesino y puede con orgullo decirse que es un derecho fundamental que se ha incorporado a nuestra legislación y sobre todo a la vida de la clase que en ciertas épocas de nuestro desenvolvimiento político había quedado relegada, sino al olvido, por lo menos se le dio poca atención, por lo que se consideró de urgencia darle toda la protección necesaria para salvaguardar sus derechos, derivados del artículo 27 constitucional.

El decreto de 30 de octubre de 1962, publicado en el Diario Oficial del 2 de noviembre del mismo año, consistió en una adición al artículo 107 de la Constitución Política del país, iniciativa, que como podemos analizar, consistió en un instrumento titular de las garantías derivadas de su texto y que a la letra dicen: "En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho por derecho guarden el estado comunal o a los ejidatarios y comuneros, deberá suprimirse la deficiencia de la queja, de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria y no procederán el desistimiento, el sobreseimiento por inactividad ni la caducidad de la instancia cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de población."

Este documento en aquel entonces fue para nosotros guía.

Quiero comentarles a ustedes que las grandes reformas que ha tenido el 27 constitucional, yo considero que pueden ser tres: la primera, en la época del licenciado Alemán, que solamente cambió tres letras de la Constitución y dijo: "Las tierras en producción no son afectables".

Con esto, real y auténticamente, sale el amparo en materia agraria. El amparo que antes había sido suspendido para los ejidatarios y que después se vuelve a hacer norma y ley a través de estas modificaciones que se ocultan, porque nosotros debemos de comprender, que la materia agraria, el derecho agrario, los campesinos, son más de carácter político, social que de tipo jurídico y legal.

Es decir, por encima de las actitudes de ese núcleo, de esos núcleos de población, está no tanto la aplicación del derecho, sino el respeto a las conducciones políticas que se dan. Por eso, esas reformas constitucionales que hace el licenciado Alemán el 6 de enero de 1946, que es la fecha de la ley agraria, posteriormente, el 6 de diciembre, a 6 días de haber tomado posesión de la presidencia, el día 26 de diciembre del mismo año, en la Cámara de Senadores, siendo senador de la República, el senador López Mateos hace una reflexión a esas reformas y dice entre otras cosas, algo muy interesante que me voy a permitir decirles a ustedes:

"Este hecho fundamental, señores senadores, marca una nueva etapa en la Revolución Mexicana. El poder político ya no está y no estará nunca en manos de los terratenientes y si no está fincado estrechamente en manos de los ejidatarios y de los campesinos, no hay justicia."

Así pues, si hay una etapa nueva en el desenvolvimiento de la Revolución, esta nueva etapa requiere un nuevo tratamiento, es decir, a través de estas declaraciones, se hace una distinción de lo que es el terrateniente y de lo que es el que produce la tierra, es decir, son dos sinónimos que vienen amarrados de la mano y que no se pueden diferenciar.

Es decir, cuándo consideramos nosotros que el terrateniente no produce la tierra. Por eso es tan importante el analizar estos aspectos, estas reformas como consecuencia de la aplicación en materia de amparo.

Posteriormente, él habla diciendo: seguridad. Este es, en la hora actual, el clamor nacional, no sólo son los pequeños propietarios agrícolas los que reclaman seguridad, son también los ejidatarios, para seguridad de los ejidatarios. También los ejidatarios quieren seguridad y a ellos se las da la Revolución y se las da, señores, y este es un aspecto importante, que no se ha tratado en la tribuna, se le da a través de títulos de inafectabilidad.

Por eso es necesario analizar el contenido y el alcance jurídico de los títulos de inafectabilidad. Es decir, se pretende, a través de estas nuevas reformas, proteger la pequeña propiedad a través de títulos de inafectabilidad agrícola y ganadera y sin embargo, se usan como pretexto el derecho de amparo a favor de los ejidatarios.

Pero la realidad de las cosas es que va dirigido a la pequeña propiedad. Todos estos cambios, traen como consecuencia una gran inseguridad en cuanto a la aplicación de la ley.

Posteriormente, en las reformas últimas del presidente Salinas, es cuando se desaparece la autoridad agraria y en realidad se queda en un gran estado de indefensión todo ese cúmulo de gente. ¿Por qué? Porque desaparece el presidente de la República como autoridad agraria. El Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones de agrarias mixtas, yo siempre me pregunté ¿cómo es posible que a los gobernadores de los estados que dotaron la tierra en primera instancia, porque ellos fueron los que dieron la tierra para que los campesinos no se les echaran encima, ¿cómo es posible que ahora no reclamen su derecho y los desaparecen?. Desaparecen las comisiones agrarias mixtas y el comisariado ejidal única y exclusivamente lo dejan como una figura decorativa.

Se crea una nueva secretaría que es coordinadora de acciones ante el Tribunal Agrario, el Registro Agrario Nacional, etc., pero no hay autoridad agraria. Entonces, yo me pregunto, leí el proyecto de la Suprema Corte de Justicia, soy parte de la

Confederación Nacional Campesina, fue a explicar el proyecto, y nunca abordaron el tema directamente.

El segundo libro de la Ley de Amparo trata muy superficialmente, entre otras cosas, las notificaciones hacia los campesinos, por lo que respecta al derecho de amparo, en el que habla que con estas nuevas reformas se den dos años. Imagínense ustedes al licenciado Levy esperando dos años para que notifiquen un amparo. Entonces, eso es tremendo.

Nosotros podemos declarar ahorita el hecho de que este tipo de reformas dejan en una gran inseguridad a todos. Por lo tanto, habrá que retomar nuevamente la materia agraria para aplicación de las demás leyes. Es decir, ¿cómo es posible que cuando dictara el presidente Salinas que se ha terminado el reparto agrario con 105 millones de hectáreas, ya terminó.

Y nunca, nunca le notificó nadie que el rezago agrario estaba precisamente en la Suprema Corte de Justicia. Ahí esta el rezago agrario, en donde no se pueden resolver los asuntos.

Yo quisiera preguntarle, no al maestro Burgoa, sino a todos ustedes, ¿qué se hace cuando se tiene la última sentencia del último tribunal de justicia y no se puede aplicar.

Para mí fue un acto heroico el que hizo el actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al ejecutar la resolución presidencial de Baja California. Yo les voy a comentar a ustedes hechos reales. Al señor Lucio Cardozo, lástima, está aquí Romero Ápis, del Estado de Mexico, al señor Lucio Cardozo, compró unos terrenos ejidales de terrenos nacionales, debidamente escriturados. Ahí desarrolló un desarrollo turístico, metió mucho dinero y en 1971, esto fue en 1964, cuando compró los terrenos compró unos terrenos ejidales, terrenos nacionales debidamente escriturados, ahí desarrolló un desarrollo turístico, metió mucho dinero, y en 1971 esto fue en 1964, cuando compró los terrenos nacionales para un desarrollo turístico, antes de que vinieran las reformas del 63, por la que se entregaban todos los terrenos nacionales para necesidades agrarias, en donde se crean los nuevos centros de población.

Entonces, cuando Lucio Cardoso, compra los terrenos, finca un desarrollo turístico en el gobierno de Echeverría, en un acelerado reparto de tierras, le afecta su propiedad, interpone el amparo y lo ganan en todas sus instancias, y no puede tener la tierra hasta que, hace, el año pasado, con una determinación de la Corte en la cual

sentencia, obliga al Secretario de la Reforma Agraria, que no tiene ninguna participación a que le entregue las tierras o se va a la cárcel, y es cuando se hace la ejecución de esta resolución presidencial.

Entonces, yo me pongo a pensar qué hace en este caso el litigante, el abogado, cuando llega ante una pared que ya no puede más, ya no puede, no se puede sacar a los campesinos, más que con el Ejército, y el Ejército no los va a sacar.

Entonces, creo que en este caso, este proyecto que se está manejando se debe de manejar con un criterio real y auténtico, solicitar la presencia de las gentes que conocen a fondo, no solamente el aspecto jurídico, sino el aspecto real y humano de este juicio de amparo, a favor de protegen, no tan sólo ahora a los ejidatarios, sino también proteger la auténtica pequeña propiedad. Y yo podría sentenciar algo, podría yo decir a ustedes que ya el amparo, ya a favor de los campesinos ya no tiene ninguna razón, ¿por qué? Porque de acuerdo con las modificaciones actuales, la Asamblea General de Ejidatarios es el órgano supremo, y la Asamblea General de Ejidatarios es la que le prive de sus derechos a los campesinos, entonces qué vamos a interponer un amparo en contra de la Asamblea General de Ejidatarios, no es autoridad, y sin embargo, en la Asamblea General de Ejidatarios vende, compra, priva, etcétera, y eso es lo grave de todo esto.

Aunque en el gobierno de Salinas se dijo que no desaparecía el ejido, que se le va a dar rango constitucional, lo mismo a la comunidad, nos estamos encontrando ahora que de acuerdo con el artículo 56, 57 de la Ley Agraria, se puede aceptar por parte de la Asamblea General de Ejidatarios el que en primera Asamblea se pueda asociar con extranjeros, con compañías, etcétera, y en segunda Asamblea, pueden ellos disponer como propietarios de sus tierras, y pueden venderlas, enajenarlas, etcétera.

Y lo más grave de todo esto, es el que le expide el título de propiedad, es el delegado del Registro Agrario Nacional en cada entidad federativa, que es anticonstitucional, desde todos los puntos de vista, y yo no he visto ni me han mencionado el que alguien se haya amparado en contra de esta decisión absurda y anticonstitucional.

Por otra parte, se habla de que las tierras que se pueden enajenar en segunda Asamblea son las que no forman parte de las tierras de uso común, pero ya lógicamente los líderes o gentes que no comprenden, ya buscaron la forma de que primero se acepte el parcelamiento, se haga el parcelamiento y posteriormente ya entran en la enajenación y se pueden vender; es decir, las tierras de uso común ya se están vendiendo.

Para terminar, sé que tenemos que ir a comer, quiero dejar en ustedes algo perfectamente claro, sé que muchos de ustedes no comparten esta actividad, esta ideología, esta actitud, pero las reformas de Miguel Alemán, para proteger la tierra en explotación fue una de las grandes reformas constitucionales, ¿por qué? Porque para qué queremos proteger a los campesinos, si no tienen tierra, o qué estamos.

En un momento quiero poner en la balanza qué es preferible, privarle de su derecho al campesino que vende su tierra, para dejar esa tierra en producción y no tengamos que importar el 98% de la producción que ahora se importa.

Yo fui director general de la Comisión Nacional de la Cana de Azúcar, nunca, nunca tuve un movimiento de esos, porque nos manejábamos primero con honestidad y siempre existió el diálogo, y por otra parte, los que han comprado las embotelladoras, que compran el azúcar, son embotelladoras extranjeras, la Pepsi Cola, la Coca Cola, etc.

Entonces, ¿qué entregamos los ingenios a los países fuera de México? Lo mismo pasó con las acciones del City Bank.

Yo quiero preguntarle a todos ustedes ¿cómo van a hacerle desde el punto de vista jurídico? Porque una cosa es darse las acciones, pero otra cosa es titularse los terrenos, las propiedades. Los extrajeron no pueden tener propiedades, de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿cómo le van a hacer para ese acervo cultural tan grande?; ¿de a cómo se lo van a estructurar? Hay tantas cosas, que lógicamente me pasaría toda la tarde y mañana y pasado mañana, y tendría para mí un gran gusto hacerlo.

Solamente quiero dejar aquí perfectamente claro, que al pensamiento, la acción y la forma de pensar de la Federación Nacional de Colegios de Abogados es eminentemente humanista, y eminentemente nacionalista, a veces por encima de la ley están los altos intereses de la patria. Muchas gracias.

REUNION CON LOS

PRESIDENTES

DE LOS

HONORABLES

TRIBUNALES SUPERIORES

DE JUSTICIA

MAGISTRADO RAUL BOLAÑOS CACHO
PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE
LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA

Señor diputado, licenciado José Elías Romero Apis, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Honorable Congreso de la Unión, señores diputados, señores magistrados presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, señores magistrados, hoy representantes de los titulares de los Poderes Judiciales de cada una de las entidades de la Nación.

En primer término deseo agradecer a nombre de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que me honro en coordinar, la invitación que esta Comisión de Justicia, a través de su presidente, el señor diputado Romero Apis, nos formulara para escuchar algunos comentarios, reflexiones relativas al fortalecimiento y al mejoramiento en la administración de justicia en el país; pero sobre todo en dos aspectos muy interesantes en lo que se refiere al anteproyecto de la Ley de Amparo que se encuentra en poder, en este momento, del Poder Legislativo Federal, para darle en su oportunidad la tramitología que el proceso legislativo merece.

Asimismo, un segundo tema sería el del fortalecimiento del federalismo judicial. Los comentarios, señores diputados, que mis colegas formularán en esta reunió, van a coadyuvar con las decisiones que ustedes tomen como legisladores en bien de la justicia del pueblo mexicano. Reciban nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por esta amable invitación.

MAGISTRADA ARACELI AGUAYO HERNÁNDEZ
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE QUERETARO

Creo que todos hicimos en su momento algún análisis de lo que inicialmente fue el proyecto de una Nueva Ley de Amparo y en donde participamos en una reunión en la ciudad de Mérida, Yucatán, el año pasado en noviembre.

En el caso particular de Querétaro sacamos varios puntos relativos a esta iniciativa, de los cuales no pretendo leerles su desarrollo sino única y exclusivamente las conclusiones a las que llegamos.

Dice: "… Que considerando que los órganos legislativos de cada entidad han ponderado y determinado un catálogo de delitos que deben ser considerados como graves en protección de aquellos bienes jurídicos que la propia sociedad ha jerarquizado de mayor importancia en su ámbito territorial, no es posible concebir que esta clasificación, resultado de las exigencias de una sociedad y un procedimiento legislativo de discusión y aprobación, sea alterado en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 164 del proyecto de la Ley de Amparo, donde se faculta a la autoridad de amparo para que, excepcionalmente y de acuerdo a las circunstancias del caso, conceda la suspensión definitiva aun cuando se trata de la imputación de un delito calificado como grave.

Esto traería como consecuencia que esta gente pudiera seguir gozando de libertad.

Segundo: Que las resoluciones de amparo contra leyes sólo deben ser en el sentido de determinar si la norma cuestionada es constitucional o inconstitucional, declarándose en este último caso su invalidez con efectos generales, excluyéndose la posibilidad de que la Corte realice la interpretación conforme de una ley que, pareciera, es inconstitucional, pero que para salvar la validez de ésta se corrijan sus deficiencias legislativas mediante esa interpretación, sustituyéndose con esto una actividad que es propia del órgano legislativo".

El desarrollo, Señor, se lo entregaría yo para que ustedes pudieran tomarlo en consideración, y aunado a esto lo único que agregaríamos es la preocupación que todos los tribunales tenemos, las autoridades jurisdiccionales, en cuanto al plazo que se nos está otorgando en este proyecto de ley para el cumplimiento de las sentencias de amparo.

Aun cuando sí se tomó en consideración que el plazo se ampliaba a tres días, sin embargo queda mucho en la discrecionalidad de la autoridad federal, jueces de distrito, tribunales colegiados, cuándo se considerará que la autoridad está siendo contumaz en el cumplimiento de esta sentencia de garantías.

Esto nos va a poner en una posición sumamente difícil porque hay asuntos que son sumamente delicados y que requieren de mayor estudio y a veces las sentencias de amparo no nos dan la luz suficiente como para saber qué cosa es exactamente lo que quiso decir la autoridad de amparo; de tal suerte que el hecho de que se nos sujete a este plazo perentorio para cumplir, puede hacernos incurrir en mayores injusticias y en que vengan en cascada otra vez amparos para efectos que se les llaman.

Nos explicaban los ministros de la Corte que esto se debe al incumplimiento constante que hay de las autoridades administrativas respecto de las sentencias de garantía que en general no tienen problemas con las autoridades jurisdiccionales, y en este sentido, si así es, quisiéramos que pudieran tomar en consideración que se hiciera distinción entre las autoridades jurisdiccionales y las autoridades administrativas para evitar caer en una situación que finalmente, a la larga llegaría a causar más problemas.

Magistrada Presidente del Tribunal de Quintana Roo si es tan amable de hacer su exposición y a veces las sentencias de amparo no nos dan la luz suficiente como para saber qué cosa es exactamente lo que quiso decir la Autoridad de Amparo, de tal suerte que el hecho de que se nos sujete a este plazo perentorio para cumplir, puede hacernos incurrir en mayores injusticias y en que vengan en cascada otra vez amparos para efectos, que se les llaman.

Nos explicaban los ministros de la Corte que esto se debe al incumplimiento constante que hay de las autoridades administrativas respecto de las sentencias de garantía, que en general no tienen problemas con las autoridades jurisdiccionales y en este sentido si así es, quisiéramos que pudieran tomar en consideración que se hiciera distinción entre las autoridades jurisdiccionales y las autoridades administrativas para evitar caer en una situación que finalmente a la larga llegaría a causar más problemas.

COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE MODIFICACION
AL PROYECTO DE NUEVA LEY DE AMPARO

Históricamente y hasta nuestros días, el juicio de amparo se ha erigido en nuestro sistema jurídico mexicano como la institución que por excelencia tutela a los integrantes de una sociedad, al dotarles de garantías que les permiten gozar con plenitud de los derechos consagrados en la Constitución Federal e impidiendo la afectación arbitraria de estos derechos por actos de alguna autoridad; sin embargo y como toda institución, es menester que sus disposiciones respondan a las necesidades actuales e imperantes de nuestro país, con el fin de brindar una eficaz protección a los derechos fundamentales del gobernado. Siendo este el motivo por el que nuestro Máximo Tribunal de la Nación, a través de una Comisión de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo, convocara y materializara el esfuerzo de poner en manos de la ciudadanía y comunidad jurídica un proyecto de nueva ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de perfeccionar las instituciones jurídicas que preservan nuestros derechos como gobernados y que, indudablemente, nos fortalece como una nación inmersa en un estado de derecho.

Con esta premisa, los comentarios y propuestas que se realizan sobre este proyecto de nueva ley de amparo son las siguientes:

SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL

Del Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera del proyecto de nueva ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende el articulado relacionado con la suspensión del acto reclamado, cuyas disposiciones pretenden alcanzar un punto de equilibrio en donde la suspensión, por un lado, cumpla con su función protectora y evite que a los gobernados solicitantes de esta medida cautelar se les causen daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, mientras es tramitado el juicio de amparo, y, por otra parte, mediante el establecimiento de requisitos que discrecionalmente deberá valorar el juzgador, se evite el otorgamiento de suspensiones que afecten la sensibilidad de la sociedad, precisándose para tal efecto en el artículo 126 del proyecto en comento que la suspensión se decretará en todas las materias, debiéndose ponderar para ello la apariencia del buen derecho con el interés social y que no se contravengan disposiciones de orden público.

Ahora bien, como reglas específicas de la suspensión en materia penal, se destaca que, además de describirse los efectos que tendrá la suspensión para diversas hipótesis que se presentan en esta materia, en el primer párrafo del artículo 163 del proyecto se señala que "cuando la privación de la libertad se lleve a cabo por virtud de orden de aprehensión, reaprehensión o auto de formal prisión, dictados por autoridad competente por delito que no sea considerado como grave, procederá la suspensión provisional y la definitiva", mientras que en el segundo párrafo de este numeral se dispone que "En los actos a que se refiere el párrafo anterior, si se trata de delito considerado como grave, no procede la suspensión provisional, Excepcionalmente, de acuerdo con las circunstancias del caso, podrá concederse la suspensión definitiva".

Es decir, que con la disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 164 se pretende, y así se explica en la parte introductoria del proyecto a manera de exposición de motivos, que la suspensión cumpla con la función protectora a una principio básico del derecho procesal penal que es el de presunción de inocencia, dotándose al juzgador con la facultad de examinar y determinar "…de acuerdo con las circunstancias del caso …" si concede la suspensión definitiva, aún cuando se trate de la imputación de un delito considerado como grave por la ley, lo que implica que deberá atender a la regla general que sobre la suspensión del acto reclamado contiene el artículo 126 descrito en líneas anteriores; sin embargo, se estima que con esta propuesta de facultad discrecional se desconoce que en virtud de la solicitud de suspensión el quejoso no tiene derecho a una situación jurídica más ventajosa de la que pudiera corresponderle dentro de la normalidad del procedimiento penal y que, por tanto, el juez de amparo no debe llegar al extremo de que goce de una libertad que el artículo 20 fracción I de la Constitución Federal le restringe, en virtud de que en este precepto se contiene a favor de la sociedad la garantía de que el imputado de un delito considerado como grave por la legislación punitiva sea segregado de su seno, mediante prisión preventiva, hasta en tanto no se dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar, sobreseimiento, sentencia absolutoria o la protección de la justicia federal, según sea el caso.

Estimándose que si bien el precepto constitucional de mérito alude a la libertad provisional bajo caución y no a la suspensión de amparo, lo cierto es que la directriz de esta disposición tiene su fundamento en el principio de bien jurídico, es decir, que siendo el derecho penal el último recurso o instancia de que se debe valer el Estado para resolver situaciones que ponen en riesgo la convivencia y tranquilidad de una sociedad, los órganos legislativos de cada entidad, atendiendo precisamente a los valores fundamentales que todo hombre necesita para su adecuada formación y desarrollo, han ponderado y determinado un catálogo de delitos que deben ser considerados como graves en protección de aquellos bienes jurídicos que la propia

sociedad ha jerarquizado de mayor importancia, por lo que no es dable concebir que esta clasificación, resultado de las exigencias de una sociedad y un procedimiento legislativo de discusión y aprobación, sea alterada, aunque sea relativamente, con una suspensión definitiva.

En contra de este planteamiento, es posible cuestionar que existe una multiplicidad caótica e injusta de disposiciones penales que afectan la noción de justicia y producen desigualdad entre los gobernados de un mismo país, por el hecho de que determinadas conductas delictivas sean consideradas como graves en una Entidad Federativa y en otras no; empero, se estima que la autoridad federal debe ser respetuosa de la soberanía de cada Estado y la voluntad de una sociedad que, a través de sus representantes legislativos, establece qué conductas delictivas son pertinentes clasificar como graves para una mayor tutela de aquellas bienes jurídicos que estima primordiales para su convivencia y desarrollo individual y colectivo, excluyéndose, por tanto, que en forma excepcional y "… de acuerdo a las circunstancias del caso …" se pueda conceder al quejoso la suspensión definitiva.

En estas condiciones, se propone que el segundo párrafo del artículo 164 del proyecto de Ley de Amparo examinado, como caso de excepción a la regla general contenida en el artículo 126 del mismo proyecto, únicamente establezca lo siguiente:

"En los actos a que se refiere el párrafo anterior, si se trata de delito considerado como grave, no procede la suspensión provisional".

DECLARACION GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DE INTERPRETACION CONFORME

En el Título cuarto, Capítulo IV artículos 230 y 231 del proyecto de nueva Ley de Amparo, se expresa, respectivamente, que "Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicios de amparo indirecto en revisión, establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o se establezca la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, se procederá a hacer la declaratoria general correspondiente" y que "Dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la aprobación de la jurisprudencia referida en el artículo anterior, la suprema Corte de Justicia formulará la declaratoria general de inconstitucionalidad o bien la de interpretación conforme. Previo a la declaración podrá convocar a quien estime conveniente para oír sus puntos de vista sobre los alcances de aquélla".

Apreciándose de lo anterior, que en tratándose de resoluciones de amparo contra leyes serán tres los sentidos que éstas pueden adoptar:

1.- Que nuestro Máximo Tribunal de la Nación determine que la normatividad combatida es constitucional;

2.- Que la Ley es inconstitucional y, por tanto, inválida con efectos generales, y

3.- Que se realice una interpretación conforme que, de acuerdo con la parte introductoria del proyecto de nueva Ley de Amparo, "…tiene la ventaja de permitir a la Corte establecer aquella interpretación mediante la cual sea factible salvar la constitucionalidad de la norma impugnada para, de esta forma, garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación de nuestro orden jurídico."

Empero, se estima que no es pertinente que nuestro máximo Tribunal de la Nación, se arrogue la facultad de realizar la interpretación de una ley que, pareciera es inconstitucional en su origen, pero que para salvar la validez de ésta se corrijan sus deficiencias legislativas mediante una interpretación, es decir, que se sustituye una actividad que es propia del órgano legislativo y que incluso, pudiera contrariar el propio espíritu de la ley que inspiró su creación. Por consiguiente se considera que las resoluciones de amparos contra leyes sólo debe versar en la declaración de si la norma cuestionada es constitucional o inconstitucional, declarándose en este último caso la invalidez con efectos generales de la norma; proponiéndose la redacción siguiente para los artículos 230, 231, 232 y 233 del proyecto que se examina:

Articulo 230. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicios de amparo indirecto en revisión, establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a hacer la declaratoria general correspondiente.

Artículo 231. Dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la aprobación de la jurisprudencia referida en el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia formulará la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Artículo 232.- La Declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, y;

II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Los efectos de esta declaración no será retroactivos, salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 233.- La declaratoria general de inconstitucionalidad, se remitirá al Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma respectiva para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles.

Como corolario de esta exposición, podemos señalar que las propuestas de modificación planteadas al proyecto de nueva Ley de Amparo se concretizan en lo siguiente:

PRIMERO.- Que considerando que los órganos legislativos de cada entidad, han ponderado y determinado un catálogo de delitos que deben ser considerados como graves en protección de aquellos bienes jurídicos que la propia sociedad ha jerarquizado de mayor importancia en su ámbito territorial, no es posible concebir que esta clasificación, resultado de las exigencias de una sociedad y un procedimiento legislativo de discusión y aprobación, sea alterada en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 164 del proyecto analizado, donde se faculta a la autoridad de amparo para que, excepcionalmente y de acuerdo a las circunstancias del caso, conceda la suspensión definitiva, aún cuando se trate de la imputación de un delito calificado como grave.

SEGUNDO.- Que las resoluciones de amparo contra leyes sólo deben ser en el sentido de determinar si la norma cuestionada es constitucional o inconstitucional, declarándose en este último caso su invalidez con efectos generales, excluyéndose la posibilidad de que la Corte realice la interpretación conforme de una ley que, pareciera, es inconstitucional, pero que para salvar la validez de ésta se corrijan sus deficiencias legislativas mediante esa interpretación, sustituyéndose con esto una actividad que es propia del órgano legislativo.

MAGISTRADA LIZBETH LOY SONG ESCALADA
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Después del análisis del proyecto de la Ley de Amparo a que fuimos invitados en el año anterior, tenemos una pequeña conclusión específicamente en el capítulo sobre las sanciones a que seríamos expuestos en caso de incumplimiento en los términos señalados por la autoridad federal.

Me voy a permitir leer un concentrado de esto porque es bastante amplio: "Proyecto de la Nueva Ley de Amparo: entre otros aspectos que pueden considerarse como inconvenientes por su repercusión en la impartición de justicia local, el proyecto contempla que para el cumplimiento de la Sentencia de Amparo, una vez que cause ejecutoria o se reciba testimonio de la dictada en revisión, y una vez que se le haya notificado a la autoridad responsable para su cumplimiento, ésta dentro de un plazo de 24 horas, deberá informar su cumplimento en casos urgentes y en 3 días en los casos restantes.

Artículo 190: De no ocurrir lo anterior, se impondrá una multa a la autoridad responsable y se le requerirá a la Autoridad Superior para que obligue a cumplir con la sentencia.

Artículo 191: Si a pesar del requerimiento -dice la Ley- no se obedeciere la ejecutoria, se impondrá también una multa a la autoridad Superior, remitiéndose el expediente original a la Suprema Corte a fin de procurar su exacto y debido cumplimiento.

Artículo 192: Pero además, en cuanto a esta ejecución de la sentencia, podría considerarse antijurídico en poder juicioso de la Autoridad de Amparo, ya que aún cuando la autoridad responsable haya hecho el ordenado en vía de cumplimiento de ejecutoria, todavía queda a la apreciación subjetiva del Tribunal de Amparo sobre si se ha cumplido o no.

Artículo 193: De manera correlativa, pero en la parte de medidas disciplinarias y de apremio el proyecto establece que el Tribunal de Amparo, para hacer uso de sus determinaciones bajo su responsabilidad y criterio podrá hacer uso indistintamente de las medidas de apremio, como lo son multa, auxilio de la fuerza pública y ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público. Es decir, sin que exista una orden de prelación para la aplicación de estas medidas.

Artículo 237: Pero así como se exige el mínimo de tiempo a la autoridad responsable para resolver o complementar las resoluciones, el proyecto contempla la figura de la ampliación de la demanda de amparo, dando pie a la dilación y la suspensión del proceso, así como también presupone falta de probidad y responsabilidad de quien intente el Juicio de Amparo.

Artículo 110…" Este comentario es en términos generales de la preocupación que tenemos las autoridades jurisdiccionales ante el cumplimiento de las ejecutorias federales.

Como lo mencionó la Magistrada Araceli, tenemos variedad de ejecutorias en diferentes casos. En Quintana Roo se nos ha presentado indistintamente los cumplimientos debido al alto índice de asuntos económicos que se presentan y cuando son necesariamente la presencia de la parte interesada o de su apoderado para el emplazamiento.

Específicamente en los Mercantiles, cuando necesitan señalar bien después del requerimiento; si la parte interesada no se presenta aún después de que se le ha dado vista, se le ha notificado de que se va a hacer el emplazamiento debido a un cumplimiento de ejecutoria federal, su inasistencia nos imposibilita a este cumplimiento.

El Colegiado nos dice cuando le regresamos estas ejecutorias que no se le ha dado estrictamente el cumplimiento. Efectivamente así lo es, pero esto no es imputable a la Autoridad Jurisdiccional porque necesita la presencia de la parte interesada, de la parte actora para efectuarlo y nos vemos ante la disyuntiva del no cumplimiento para ellos.

Señores diputados: les solicitamos atentamente y de la manera más respetuosa se tomen en cuenta todos nuestros comentario en los diferentes renglones que en forma directa nos veríamos afectados con este proyecto de la Ley de Amparo, de ser aprobados en estos términos.

MAGISTRADO VICTOR ROLANDO DIAZ ORTIZ
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

Muchas gracias señor diputado y licenciado José Elías Romero Apis, por esta atenta invitación que nos permite externar algunas preocupaciones y algunas propuestas en relación con este proyecto de Nueva Ley de Amparo.

A nombre de los integrantes del Órgano de Administración e Impartición de Justicia del Distrito Federal y en torno del proyecto de Nueva Ley de Amparo, con la brevedad que el tiempo permite, nos permitimos hacer dos propuestas:

Primera: Creación de las Cortes Estatales. Como parte del Pacto Federal de 1824, se estableció que en cada estado las causas civiles y criminales de que conocieran los Tribunales serían fenecidos en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia.

Esta autonomía e independencia de los Tribunales de Justicia quedó truncada en el Constituyente de 1917, al redactarse el artículo 107 constitucional y en donde hubo algunos votos particulares, entre ellos el de Heriberto Jara e Hilario Medina, que ya en otra ponencia nos permitimos transcribir, por lo que se sugiere reformar su fracción III del 107 para que en respuesta a nuestro Sistema Federal, se restituya a las Tribunales su autonomía e independencia.

La competencia de estas Cortes de Casación se circunscribirían a los asuntos derivados de las leyes locales de las entidades federativas, por lo que el conocimiento y resolución de juicios y controversias derivadas de la aplicación de leyes federales a virtud de la jurisdicción concurrente, quedarían fuera de este planteamiento.

Las Cortes de Casación, deberán tener facultades para resolver con plenitud de jurisdicción y no repetir el error actual en donde los Tribunales Colegiados de Circuito, que técnicamente son Cortes de Casación pero carecen de jurisdicción.

Esto con el fin de no violentar la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional que consagra que la justicia debe ser pronta y expedita, pues justicia que no es expedita no es justicia.

El segundo tema que de alguna manera repite lo que ya las señoras magistradas Araceli y Lizbeth han abordado, es el cumplimiento de las ejecutorias por parte de las autoridades señaladas como responsables.

En la vigente Ley de Amparo, existe un procedimiento debidamente claro, señalando que deberá de hacerse dentro del término de 24 horas cuando el acto lo permita, en caso diverso, deberá informarse las vías de ejecución y se precisa que cuando la ejecutoria consista en dictar nueva resolución en el expediente que haya motivado el acto reclamado, se exceptúa de la regla general y deberá hacerse mediante el procedimiento que establezca la Ley, artículo 111 de la Ley de Amparo.

No obstante esta claridad, todos los tribunales de Justicia del Fuero Común de la República Mexicana, sufren la presión de pretender que se dicten nuevas resoluciones reestudiando los expedientes y analizando las pruebas dentro del término de 24 horas, lo cual resulta jurídica y físicamente imposible, máxime que los juzgados de Distrito y tribunales colegiados de circuito, al carecer de jurisdicción no entran al fondo del asunto propiciando el alargamiento de los juicios en detrimento y en perjuicio del propio justiciable.

En el proyecto Nueva Ley se amplía el término de 24 horas a 3 días, pero con facultades para imponer multas y aún para iniciar el procedimiento de la separación del cargo de la autoridad responsable y de su superior jerárquico, así como la consignación.

Si la autoridad para cumplir con las ejecutorias de amparo reasume jurisdicción, deberá contar con los mismos plazos que ya establecen las leyes procesales, de otra manera vendrá la incorrecta interpretación de la Ley de Amparo y en lugar de una colaboración en beneficio de una mejor y pronta administración de Justicia, generará en el justiciable la visión de enfrentamiento, por lo que se sugiere replantear y reestudiar todo el título III del proyecto.

Todo esto que se propone, más que ir en beneficio de lo que está sucediendo en la Suprema Corte con ese crecimiento desmedido o la carga de trabajo de los tribunales del Fuero Común, yo creo que estamos perdiendo de vista la figura más importante en esos temas: el justiciable, el que está fuera de este contexto, el que necesita una justicia pronta y expedita, el que quiere la credibilidad en la justicia y creo que nos estamos apartando de ello.

MAGISTRADO CARLOS CARMONA CASTILLO
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO

En primer lugar quiero destacar que la breve propuesta que me voy a permitir presentar respetuosamente, la traigo debidamente documentada y la cual haré entrega en la Comisión para los efectos que correspondan.

Distinguidos diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados: En primer término, a nombre del señor magistrado, licenciado José Hugo Martínez Ortiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, así como de los señores magistrados que integramos dicho Tribunal, deseo agradecer a los señores diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el espacio que ahora se nos brinda y que nos da la gran oportunidad de expresar algunos puntos de vista que se han venido generando al interior de quienes formamos parte del Poder Judicial de nuestra entidad federativa en torno al proyecto de la Ley de Amparo planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque se hará en forma breve y respecto de un solo tema del gran universo que contiene ese proyecto de Ley, tratando de ser respetuosos del tiempo y atención que se nos dispensa.

Desde luego, debemos reconocer el gran trabajo, dedicación y esfuerzo que se dedicó para que finalmente los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaran el proyecto de la Ley de Amparo y de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia y ponerlo finalmente no sólo de los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, sino también al concierto que integra la Comunidad Jurídica Nacional.

Se destaca en esta obra la intención firme y vigorosa de sus creadores, de contribuir con este proyecto en la creación de una nueva relación jurídica con la sociedad en la que no impere la violencia y resplandezca la libertad, la paz y la justicia, lo cual para lograrlo, se debe contar con mejores leyes que garanticen la plena vigencia de nuestra Constitución, así como una mayor capacidad para aplicar la Ley y sobre todo una administración e impartición de justicia más eficaz.

Tal verdad es incuestionable, más cuando se trata precisamente de revisar, actualizar, perfeccionar y adaptar a los nuevos tiempos, desde el ámbito estrictamente constitucional y reglamentario, la institución de mayor importancia y trascendencia en

nuestro país, que hace posible la defensa de nuestra Carta Magna y de las garantías individuales que consagra para todos.

Muchos aspectos son de comentarse y analizarse, desde la perspectiva contenida en el proyecto de la Ley de Amparo, sin embargo uno es en el que ahora nos concentraremos y que atiende particularmente al cumplimiento seguimos, tal como se establece en alguna parte de la exposición de motivos del proyecto, que el respeto al derecho por los demás debe ser exigido en primer lugar a aquellas personas que ejercen el poder y que desarrollan funciones propias del Estado.

También, que un Estado que pretenda aspirar a que sean las normas jurídicas las que rijan su vida en sociedad, debe tener como uno de sus principales compromisos el de velar porque la actuación de sus autoridades se realice con estricto respeto a los derechos y al patrimonio de sus gobernados.

Pero de nada sirve el reconocimiento de nuestros derechos, si no contamos con medios eficaces para hacerlos valer y ni mucho menos agregaríamos si teniéndolos, las decisiones o sentencias pronunciadas no son cumplidas o acatadas por quien debe de hacerlo.

En el capítulo introductivo de dicho manual retomaría la idea. De acuerdo con los mecanismos legales que para el cumplimiento de las sentencias establecidas en la Ley de Amparo actualmente en vigor, la problemática que se ha generado en la práctica, en aquellos casos en que no se cumple de inmediato la ejecutoria de amparo o dejan de cumplirse, no ha radicado en virtud de una contumaz desobediencia por parte de la autoridad responsable que debe cumplirla, ellos, seguramente salvo en contados casos muy identificados.

Lo antes afirmado puede corroborarse con lo anotado por el actual ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer la presentación del manual que editó en 1999 dicha Suprema Corte, para lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo y en donde después de destacar la rica experiencia que en este renglón obtuvo en ese tiempo la unidad de gestión y dictamen de cumplimiento de sentencias y en la propia Suprema Corte de Justicia, señaló también que en ella se destacan los problemas más frecuentes y los errores en que incurren, tanto los quejosos como las autoridades responsables y por qué no decirlo, en ocasiones también los tribunales federales, al tratar de dar cumplimiento a un fallo protector que incide para que éste no se obtenga rápida y eficazmente.

Tal expresión fue confirmada inclusive por el propio titular de la unidad de gestión y dictamen de cumplimiento de sentencias, en el capítulo introductivo de dicho manual operativo, cuando al cuestionarse a qué obedecía el número importante de asuntos que arriban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía incidentes de inejecución de sentencias, plateó como respuesta que en muchos casos así sucede, porque las autoridades responsables con el fin de eludir su cumplimiento nada hacen por acatarlas o bien realizan actos que no trascienden al núcleo esencial de la obligación exigida, sin la clara intención de agotar el cumplimiento.

Más destacó también textualmente que, sin embargo, la experiencia ha demostrado que en muchos de los casos las autoridades responsables no cumplen, no porque esa sea su voluntad, sino porque en realidad desconocen con exactitud la manera de acatar en sus términos el fallo protector, sobre todo cuando se trata de autoridades administrativas que por lo regular no son doctas en materia de amparo.

Ciertamente a través del estudio de los asuntos y de la elaboración de los proyectos respectivos se ha visto que en un algo porcentaje, las sentencias protectoras no son claras ni precisas y en ocasiones son incongruentes.

Es decir, no establecen con precisión los actos que las autoridades responsables deben realizar para cumplir con ellas, esto crea confusión e incertidumbre en las autoridades, pues no saben a ciencia cierta la forma de acatar tales sentencias.

Estas dificultades inclusive han conducido a que sea esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la que establezca los alcances tutelares de la ejecutoria de amparo; señale las autoridades obligadas a cumplirlas y la medida en que cada una de ellas debe participar, hasta el grado de que existe jurisprudencia definida que otorga esas facultades a este máximo tribunal, hasta aquí la cita.

Lo antes señalado permite reafirmar entonces, que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo no obedece como regla general a que las autoridades responsables no lo hacen, no porque sea su voluntad ni tampoco que en este orden se encuentren de manera prominente todo tipo de autoridad de responsables, sino que esto prevalece sobre todo cuando se trata de autoridades administrativas que por lo regular no son doctas en materia de amparo, así como a otra clase de circunstancias, tales como que en un alto porcentaje las sentencias protectoras no son claras ni precisas y en ocasiones son incongruentes. Problema, éste último, que desde luego en el articulado de referencia también se trata de manera especial en el proyecto de ley.

Luego, a pesar de que existe una experiencia única de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema que ahora se trata, en la cual se han destacado los principales factores que influyen para que una autoridad responsable no quiera o no pueda cumplir una sentencia de amparo, además de que tal actitud prevalece de manera notoria de parte de las autoridades de naturaleza administrativa, resulta paradójico ahora que en proyecto de Ley de Amparo, so pretexto de remediar algunas deficiencias que presenta el sistema actual para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, según el contenido de los artículo 190 a 196 y demás relativos, se pretenda establecer como remedio medidas coercitivas para obligar a las autoridades responsables a cumplir con las sentencias de amparo y sanciones importantes ante su incumplimiento a las que se califican de más eficaces y en las que de manera inmediata para el incumplimiento de la sentencia no sólo se involucra desde el primer momento exclusivamente a la o las autoridades responsables directamente vinculadas en ello, sino que desde ese mismo momento se implica al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que desde su ámbito de competencia ordene al inferior cumplir con la ejecutoria, lo cual si no lo demuestra se hace acreedor a la imposición de una multa, además de que se hace merecedor de las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, las que culminarían en el extremo con la separación del puesto y con pena de prisión.

De tal manera que desde el mismo momento en que la autoridad de amparo ordena la notificación de la sentencia ejecutoria a las autoridades responsables para que de cumplimiento con la misma, debe hacer lo mismo con el superior jerárquico de dicha autoridad, lo cual provocaría un número elevado de actuaciones que se antojan innecesarias, pues no sólo el órgano jurisdiccional de amparo tendría que estar permanentemente ordenando esa clase de requerimientos, sino que también la autoridad superior jerárquica de referencia tendría que estar desahogando igual número de órdenes al inferior, para que cumpla con la ejecutoria de amparo, lo que tendría que estar justificando de la misma manera ante la autoridad de amparo, so pena de ser sancionada, lo cual desde ahí los mecanismos legales que se plantean a nuestro juicio, no estarían resultando tan eficaces como así se pretende en el proyecto referido.

Y por otra parte, es evidente que la propuesta de establecer las medidas coercitivas y las sanciones de la envergadura que se plantean, en las que para su aplicación se involucran al o los superiores jerárquicos de las autoridades responsables en la forma ya señalados, tampoco generaría mejores condiciones para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, sino que por el contrario, conociendo entonces los principales factores que inciden de manera identificada por no obtener el cumplimiento de una sentencia de amparo, el propósito fundamental que debe seguirse en esta

materia, primero, es lograr el efectivo cumplimiento de parte de las autoridad responsable que corresponda, y segundo, que cuando se refiera al superior jerárquico su participación como tal, en su caso, debe plantearse en la ley como un auténtico coadyuvante de la autoridad de amparo, para que los fallos constitucionales queden completamente cumplidos, lo cual es el propósito fundamental y sólo por excepción cuando se trate de una contundente renuencia de las autoridades responsables de acatar las ejecutorias, se obligue entonces al superior jerárquico a coadyuvar en ese sentido y también sólo en extremas excepciones, esto es en caso de flagrante desobediencia contumaz puedan la autoridad responsable y su superior jerárquico ser objeto de una medida disciplinaria o sanción extrema.

Por lo anterior consideramos que es necesario sugerir que en su oportunidad, el Congreso de la Unión al discutir la iniciativa mantenga presente que la autoridad de amparo, para obtener el eficaz cumplimiento de una ejecutoria en la que lo haya otorgado, es importante que al dictar las medidas necesarias tome como base la naturaleza del acto reclamado, pues no puede aceptarse que en la ley de la materia se establezca un mismo procedimiento, que invariablemente debe atenderse para todos los casos y además que las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos sólo en caso de flagrante desobediencia contumaz, puedan ser objeto de una medida disciplinaria o sanción extrema, después de que se mida la culpa subsidiaria en el cumplimiento de las partes a quien no haya favorecido la justicia federal.

MAGISTRADO JULIO LORENZO JÁUREGUI GARCIA
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE GUERRERO

Se han vertido temas realmente importantes, como señalaba la magistrada Presidenta de Querétaro. Tuvimos oportunidad de trabajar en Mérida, en el mes de noviembre, convocados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para analizar el anteproyecto de Ley de Amparo.

Dos vertientes quisiera puntualizar en esta sesión de trabajo.

Primero. El tiempo que se da para el cumplimiento de las ejecutorias. Ya se han comentado en esta mesa el tiempo que se está dando, que nosotros en aquella ocasión consideramos que deberían ser 8 días cuando menos, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

Quiénes no en una sala penal, en una sala civil, en una sala de lo familiar inclusive, nos han llegado expedientes de 7, 10, 30 tomos y que realmente esos tomos de primera instancia, primera instancia nada más, para poderlos analizar como nos ordena la sentencia de amparo, cuesta tiempo, cuesta mucho trabajo y que en 24 horas no lo podemos hacer.

Nosotros hemos propuesto y seguimos insistiendo que debe ser cuando menos 8 días para darle cumplimiento, más a una sentencia de amparo, porque además el órgano jurisdiccional, llámese jurado de primera instancia, llámese sala, no es el único asunto que tenga que resolver dentro de esas 24 horas.

Pensemos en un juzgado penal en donde el término está corriendo, hay detenidos, hay que examinar en preparatoria, hay que resolver términos constitucionales, hay que dentro de términos librarlas órdenes de aprehensión, en fin, es un cúmulo de trabajo que se tiene en los juzgados de primera instancia, es un cúmulo de trabajo que se tiene en las salas también y que un término de 3 días para el cumplimiento de una sentencia de amparo no es suficiente.

Queremos dejar constancia en esta sesión de trabajo este aspecto, esta inquietud y muy respetuosamente solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que nos ha convocado, tome muy en cuenta estos aspectos, de manera particular, que estamos planteando, para que sea un soporte o sustento y poder ampliar válidamente el término para dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

En el segundo aspecto yo sí quisiera hacer hincapié en cuanto al rubro de sanciones. Tal parece que la Ley de Amparo se ha vuelto más económica por las multas tan elevadas, que por faltas u omisiones o incumplimientos en que puedan ocurrir las autoridades responsables se ha puesto o plasmado en el proyecto.

Primer lugar, debemos decirle que como el estado de Guerrero, hay otros también estados pobres. Nuestros jueces de primera instancia no ganan bien, nuestros jueces de paz, que también están sujetos a la acción de la Ley de Amparo tampoco ganan bien y las multas que se les pudieran aplicar a estos servidores públicos por alguna omisión o incumplimiento, básicamente se les va una quincena, si no es que es un mes de sueldo.

En ese sentido, el importe de las multas que se están tratando tengo la impresión que salen del presupuesto federal o tomando en cuenta que van dirigidos a los magistrados o jueces del Distrito de la Federación, sin tomar en cuenta que estados como Oaxaca también, Chiapas y Guerrero y otro estado, los sueldos que se tienen para nuestros jueces no son sueldos o plasmado en el proyecto

En primer lugar, debemos decirles que como el estado de Guerrero, hay otros también estados pobres. Nuestros jueces de primera instancia no ganan bien, nuestros jueces de paz, que también están sujetos a la acción de la Ley de Amparo tampoco ganan bien y las multas que se le pudieran aplicar a esos servidores públicos por alguna omisión o incumplimiento, básicamente se les va una quincena si no es que un mes de sueldo.

En ese sentido, el importe de las multas que se están tratando, tengo la impresión que salen del Presupuesto Federal o tomando en cuenta que van dirigidos a los magistrados o jueces de distrito de la federación, sin tomar en cuenta que estados como Oaxaca también, Chiapas y Guerrero y otro estado, los sueldos que se tienen para nuestros jueces no son sueldos buenos, no son sueldos decorosos.

Entonces, en este sentido el estado de Guerrero plasma en esta mesa de trabajo, su inquietud, con su participación, de que se moderen y se regulen en el capítulo de multas, las multas están excesivamente elevadas y al paso que vamos nadie va a querer ser juez de paz o juez de primera instancia, porque con una multa que le ponga el juzgado de distrito se queda sin comer un mes.

MAGISTRADO FELIPE CHAVEZ CARRILLO
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA

Licenciado José Elías Romero Apis, presiente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, señores integrantes de la misma.

En primer término, deseo agradecer la convocatoria que la Comisión a su cargo ha hecho para que los poderes judiciales locales nos pronunciemos en torno al proyecto de la Ley de Amparo, presentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este acto, es una muestra de la voluntad política de esa Comisión y manifiesta un plausible interés de sus integrantes por lograr un sistema de impartición de justicia acorde con las necesidades de nuestra sociedad.

En general, podemos decir que la Ley de Amparo que propone la Suprema Corte de Justicia, supera con mucho la Ley vigente, no sólo en cuanto a su sistematización y coherencia interna, sino que integra nuevas figuras, supuestos de procedencia de amparo y la suspensión y ampliar plazos para la promoción del juicio de las garantías que redundan en la institución moderna de mayor alcance para proteger los derechos de los gobernados.

Sin embargo, hay algunos aspectos que merecen ser reconsiderados. En el proyecto se encuentran cuestiones que por su naturaleza, deben estar contempladas en la Constitución General de la República. El artículo 1º concretamente, se propone que el amparo proceda por violación de garantías, ya sean individuales o sociales, así como por violaciones a los derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales que están de acuerdo con la Constitución.

Tal acto se traduce en la obligatoriedad para las autoridades de respetar los derechos humanos, no comprendidos dentro de la parte dogmática de nuestra ley fundamental. Por ello, este reconocimiento debe formar parte de la reforma constitucional que se propone, en el sentido de incorporar en la parte dogmática el reconocimiento de los derechos humanos distintos a las garantías individuales, contenidas en el texto constitucional.

Segundo, de acuerdo con el artículo 8º del proyecto, las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso, podrán por medio de oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para efecto de que rindan pruebas, aleguen, hagan promoción o se interpongan recursos, se establezcan reglas de representación y sustitución para el Presidente de la República, los gobernadores, los estados, jefe del Gobierno del Distrito Federal, procuradores generales de la República y las entidades federativas, titulares de las dependencias de la Administración Pública, federales, estatales y municipales.

Sin embargo, omitió precisar las reglas atinentes a la representación de los órganos de gobierno colegiados, como serían el congreso del estado y los tribunales superiores de justicia en las entidades. En todo caso, tales reglas se encuentran previstas en las constituciones locales y leyes orgánicas de las propias entidades, pero sería necesario incorporarlas al texto de la ley.

Tercero, mientras que dentro del proyecto se trata de preservar la definitividad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, al declarar este artículo 59, fracción II, la improcedencia en su contra del juicio de amparo, no se aplica el mismo criterio tratándose de las resoluciones judiciales de las entidades federativas, con las que así procede el amparo directo.

Aquí surge la pregunta, ¿tendrán las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, un ente administrativo de mayor relevancia que las decisiones de los tribunales locales?

¿Merecen una tutela más eficaz las resoluciones emitidas por los órganos administrativos y de justicia electoral, que los tribunales del fuero común, los cuales fueron parte de los gobiernos de los estados libres y autónomos?

Para justificar el régimen de excepción al que sujetan esas determinaciones, se invoca como fin, dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución en cuanto al carácter definitivo e inatacable que deben tener las resoluciones del Consejo.

En todo caso, también se encuentra previsto en la ley fundamental, el sistema de distribución de competencias y facultades entre la federación y las entidades y en ese sistema no se da justa cabida al proyecto.

Cuarto, en el proyecto que se analiza, insiste la tendencia de descansar en el Poder Judicial Federal atribuciones que en estricto derecho corresponden a los estados. Ello

resulta palpable al dar lectura al artículo 106 del proyecto, prevé los supuestos de procedencia de amparo indirecto, entre ellos los incisos d, e, g y h, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o por motivo del primer acto de su aplicación causan prejuicio al quejoso.

Se entiende por normas generales, entre otras, las constituciones, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general emitidas por los estados y el Distrito Federal.

Aunque el concepto de normas generales, por su amplitud supera la redacción de la ley vigente, subsiste el sistema que hace de los tribunales federales, según la instancia de cualquier controversia que se presente en las entidades de la República. De ahí que se propone la exclusión de los mencionados incisos de la fracción I del artículo 106 del proyecto, pero tal acto debe llevar aparejada una reforma constitucional y de las condiciones locales, para crear las cortes constitucionales locales.

Quinto, el artículo 230 del proyecto, establece que la declaratoria general de inconstitucionalidad o interpretación con fondo de una norma general, es competencia de la Suprema Corte de Justicia. Consideramos que esa declaratoria debe ser competencia de una Suprema Corte Constitucional, cuyas atribuciones y características se contemplan en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tal facultad debe estipularse en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 107 constitucional.

Por otra parte, esta declaratoria debe surgir exclusivamente de asuntos en los que se contravierta la constitucionalidad de la norma, conforme a procedimientos específicos para ese fin y no de meros litigios entre particulares, en los que diriman intereses privados. El amparo no es la vía adecuada para privar de efectos una norma general, pues lo es para la protección de las garantías individuales.

Sólo un Tribunal Constitucional, único, independiente y exclusivo en su orden, debe tener la potestad del supremo intérprete de la Constitución y en consecuencia, resolver con afecto la constitucionalidad de una norma general.

MAGISTRADO JULIO MENCHACA SALAZAR
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO

En primer término, señor Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, agradecer esta invitación, que tengo entendido no tiene precedentes. Igualmente, a las señoras y señores diputados que integran la misma.

Con su permiso señoras y señores magistrados, yo quisiera profundizar en un tema que podría concretar lo que se ha venido platicando, que es el federalismo judicial, el momento que vive nuestro país, en donde la visión democrática es un gran escenario, deben de participar forzosamente los poderes judiciales locales. Esto es, como se ha venido diciendo, en los tribunales locales se descarga una gran parte de las controversias que existen entre los integrantes de la sociedad.

En el tema de federalismo judicial, subtemas podrían ser, como ya se ha manejado un punto medular, la nueva Ley de Amparo. No solamente en la preocupación manifestada por mis compañeros magistrados en cuanto a las sanciones a jueces y magistrados, sino también en otros puntos que sería muy interesante revisar conjuntamente, como es la revisión y como es el amparo directo.

También derivado de la Ley de Amparo, estaría en el tema de la discusión lo que hemos denominado las cortes locales, las cortes de casación y la distinción de la legalidad y la constitucionalidad. Es motivo también de preocupación, debe ser motivo de preocupación de esta Comisión, es motivo de preocupación de la Comisión Nacional de Tribunales, el que la nueva Ley de Amparo pueda permitir tener un instrumento de protección constitucional moderno y como lo exigen hoy en día los mexicanos.

Y un tema que ya se tocó y que quisiera ahondar, es en cuanto a lo que se refiere a los recursos. Hoy día, los tribunales locales tenemos una gran carga de trabajo, tenemos el manejo absoluto de la materia mercantil, que ya no es concurrente, ya es delegada. Nos implican en los tribunales locales en un porcentaje variable del 50 al 60 por ciento de los asuntos en los juzgados civiles.

También nos es una gran carga de trabajo, la que se nos deriva de los juzgados de distrito y de los colegiados, en cuanto no solamente a la notificación en juicios federales, sino incluso, en el desahogo de testimoniales y en otras diligencias judiciales, que son una gran carga de trabajo para los tribunales.

Yo sometería con todo respeto a esta Comisión, dos puntos en los que hemos coincidido en muchas reuniones los presidentes de tribunales. En primer término, ponernos a sus órdenes, señor Presidente, señores integrantes de la Comisión, para en los temas puntuales de la Ley de Amparo y de cualquier otra que ustedes consideren, un elemento como un actor social de participación y de opinión.

Y en la segunda, el que se considerara, como ha sido un reclamo desde hace muchos años de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el que existieran recursos federales para apoyar a los tribunales locales.

Un elemento tan esencial, tan fundamental como es la justicia, no puede estar sujeta exclusivamente a la buena voluntad o a la elaboración de leyes, como en este caso la Ley de Amparo. Ni siquiera con una ley de avanzada, como pensamos que ésta debe de ser.

Mencionaba el señor Magistrado de Guerrero un punto interesante, existen estados como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, como el mismo Hidalgo, en donde los recursos son exiguos. Entonces, si pusiéramos como es una solicitud de algunos magistrados y diputados, un porcentaje en la Constitución, nos generaría un conflicto en cuanto a poder estirar los recursos con el Ejecutivo, con el Legislativo. Si ha habido una consideración por parte del Congreso de la Unión a la Suprema Corte de Justicia para aumentar sustancialmente esos recursos, creo que debemos ya revisar que existan recursos federales para los tribunales locales.

Se mencionaban también las diferencias abismales que hay entre lo que gana un juez local con un juez federal. Yo creo que ningún presidente de tribunal gana lo que gana un juez federal, ya no digamos un magistrado o un ministro.

Mi posición muy respetuosa para la Corte, no es que no lo merezcan que se gane, pero esas diferencias abismales en el trabajo y en la percepción, van generando una falta de funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país.

Entonces, para concluir, quisiera también hacer el comentario de que hemos tenido contacto con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a través de una iniciativa del señor diputado Tomás Torres, a través del diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad y yo creo que lo que mencionaba en un principio, que no existen precedentes, es de resaltarse, es de agradecerse y es de aprovecharse.

MAGISTRADO RIGOBERTO GONZALEZ TORRES
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO MÉXICO

Señor diputado José Elías Romero Apis, señores diputados integrantes de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señores presidentes de los tribunales superiores de justicia.

En representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, agradezco la invitación que esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos formularán y que pudieran servir para que, en un momento determinado, se enriqueciera esta discusión sobre el anteproyecto de la ley de amparo.

Ya se ha hablado sobre algunos aspectos de la Ley de Amparo y sobre algunos aspectos del fortalecimiento del federalismo judicial.

En este caso me referiré a este último aspecto en forma breve en atención al tiempo de todos ustedes.

Nuestro sistema judicial, el sistema judicial vigente en nuestro país contempla someramente la tramitación de 2 instancias ante las entidades federativas: una ante un juez de primera instancia y su apelación correspondiente ante las salas de los Tribunales Superiores de Justicia.

Invariablemente, estos asuntos van a ser impugnados mediante el juicio de amparo y acudirán, estos juicios, a ventilarse ante los tribunales colegiados. Estos tribunales colegiados realizan, como se ha mencionado en esta tarde, la función de un tribunal de casación. Los tribunales colegiados, fundamentalmente, realizan esta función de tribunales de casación. ¿Cuál sería la conveniencia de dejar que esta función pasara a las entidades federativas? Sería el de acercar aún más la justicia a los ciudadanos de cada una de las entidades. Sería tanto como democratizar la justicia, hacer que las entidades federativas recuperaran aquel poder que, como también se dijo aquí, se consagró o se contemplaba la Constitución de 1824. Ahí es donde se estaba contemplando esa división de poderes, también en las entidades federativas; es decir, que en cada uno de los estados existiese un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y también un Poder Judicial.

Un sistema como el que actualmente rige, hace nulatorio el Poder Judicial en las entidades federativas, ¿por qué? Porque invariablemente la última instancia no serían los tribunales superiores de justicia, serían los tribunales colegiados.

Antiguamente se dejó o se pensó en solucionar el problema del control de la constitucionalidad y dejarlo a la Suprema Corte, y hacerlo porque se pensaba que el juicio de amparo, esa entidad que surge en México y que se pretendía conservar como uno de nuestros máximos valores jurídicos, fuera la garante de este tipo de situaciones.

Sin embargo, los tiempos han cambiado, posteriormente surgieron los tribunales colegiados y fueron pulverizándose, atomizándose, al grado tal de que en cada entidad federativa tenemos varios tribunales colegiados que funcionan como cortes de casación. Por qué, entonces, dejar que la federación realice esta función si son los estados, quienes desde los orígenes de nuestra historia constitucional, eran quienes deberían conservarlos.

Si nosotros permitimos la creación de estas cortes estatales, este fortalecimiento del federalismo judicial haría que, en realidad, funcionaran 3 poderes en las entidades federativas; de otra manera no se da un verdadero ejercicio del Poder Judicial en cada uno de los estados. Éste, como decía yo, se traslada al Poder Judicial de la Federación, a través de los tribunales colegiados.

¿Cuáles son las desventajas de que sean los tribunales colegiados quienes conserven esta función y que realicen estas atribuciones de casación? Primero, los juicios de amparo, todos nosotros los conocemos, quienes estamos dentro de los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas, son muy tardados, son retrasadas las resoluciones, la tramitación de un juicio de amparo, básicamente, dura entre 8 meses y un año, en cambio se agilizaría el trámite dejando que las entidades federativas instituyeran estas cortes de casación.

Segundo. El permitir la creación de las cortes de casación haría que personal capacitado y con pleno conocimiento de la legislación aplicable se encargara de resolver las controversias judiciales.

Es muy frecuente que a nivel federal encontremos cómo son trasladados los magistrados de circuito de Chihuahua a Yucatán o de Chiapas a Tamaulipas o a

Jalisco, cuando los magistrados de circuito llegan a cada una de esas entidades federativas, desconocen la legislación aplicable.

Quiénes más que los magistrados, quiénes más que esos profesionales del Derecho, que toda su vida profesional han estado en contacto con la legislación de esa entidad, sean quienes resuelvan. Lógicamente serán quienes conozcan con mayor perfección la aplicación de estas normas.

Finalmente, los magistrados de circuito difícilmente tienen una especialización. Lo mismo son trasladados de un tribunal laboral a uno penal o a uno civil, sin importar condición alguna.

Generalmente, en nuestros tribunales superiores de justicia tenemos una especialización que permite que se vayan especificando los conocimientos sobre las áreas a las que nos dedicamos.

Éstos son algunos de los apuntamientos de carácter práctico que me permito someter a la consideración de esta Comisión de Justicia y Derecho Humanos, para abundar un poco sobre lo que ya se ha expresado en esta tarde.

MAGISTRADO VICTOR MANUEL GONZALEZ CIANCI
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS

En primer lugar, agradecer, muy cumplidamente, la oportunidad que nos da esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de que nos escuchen.

Creo que para una mesa de trabajo se requeriría más tiempo y más documentos en la mano. Pero sí quisiéramos transmitirles a ustedes algunas inquietudes en esta oportunidad de esta comida-reunión, a fin de que si llamara su atención y les interesaran los temas, pues, como dijo el compañero Magistrado Presidente de Hidalgo, nosotros estaríamos a sus órdenes para cualquier reunión de trabajo más a fondo.

Yo solamente agrego a estos comentarios de los compañeros presidentes y representantes de tribunales las inquietudes de Morelos.

En Morelos estamos viendo la problemática que, quizá, se hace eco en otros estados. Consideramos que el capítulo de sanciones y responsabilidades que establece el proyecto de la ley de amparo, en sus artículos 236 al 270, francamente, ya es bastante estricto el capítulo de sanciones y responsabilidades actual, el que ya está vigente, como para todavía buscarle mayores condiciones o casuísticas, de buscar más encuadramientos a ver en qué conducta caemos las autoridades del fuero común.

Yo a esto le llamaría terrorismo judicial. La verdad, ya no sabemos de qué cuidarnos, sino de cumplir el amparo o cumplir con nuestro trabajo de administración de justicia, porque hasta las copias ilegibles vamos a ser sancionados; y esto, quizás, está en el expediente derivado de una Procuraduría General de Justicia que así mandó documentos en copias, a veces, bastantes ilegibles, y ya nos estaremos viendo en el entrampamiento correspondiente. Ésa es una reflexión.

Yo respetuosamente, a nombre del Tribunal de Morelos, les propondría a la Comisión de Justicia que el capítulo de sanciones y responsabilidades, como está actualmente en la Ley de Amparo, ya es bastante estricto y drástico. Así es que en ese tener nos pronunciamos.

Como segunda reflexión. Nosotros ya no queremos seguir siendo los actuarios de las autoridades federales, porque es increíble e inconcebible que nos requieran que notifiquemos a las diferentes partes de los juicios, teniendo ellos, ahí a la mano, a los

actuarios, que ganan más, a veces, que nuestros jueces y que no entendemos la razón de que hasta en el mínimo distante lugar, en el centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, nos dice que requiramos la notificación por conducto nuestro sin que lo hagan los actuarios del juzgado de distrito.

En este aspecto, yo les llamaría la atención al artículo 115 de este proyecto de ley de amparo que habla, precisamente, del compromiso que sigue teniendo la autoridad responsable de notificar a las partes de los juicios.

Nosotros propondríamos que sean los juzgados de distrito, los colegiados quienes notifiquen a las partes, que notifiquen a todas los correspondientes involucrados en los juicios de amparo, porque esto a nosotros nos indica la distracción de nuestro personal, el ejercicio de un dinero o de un gasto que no tenemos, en realidad, para hacerlo.

Hay situaciones increíbles en el interior del estado de Morelos, en que nuestras autoridades de los juzgados nos dicen que tuvieron que poner de su bolsa para ir a notificar en taxi a determinada persona, porque le tienen pavor a la multa o al requerimiento de la autoridad de amparo.

Yo creo que ésas son las cosas que a ustedes, a veces, no les llegan y nosotros estamos diariamente viviéndolas y, obviamente, tenemos que respaldar a nuestro Secretario de Acuerdos o Actuario que lo hizo en forma responsable, porque tampoco se vale que de su bolsa, todavía tenga que erogar gastos.

La reflexión en relación con estos compromisos de notificación a través de nosotros, las autoridades del fuero común, en relación a ese artículo 115.

Y por último, dos puntos que nosotros llevamos a la reunión de Mérida a la que fuimos convocados por la Corte y que parece ser que simplemente nos llevaron a pasar, porque fuimos a hablar de los temas y ahora que vemos el proyecto, pasaron inadvertidos.

Pero ustedes que son los representantes del pueblo y que les interesa, fundamentalmente, como a nosotros, enfrentar las cuestiones de injusticia, porque hablamos de justicia, que es el trabajo cotidiano, pero se generan, a veces, situaciones de injusticia y que en este proyecto de ley de amparo, quizás, ustedes pudieran tener la oportunidad de aportar alguna reflexión como esta.

Nosotros vemos con tristeza que a pesar de que resolvamos los asuntos del fuero común en materia penal, cuando nuestro juez ha dictado una resolución y nuestra sala ha confirmado o modificado en tal o cual sentido cierta situación penal, vemos con tristeza que, a veces, en posibles errores de apreciación o de interpretación, la sentencia de nuestras autoridades del fuero común, ya no tiene ninguna impugnación.

Es decir, el Ministerio Público del fuero común no tiene derecho al juicio de amparo, la pregunta es por qué, si es un representante de la sociedad que ha estado formando parte de ese juicio y que, solamente, pueda apelar autos o sentencias de primera instancia, pero las de segunda instancia ya no las puede apelar, y si se resolvió en tal o cual sentido, así se queda y quizás ahí se está perdiendo la gran oportunidad para que estas autoridades federales que siempre ven con mucho cuidado y con mucho detenimiento todo lo que es la administración de justicia, pudieran resarcir en algo un problema de justicia social.

Y por último, para no extenderme, otra propuesta que llevamos a Mérida que también pasó de noche, pero que nosotros la vemos cotidianamente como un problema de injusticia social.

No tienen suplencia de la queja el patrón, en materia de amparo; y todos pensamos cuando hablamos de patrón, las grandes empresas, los grandes patrones, con muchos recursos económicos y dicen: “Que paguen sus abogados para que estudien, hagan bien sus conceptos de violación y sobre de esa base les resolvemos un amparo”, pero se olvidan de los microempresarios, medianoempresarios y muchos patrones que cada vez son más y cotidianos y con esto de la promoción de mayores programas donde se busque la suficiencia de que cada quien tenga su propio centro de trabajo o actividad que permita otro tipo de empleo propio, pues no hay que olvidar que muchas veces todos somos patrones y que a la hora de un conflicto de amparo, solamente la suplencia de la queja funciona a favor del trabajador.

Quizá se pudiera hacer una justicia social, extendiendo esa suplencia a la queja a todo patrón, finalmente, si son tribunales que revisan, pues que revisen para todos.

Le pediríamos al magistrado representante del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, sus comentarios al caso empresarios, medianos empresarios y muchos patrones que cada vez son más y cotidianos, y con esto de la promoción de mayores programas, en donde se busque la suficiencia de que cada quién tenga su propio centro de trabajo o actividad que permita otro tipo de empleo propio, no hay que olvidar que muchas veces todos somos patrones, y que a la hora de un conflicto de amparo, solamente la suplencia funciona a favor del trabajador, quizás se pudiera

hacer un justicia social, extendiendo esa suplencia a la queja a todo patrón, finalmente si son tribunales que revisan, que revisen para todos.

MAGISTRADO RODOLFO SEGUNDO SALINAS
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO NUEVO LEON

Quisiera nada más exponer, han tocado los puntos de las cortes estatales, tanto en la declaración de Mérida como de Acapulco, se llegó a un acuerdo por todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia, en ese sentido.

Como magistrado, actualmente una sala civil y anteriormente una sala penal, he sufrido las mismas penurias de todos los magistrados presentes en esta reunión, a cada resolución que dictamos, es promovido el juicio de amparo directo, ya tenemos todo preparado, las copias, los tocas, 14 ó 15 tocas en un mismo expediente, un sinnúmero de gasto que el estado realiza, porque su obligación a remisión por parte de nosotros, y no se diga en materia familiar, como en materia penal.

Se ha abusado de ese juicio, los magistrados de los tribunales, de las entidades federativas, son magistrados que revisan la legalidad, revisan las formalidades esenciales de todo procedimiento y entran también cuando tienen la suplencia de la queja en materia penal y en materia familiar, algunas veces, no así en materia civil, que nos sujetamos única y exclusivamente al agravio.

Yo haría extensiva su propuesta a todo tipo de procedimiento, la suplencia debería ser general, porque la justicia no es particular.

Nunca hemos acatado lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución, política de los Estados Unidos Mexicanos, es la impartición de una justicia pronta y expedita, al contrario, al justiciable, al que tiene la razón, al que merece que se le dé, se le entregue o se le restituya sus bienes o su libertad, lo dejamos sujeto a tres instancias, no podemos negar que el juicio de amparo es una tercera instancia de revisión en materia penal, laboral agraria, no en los casos de civil ni fiscal.

El amparo de casación, al cual ya se ha hecho referencia aquí, yo quisiera nada más dar su definición, es el medio de impugnación a través del cual se examina la legalidad de la actividad, del juez en el procedimiento, y en la sentencia que de ser procedente, puede producir el efecto de anular el fallo, ya sea por reponer el procedimiento cuando hay violaciones a actos procesales o con el propósito de que se pronuncie una sentencia en plenitud de jurisdicción, para el efecto de expedir justicia pronta.

Ése es el amparo de casación, es idéntico, como lo dijo Emilio Rabasa, en su libro, al hacer el estudio al artículo 14 constitucional, es idéntico el recurso de casación, el juicio de amparo directo. Toda la doctrina se ha puesto de acuerdo, históricamente este recurso fue eliminado de México en 1919 en el artículo 30 de la Ley de Amparo, no es nada nuevo, lo único que nunca se respetó, fue el artículo 124 de la constitución política, las facultades no otorgadas a la federación se le tienen otorgadas a los estados, nunca se han respetado, ha sido una hegemonía jurisdiccional en la materia de resoluciones judiciales.

Y como bien lo apuntaba un magistrado, hace unos momentos, la propia corte, por conducto de su Comisión de dictamen, ha dicho en el manual para lograr la eficacia del cumplimiento de la sentencias de amparo; el problema no son las autoridades jurisdiccionales de los estados, el problema son las autoridades administrativas, que por su rotación se acuerdan algún comentario que se hizo al artículo 115 constitucional, de los chapulines aquellos que brincaban de un lugar a otro y (inaudible) en el poder, eso ya no se da ahorita, ha sido aclarado.

Pero esa alternancia, en las ocupaciones administrativas, difícilmente hace que esas autoridades administrativas adquieran la experiencia legal que tiene un juez o un magistrado, que por su experiencia y por la práctica cotidiana en la aplicación de la ley, a veces, muy pocas veces no la entiende, constantemente analiza, estudia y aplica, y aplica justicia y dice derecho.

En este sentido, y quisiera nada más agregar lo que dice en su capítulo 2º, página 59, "el problema atribuible a los tribunales de amparo, falta de precisión en los efectos del fallo protector, incongruencia en las sentencias de amparo, entre las consideraciones de derechos y los efectos de la concesión.

Aquí lista 13 cuestiones que cometen los tribunales federales que nos dificultan en el términos de 24 horas, dar cumplimiento a la ejecutoria puntualmente.

Yo tuve un caso de un asunto muy sonado en Nuevo León, estaba en 14 tomos, muy sonado, y tuve que resolverlo en 24 horas, efectivamente juntamos a los 6 secretarios, a 4 mecanógrafas, a suscribir todo y a analizar, y las 24 horas estuvimos dando cumplimiento.

Eso es problemático, ¿por qué? Cuando tú te enfrentas a un litigante hábil, porque los hay, sabes que si no cumples en el término, te va a interponer la queja, te van a aplicar el 11 y quizás llegues a la Suprema Corte, te destituyan y te consignen al juez

de Distrito como un verdadero criminal, y lo único que estás haciendo, es cumplimentando con una función auxiliar de una autoridad federal, que era tan sencillo como dictar un amparo liso y ya no.

Por qué considerar ese amparo para efectos, saben lo que es señores diputados, que a nosotros nos diga, "no valoró una prueba", valórenla y la valoramos, se vuelve uno a ir al juicio de amparo directo y le dicen, "no la valoró bien", queja, 111 Suprema Corte, "entonces dime cómo lo valoro o valórala tú", porque estamos ante la relatividad, la materia social es un conocimiento relativo, si estuviéramos ante una ciencia exacta, como las matemáticas, donde el 2 por 2 es 4.

Pero aquí una palabra cambia la concepción, a veces la ver rosa, a veces verde, negro, blanco, y nada más busquen ustedes lo que se cree que es, el concepto personalidad, póngalo en el (inaudible) 2000, hay 4 mil 500 criterios sobre ese concepto y hay 14 ó 30 jurisprudencias, y todavía hay contradicciones, y todavía nosotros tenemos que interpretarlas y buscarlas.

Imagínense que no tengamos el conocimiento de que el 2, 6, 5 del proyecto de ley de amparo aplica una pena de 5 a 10 años de prisión por incumplimiento de efecto o exceso de la ejecutoria, ya habría muchos magistrados, incluyéndome a mí, diríamos, "mascando barrote", porque sería imposible a veces dar una respuesta a todo ello.

Muchas gracias a ustedes por esta invitación y la única propuesta es analicen bien este proyecto de Ley de Amparo, sobre todo el capítulo de Ejecución de Sanciones. Y por último, reconsideren las cortes de casación, es muy importante que se reconozca a los estados su valiosa educación, su cultura y su pluriculturalismo que hable el artículo 4º Constitucional.

Representante del Tribunal de San Luis Potosí.

A riesgo de no poder aportar ya ninguna idea nueva a lo que se ha señalado brillantemente por las personas que me han antecedido, pero de acuerdo totalmente con la propuesta, voy a retomar lo relativo al tema del amparo de casación.

Para esto diremos que el juicio de amparo en su origen se estableció contra violaciones constitucionales, cometidas por toda clase de autoridades, excepto la judicial, fue hasta posteriormente cuando se da la apertura para combatir a través de este juicio, ese tipo de violaciones.

Sin embargo, esa institución ha adquirido en la actualidad dimensiones y alcances de tal magnitud que no resulta exagerado señalar que a través de la misma, los tribunales federales incurren en una verdadera invasión de soberanía para con los estados, al interpretar y aplicar finalmente sus leyes, traduciendo esas interpretaciones en el establecimiento de criterios jurisprudenciales, que son de observancia obligatoria para los tribunales locales, a pesar de las múltiples y notorias diferencias que existen en las leyes de todos y cada uno de los estados, que por su propia naturaleza impide la unificación de las mismas y la generación de una consecuente jurisprudencia, que en verdad resulte aplicable de manera general.

Si las legislaciones estatales son soberanamente diversas, la jurisprudencia genérica no puede existir, porque los tribunales federales no pueden ni deben integrar (inaudible) o cualitativamente diferente.

Bajo ese contexto, resulta manifiesto que la jurisprudencia interpretativa de las disposiciones locales, corresponde establecerla exclusivamente a los tribunales superiores de los estados y no a los federales, porque ello implica atribuirse facultades de las que constitucionalmente estés vedadas.

Resulta incuestionable que detrás de esa supremacía de los tribunales federales, sobre los tribunales superiores de los estados, esta la desconfianza de los particulares, en los fallos emitidos por estos últimos, misma que los obliga a acudir ante los tribunales federales, a solicitar la reparación de las violaciones, de las garantías individuales, en que consideran han incurrido dichas autoridades locales, porque los estiman más desvinculados del medio y por tanto con una imparcialidad mayor.

Sin embargo, el argumento anterior resulta más político que jurídico y nos conduce a una círculo vicioso, porque si se esgrime que los tribunales locales no tienen la imparcialidad ni el prestigio que requiere el ejercicio de la función judicial, en contra partida puede argumentarse que esa opinión tiene su origen en el hecho de que los tribunales federales los han despejado de su autoridad, de su responsabilidad, de su dignidad, reduciéndolos a una instancia más, que jurídicamente resulta por ello minimizada.

Es claro pues que el fenómeno anterior sólo puede ser combatido y vencido a través de tribunales locales sólidos, confiables y dignos. La solución sería que los tribunales federales se limitaran a examinar cuestiones de estricta constitucionalidad y todas las de legalidad reservarlas para los tribunales estatales, de casación, a través de las

salas o tribunales de casación, en los cuales, ante los cuales se podrían interponer los recursos conducentes o medios de impugnación.

Con ello se respetaría indudablemente la.. que la administración de justicia de cada entidad federativa, quede constituida de tal manera, que realice íntegramente su función, mediante la creación de las cortes estatales, a las que quedaría reservado el control de la legalidad, a través del juicio de casación, que vendría a substituir las labores que sobre la materia realizan los tribunales colegiados, en la vía de amparo directo.

Con el inconveniente inclusive, de que la mayoría de esas violaciones procesales, precisamente por ser reclamables en amparo directo, en los casos en que prosperan, traen como consecuencia la reposición de un procedimiento, que suponiendo que fuese el emplazamiento, esto nos retrotraería todo el procedimiento hasta el inicio, con la consecuente demora en la impartición de la justicia y desde luego el incumplimiento al mandato constitucional que tenemos de administrar justicia de manera pronta y expedita. Muchas gracias.

MAGISTRADO PABLO ZAPATA SUBYAGA
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO CHIHUAHUA

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY DE AMPARO

TITULO CUARTO
JURISPRUDENCIA Y DECLARACION GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD O DE INTERPRETACION CONFORME

Primero.- Algunas de las más recientes reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal han tenido, entre otros propósitos, el de descargar de trabajo a la suprema Corte de Justicia de la Nación, transfiriendo una gran parte de su competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, para que examinen por la vía del amparo directo la legalidad de las resoluciones dictadas por los Tribunales de las entidades federativas.

La transferencia de la competencia, de ninguna manera ha tenido como consecuencia frenar la tendencia a la centralización de la justicia en nuestro país, pues corresponde, en última instancia, a los Tribunales Federales decidir sobre la legalidad de las resoluciones dictadas por los Organos Jurisdiccionales Estatales, así como fijar, con carácter de obligatoria, la interpretación de sus ordenamientos, sin conceder a éstos la intervención que debe corresponderles en el establecimiento, interrupción o sustitución de la jurisprudencia fijada por los Tribunales Colegiados para la interpretación de los ordenamientos locales.

La ampliación de su competencia y el aumento constante de los litigios , ha hecho necesario, por otra parte, incrementar con cierta frecuencia el número de Tribunales Colegiados y esa proliferación de los Tribunales en un mismo Circuito ha propiciado la disparidad y aún la contradicción de criterios aplicados a casos semejantes; tal fenómeno se advierte con más intensidad cuando se examinan las resoluciones de Tribunales de diferentes circuitos.

Lo anterior se traduce para los justiciables en una falta de seguridad jurídica y en la desigualdad ante la Ley y los Tribunales. Tal situación ha tratado de remediarse mediante la jurisprudencia que se establece al dilucidar los criterios opuestos.

En el artículo 225 del proyecto de la Ley de Amparo se legitima para denunciar la contradicción de tesis a "…los Ministros, a los Organos que sustentaron los criterios, sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron, las

dependencias jurídicas de los organismos públicos y las asociaciones de abogados con registro nacional".

Ahora bien, como de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 224 del proyecto las resoluciones que decidan las contradicciones de tesis no afectan las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hubieran dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias, resulta claro que quienes fueron partes en los asuntos que motivaron los criterios, poco interés tendrán en denunciar la contradicción.

Se afirma lo anterior, porque excepcionalmente los Tribunales Superiores de los Estados funcionan en Pleno y las resoluciones definitivas las pronuncian sus Salas, que técnicamente no pueden considerarse partes en el amparo directo y cuyo cúmulo de trabajo les impide distraer su atención en formular una denuncia debidamente fundada de contradicción de tesis. Por ello, los Tribunales Superiores Estatales, que cuentan ahora con apoyos técnicos de personas que no se dedican exclusivamente la impartición de justicia e información actualizada de los criterios sustentados por los Tribunales Federales de mayor jerarquía, deben ser legitimados expresamente para denunciar las contradicciones.

Dicho de otra manera, la denuncia de contradicción queda en manos de los titulares de los Organismos Judiciales Federales, y se olvida que quienes cotidianamente aplican la ley y acuden a la jurisprudencia para su interpretación son los Órganos Jurisdiccionales Estatales y que son ellos quienes tienen el mayor interés en la uniformidad jurisprudencial.

Por ello, como dichos Órganos forman parte de los Tribunales Superiores de Justicia, éstos deben estar también legitimados para denunciar las contradicciones en casos en que las sentencias de los Tribunales Colegiados resuelven controversias que se suscitan sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes de los Estados.

Consideramos que debe legitimarse a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados para solicitar a los Tribunales de Circuito que interrumpan o sustituyan la jurisprudencia establecida, expresando las razones que funden su petición. Los mismos argumentos que apoyan la intervención de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados en el establecimiento de jurisprudencia por contradicción de tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, fundan su participación en la que se fija por reiteración de criterios.

Segundo.- La falta de especialización de los Tribunales Colegiados en gran parte de los Estados de la República, su excesiva carga de trabajo y la diversidad de materias sobre las que resuelven, no garantizan la certeza de que sus resoluciones sean justas y legales y por tanto, que la jurisprudencia que establecen tiene estas características.

La obligatoriedad de su observancia para los Tribunales locales hace que con frecuencia los Jueces y Magistrados de los Estados apliquen jurisprudencia que evidentemente se fijó con criterios de Tribunales que tuvieron a la vista legislaciones de otras entidades o que interpretaron o integraron la ley local de manera defectuosa.

Consideramos que es necesario lograr la uniformidad en la interpretación e integración de las normas jurídicas de las Entidades Federativas. Por lo que resulta imperioso que los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan la jurisprudencia con vista en los ordenamientos locales, -que en muchos casos difieren de los Federales o de los otros Estados-, y que son los que aplican los Organos Jurisdiccionales locales y los mismos Tribunales Colegiados de Circuito en el amparo casación.

Para ello, es menester que la jurisprudencia que establecen los Tribunales Colegiados de Circuito sea de aplicación obligatoria exclusivamente en la circunscripción territorial en que ejercen su competencia, cuando las ejecutorias que la integran hayan versado sobre controversias suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes locales.

Tercero.- Los artículos 220, 221, 222 y 226 del proyecto de la Ley de Amparo fijan como requisito para el establecimiento de jurisprudencia por reiteración que se sustente un mismo criterio en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones.

Dichos preceptos difieren de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo vigente en que reduce de cinco a tres el número de ejecutorias para sentar jurisprudencia y en que las sentencias correspondientes deben dictarse en diferentes sesiones.

En la introducción al proyecto se justifica el cambio en el número de tesis en que es necesario encontrar "…un adecuado equilibrio entre el sistema de precedentes que se sigue en otros ordenamientos, o en los procesos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y el de reiteración de criterios que se prevé para la Ley de Amparo. Esto puede lograrse disminuyendo el número de los casos a tres a efecto de que los Organos competentes puedan, con mayor facilidad, lograr que sus criterios sean obligatorios a efecto de darle certeza a nuestro orden jurídico".

Lo que no se dijo en dicha introducción es por qué razón la reducción del número de sentencias para establecer jurisprudencia conduce necesariamente a la certeza de nuestro orden jurídico, como si el anterior sistema no lo proporcionara, porque si bien es cierto que dicha reducción facilitaría que los tribunales de amparo hicieran más pronta la obligatoriedad de sus criterios, ello no conduce necesariamente a la certeza de nuestro orden jurídico, la que creemos se obtendría de una manera mas consensuada con el anterior sistema de cinco sentencias reiteradas, y el hecho de que otros ordenamientos o procesos tengan un sistema restringido de precedentes como el de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad no justifican por sí la restricción en lo precedentes para establecer jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, si la jurisprudencia careciera de obligatoriedad, no importaría el número de ejecutorias que la conforman, ni si fueran dictadas simultánea o sucesivamente, pero dichos efectos vinculantes precisan que la jurisprudencia sea el resultado de determinado número de sentencias que aseguren la reflexión madura, tranquila y sin apremio del tiempo y, por tanto, su permanencia.

La formación precipitada de la jurisprudencia lleva consigo el riesgo de su precariedad, de su suspensión y modificación constantes y ello, ciertamente, no conduce a "darle certeza a nuestro orden jurídico".

La reforma de las leyes debe conservar lo operante y modificar lo que es ineficaz; por tanto, hasta que no se demuestre que el sistema contemplado en la ley en vigor no corresponde a las necesidades actuales, debe permanecer.

Por lo que se propone:

PRIMERO.- Que se legitime a los Tribunales superiores de Justicia de los Estados, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que interrumpan o sustituyan la jurisprudencia establecida por ellos, en sentencias que resuelvan controversias que se hayan suscitado sobre el cumplimiento y aplicación de Leyes del Estado en que ejerzan su competencia.

SEGUNDO.- Que se legitime a dichos organismos judiciales estatales, para denunciar las contradicciones de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito y que las Tesis de contradicción sean Jurisprudenciales y no simples criterios o ejecutorias.

TERCERO.- En virtud de que al resolver el amparo directo interpuesto contra sentencias definitivas, los Tribunales Colegiados de Circuito se convierten en Tribunales de Casación, resulta congruente que la obligatoriedad de su jurisprudencia opere exclusivamente en la circunscripción territorial en que ejercen su competencia, cuando las ejecutorias que la integran haya versado sobre controversias suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de las Leyes del Estado, bajo su jurisdicción territorial.

CUARTO.- Que se conserve el requisito tradicional, consistente en que la jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario.

PROYECTO LEY DE AMPARO

LEY DE AMPARO VIGENTE	PROYECTO LEY DE AMPARO
TITULO CUARTO.-	TITULO CUARTO.-
	ARTICULO 213.- La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución.
	ARTICULO 214.- La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, o por los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo.
ARTICULO 192.- La jurisprudencia que establezca la suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrato, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.	La jurisprudencia por contradicción se establece por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ARTICULO 193.- La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatorio para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito	ARTICULO 215.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, así como para toda autoridad administrativa . La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo es obligatoria par a los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de la suprema Corte de Justicia de la Nación

LEY DE AMPARO VIGENTE	PROYECTO LEY DE AMPARO
ARTICULO 195.- En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respectivo deberán: I. Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencia y numerarla de manera progresiva, por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales; II. Remitir la tesis jurisprudencia, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha de su integración, al Semanario Judicial de la Federación, para su publicación inmediata; III. Remitir la tesis jurisprudencia, dentro del término a que se refiere la fracción inmediata anterior, al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que no hubiesen intervenido en su integración; y Conservar un archivo, para consulta pública, que contenga todas las tesis jurisprudenciales integradas por cada uno de os citados órganos jurisdiccionales y las que hubiesen recibido de los demás. El Semanario Judicial de la Federación deberá publicar mensualmente, en una gaceta especial, las tesis jurisprudenciales IV. Facilitar el conocimiento de su contenido.	ARTICULO 216.- Cuando la suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito de amparo establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, que deberá contener: I. El título que identifica el tema que se trata; II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta; III. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio; IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta, y V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis. ARTICULO 217.- El Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado deberán remitir las tesis en el plazo de quince días, a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia encargada de la publicación del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación. ARTICULO 218.- En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban, y se distribuirán las resoluciones necesarias para constituir o interrumpir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes.

LEY DE AMPARO VIGENTE	PROYECTO LEY DE AMPARO
Las publicaciones a que este artículo se refiere, se harán sin perjuicio de que se realicen las publicaciones mencionadas en el artículo 197-B. ARTICULO 197 B.- Las ejecutoria de amparo y los votos particulares de los ministros y los Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para contrariarla además de la publicación prevista por el artículo 195. De esta Ley, igualmente se publicarán las ejecutorias que la Corte funcionando en pleno, las salas o los citados Tribunales, acuerden expresamente.	
	ARTICULO 219.- Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. CAPITULO II Jurisprudencia por reiteración de criterios ARTICULO 220.- La jurisprudencia por reiteración del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones. Tratándose de constitucionalidad de leyes o de interpretación conforme se requerirá el voto aprobatorio de por lo menos ocho ministros. ARTICULO 221.- La jurisprudencia por reiteración de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones. ARTICULO 222.- Para el establecimiento de la Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo deberán observarse los requisitos señalados en este capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime.

LEY DE AMPARO VIGENTE	PROYECTO LEY DE AMPARO
ARTICULO 197 A.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la S.C.J. el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la S.C.J. la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El Procurador General de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe podrá , si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días, la resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales, se hubiesen dictados las sentencias contradictorias, la S.C. deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.	Capítulo III Jurisprudencia por Contradicción de Tesis ARTICULO 223.- La Jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la suprema Corte de Justicia de la Nación, o entre los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo, en los asuntos de su competencia. ARTICULO 224.- Las contradicciones de tesis entre las Salas de la suprema Corte de Justicia serán resueltas por el Pleno; las de los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, según la materia. En ambos casos bastará la mayoría simple. Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. ARTICULO 225.- Están legitimados para denunciar la contradicción de tesis los Ministros , los órganos que sustentaron los criterios, sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron , las dependencias jurídicas de los organismos públicos y las asociaciones de abogados con registro nacional. Capítulo IV Interrupción de la Jurisprudencia ARTICULO 226.- La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa.

LEY DE AMPARO VIGENTE	PROYECTO LEY DE AMPARO
	ARTICULO 227.- Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán l as mismas reglas establecidas para su formación. Capítulo V Jurisprudencia por Sustitución ARTICULO 228.- Las Salas de la SCJN o cualquiera de sus Ministros, o bien los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo, o cualquiera de sus integrantes, los dos últimos, con motivo de un caso concreto, una vez resuelto podrán pedir al Pleno de la S.C. o a la Sala correspondiente que sustituya la jurisprudencia, para lo cual expresarán las razones correspondientes por las cuales se estima debe hacerse. Si a juicio de alguno de los Ministros existe razones fundadas, podrá solicitar al Pleno o a las Salas de la SCJ, según corresponda la sustitución de la Jurisprudencia por contradicción. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si sustituyen la Jurisprudencia, sin que su resolución afecte la situaciones jurídicas concretas, derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron ni la que resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta Ley. Para sustituir la jurisprudencia se requerirá mayoría de ocho votos en Pleno y cuatro en Sala. ARTICULO 229.- Tratándose de amparos en revisión contra normas generales, en los que, con motivo de los acuerdos generales a que se refiere el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo que deban conocer de ellos por haberse establecido jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia, los propios Tribunales Colegiados de oficio o a petición de parte, cuando haya razones fundadas para ello, podrán solicitar al pleno o a las salas de la Suprema Corte de Justicia que ejerzan su competencia originaria, a fin de sustituir la jurisprudencia correspondiente.

LEY DE AMPARO VIGENTE	PROYECTO LEY DE AMPARO
	Una vez recibida la solicitud se turnará a un ministro a fin de que formule el proyecto de resolución. El pleno o la sala podrán sustituir la jurisprudencia, o declarar que no ha lugar a ello. Capítulo VI Declaratoria General de Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme ARTICULO 230.- Cuando la S.C.J.N., en juicios de amparo indirecto en revisión establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o se establezca la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a hacer la declaratoria general correspondiente. ARTICULO 231.- Dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la aprobación de la jurisprudencia referida en el artículo anterior, la S.C.J. formulará la declaratoria general de inconstitucionalidad o bien la de interpretación conforme. ARTICULO 232.- La declaratoria en ningún caso no podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos, y II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad o de interpretación conforme. Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos, salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 233.- La declaratoria general de inconstitucionalidad o la de interpretación conforme se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma respectiva para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles.

MAGISTRADO CARLOS CARMONA GRACIA
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DURANGO

En primer término, a nombre del Señor Magistrado Licenciado José Hugo Martínez Ortíz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, así como de los Señores Magistrados que integramos dicho Tribunal, deseo agradecer a los Señores Diputados, integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el espacio que ahora se nos brinda y que nos da la gran oportunidad de expresar algunos puntos de vista que se han venido generando al interior de quienes formamos parte del Poder Judicial en nuestra entidad Federativa, en torno al proyecto de la Ley de Amparo, planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque se hará en forma breve y respecto de un solo tema del gran universo que contiene ese proyecto de ley, tratando ser respetuosos del tiempo y atención que se nos dispensa.

Desde luego, debemos reconocer el gran trabajo, dedicación y esfuerzo que se dedicó, para que finalmente los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobaran el proyecto de la Ley de Amparo y de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esa materia, y ponerlo finalmente a la consideración actualmente no sólo de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, sino también al concierto que integra la comunidad jurídica nacional.

Se destaca en esta obra, la intención firme y vigorosa de sus creadores, de contribuir con este proyecto en la creación de una nueva relación jurídica con la sociedad, en la que no impere la violencia y resplandezcan la libertad, la paz y la justicia, lo cual, para lograrlo, se debe contar con mejores leyes que garanticen la plena vigencia de nuestra Constitución, así como una mayor capacidad para aplicar la ley y, sobre todo, una administración e impartición de justicia más eficaz., Tal verdad, es incuestionable, más cuando se trata precisamente de revisar, actualizar, perfeccionar y adaptar a los nuevos tiempos, desde el ámbito estrictamente constitucional y reglamentario, la institución de mayor importancia y trascendencia en nuestro País, que hace posible la defensa de nuestra Carta Magna y de las garantías individuales que consagra para todos.

Muchos aspectos son de comentarse y analizarse desde la perspectiva contenida en el proyecto de la Ley de Amparo, sin embargo uno es en el que ahora nos concentraremos, y que atiende particularmente al cumplimiento e inejecución de las

ejecutorias que otorgan el amparo, tratado en el proyecto de referencia, en los artículos 190 a 196.

En primer lugar, creo que todos coincidimos tal como se establece en alguna parte de la exposición de motivos del proyecto, que el respeto al derecho por los demás debe ser exigido, en primer lugar, a aquellas personas que ejercen el poder y que desarrollan funciones propias del Estado; también que un Estado que pretenda aspirar a que sean las normas jurídicas las que rijan su vida en sociedad, debe tener como uno de sus principales compromisos el de velar porque la actuación de sus autoridades se realice con estricto respeto a los derechos y al patrimonio de sus gobernados. Pero de nada sirve el reconocimiento de nuestros derechos si no contamos con medios eficaces para hacerlos valer, y ni mucho menos, agregaríamos, si teniéndolos, las decisiones o sentencias pronunciadas no son cumplidas o acatadas por quien debe de hacerlo.

De acuerdo con los mecanismos legales que para el cumplimiento de las sentencias establece la Ley de Amparo actualmente en vigor, la problemática que se ha generado en la práctica, en aquellos casos en que no se cumple de inmediato la ejecutoria de amparo o deja de cumplirse, no ha radicado en virtud de una contumaz desobediencia por parte de la autoridad responsable que debe cumplirla, ello seguramente salvo en contados casos muy identificados; lo antes afirmado, puede corroborarse con lo anotado por el actual Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer la presentación del Manual que editó en 1999 dicha Suprema Corte, para lograr el eficaz cumplimiento del as sentencias de amparo, y en donde después de destacar la rica experiencia que en este renglón obtuvo en ese tiempo la Unidad de Gestión y Dictamen de Cumplimiento de Sentencias y la propia Suprema Corte de Justicia, señaló también que: "…En ella se destacan los problemas más frecuentes y los errores en que incurren tanto los quejosos, como las autoridades responsables, y por qué no decirlo, en ocasiones también los Tribunales Federales, al tratar de dar cumplimiento a un fallo protector que incide para que éste no se obtenga rápida y eficazmente…".

Tal expresión fue confirmada inclusive por el propio Titular de la Unidad de Gestión y Dictamen de Cumplimiento de Sentencias, en el capítulo introductivo de dicho manual operativo, cuando al cuestionarse a qué obedecía el número importante de asuntos que arriban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía incidentes de inejecución de sentencias, planteó como respuesta que en muchos casos así sucede, porque las autoridades responsables, con el fin de eludir su cumplimiento, nada hacen por acatarlas, o bien, realizan actos que no trascienden al núcleo esencial de la obligación exigida, sin la clara intención de agotar el cumplimiento, más destacó también

textualmente, que: "…Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en muchos de los casos las autoridades responsables no cumplen, no porque esa sea su voluntad, sino porque en realidad desconocer con exactitud la manera de acatar en sus términos el fallo protector, sobre todo cuando se trata de autoridades administrativas que, por lo regular, no son doctas en materia de amparo. Ciertamente, a través del estudio de los asuntos y de la elaboración de los proyectos respectivos, se ha visto que en un alto porcentaje, las sentencias protectoras no son claras ni precisas, y en ocasiones son incongruentes, es decir, no establecen con previsión los actos que las autoridades responsables deben realizar para cumplir con ellas. Esto crea confusión e incertidumbre en las autoridades, pues no saben a ciencia cierta la forma de acatar tales sentencias. Estas dificultades, inclusive, han conducido a que sea esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que establezca los alcances tutelares de la ejecutoria de amparo, señale las autoridades obligadas a cumplirlas y la medida en que cada una de ellas debe participar, hasta el grado de que existe jurisprudencia definida que otorga esas facultades a este máximo Tribunal…", hasta aquí la cita.

Lo antes señalado, permite reafirmar entonces que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo, no obedece como regla general, a que las autoridades responsables no lo hacen, no porque esa sea su voluntad, ni tampoco que en este orden se encuentren de manera prominente todo tipo de autoridades responsables, sino que esto prevalece sobre todo cuando se trata de autoridades administrativas que, por lo regular, no son doctas en materia de amparo, así como a otra clase de circunstancias, tales como que "en un alto porcentaje, las sentencias protectoras no son claras ni precisas, y en ocasiones son incongruentes", problema este último, que desde luego, en el articulado de referencia también se trata de manera especial.

Luego, a pesar de que existe una experiencia única de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema que ahora se tratan en la cual se han detectado los principales factores que influyen para que una autoridad responsable no quiera o no pueda cumplir una sentencia de amparo, además de que tal actitud prevalece de manera notoria de parte de las autoridades de naturaleza administrativa, resulta paradójico ahora que en el proyecto de ley de amparo, so pretexto de remediar "algunas deficiencias que presenta el sistema actual" para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, según el contenido de los artículos 190 a 196 y demás relativos, se pretenda establecer como remedio, medias coercitivas para obligar a la autoridad responsables a cumplir con las sentencias de amparo, y sanciones importantes ante su incumplimiento a las que se califican de más eficaces, y en las que de manera inmediata, para el incumplimiento de la sentencia, no sólo se involucra, desde el primer momento, exclusivamente a la o las autoridades responsables directamente vinculadas en ello, sin que desde ese mismo momento se

implica al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que desde su ámbito de competencia orden al inferior cumplir con la ejecutoria, lo cual si no lo demuestra, se hace acreedor de la imposición de una multa, además de que se hace merecedor de las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, las que culminarían, en el extremo, con la separación del puesto y con pena de prisión, de tal manera que desde el mismo momento en que la autoridad de amparo ordena la notificación de la sentencia ejecutoria a la autoridad responsable para que dé cumplimiento con la misma, debe hacer lo mismo con el superior jerárquico de dicha autoridad, lo cual provocaría un número elevado de actuaciones que se antojan innecesarias, pues no sólo el órgano jurisdiccional de amparo tendrían que estar permanentemente ordenando esa clase de requerimiento, sino que también la autoridad superior jerárquica de referencia, tendría que estar desahogando igual número de órdenes al inferior para que cumpla con la ejecutoria de amparo, lo que tendría que estar justificando de la misma manera ante la autoridad de amparo, su pena de ser sancionada, lo cual desde ahí, los mecanismos legales que se plantean, a nuestro juicio, no estarían resultando tan eficaces como así se pretende en el proyecto referido, y por otra parte, es evidente que la propuesta de establecer las medidas coercitivas y las sanciones de la envergadura que se plantean, en las que para su aplicación se involucran al o los superiores jerárquicos de las autoridades responsable en la forma ya señalada, tampoco generaría mejores condiciones para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, sino que, por el contrario, conociendo entonces los principales factores que inciden de manera identificada por no obtener el cumplimiento de una sentencia de amparo, el propósito fundamental que debe seguirse en esta materia, primero, es lograr el efectivo cumplimiento de parte de la autoridad responsable que corresponda, y segundo, que cuando se refiera al superior jerárquico, su participación como tal, en su caso, debe plantearse en la ley, como un auténtico coadyuvante de la autoridad de amparo para que los fallo constitucionales queden completamente cumplidos, lo cual es el propósito fundamental, y sólo por excepción, cuando se trate de una contundente renuencia de las autoridades responsables de acatar las ejecutorias, se obligue entonces al superior jerárquico a coadyuvar en ese sentido, y también sólo en extremos excepciones, esto es, en caso de flagrante desobediencia contumaz, puedan la autoridad responsable y su superior jerárquico, ser objeto de una medida disciplinaria o sanción extrema.

Por lo anterior, consideramos que es necesario sugerir que en su oportunidad, el Congreso de la Unión, al discutir la iniciativa mantenga presente que la autoridad de amparo para obtener el eficaz cumplimiento de una ejecutoria en la que lo haya otorgado, es importante que al dictar las medidas necesarias tome como base la naturaleza del acto reclamado, pues no puede aceptarse que en la ley de la materia se establezca un mismo procedimiento que invariablemente debe atenderse para

todos los casos, y además, que las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos sólo en caso de flagrante desobediencia contumaz puedan ser objeto de una medida disciplinaria o sanción extrema, después de que se mida la culpa subsidiaria en el incumplimiento de las partes a quien no haya favorecido la justicia federal.

MAGISTRADO JULIO MENCHACA SALAZAR
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO HIDALGO

EL AMPARO DIRECTO EN EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE AMPARO

El Proyecto de Ley de Amparo que se analiza, contiene en el Título Segundo, Capítulo Segundo, dividido en cuatro secciones y 22 artículos, las reglas de procedencia, requisitos de demanda, substanciación del proceso y bases para la suspensión del acto reclamado en el juicio de Amparo directo, apreciándose algunos aspectos que resultan innovadores, como el caso de que los Tribunales Colegiados de Circuito, hagan la declaratoria de inconstitucionalidad en la parte considerativa de la sentencia y no en los puntos resolutivos, dejando a salvo la posición de la suprema Corte como Tribunal Constitucional de máxima jerarquía, pero permitiendo que los Tribunales Colegiados de Amparo hagan consideraciones de Constitucionalidad en los casos que proceda; otro aspecto, es el suprimir las hipótesis de violación de procedimiento, consistentes en la citación en forma distinta a la prevista por la ley y a la falsa representación de los juicios; se crea la figura del amparo adhesivo, imponiendo al quejoso o al que promueva el amparo adhesivo la carga de invocar en el escrito inicial todas las violaciones procesales que pudieran afectar sus derechos para que todo sea resuelto en un solo juicio, y por otra parte, se crea la obligación de los Tribunales colegiados de Amparo, de fijar el alcance preciso de su sentencia, terminando así con el amparo que se concede para efectos.

Todo lo anterior, representa una indudable ventaja frente a las normas vigentes, pero inexplicablemente en el Proyecto de Ley de Amparo que se comenta, se mantienen disposiciones similares a las vigentes, en relación con la presentación de la demanda de amparo por conducto de autoridad responsable, la obligación de ésta de requerir al quejoso para que exhiba las copias de la demanda la fecha de notificación de la sentencia, laudo o resolución reclamada, la de presentación del escrito de demanda y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas,; la obligación de emplazar al tercero interesado en el último domicilio que hubiere designado en los autos del juicio de origen o en el domicilio que hubiere designado en los autos del juicio de origen o en el domicilio que señale el quejoso, así como rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de emplazamiento a las partes. También se mantiene en el proyecto la facultad de la autoridad responsable para decidir sobre la suspensión del acto reclamado y fijar los requisitos para su efectividad.

En suma, con muy ligeras variantes, el proyecto mantiene casi íntegramente las mismas disposiciones que ya contempla la ley vigente, tanto para la recepción de la demanda, como para la suspensión del acto reclamado en un Amparo Directo, lo que se considera inadecuado, por eso se sostienen los siguientes:

MOTIVOS PARA PROPONER MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE AMPARO

A).- En cuanto a la obligación de presentar la demanda por conducto de la autoridad responsable.- Podemos señalar que esta obligación fue incorporada a los artículos 144 y 163 de la Ley de Amparo a partir de la reforma de diciembre de 1983, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1984, pretendiendo evitar con ello, que se presentara ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de la competencia de un Tribuna Colegiado de Circuito y viceversa, porque recordemos que en ese tiempo el amparo directo era competencia de ambos órganos jurisdiccionales y los litigantes frecuentemente retardaban el trámite de mala fe al presentar la demanda en forma equivocada; se pensó que con la reforma que imponía la obligación de presentar la demanda por conducto de la autoridad responsable se terminaría con esa práctica viciada y además se lograba dar agilidad al trámite, porque la autoridad responsable quedaba obligada a integrar correctamente el expediente de amparo y se tomó en cuenta además que las distancias eran muy grandes respecto al lugar en que se dictaba la resolución impugnada y el lugar de residencia del Tribunal Colegiado de Circuito o de la Suprema Corte.- Estas razones, pudieron ser aceptables en la época en que el Amparo Directo era competencia de la Suprema Corte de Justicia y también de los Tribunales Colegiados de Circuito, porque efectivamente, se daba el caso de que litigantes sin escrúpulos retardaban el procedimiento mediante la presentación de la demanda ante un órgano incompetente, pero debemos tener en cuenta que a partir de 1988, en que el Amparo Directo ya fue competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito, salvo el caso de atracción, ya no se puede presentar equivocadamente la demanda ni se puede retardar con ese motivo el támite del amparo; por otra parte, ha desaparecido ya el obstáculo de la distancia, porque actualmente existen 25 Circuitos en la República, en los que operan 128 Tribunales cuentan con la suficiente infraestructura y el personal judicial necesario, los trámites de emplazamiento a terceros interesados, el cómputo de los términos para presentación de la demanda y en general todos los actos de trámite relacionados con la recepción y admisión de la demanda, fácilmente se pueden llevar a cabo por el propio Tribunal Colegiado del conocimiento y esto garantizaría una mayor fluidez en la tramitación, porque de nadie es desconocido, que las autoridades responsables, frecuentemente incurren en tardanzas innecesarias al

emplazar a terceros interesados, al notificar a las demás partes o en la remisión del informe y de los autos del juicio de origen; por todo lo cual se propone que se modifique el artículo 174 del Proyecto, para que se establezca que la demanda deberá presentarse directamente ante el tribunal Colegiado de Circuito de Amparo que corresponda, acompañando copias de la misma para cada una de las partes, pero además deberá acompañar el quejoso, una copia certificada de la sentencia, laudo o resolución impugnada, para que el Tribunal esté en condiciones de decidir sobre la admisión y en su caso sobre la suspensión; para ello se propone también modificar el artículo 178 del Proyecto, a fin de regular el caso de que falte copias para el traslado, o para el caso de que hubiera irregularidades en la demanda, ya que el Presidente del Tribunal Colegiado señalará al promovente un término de cinco días para exhibir las copias, aclarar o corregir la demanda y en el caso de no hacerlo tendrá por no interpuesta la demanda y en este contexto, también se propone modificar el artículo 179 del Proyecto, para que al admitir la demanda se mande notificar a las partes el acuerdo relativo, se pida informe justificado a la autoridad responsable, así como la remisión de los autos del juicio de origen y sus anexos.- Como una consecuencia de estas modificaciones, ya se consideran innecesarios los artículos 175 y 176 del Proyecto, por lo que se propone suprimirlos, puesto que las obligaciones que consignan ya quedarían incluidas en los demás dispositivos que se han comentado.

B).- En relación con la facultad que se atribuye a la autoridad responsable para decidir sobre la suspensión.- En la actualidad, se considera inadecuado mantener la facultad de la autoridad responsable para decidir sobre la suspensión en el Amparo Directo, ya que en todo caso, el facultado debería ser el propio Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo que corresponda, en primer lugar, porque entre las partes contendientes debe existir siempre igualdad procesal para que estén en la misma condición y al mismo nivel dentro de la contienda, pero en el caso del amparo, tal como señala el proyecto, se establece la posibilidad legal de que una de las partes resuelva sobre la suspensión del acto reclamado que planteó su contraparte y esto escapa a toda regla de buen proceso, resultando una situación totalmente injusta para el solicitante de la suspensión; por otra parte, esta facultad atribuida a la autoridad responsable, tiene su origen en razones de orden histórico y práctico, porque originalmente el Amparo directo se tramitaba ante la Suprema Corte de Justicia con exclusividad y luego, a partir de 1951 en que surgen los Tribunales Colegiados de Circuito, éstos también conocieron de Amparos directos por violaciones de procedimiento y después, por violaciones de fondo hasta cierta cuantía, pero debe tenerse en cuenta que en su inicio sólo existieron cinco Circuitos en la República y por tanto, resultaba difícil que los quejosos residentes en las Entidades Federativas que formaban parte del Circuito o los que tenían que promover ante la Suprema Corte de Justicia, lograran que con la urgencia del aso, se decidiera, pero sobre todo que se comunicara la suspensión a las autoridades responsables, porque era muy grande la distancia que había que superar y los medios de comunicación eran bastante tardados, por lo que existía siempre el riesgo de que la medida suspensional, aunque fuera decretada, no se pudiera notificar oportunamente y para entonces ya

> pudiera haberse ejecutado en forma irreparable el acto reclamado, de ahí que bajo esa perspectiva resulte comprensible que en sus orígenes se encomendara a las autoridades responsables la decisión sobre la suspensión, porque serían ellas mismas las que pudieran paralizar la ejecución de sus propias resoluciones, pero como ya se dejó establecido, desde 1988 el amparo Directo es competencia exclusiva de Tribunales Colegiados de Circuito y existen en la actualidad 25 Circuitos en la República y 128 Tribunales Colegiados de amparo, es evidente que ya no existe la misma razón que imperaba en épocas anteriores para que la suspensión se decida por las autoridades responsables, ya que la cercanía que tienen los Tribunales en la actualidad con los justiciables y la mayor facilidad para utilizar medios de comunicación cada vez más rápidos y seguros, nos lleva al convencimiento de que tiene que superarse la situación que por tantos años ha prevalecido y proponer que sean los Tribunales Colegiados de Amparo los que decidan con la premura del caso, todo lo relacionado con la medida suspensional en el Amparo Directo, porque se reitera, que con los medios actuales de comunicación, como pueden ser el Telégrafo, el Fax, el Teléfono o Internet, estaría garantizada la notificación oportuna aún en los casos más urgentes, para que la autoridad responsable cumpliera con el mandato de suspensión.- A mayor abundamiento, ya no existe razón alguna para que se mantengan diferencias entre la suspensión en el Amparo Directo y la que se decreta en el Indirecto, porque tanto el Juez de Distrito en un caso como el Tribunal Colegiado de :Amparo en otro, son los competentes originarios para conocer del amparo y dictar todas las determinaciones que resulten procedentes, incluyendo las relativas a la suspensión, porque inclusive el aparente desconocimiento que pudiera tener el Tribunal Colegiado sobre el alcance de la sentencia, laudo o resolución impugnada, podría subsanarse incorporando la obligación para el quejoso de exhibir una copia certificada de dicha resolución al momento de presentar su demanda.

Se concluye pues en este inciso, afirmando que la tramitación de la suspensión en el Amparo Directo, debe ser facultad y obligación del Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo y de ninguna manera debe subsistir como facultad de la autoridad responsable y por ello se propone modificar los artículos 188 y 189 del Proyecto, para establecer en el primer caso, que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo, decidirá en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad, siendo aplicables en lo conducente las reglas de la suspensión de los Amparos Indirectos contenidas en los artículos 123, 126, 127, 128, 130 y 131 del Proyecto.- en el segundo caso, cuando se trate de amparos en materia penal, deberá establecerse que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo, pudiendo ponerlo en libertad caucional si lo solicita el quejoso y procediera.

En ese orden de ideas, y siendo la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es natural que junto con las modificaciones que se proponen al Proyecto de Ley, también resulte necesario modificar para los casos concretos planteados, la fracción XI del artículo

107 del Proyecto de Reformas a la Constitución Política Mexicana, con la finalidad de establecer la base de que la suspensión se pida ante el Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo que corresponda y que sea el Presidente del Tribunal competente quien decida sobre dicha suspensión.

Estamos convencidos, de que al presentarse la demanda directamente ante el Tribunal Colegiado competente y que sea éste quien realice todos los trámites procesales, pero sobre todo que sea quien decida sobre la suspensión del acto reclamado, se logrará mayor concentración en el trámite del juicio de amparo directo y se logrará mayor certeza, rapidez y precisión en el mismo.

En mérito de lo expuesto, se formulan las siguientes:

PROPUESTAS:

PRIMERA.- Que se modifiquen los artículos 174, 178, 179, 188 y 189 y se supriman los artículos 175 y 176, todos del Proyecto de Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que las demandas de Amparo Directo se presenten ante el Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo y que sea éste quien decida sobre la suspensión del acto reclamado.

SEGUNDA.- Para lograr lo anterior, será necesario que se modifique la fracción XI del artículo 107 del Proyecto de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sentar las bases sobre la presentación de la demanda y la decisión sobre la suspensión del acto reclamado en Amparo Directo.

MAGISTRADO GONZALO YESCAS FERRAT
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO SONORA

En primer término, el agradecimiento, mejor dicho, reconocimiento por la magnífica idea de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al haber dado la garantía de audiencia a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, con motivo de la propuesta de la nueva Ley de Amparo.

Califico de acertada esta decisión, porque somos los tribunales de las entidades federativas los que damos la cara al justiciable, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cuando menos el 90% de los litigios en México se tramitan en los tribunales locales, siendo en éstos más inmediata la relación y afectación a quien tiene la necesidad de ocurrir a un tribunal; y de ese 90%, la mayoría de las controversias son derivadas de leyes federales por virtud de la jurisdicción concurrente, prevista en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Siendo así, cuando se pretenda realmente mejorar este servicio público, tendrá que empezarse por el juzgador del fuero común. Pero cuando en México, cuando en la Ciudad de México se habla de mejorar la impartición de justicia, sólo se piensa en la justicia federal, y se olvidan de la verdadera justicia, la del fuero común.

Es tan clara esta necesidad de mejorar las condiciones de los tribunales locales, que sólo el que no quiere ver no se da cuenta que los dos sistemas de impartición de justicia, el local y federal, están haciendo nugatoria la garantía del artículo 17 de nuestra Carta Magna, al disponer que los mexicanos tenemos derecho a recibir justicia gratuita, pronta y expedita.

Al principio del tercer milenio, cuando entramos a la globalización, sólo cerrando los ojos, sólo siendo irresponsables podemos permitir que las cosas sigan iguales o empeoren, cómo es posible el no buscar el cambio, cuando actualmente con el doble sistema de impartición de justicia, recibimos a los cuatro o cinco años la ejecutoria de los Colegiados que ordena reponer el procedimiento penal, porque el ministerio público no estuvo personalmente en una audiencia, o se concede el amparo, porque el que firmó la demanda no tenía la representación de un banco, teniéndose por no puesta la citada demanda después de haberse tramitado el juicio por varios años.
El proyecto de la nueva Ley de Amparo, en opinión del sustentante, alejará aun más la posibilidad de que en México se avance hacia mejores estadios en un servicio tan

primordial como la administración de justicia; sino que todo lo contrario, se conservan las instituciones que han impedido este objetivo, y se crean otras nuevas instituciones que tienden a hacer aun más tortuosa la carrera endemoniada constituida por los años y años para la solución de un litigio.

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el actual sistema de impartición de justicia, garantiza que el que tiene más recursos económicos garantía en ese largo procedimiento plagado de posibilidades para el más fuerte; quien carece de recursos no puede litigar contra quien posee más riqueza.

En efecto, en el proyecto de la nueva ley podemos advertir lo siguiente:

PRIMERO.- Se conserva la posibilidad de conceder el amparo para efectos, es decir, para que el juzgador realice un nuevo estudio cuando a juicio de la autoridad de amparo, la sentencia carece de adecuada fundamentación o motivación, después de la sentencia de primera y segunda instancias, cuando ya han transcurrido años de iniciación del litigio en los tribunales.

Cabe aquí señalar que es obvia la inconveniencia de conservar esta situación retardatoria en la impartición de justicia, y sobre todo, porque los órganos jurisdiccionales de amparo están más preocupados por la estadística que por el contenido, y concediendo la protección de la justicia federal por motivos trascendentes o no; por ejemplo: la reposición porque el ministerio público no estuvo en una audiencia y un sinnúmero de más posibilidades.

SEGUNDO.- Se introduce el amparo adhesivo para el que ganó el juicio, con violación del artículo 107 constitucional, que exige la existencia de un agravio que trascienda el resultado del fallo.

Pero con independencia de esto, ello va contra la garantía de expeditez.

En el proyecto de nueva Ley de Amparo se propone el amparo adhesivo en el que la parte que ganó, puede reclamar las resoluciones previas al dictado de la sentencia, le causen agravio o no, incluso se revisarán aunque el quejoso hubiere ganado el caso, y este caso aunque el perdidoso original demuestre tener la razón, se manda reponer el procedimiento a ver quién gana al final.

Repito, esta concentración de impugnaciones postergadas hasta el fina, es decir, después de los años que lleva la primera y la segunda instancia, agrave el problema e impide la administración de justicia pronta y expedita.

El amparo adhesivo resulta no sólo improcedente sino inequitativo, porque el que lo interpuso en lo principal sólo puede impugnar lo que le perjudica, pero no mejorar lo que le beneficia, en tanto que el que lo interpone adhesivamente sí puede hacer lo último.

El amparo adhesivo es una nueva invasión a la soberanía estatal, es una nueva justidicción, la autoridad de amparo se sale de lo que le compete, que es revisar si el acto resulta violatorio de garantías.

Está aun inatendido el señalamiento que hiciera en Veracruz Venustiano Carranza el 28 de septiembre de 1915, de que el amparo federal en los juicios civiles es un elemento perturbador de la administración de justicia, invasor de la soberanía de los Estados; también está inatendida la propuesta de Cresencio Rejón, en su proyecto de Constitución yucateca de 1840, que proponía que el amparo contra actos de las autoridades locales, fuera conocido por los jueces del orden común, o por el superior contra actos de los jueces.

En conclusión, en nuestra opinión el proyecto de nueva Ley de Amparo en nada significa apoyo para una mejor impartición de justicia en México, sino todo lo contrario.

En México debe privilegiarse la impartición de justicia que realizan los tribunales estatales en los que se tramitan más del 90% de los procedimientos jurisdiccionales, donde también se tramitan la mayoría de las controversias federales.

El H. Congreso de la Unión podrá modificar substancialmente el sistema de impartición de justicia con la creación de Cortes Estatales de Casación, o bien, que éstas conozcan del amparo contra actos de autoridades jurisdiccionales locales, eliminando por inoperante el doble sistema de impartición de justicia.

El H. Congreso de la Unión, tiene la oportunidad histórica de hacer posible que los mexicanos realmente tengamos una impartición de justicia con las características que señala el artículo 17 de nuestra Carta Magna, la oportunidad de sentar las bases de una verdadera federación en la materia y devolver la dignidad a las entidades federativas, hoy ahogadas por centralismo total del 100% en el servicio público de impartición de justicia.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi alta consideración y respeto.

MAGISTRADO CLETO HUMBERTO REYES NERI
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

"LA HISTORIA DEL HOMBRE ES LA HISTORIA DE SU LIBERTAD Y DE LAS INSTITUCIONES QUE LA CONSAGRAN, FRENTE A LOS DESMANES DEL PODER PÚBLICO".

ANDRES SERRA ROJAS

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promueve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nos encontramos ante la inevitable necesidad de transformar radicalmente nuestro juicio de amparo en aras de perfeccionar y ampliar la protección de los derechos fundamentales, garantizar una mejor impartición de justicia y adecuar nuestra más importante institución jurídica a los nuevos tiempos", por el superior interés de hacer de este México, "un país mas justo para todos".

Es decir, que para hacer realidad el anhelo social de contar con un sistema de justicia que garantice la pronta, completa e imparcial administración de justicia en nuestro país, es imprescindible dotar a los gobernados de un instrumento jurídico idóneo, que les permita la defensa eficaz de sus garantías individuales "frente a la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder", y por esa razón, la Ley de Amparo que nos rige debe ser objeto de un proceso de total reingeniería, pues se encuentra desfasada de la realidad jurídica en la que estamos inmersos.

Esa labor, evidentemente, no fue sencilla, pues como ya apuntaba Santo Tomás de Aquino, para que la ley sirva al bien común, debe ser, además de necesaria, útil y clara, entendiendo por tal, que la norma jurídica sea la idónea para dar plena satisfacción a la necesidad social que la motiva, y que no esté redactada en términos confusos, a fin de evitar que sea incomprensible su sentido e imposible su aplicación.

El análisis del proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone de manifiesto, sin género de duda, que los integrantes de la Comisión encargada de elaborarlo, pusieron toda su sapiencia,

empeño y dedicación para diseñar un Juicio de Amparo de vanguardia, adecuado a las exigencias y problemáticas jurídica, de la modernidad.

El proyecto tiene el gran mérito de superar el formalismo jurídico que caracteriza al esquema vigente del juicio de amparo, incluido el paradigma de la fórmula "Otero", mediante la inserción de instituciones que preponderan la justicia y la legalidad por encima de cualquier tecnicismo, como es el caso de la ampliación de la tutela del juicio de amparo a los derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales a que se refiere el artículo 133 de nuestra Carta Magna, de la declaratoria general de inconstitucionalidad, del modelo de suplencia de la queja previsto en el artículo 77 del proyecto, y del sistema previsto en el Título Quinto para evitar que el uso abusivo e injustificado del juicio de amparo, desvirtúe su esencia garantista.

Aun así, hay algunas cuestiones que desde mi punto de vista, podrían ganar en claridad y en eficacia, si se plantearan de otra manera.

Por ejemplo, en la exposición de motivos del proyecto, se reconoce que debido a la complejidad de los asuntos, "En algunas ocasiones las resoluciones (de amparo) llegan a presentar poca claridad", y que el problema se agrava cuando, tratándose de amparos directos, "no se precisan los efectos de las mismas, dejando a la autoridad responsable que debe cumplir con la misma en una confusión poco conveniente y que en nada ayuda a la impartición (de justicia) pronta y completa que orden al Constitución".

Para solventar el problema, por medio de la reiteración en diversos preceptos, el proyecto impone a la autoridad jurisdiccional de amparo, la obligación de precisar los efectos de su sentencia, a fin de garantizar su estricto cumplimiento.

Así se deduce de los artículos 75, 101 y 144, fracción IV del proyecto que literalmente establecen:

> "Artículo 75.- Los efectos de la sentencia que concede el amparo serán:
>
> I. …
> II. …

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo para efectos, el juzgador deberá precisarlos para su estricto cumplimiento…"

"Artículo 101.- En caso de resultar fundado el recurso (de queja), se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío; salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento, en que dejará sin efecto la resolución recurrida y ordenará al que la hubiere emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento".

Artículo 144.- La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener:

I. …
II. …
III. …
IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión, en congruencia con la parte considerativa. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento".

Queda clara la idea, entonces, de que un requisito insoslayable de las sentencias que emiten los tribunales de amparo, cualquiera que sea la cuestión objeto de la resolución, debe ser la precisión de sus alcances.

Por ello, en congruencia con el espíritu del proyecto y por cuestiones de técnica legislativa, debe anexarse una fracción VI, al artículo 72, que es donde se indican los requisitos formales mínimos de una sentencia pronunciada en un juicio de amparo, para incluir la precisión a que me he referido, pues con ello se evitaría, además, en gran medida, que ante lo confuso de una resolución para efectos, el juzgador de amparo tuviese que emitir una aclaración de sentencia.

El texto propuesto es el siguiente:

Artículo 72.- La sentencia debe contener:

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. En su caso, los efectos precisos de la concesión de amparo.
El órgano …"

Desde luego, esta es una precisión formal que en caso de no llevarse a cabo, en nada afectaría a la esencia del proyecto.

Sin embargo, existen dos aspectos de fondo, cuyo planteamiento para la ponderación de esta Comisión legislativa, por sus potenciales efectos prácticos, consideró relevante.

Tienen que ver con las causales de improcedencia del juicio de amparo y con lo que se considera como violaciones graves a los procedimientos jurisdiccionales.

El primer tema es el siguiente:

El artículo 59 del proyecto, introduce en la fracción II, una nueva causal de improcedencia del juicio de amparo, en la que concretamente se dispone, que el mismo es improcedente "contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, salvo los que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación y los que sean de materia laboral".

Acorde con la exposición de motivos del proyecto, la razón de la inclusión, indudablemente válida, es que con tal causal de improcedencia, se da cumplimiento a lo establecido en la Constitución Federal, "en cuanto al carácter definitivo e inatacable que deben tener las resoluciones del Consejo", desde luego, en materia de carrera judicial.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 116, fracción III, de la Constitución General de la República, a las Constituciones y Leyes Orgánicas de los Estados, les corresponde garantizar la plena independencia y autonomía de los Poderes Judiciales locales, mediante el libre establecimiento de las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan en ellos, lo que significa que la tutela de la Carrera Judicial, se escapa a cualquier tipo de control por un órgano distinto al propio Poder Judicial de cada entidad federativa, sea que las facultades en esa materia estén a cargo de un Consejo de la Judicatura, o bien, que correspondan al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de que se trate.

En tal orden de ideas, es inconcuso que las decisiones asumidas en materia de carrera judicial por los Poderes Judiciales de los Estados, tampoco deben ser cuestionadas, ni revisadas por los tribunales de amparo, ya que ello redundaría en una intromisión injustificada del Poder Judicial de la Federación, en los asuntos internos de los Poderes Judiciales de los Estados, pues sería tanto como admitir que

en este tópico, la soberanía de una Entidad Federativa, consagrada en la Constitución General de la República con el carácter de garantía jurisdiccional, para su ejercicio normal depende del visto bueno de la autoridad de amparo.

Por tanto, en congruencia con las disposiciones del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por igualdad de razón con los motivos que llevaron a la redacción de la fracción II del artículo 59 del proyecto, debe establecerse en la Ley de Amparo que el juicio de garantías es improcedente en contra de los actos emitidos por los Poderes Judiciales de los Estados en materia de carrera judicial.

La redacción propuesta es la siguiente:

> "Artículo 59.- El juicio de amparo es improcedente:
>
> I. …
> II. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal o de los Poderes Judiciales de los Estados, en materia de carrera judicial, salvo que afecten derechos de personas ajenas al Poder Judicial de la Federación o del Estado, y los que sean de materia laboral.
> III. …

Esta propuesta, para evitar confusiones, también podría insertarse en una fracción independiente, que solo hiciese referencia los Poderes Judiciales de los Estados.

El otro motivo específico de mi intervención, versa sobre la supresión de la fracción VIII, del artículo 170 del proyecto.

El precepto en cuestión, textualmente establece:

> "Artículo 170.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensa del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: …VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; …"

Al explicar la estructura del Amparo Directo, la exposición de motivos de la propuesta indica que su diseño obedece a la preocupación constante de la sociedad, consistente

en que el Estado de proporcione justicia de manera expedida, pues el retraso en su impartición puede llegar a convertirse en denegación de justicia.

Así mismo, en diversas partes de la justificación del proyecto, se afirma que en el diseño del nuevo procedimiento de amparo, se han tomado en cuenta los reiterados criterios jurisprudenciales de los tribunales Federales, para obviar trámites y propiciar una pronta solución, de fondo, a las diversas cuestiones planteadas en los juicios de garantías.

En el caso de las violaciones procesales a que se refiere el artículo 170, fracción VIII, del proyecto, se ha perdido de vista que en reiteradas ejecutorias, los tribunales de amparo han sostenido, en lo esencial, que las violaciones procesales que hacen nugatorio el derecho de alegar en juicio, son irrelevantes, porque los alegatos no forman parte de la litis, y tampoco pueden modificarla, ya que no hay obligación legal de tomarlos en cuenta, al momento de fallar la controversia.

Luego entonces, si los alegatos en juicio actualmente son intrascendentes, ninguna razón válida justifica que se reponga un procedimiento, para el único efecto de permitirle al quejoso que, previo conocimiento de las constancias de autos, haga uso de un derecho que por sus efectos intraprocesales, no tendrá ninguna influencia en las resultas del juicio, menos si se considera que ello es contrario a la esencia rectora del proyecto, pues representa un retraso indebido en la impartición de justicia, que no aporta beneficios tangibles a los afectados, y de ahí que deba suprimirse la disposición que se comenta.

Para finalizar esta exposición, solo me resta cuestionar el mantenimiento en el proyecto, de la coadyuvancia forzosa que se impone a los tribunales del fuero común en materia de diligencias de notificación en los juicios de amparo, tanto directo como indirecto, pues de algún modo, ello representa una subordinación del Poder Judicial de los Estados, a los Tribunales de Amparo que es contraria al sistema de competencias en que se basa el Estado Mexicano y carece de justificación, pues los tribunales federales cuentan con un amplio presupuesto que les permite contratar el número suficiente de actuarios, para que lleven a cabo las diligencias ordenadas en los juicios tramitados ante dichas autoridades, sin que tengan necesidad de utilizar los servicios de los tribunales del fuero común, como si fuesen sus direcciones de notificadores.

Queda la cuestión planteada para su reflexión.

Un último comentario.

Con todas las pequeñas imprecisiones que pudiese tener el proyecto de Ley de Amparo que se discute, su valor intrínseco es incalculable, pues propone una nueva visión de los derechos subjetivos como procesos institucionales y sociales, y busca la consolidación jurídica de la dignidad humana, lo que nos acerca cada vez más al ideal del estado de derecho, pues la lucha por la dignidad humana es la razón y consecuencia de la lucha por la democracia y la justicia, Gracias.

MAGISTRADO EMILIO CASTELLANOS LUJAN
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RETORNAR AL FEDERALISMO JUDICIAL

DANIEL SOLORIO RAMÍREZ, PROFESOR
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO;
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS
DE MEXICALI, A. C.

a) Introducción

Después de un arduo y prolongado trabajo en que participaron distinguidas personalidades del mundo jurídico nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación logró concretar un proyecto para una nueva Ley de Amparo. Convertido en iniciativa formal por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ese proyecto hoy se encuentra bajo la potestad del Congreso de la Unión. Celebremos que las cámaras federales hayan abierto un proceso de consulta para recibir opiniones en torno a tan importante iniciativa, que en mi opinión incurre en el vicio esencial del sistema jurídico y político mexicano: desoyendo los reclamos por el federalismo judicial que ya pululan por todos los Estados de la república, la iniciativa propone mantener el centralismo judicial. A continuación intentaré una opinión elemental.

b) Y la comisión convocó múltiples foros, pero …

La Comisión de Análisis que la Corte integró fue muy buena, la presencia de gente experimentada fue bien vista. Héctor Fix Zamudio, ---hombre superior a toda excepción, ---generó confianza dentro y fuera de la Comisión. Fueron celebrados múltiples foros en diversas ciudades de la república, --- en Mexicali, el 3 de marzo de 2000, en la Facultad de Derecho, UABC, --- con la promesa explícita de que la Comisión examinaría todas las propuestas de litigantes, profesores de derecho, agrupaciones profesionales, funcionarios judiciales de los Estados, etc., pero nunca quedó claro si a cada propuesta recaería una respuesta de la Comisión, como era de esperarse. En 29 de agosto de 2000 la Comisión concluyó sus trabajos y entregó a la Suprema Corte un anteproyecto que guardó silencio en cuanto a muchas propuestas presentadas. Los autores de las ponencias omitidas quedamos a la expectativa, un tanto desconcertados. Algunos todavía queremos saber cual fue la opinión específica de la comisión de Análisis en cuanto al contenido de nuestras ponencias. Bien sabíamos que no todas serían aceptadas, pero al menos merecíamos una breve explicación.

Vino después el Congreso Nacional de Juristas que convocó la Suprema Corte para escuchar opiniones sobre el proyecto que ya había circulado ampliamente. El congreso tuvo lugar en noviembre de 2000 en Mérida, Yucatán, y para esa fecha ya había surgido algo así como un frente opositor al proyecto, encabezado nada menos que por el ilustre profesor universitario Ignacio Burgoa, cuya trayectoria profesional y académica la hacen merecedor de toda consideración. Pero las objeciones del "frente opositor" tampoco abordaron lo referente al centralismo judicial que, anacrónicamente, la iniciativa pretende conservar en toda su integridad.

Lo que ocurre, ---digámoslo con toda claridad, --- es que tanto los autores de la iniciativa como sus principales detractores han vivido un centralismo que no les parece reprochable. Residentes casi todos del Distrito Federal, habituados a que "… fuera de esa gran ciudad todo es Cuautitlán…" como dijera alguna vez la célebre "Güera Rodríguez", asumen como algo válido, casi natural, que los tribunales federales centralicen todo el sistema de justicia. No advierten la disfuncionalidad que este fenómeno está acarreando a la vida jurídica nacional.

Ni los autores de la iniciativa que el Presidente Fox hizo suya, ni la Suprema Corte como cuerpo colegiado, han advertido el enorme potencial que en materia de justicia podrían desarrollar los tribunales de los Estados. No parecen interesados en rediseñar nuestro sistema de justicia.

c) Mantener el mismo sistema judicial no amerita una nueva ley.

Si yo no hubiera leído previamente lo que escribió José de Jesús Gudiño Pelayo, distinguido ministro de la Suprema Corte, quizá no tendría elementos para objetar el acusioso trabajo que por más de un año llevó a cabo la Comisión de Análisis. Pero leer este iluminador esfuerzo intelectual y confirmar algunas ideas ya añejas fueron una y la misma cosa. Es por eso que al estudiar el proyecto de nueva Ley de Amparo, hoy convertido en iniciativa presidencial,--- yo digo que todas las propuestas que incluyó el proyecto caben perfectamente en una iniciativa de reformas y adiciones, sin necesidad de una nueva Ley de Amparo.

Si la reforma será sólo del tamaño que contiene el proyecto no hace falta una ley nueva. El proyecto no entra al fondo de las instituciones vigentes; las conserva casi íntegramente con algunas modificaciones. No hay necesidad de una ley cuando se pretende conservar enteramente las instituciones que por casi siete décadas han constituido al juicio de amparo, introduciendo sólo algunas variantes. Que las modificaciones sean en algunos casos de gran relieve no determina que la ley deba

ser sustituida por otra. Observemos: las propuestas de reformas abarcan en lo sustancial los puntos que siguen:

1º. Renovar la fórmula Otero para avanzar hacia una moderada declaración general de inconstitucionalidad, e introducir una figura, ---ésta si novedosa--- a la que se ha dado el nombre de "interpretación de la ley conforme a la Constitución".

2º. Ampliación del interés jurídico para accionar, hasta llegar al interés legítimo.

3º. Modernizar el concepto "autoridad" para los efectos del amparo, y ampliar la suplencia de la queja.

4º. Mejorar las reglas para conceder o negar la suspensión, particularmente en el área penal, y alojar en la ley la tesis de la apariencia de buen derecho, forjada bajo la certera ponencia del prestigiado ministro Góngora Pimentel.

5º. Mejorar las reglas sobre la formación de la jurisprudencia.

6º. Crear el "amparo adhesivo" y modificar el amparo directo para "…abatir la censurada práctica del amparo para efectos" en tratándose de violaciones procesales. En este punto la solución propuesta no parece muy afortunada.

7º. Mejorar el sistema de ejecución de sentencias e imponer severos castigos a quien deje de cumplirlas.

8º. Suprimir los efectos de la inactividad procesal, ese atraco judicial que llegó a la ley años atrás bajo el impulso de la Corte Suprema.

9º. Precisar algunos conceptos en materia de competencia, impedimentos, incidentes, etc.

Mas allá de las objeciones específicas a cada uno de estos puntos, en ellos quedan resumidos los cambios que propone el proyecto. Aunque algunos de estos puntos son muy relevantes, ninguno implica un cambio fundamental a las instituciones actuales del amparo. Uno de los más trascendentes es la declaración general de inconstitucionalidad, ---altamente cuestionable porque erróneamente asume que la jurisprudencia de la Suprema Corte es infalible e inmutable, --- pero la Comisión propone que conviva con la tradicional fórmula Otero. Así el cambio no es sustancial.

Todo lo demás no pasa de modificaciones, reformas, adiciones. Así, resulta inevitable coincidir con Gudiño Pelayo (páginas 16, 17 y 28) cuando dice:

> "… Este aspecto sistémico de las normas jurídicas constituye uno de los elementos esenciales, fundamentales, que debe tomarse en consideración al emprender cualquier reforma legislativa, más aún si se trata de una modificación constitucional. La ausencia de esta preocupación sistémica es una de las causas principales de que las instituciones jurídicas, a lo largo de reiteradas reformas legislativas en las que se modifica de modo parcial su regulación sin cuidar su relación con el todo, en forma paulatina se desdibuje, pierdan su diseño original y, en consecuencia, cada vez sean más ineficaces para el logro de las finalidades para las que fueron concebidas. Esta es, en buena medida, la causa de la relativa ineficacia de nuestro juicio de amparo, que se diseñó para proteger los derechos fundamentales del individuo emanados de la Constitución, y hoy se ha convertido en la última instancia judicial de toda, absolutamente toda, contienda ordinaria, local o federal, objetivo para el que no fue diseñado. Esto es, mi opinión, lo que justifica la expedición de una nueva ley de amparo: el rediseño del juicio de amparo como instrumento protector de los derechos fundamentales del individuo, de acuerdo a las actuales necesidades y circunstancias. De otra manera, no hay razón alguna par ala expedición de una nueva ley, pues si el amparo continúa con el mismo esquema vigente hasta estos instantes, basta y sobra con efectuar las modificaciones necesarias a la actual ley de amparo. ¿Para qué una nueva ley si la estructura y el alcance del juicio de amparo, en lo fundamental, permanecen intocados?. Reitero mi opinión de que lo que justifica la expedición de una nueva ley de amparo es el rediseño del juicio de amparo como instrumento protector de los derechos fundamentales del individuo, atendiendo a las necesidades y circunstancias actuales. De otra manera no hay razón alguna para la expedición de una nueva ley…"

Yo espero que el Congreso de la Unión tenga oportunidad de reflexionar ampliamente sobre la conveniencia de replantear, repensar, rediseñar nuestro sistema judicial y volver por los fueros del auténtico federalismo. Es necesario examinar, estudiar las propuestas que ya han surgido de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y formular un proyecto amplio y completo de reformas a la Constitución Federal.

d) El convidado de piedra: la soberanía interior de los Estados.

Allá por 1869 la Suprema Corte resolvió el amparo Miguel Vega vs. Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa que abrió las puertas al amparo "… en negocios judiciales…" expresión poco afortunada del artículo 8º. De la segunda Ley de Amparo. Esa ejecutoria produjo la muerte del federalismo judicial, según expresión apabullante de don Antonio Carrillo Flores. Unos años después la Corte dio a la soberanía interior de los Estados otro rudo golpe: extrajo del artículo 14 de la Constitución la garantía individual de legalidad, lo que, ---según se ha explorado en abundancia, …la convirtió en revisora de todos los fallos de todos los tribunales de todos los Estados de la república.

Las circunstancias históricas de la nación mexicana explican que la Suprema Corte haya centralizado férreamente la administración de justicia del orden local. Bien se entiende que la saturación de la Corte con los miles de juicios de amparo provenientes de todo el país haya exigido crear Tribunales Colegiados de Circuito allá por 1950, pero ya transcurrieron más de cien años y las condiciones sociopolíticas de México han cambiado. Pero la Suprema Corte no parece interesada en devolver a los Estados u soberanía interior en el ámbito de la administración de justicia.

Nada en el proyecto de nueva Ley de Amparo guarda relación con estos conceptos que hoy, en los albores de una nueva época y al inicio de un nuevo siglo, retienen a la Suprema Corte anclada en el México del siglo XIX. Esos conceptos ya aguantaron todo el siglo XX, pero hoy ya deben ser replanteados. La calidad de la justicia que imparten los tribunales federales por toda la república no siempre es mayor a la que suelen impartir los tribunales de los Estados. Replantear nuestro sistema de justicia muy pronto será verdaderamente urgente, pero la Suprema Corte parece no advertirlo. La actual iniciativa para una nueva Ley de Amparo no indica que ya lo haya advertido.

e) El extravío de nuestro sistema judicial.

La jurisprudencia de la Suprema Corte, ---y no el Constituyente ni el legislador,--- a finales del siglo XIX creó en México la garantía de legalidad y abrió las puertas del amparo contra las fallos de todos los tribunales del país. Al hacerlo atendió un reclamo nacional porque según dicen los ilustrados, los justiciables no confiaban sino en la Corte Suprema, a la que suponían libre de toda presión y de todo sometimiento. Esta decisión jurisprudencial provocó en la práctica la centralización de todo nuestro sistema de justicia y el Constituyente de 1917 la ratificó al expedir la Constitución actual.

Nadie duda de la gran contribución que la justicia federal ha hecho a la vida jurídica mexicana. Esa parte de nuestra historia política no está en discusión, pero hoy, en los albores del siglo XXI el centralismo judicial está provocando graves daños a la estructura fundamental del Estado mexicano porque impide la vigencia real del sistema federativo.

Los fenómenos políticos derivados de la garantía de legalidad y la procedencia del amparo federal contra todo tipo de fallos judiciales son, entre otros:

1º. La administración de justicia de todo el país, y en todas las materias, quedó en manos de los jueces federales. Loso jueces de los Estados quedaron convertidos en simples tramitadores de expedientes.

2º. El federalismo judicial quedó aniquilado y la soberanía interior de los Estados se convirtió en una mera entelequía. Los Estados quedaron en el grave predicamento de no justificar su propia existencia como entidades políticas autónomas, pues la capacidad de autogobierno es la nota esencial de un Estado autónomo, miembro de una federación.

3º. Los jueces de los Estados, incluyendo a los Tribunales Superiores de Justicia, quedaron sometidos a los tribunales de la federación en todo y para todo. En la práctica cotidiana éstos son superiores jerárquicos de aquellos.

4º. A partir de la centralización total, ni la sociedad ni los poderes públicos mostraron interés en mejorar la administración de justicia de los Estados. Si por encima de éstos siempre están los jueces federales; si éstos son los que dicen la última palabra; si éstos son los únicos confiables a éstos hay que fortalecer.Esa ha sido la divisa de los gobiernos durante las últimas décadas, y en especial los últimos seis años.

5º. El derecho local, el que contienen las leyes que aprueban los Congresos de los Estados quedó totalmente en manos de los jueces federales. Son ellos quienes definen el alcance y contenido del derecho de los Estados. En suma, gracias al amparo y la garantía de legalidad, o por culpa de éstos, Dios me perdone, la justicia local quedó reducida a la nada.

f) Los reclamos por el retorno al federalismo judicial.

Pero ya los Poderes Judiciales de los Estados no están conformes con el actual estado de cosas en nuestro sistema de justicia. En ellos ha brotado la inconformidad desde hace varios años, pero no han sido escuchados por el poder constituyente permanente de la nación. Quizá les ha faltado fuerza y determinación para hacer oír sus reclamos. Veamos:

Reunidos en Querétaro un 10 de noviembre de 1994, todos los magistrados presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de toda la república emitieron una declaración inusual, inusitadamente fuerte, que sin embargo no tuvo eco ni ha tenido seguimiento. No despertó polémica a pesar de que involucra un cuestionamiento a la tradición centralista, tan arraigada en las prácticas judiciales mexicanas. La "Declaración de Querétaro" dijo en uno de sus párrafos:

> "…En cuanto a la justicia ordinaria local, fieles a la opinión del insigne jurista Emilio Rabasa, propugnamos porque se deje a los tribunales de los Estados la última palabra en todos los negocios de su competencia, de manera que, como lo establecía la Constitución de 1824, los negocios de cada Estado concluyan ante sus Tribunales hasta su última instancia; naturalmente, sin excluir la posibilidad de que esta última sentencia sea combatida por medio del Juicio de Amparo en el caso de que ella suscite una verdadera cuestión constitucional …"

Esta declaración de los tribunales superiores merece al menos ser oída. Imposible ignorarla cuando se discute una iniciativa para una nueva Ley de Amparo. Inverosímil que haya sido olvidada cuando se ha propuesto replantear el sistema del amparo, pieza maestra de todo nuestro sistema judicial. Esta declaración por lo menos obliga a preguntarnos:

Subsisten las condiciones sociopolíticas que hace más de un siglo dieron lugar al amparo que hoy llamamos directo? ¿Está justificada hoy la centralización casi total de la justicia? ¿es la justicia federal de mejor calidad, más honesta, menos sujeta a la corrupción que la justicia de los Estados?

f) Nuestra confusión conceptual

En el fondo de nuestros esquemas jurisdiccionales subyace una confusión conceptual. Hemos asimilado indebidamente lo federal propiamente dicho, con lo constitucional. Perdimos de vista que originalmente la justicia constitucional es una, y que otras son la justicia federal y la justicia local. El federalismo judicial sólo es posible si se respetan estos principios. Pero en nuestra vida práctica y nuestras leyes, los jueces

federales poseen no sólo la función de ser jueces de derecho federal; son además jueces constitucionales, lo que acumula en sus manos un poder rayano en la desmesura. El mismo juez que en un expediente decide si una persona es o no responsable de un delito federal, en otro juzga si un colega suyo, federal o local, incurrió en violaciones a la Constitución. Esta doble jurisdicción ha creado jueces federales extremadamente poderosos, frente a jueces estatales lastimosamente disminuidos.

Si retomamos el sentido original del federalismo, llegaremos a la conclusión de que tanto la jurisdicción federal como la local deben retomar el lugar que les corresponde, y operar convenientemente separadas. Arribaremos a la necesidad de crear una verdadera jurisdicción constitucional, por encima de la federal y la local, como ocurre en otros países. Una jurisdicción que cultive criterios estrictamente constitucionales, con respeto absoluto a las jurisdicciones ordinarias, federal y local.

h) Esto es parte de la reforma del Estado.

Suprimir el juicio de amparo directo mediante un proceso gradual que podría ser incorporado a la Constitución federal; devolver a los estados su capacidad para resolver hasta su última resolución los conflictos jurídicos de su incumbencia; rediseñar los poderes judiciales de los Estados y establecer supremas cortes de justicia del orden estatal; precisar que a la Suprema Corte, ---Convertida en un verdadero tribunal constitucional--- son los grandes temas del federalismo judicial en el México de hoy.

El Congreso de la Unión que hoy conoce de la iniciativa presidencial para una nueva Ley de Amparo, no tiene por qué conformarse con menos. No basta renovar el amparo y dejarlo tal cual. Eso ya no es suficiente para una sociedad tan plural como la nuestra.

MAGISTRADO RAUL BOLAÑOS CACHO
PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Para nosotros los magistrados de los tribunales de justicia de la República era tema fundamental plantear en esta reunión nuestra inquietud en el proyecto de Ley de Amparo respecto de las sanciones, por incumplimiento de sentencias de amparo y el federalismo judicial.

Hay un tema que presentamos en la reunión de Mérida, que fue aprobado en la mesa de trabajo, que es importante para los tribunales de justicia de la República y que no se vio reflejada en el nuevo proyecto de la Ley de Amparo. Aquí se lo voy a dejar al señor Presidente de la Comisión de Justicia, pero es un tema que se refiere a la jurisprudencia.

La jurisprudencia, la interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ley y también de los tribunales colegiados, nos obliga a los tribunales de justicia aplicarla para fundamentar nuestras resoluciones; es una cuestión muy delicada, muy importante, muy trascendente.

Los sistemas tradicionales, cinco sentencias en un mismo sentido respecto de un mismo asunto, sin uno que la contradiga y el otro sistema de contradicción de tesis, de criterios opuestos, ahora se reduce a tres sentencias en un mismo sentido, si no tienen contrario, y creemos que crea una inseguridad jurídica el reducir ese consenso que se hacía tradicional de la jurisprudencia. Es un aspecto que nosotros aquí analizamos.

Otro aspecto es que ahora la Corte puede sustituir su jurisprudencia o interrumpirla, pero no nos faculta a los tribunales de justicia para denunciar, pedir la sustitución o la interrupción, cuando nosotros somos los que aplicamos la jurisprudencia, y tampoco nos faculta a nosotros a denunciar las contradicciones de tesis, que nosotros que estamos aplicando las tesis y vemos su contradicción.

Entonces, son temas importantes para los tribunales de justicia, donde hicimos el estudio, donde es un estudio aprobado en la reunión de trabajo de Mérida y donde no está reflejado en el nuevo proyecto de Ley de Amparo.

Aquí se lo entrego al señor Presidente.

Bien, de no haberlo, nuevamente, señores legisladoras, legisladores, señor Presidente de la Comisión de Justicia, deseo expresarles a ustedes la gratitud de los tribunales del fuero común, por esta relevante reunión que hemos celebrado esta tarde, ya que hacía 25 años que esta Comisión nació, la primera vez, y qué bueno, como lo apuntaba el diputado Pérez Noriega, que los legisladores federales le abren las puertas del Palacio Legislativo a los tribunales del fuero común para trabajar en forma coordinada, como lo expresara el magistrado Julio Menchaca, de Hidalgo y aportar a ustedes la colaboración, el esfuerzo de cada una de las tareas.

Los comentarios que nuestros colegas magistrados presidentes y magistrados han vertido, van a coadyuvar con todas las decisiones legislativas que se tomen acá.

Creo que es el inicio de una nueva tarea en la cual siempre, señores diputados, los señores presidentes y magistrados, y todos los servidores públicos de los poderes judiciales de los estados estaremos atentos para que en el momento en que se nos convoque y se nos invite por esta Comisión, a participar con mucho empeño.

Nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a todos ustedes, señores legisladores.

Ha sido, y este reconocimiento no sólo es de la Comisión, sino de la Cámara de Diputados toda, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hubiera querido expresarles esto personalmente, razones sobrevinientes se lo impidieron, pero me pide hacerles el ruego de que a través de ustedes la Cámara de Diputados salude a los poderes judiciales de los estados federados y del Distrito Federal.

Estamos enfrascados los mexicanos en la toma de una decisión esencial para hacer que nuestros sistemas de protección constitucional sean lo que siempre hemos querido que sean, o lo que siempre debieron haber sido: accesibles, eficientes, vigorosos, equitativos y muy abiertos al acceso de todos los mexicanos.

Estamos enfrascados en muchas o entre muchas voces que hoy discurren en este debate nacional y que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha pretendido encausar a través de esta consulta nacional.

Hay voces que discuten en lo valorativo, unas, parece que son muchas, dicen que el sistema de protección constitucional y particularmente el amparo mexicano necesita de muchas composturas.

Otras voces, parece por el contrario que dicen que el sistema de amparo mexicano es perfecto e insuperable y que no tiene sentido que gastemos tiempo ni esfuerzo en hacerlo o en intentarle mejorías.

También las voces mexicanas hemos escuchado discuten en lo metodológico, unas sugieren que tengamos un nuevo ordenamiento completo o una nueva serie de ordenamientos completos para el sistema, para contener el sistema de protección constitucional, otros por el contrario dicen que el mejor método sería arreglar, componer o reformar los actuales.

Hay voces que discuten en lo cronológico, dicen que hay que hacerlo y ya, que urge, otras por el contrario dicen: hay que hacerlo, pero las cosas pueden esperar, aguantan tiempo.

Hay unas que discuten en lo distributivo, qué competencias o qué cargas de trabajo debemos dar a cada una de las potestades, cuáles seguir reservando, conservar el monopolio federal de 150 años en materia de protección constitucional, revertirlo, ¿en qué medida y con qué intensidad?

Hay voces que discuten en lo procesal y enfrascamos y hemos escuchado y nos hemos enterado de discusiones en torno al interés legítimo, de entorno al interés jurídico, en torno a las resoluciones de conforme, en torno a una serie múltiple en esta cuestión.

Hay voces que discuten en lo cratológico, y nos alertan particularmente al Congreso de no otorgar facultades a otro Poder que nos haga someternos a la voluntad de él. Hay voces que discuten en lo federalista, si debemos crear Cortes en los estados o repartir esas potestades.

Hay voces, en fin, que discuten en lo estratégico y nos sugieren ciertos programas o ciertas astucias para reformar, pero no todo a un tiempo y no todo a la vez, y qué cosas sí y qué cosas no, y qué cosas cuando, a base de un muy redituable calendario de ejercicio de potestades públicas.

Lo cierto es que el Congreso de la Unión, y en su caso el Constituyente Permanente tendrá que tomar decisiones sobre el particular, decisiones de hacer o no hacer, decisiones de qué hacer en su caso, decisiones de cómo hacerlo y decisiones de cuándo hacerlo.

Para eso se ha convocado esta consulta, para esto se ha querido escuchar a todos los que están directamente relacionados con el tema de que se trata, para que en él participen las autoridades responsables, las partes contendientes en el amparo, los juzgadores, los auxiliares de los juzgadores, los litigantes, los académicos y la ciudadanía en general.

No para tomar una decisión al gusto de los juzgadores, no para tomar una decisión al acomodo de las autoridades responsables, no para hacer exposiciones ni siquiera al mero gusto de los legisladores, sino para tratar de tomar las decisiones esenciales al interés y a la conveniencia de la nación mexicana.

Lo único que tenemos una certeza en este momento, es como lo han expresado mis compañeros, que no vamos a rehuir el arduo y a veces el doloroso deber de tomar las decisiones, cuales quiera que esas sean las vamos a tomar nosotros y las vamos a tomar en el momento que lo reclama la República, pero es fundamental para nosotros el contar con la generosidad, con la experiencia, con la sabiduría, con la buena intención, con la generosidad de tiempo que ustedes han demostrado en ocasión como ésta y que haciendo uso del ofrecimiento de ustedes persistiremos en el contacto para poder estar ciertos y para poder garantizar a la nación mexicana que en las decisiones, que ineludiblemente tenemos que tomar, sean las que más convienen al bien superior de México.

DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN
CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

Seré muy breve, realmente quiero darles la bienvenida; esta es una rica experiencia que estén los presidentes y magistrados de los diferentes tribunales superiores de justicia, aquí en la casa de las leyes. Para nosotros es muy importante conocer su punto de vista.

Efectivamente, quiero señalar, esta es una reunión de trabajo modesta, pero para nosotros es muy importante. Tal vez, como lo ha señalado el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tendremos que estar más de cerca con ustedes, para poder normar algunos criterios, en relación con la aprobación de la Ley de Amparo.

De lo que sí estoy seguro y estoy convencido, es que el país requiere una nueva Ley de Amparo, de lo que sí estoy seguro y estoy convencido, es que muchas de las cosas que ustedes dijeron, muchos de los señalamientos que aquí se han presentado, es muy importante tomarlos en cuenta, para tener exactamente la Ley de Amparo a la que aspiramos los mexicanos en este siglo XXI.

Terminaría yo diciendo lo siguiente nada más: Para los diputados y para las diputadas de esta LVIII Legislatura, es verdaderamente importante su punto de vista, el punto de vista de cada uno de ustedes, a veces puede ser no el mismo punto de vista de muchos de los que estamos aquí. Hace rato oía que había, incluso diferencias entre algunos de los mismos magistrados en relación a un mismo tema.

Sin embargo, ese tipo de consideraciones para nosotros será, de una elevada utilidad. Quiero insistir, bienvenidos, esta es su casa y yo particularmente, estoy muy agradecido con sus aportaciones. Gracias.

DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA
DEL PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA

A nombre de los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista, les doy la bienvenida y les manifiesto el interés que tenemos para crear un marco jurídico, acorde a las necesidades del país y con el cual, la sociedad mexicana sienta que cuenta con leyes que les proporcione una justa, imparcial, pronta y expedita impartición de justicia.

Conocedores y respetuosos del federalismo, los exhortamos a que en un marco de diálogo y consulta, nos manifiesten sus propuestas para contar con un sistema moderno de administración de justicia. Todos aquí presentes, estamos conscientes de que es necesario la discusión, para la creación de una nueva ley de amparo y principalmente la reforma cuestiones, como la derogación de la fórmula Otero, en el caso de las leyes declaradas como inconstitucionales por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia.

La aplicación del concepto de autoridad responsable para efectos del amparo, la redefinición de los principios de estricto derecho, suplencia de la deficiencia, de la queja y el del interés jurídico. El establecimiento de mecanismos efectivos, para el cumplimiento y la ejecución de las sentencias de amparo; la limitación de los supuestos de procedencia del amparo por vía directa; otorgar la calidad del tercero perjudicado, al ofendido en materia penal.

Revalorizar el papel que desempeña el ministerio público federal, dentro del juicio de amparo; el sobreseimiento por inactividad procesal por el quejoso; la procedencia del amparo en las cuestiones electorales. Les reitero nuestra mejor disponibilidad de escuchar sus planteamientos y propuestas, ya que con su apoyo tendremos más herramientas para poder legislar, a favor de todos los mexicanos y fortalecer la unidad y el progreso del Estado Mexicano. Gracias.

DIPUTADA MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO

Muy buenas tardes a todos. Y quiero unirme a este reconocimiento, por esta reunión de trabajo tan importante históricamente, y bueno, creo que no podía faltar de incluir en esta Comisión, las propuestas de todos ustedes, de los estados de la federación; creo que van a ser de mucha utilidad para el trabajo en esta Comisión, sean ustedes bienvenidos y creo que todos coincidimos en que debe de haber un cambio, pues para el bien de los gobernados. Muchas gracias.

DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICA

Gracias, ciudadano Presidente. Yo reitero la bienvenida, para las señoras magistradas, para los señores magistrados, presidentes y representantes de los tribunales superiores de justicia de los estados y supremos tribunales.

El tema central a la convocatoria que habrá que reconocerle, señor Presidente y a la Mesa Directiva, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ha sido el que tiene que ver con la Ley de Amparo, es consideración de un servidor que, y evidentemente que la realidad de la que debe nutrir la iniciativa de una ley, para que ésta sea procesada en las instancias legislativas, es que, como vemos ahora, no solamente el tema central ha sido el de la Ley de Amparo, sino se han abordado temas que tienen que ver, con el favorecer o fortalecer el concepto del federalismo judicial.

Tengo conocimiento, que el anteproyecto, fue procesado, fue consultado y entre comillas legitimado, en un tiempo distinto a aquel en que nos enmarcamos en la estructura política actual. Me parece y yo me anticipo con conclusiones a su consideración, que para abordar el tema de la Ley de Amparo, debe en principio ser abordado el tema del federalismo judicial, porque de suyo implicaría reformas a los aspectos procedimentales que contempla el artículo 107 de la Constitución Federal y la Ley Reglamentaria de este numeral y del artículo 103.

En la historia de los pueblos, yo digo que hay cruces histórico-políticos irrepetibles, y quizás en México éste sea uno, para el análisis de la estructura y la competencia de los poderes federales y de los poderes de los estados; y esto tiene que ver en mi concepto, con el asunto de devolver en la medida que se determine, la definitividad en la facultad de resolver de los jueces de los estados, pero no es suficiente y tenemos que ser honestos, la cobija presupuestaria es una y de esa cobija presupuestaria, anteponemos siempre que será un factor para generar condiciones distintas de desarrollo nacional.

Dicho de otra manera, para hablar de autonomía e independencia de los poderes, me parece básico analizar el asunto del presupuesto. Y me parece, que los poderes judiciales de los estados, no son ajenos a uno de los temas centrales en este país, que tiene que ver con la seguridad pública, que tiene que ver con la fiabilidad, con la credibilidad en el Estado de Derecho; ninguna sociedad puede aspirar a mejores niveles de desarrollo, si no se toca estructuralmente quien administra justicia.

A mí me parece, que la propuesta debe abordar, no solamente el asunto de la policía federal preventiva o de los niveles preventivos o de procuración de justicia, el tramo de administración de justicia es central; este país tiene de jurisdicción ordinaria, delitos de competencia federal, de los que conoce y enjuicia al Poder Judicial Federal, apenas el 3 por ciento, con relación al conocimiento y resolución de los juicios de amparo, es decir, la seguridad pública en este país está cimbrada y articulada, con conceptos que van más allá del aspecto preventivo y de las policías.

Creo entonces, que el asunto de la casación del presupuesto a nivel constitución federal y de constituciones locales, son factores indispensables para poder hablar del fortalecimiento al federalismo judicial, a la independencia y a la autonomía de los poderes locales.

Estima también, un servidor, de que es incuestionable la autenticidad y la aportación de la institución del juicio de amparo, en términos de tutela a los derechos fundamentales de los gobernados en este país. Y que también a partir, sobre todo de las reformas de 1994, ha habido fortalecimiento al Poder Judicial de la Federación, incluso su actuación va más allá de la tutela, de la constitución, desde la perspectiva de los derechos de los gobernados, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, son también aspectos que trascienden al ejercicio de la función pública en este país.

No puedo sino concluir, que me parece necesario, al tiempo que celebro la convocatoria a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de que no puede ser abordado unitariamente la reforma constitucional o la reforma a la ley reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, sin tocar esto que tiene que ver con el fortalecimiento al federalismo judicial, que no es otra cosa que el ponderar la redistribución de las atribuciones y facultades de la federación y de los estados.

DIPUTADO FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

En primer lugar, como integrante de esta Comisión, me felicito por esta reunión, en donde hemos dado oportunidad de expresarse, a los tribunales superiores de justicia de los estados. Y de lo aquí expresado, nos damos cuenta que se rebasó con mucho, el tema propuesto para esta mesa de trabajo.

Tengo entendido.. el diputado Torres Mercado. Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Sondón Saavedra, del Partido Acción Nacional.

Entonces, tiene la palabra el diputado Francisco Cárdenas Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, como integrante de esta Comisión, me felicito por esta reunión, en donde hemos dado oportunidad de expresarse a los tribunales superiores de Justicia de los estados.

Y de lo aquí expresado, nos damos cuenta de que se rebasó con mucho, el tema propuesto para esta mesa de trabajo. Tengo entendido que el tema para esta mesa de trabajo, era el análisis del proyecto de ley de amparo que presentó la Suprema Corte.

Sin embargo, aquí se expresaron valiosas opiniones que tienen que ver con la justicia en México. Por ejemplo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, de Hidalgo, de Colima, de Guerrero, de Nuevo León, etcétera, manifestaron inquietudes en relación con la posibilidad: Uno, de la creación de un tribunal constitucional, que rebasa en mucho el tema aquí planteado.

Otros, la creación de las cortes estatales, que es una antigua propuesta de los tribunales superiores de Justicia. Esto ya viene de cerca de 10 años. Se ha ido madurando cada vez más. Entonces, yo pienso que, así como se le ha dado espacio a la Suprema Corte de Justicia, de tratar el tema de la nueva ley de amparo, deberíamos de dar espacio aquí, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para la propuesta que presentan los estados, a través de los tribunales superiores de Justicia, con ese proyecto que presentan de cortes estatales.

¿Por qué?, yo fui presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila, fui magistrado, y comparto en mucho todo lo que se ha expresado aquí. Es cierto, efectivamente, incuestionable, que los tribunales superiores de Justicia, los poderes

judiciales de los estados, realizan atribuciones, realizan funciones que corresponden al Poder Judicial de la Federación.

Y aquello que significa una carga para los estados, económicamente, simple y sencillamente no se reconoce al momento de el equilibrio entre los poderes del estado. Equilibrio financiero, no nada más en cuanto a la decisión de las cuestiones jurisdiccionales.

Equilibrio financiero, y como decía bien el diputado Torres, de Zacatecas, esto tiene que ver, no nada más con la administración de justicia, con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sino con la del Federalismo, con la de Reforma del Estado. ¿Por qué?, porque aquí se está gestando la posibilidad de una renovación, de una reestructuración toda, del Estado mexicano, en cuanto a las atribuciones constitucionales con las entidades federativas, e incluso de los municipios.

No nada más a lo que se le ha dado mayor difusión en la prensa, desde el punto de vista fiscal, sino más allá, vamos al Gasto. Y aquí, además del Gasto, vamos al Poder Judicial. Decían, y decían bien, algunos de los señores magistrados, que de esa atribución, me parece que el del estado de Hidalgo fue el que lo comentó, era de la cuestión mercantil, que en inicio es federal, del 50 al 60 por ciento.

Yo me acuerdo que, en algunas ocasiones, habían estados en donde hasta el 70 y el 80 por ciento eran manejados por el Estado, pero todavía más, en el amparo directo le hacemos el trabajo al Poder Judicial, se la llevamos, como luego dicen en el pueblo: "Peladita y en la boca", al Poder Judicial Federal. ¿Por qué?, porque ya les hicimos todo el trabajo, nada más para que resuelvan.

Ya notificamos, ya integramos el expediente, pero ahora, en contrapartida, establecen en el nuevo proyecto, que viene por ahí, sanciones gravísimas, como señalaba por acá el compañero del Estado de México, me parece o el del estado de Morelos, sanciones extraordinarias, si llega a haber ahí algún problema hasta de copias ilegibles, que no son culpa de los tribunales locales.

Porque incluso, si hay una copia ilegible y así se presentó y no se impugnó, simplemente no van a tener valor probatorio, pero no me obligues a darte algo que no me presentaron. Así están las cosas. Entonces, yo creo que esto rebasa en mucho el tema y debiéramos de reflexionar en el Congreso, Cámara de Diputados y de Senadores, esta nueva redistribución de competencias y pensar, ¿por qué no? en esta oportunidad que tenemos de que los estados, en una renovación del federalismo, se encarguen de la cuestión de legalidad, del régimen de analizar los actos de la

autoridad, conforme a la Constitución, desde el punto de vista de la legalidad, es decir, los tribunales de casación.

¿Por qué?, porque hemos visto que los tribunales de los estados nada tienen que pedir a los tribunales colegiados, en cuanto a la capacidad de sus integrantes para resolver cuestiones. No, señores, hay igual y en algunos casos, mejor capacidad y atribución en los tribunales locales, que en algunos tribunales colegiados. ¿Por qué?, porque ellos conocen de tutti frutti.

Resulta que es civil, penal, mercantil, laboral, administrativo y son todólogos y resulta que en los estados, prácticamente en todos, ya hay especialización, por lo menos en lo civil, en lo penal, en algunos, en lo familiar.

Entonces, creo que debemos, seriamente, pensar en analizar con cuidado esta propuesta que realizan los tribunales superiores de Justicia, que merecen el mismo respeto y la misma oportunidad que se le hace al proyecto que presenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entonces, yo me felicito de estar en esta reunión, y ojalá que esta no sea la primera, ni la última. La primera lo es, por lo que me he informado aquí, pero la última, ojalá que no sea, porque nos va a retroalimentar de lo que pasa, de lo que se piensa y de lo que se dice en el país, sobre estos temas tan importantes, como son la administración de justicia.

Yo agradezco la oportunidad, no quiero cansarlos más, porque ya sé que nos hemos tardado en esta comida ya un largo tiempo. Entonces, cedo el micrófono al que sigue en el orden.

DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

Hemos escuchado con mucha atención las intervenciones de los magistrados presidentes o los representantes de los tribunales superiores de Justicia de los estados, ha sido rica en conceptos, en percepciones jurídicas.

Yo quisiera reflexionar sobre algunas situaciones. Primero, ésta, que se ha llamado iniciativa de ley, de esta nueva ley de amparo. No es todavía iniciativa, aún no es iniciativa, es un proyecto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso a consideración de los grupos parlamentarios, para considerarla y presentarla ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores. Es un proyecto, no es aún iniciativa. Parece que es así, de lo contrario, estaría yo ajeno a la información que se tenga en esta Cámara.

Yo quiero establecer que, efectivamente, el punto delicado de la administración de justicia en los estados, tiene que ver con el Presupuesto que los estados asignan al Poder Judicial. Su servidor, como Diputado, presentó, recogiendo el espíritu de la reunión de Tenerife, la reunión de cortes supremas de países latinoamericanos, para establecer una previsión constitucional presupuestaria para el Poder Judicial Federal. Reformas al último párrafo del artículo 100 de la Constitución.

Y de igual forma, se puede establecer una iniciativa con relación al artículo 116, fracción tercera, para que pudiera haber una previsión constitucional en los presupuestos de los estados, para los poderes judiciales. Eso no significaría invadir soberanías, podría ser una iniciativa que presentáramos diputados y que en este momento estoy reflexionando sobre la posibilidad de que ustedes inquietaran a las legislaturas de sus estados, que también tienen derecho de iniciativa, conforme al artículo 71, para hacerlo.

O en su defecto, como magistrados, que pudiera ser entablado y pudiera utilizarse el procedimiento que el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, prevé. Es decir, se recibe por parte de la Mesa Directiva, se envía a una comisión que dictamina si debe de tomarse o no en cuenta, e iniciarse, y no esperar, como en el caso, estamos escuchando, que la Corte controle el proyecto que pone a consideración de los grupos, que los reúna para tomar criterios y que después no aparezca en el proyecto final.

Yo, respecto a las cortes estatales, establecería alguna preocupación, la independencia del Poder Judicial en los estados, respecto de sus gobernadores. Yo, ahí sí, establecería esa preocupación, porque es la justicia federal, el lugar a donde acuden los directamente interesados, cuando pudiera presentarse un caso de inequidad o de alguna influencia ajena a la mera aplicación de la ley.

Lo hay, quienes hemos intervenido en el ejercicio de la aplicación, de la administración de justicia, lo hemos vivido. Aún no hay una plena independencia. Habría que revisar los mecanismos de nombramiento y habría que dar cumplimiento a lo que prevé el artículo 116 de la Constitución. Garantizar una verdadera independencia del Poder Judicial en los estados, respecto al Ejecutivo.

Respecto al asunto de seguridad pública, que refirió mi compañero, el diputado Tomás Torres, efectivamente, el asunto de la seguridad pública no debe de verse como un asunto policiaco. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, debe de concebirse como un enlace de la investigación, de la procuración de justicia, de la administración de justicia, de la readaptación social y de la atención de los menores infractores.

Así es que tiene mucho que ver la aplicación de la ley, en resolver los asuntos de seguridad pública. Es todo, señor Presidente.

DIPUTADO JUAN MANUEL SEPÚLVEDA FAYAD
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

En primer término, felicitar la posibilidad de inaugurar esta relación con los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de los estados. Yo creo que es una instancia muy importante, para que en la Comisión tengamos una perspectiva mucho más amplia y mucho más completa de lo que realmente es el problema de la justicia.

Yo creo, en el caso particular, en primer lugar, coincido en algunas cuestiones que se han planteado anteriormente, en que el análisis de esta propuesta de ley de amparo que maneja el Poder Judicial de la Federación, nos obliga necesariamente para que como cuestión previa, tengamos que replantear y analizar el federalismo, en materia judicial, sin duda alguna. No podríamos estar pensando en valorar un proyecto, si no entramos al fondo del mismo.

Yo creo que hay una profunda insatisfacción en todos los que tenemos alguna cercanía con la justicia o con la procuración de justicia, y creo que habrá que buscar formas que nos permitan empezar a buscar formas mucho más exactas, mucho más profundas para poderlo hacer.

Yo no estoy tan convencido de la conveniencia de una nueva ley de amparo, máxime que tendríamos que checar primero cuáles son los contenidos, de acuerdo al análisis del federalismo. Sí estoy convencido de que la relación actual entre los poderes judiciales locales y la Suprema Corte de Justicia, es una relación que nos deja muy mal sabor de boca de mi estado, y también padecí; no nada más como presidente del tribunal sino como juez también, el encontrarme, el colisionarnos con un poder todopoderoso y que a veces no es nada razonable, y que nos obliga a hacer cosas que a veces nos parecen verdaderamente injustas.

Estábamos documentando por ahí alguna ejecutoria que hubo que cumplir en la libertad de una persona en mi estado, porque el señor magistrado, el tribunal del colegiado hizo mal la cuenta; entendió que el término medio aritmético de diez y 20 años es diez años, y en base a eso está gozando de libertad una persona. Es un caso que está documentado en el estado de Hidalgo, aquí está el presidente, no me dejará mentir de ninguna manera.

Entonces, yo siento que es una relación que no puede ser concebible en este momento del país. Yo creo que tenemos que fortalecer a los estados, tenemos que fortalecer un ámbito muy, muy importante, porque ya se hacía mención de las cifras de quienes son los justiciables por los poderes judiciales estatales y el Poder Judicial Federal, y vemos cómo la primera fotografía que de la justicia se tiene depende mucho más de los poderes judiciales locales que de los federales.

Además, está ahora ocurriendo un fenómeno que es verdaderamente preocupante, que tiene que ver con que el gran esfuerzo que se ha hecho en los poderes judiciales, porque bien lo decían hace un momento, no es de ahora; hace mucho tiempo que los poderes están luchando en sus ámbitos por conseguir mayor independencia, mayores recursos y demás.

Resulta que nos llega un tribunal unitario o un colegiado a nuestro estado y se llevan a todo el personal de nuestros juzgados, definitivamente en base a dinero, en base a recursos y estamos empobreciendo esta cuestión. Entonces, yo creo que hay que replantear una nueva relación en esto, si creo que hay que fortalecer en mucho a los poderes judiciales de los estados, y que esta es la manera de poder enfrentar los retos de esta época de la mejor manera.

DIPUTADO GERMAN ARTURO PELLEGRINI PEREZ
PARTIDO ACCION NACIONAL

Magistrados presidentes y representantes de los tribunales superiores de justicia de los estados que nos acompañan, diputadas y diputados, señoras y señores:

Nadie puede negar que el juicio de amparo de garantías es un instrumento jurídico de suma importancia en nuestro estado de derecho, que representa el medio de control constitucional más importante de los instrumentos jurídicos que están establecidos en nuestra ley suprema para lograr su plena vigencia, su defensa y protección, así como el medio por el cual los gobernantes pueden acudir a reclamar justicia y el respeto de sus derechos humanos plasmados como garantías. De aquí la relevancia de estas reuniones para que juntos busquemos las alternativas más adecuadas que nos permitan mejorar tan noble institución.

Sabemos que el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas y de las respectivas estructuras del Estado, formalmente depende en principio de la acción sustantiva en ejercicio de la función legislativa; pero también sabemos que no tenemos el monopolio de la verdad, por ello la relevancia de estas reuniones, a fin de que sean un mecanismo de trabajo que permitan recoger opiniones y puntos de vista no sólo de los diputados, sino de juristas destacados que permitan mejorar la decisión legislativa y coadyuven al enriquecimiento de su contenido. Y para que juntos busquemos las alternativas más adecuadas que nos permitan mejorar nuestra legislación.

Con las reformas constitucionales de 1994, sin duda se da un gran avance en el fortalecimiento del Poder Judicial, aunque la tarea aún no está acabada. Insistimos, la fortaleza, autonomía y capacidad del Poder Judicial de la Federación y de los estados son esenciales para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y del sistema de justicia.

Para el cumplimiento de esta importante función, insistimos cada vez más, es indispensable que el Poder Judicial sea perfectamente autónomo, sin que dicha autonomía derive en formas de irresponsabilidad o desvinculación de controles internos y externos. Más aún, cuando en la cotidiana actividad jurisdiccional es innegable que sobrevienen desviaciones que llegan a limitar e incluso impedir su goce y ejercicio, ocasionando cuestionamientos sobre la funcionalidad institucional en su conformación, más que en su existencia y fines.

Lo anterior, precisamente nos exige que busquemos las acciones legislativas y políticas necesarias que den solidez y garantía al Poder Judicial Federal y de los estados, basado en valores fundamentales, como la justicia, la seguridad jurídica, la libertad, la autonomía; pilares del estado de derecho e incluso, de la existencia propia del Estado.

Por ello, vemos con enorme beneplácito que a las consultas, entrevistas y reuniones que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a convocado, como la de hoy, acudan personalidades como las aquí presentes, cuyo conocimiento, experiencia y visión como postulantes de la judicatura, sin duda vendrán a enriquecer el trabajo legislativo que se nos ha encomendado.

No dudamos y no duden que sus opiniones y sugerencias habrán de ser consideradas al momento de tomar una decisión respecto a los temas que aquí hoy nos ocupan, como la reforma a la ley de amparo y el federalismo del Poder Judicial.

DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO

Desde que iniciamos los trabajos en la Comisión de Justicia, es necesario que ustedes lo conozcan, nos dimos a la tarea de pactar entre los miembros de la Comisión que nuestros trabajos y nuestros estudios serían permeados por la discusión estrictamente jurídica, estrictamente metodológica, desprendido de cualquier prejuicio.

En ese tenor hemos venido trabajando y nos encontramos que en esta Legislatura diferentes diputados, incluyendo el de la voz, presentamos diferentes iniciativas de reforma a la Constitución y a la Ley de Amparo en específico. Pero también lo habían hecho otros ciudadanos diputados de otras legislaturas en diferentes artículos y capítulos.

Decidimos hacer una gran consulta nacional, y en esta consulta nacional nos encontramos con que desde hacía un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación venía trabajando un proyecto, no era cosa de despreciarlo, pero sí debo advertir que no estamos trabajando un proyecto; no era cosa de despreciarlo, pero sí debo advertir que no estamos trabajando ni lo vamos a hacer sobre el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de Nación, pues bonito papel vamos a hacer los legisladores y este Poder Legislativo.

Son muy honorables y muy respetables las opiniones de los ciudadanos ministros, pero lo son los de los legisladores. Nosotros no les vamos a enseñar a hacer sentencias, pero ellos no nos van a enseñar a hacer leyes; y esta Legislatura ha retomado y va a reivindicar la dignidad del Poder Legislativo. De tal suerte que hemos recogido las opiniones de los ministros, pero también de barras, de colegios, de universidades, de institutos, de juristas, de catedráticos, de docentes, de ustedes, ciudadanos magistrados.

En la reunión de Mérida, donde concurrimos los miembros de la Comisión y de esta Mesa Directiva, en una de nuestras conclusiones, ojalá sí me permitiera el ciudadano diputado Fernando Pérez Noriega decirlo, llegamos a concluir que de todas las opiniones que habíamos de escuchar ahí, pues más valía dejar la ley de amparo como está, para no destapar fuerzas que no podamos controlar. Fue una de nuestras conclusiones o nuestros pensamientos en voz alta que tuvimos.

¿Por qué una nueva ley de amparo? ¿Por qué sí o por qué no? Esa es la cuestión y esa es la metodología que hemos seguido y que seguiremos haciendo. No es ni siquiera un proyecto, estamos todavía en la gran consulta nacional. Con ustedes entiendo con la atingente y certera conducción que ha tenido de la Comisión el diputado José Elías Romero Apis, estamos ya en una de las últimas fases de esta gran consulta nacional.

Porque una es la visión que tiene el ministro; otra es la que tiene el magistrado, otra es la del postulante; otra es la del juez, inclusive; y ahí hay diferentes perspectivas que hay que reformar. Yo creo que sí habría que reformar algunas cuestiones en la Ley de Amparo, sí; pero por eso, inteligentemente, los miembros de la Comisión han denominado esta gran consulta nacional como del sistema de protección constitucional, y no la hemos especificado únicamente y exclusivamente en la Ley de Amparo.

Sí nos preocupa y nos va a ocupar el cómo hacer más independiente a la serie de instancias judiciales, y cómo vamos a apoyarlo desde la Cámara de Diputados a través e un Presupuesto de Egresos de la Nación. Pero también nos sigue preocupado esto que mencionó el diputado Barbosa Huerta sobre la tenue o a veces delicada relación que se establece entre el Poder Judicial de un estado y el titular del Poder Ejecutivo en una entidad.

Yo puedo hablar de casos particulares porque tengo cómo sustentarlo, pero en aras de este nuevo federalismo judicial, tenemos que poseer ponderación en lo que vamos a reformar y cómo b vamos a hacer. De ahí que estemos recogiendo las opiniones de todos ustedes; no son ejercicios, y se los digo claramente, no son ejercicios de mera cortesía política, no lo son, de ninguna manera ninguno de los miembros de la Comisión de Justicia estaríamos dispuestos solamente a los manierismos políticos; de ninguna forma.

Es con un rigor político, legislativo, jurídico, que estamos haciendo esto; por eso agradecemos su presencia y su ayuda, porque enriquece el conocimiento que nosotros podamos aplicar en las reformas o no que practiquemos a la Ley de Amparo y otras leyes que conforman el sistema de protección constitucional.

Y en ese tenor yo quiero terminar, para decirles que esta Comisión de Justicia, por lo que hace a la representación del Partido de la Revolución Democrática tiene el mejor concurso de sus miembros, de sus diputados destacamentados en esta Comisión, para que caminemos en este nuevo sistema de protección constitucional que dé certeza al ciudadano.

Basta ir a la calle para saber que el ciudadano no cree en la justicia; estamos desacreditados tanto juzgadores como legisladores frente a la sociedad, y tenemos que reivindicar ese papel de ustedes como juzgadores y de nosotros como legisladores; porque a veces va la norma por un lado y la realidad, aceptémoslo, ha ido por otra.

El obedézcase pero no se cumpla sigue siendo vigente desde hace 500 años a la fecha, y tenemos que reivindicar el federalismo; sí, ese que solamente ha sido una entelequia en nuestro país, porque nunca, nunca fuimos estados libres y soberanos e imitamos a contrapelo, en imitación extralógica, el sistema de los Estados Unidos.

Entonces, es hora de reconocerlo y es hora de reivindicar nuestro papel, por eso la colaboración y no el enfrentamiento, la colaboración, el afrontar ideas y no confrontarlas nos permite con ustedes enriquecer el trabajo de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos como legisladores frente a la sociedad y tenemos que reivindicar ese papel de ustedes como juzgadores y de nosotros como legisladores.

Porque a veces va la norma por un lado y la realidad, aceptémoslo, ha ido por otra. El obedézcase, pero no se cumpla, sigue siendo vigente desde hace 500 años a la fecha.

Y tenemos que reivindicar el federalismo, sí ese que solamente ha sido una entelequia en nuestro país, porque nunca, nunca, fuimos estados libres y soberanos e imitamos a contrapelo, en imitación extralógica, el sistema de los Estados Unidos.

Entonces, es hora de reconocerlo y es hora de reivindicar nuestro papel. Por eso, la colaboración y no el enfrentamiento, la colaboración, el afrontar ideas y no confrontarlas, nos permite con ustedes, enriquecer el trabajo de esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

DIPUTADO FERNANDO PEREZ NORIEGA
PARTIDO ACCION NACIONAL

Con su permiso, señor Presidente, nuevamente a nombre de Acción Nacional, agradezco la participación de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, diversas entidades federativas en esta reunión de trabajo.

Como ustedes se han dado cuenta, están ante un nuevo Congreso. Están ante una nueva forma de trabajar en comisiones, ante una nueva forma de legislar. Ya no recibimos iniciativas que son aprobadas a ciegas. Ya ni siquiera discutimos proyectos como este tan importante, elaborado por la Corte, sin cuestionarlo, sin analizarlo. Es decir, estamos en una nueva etapa de México que creo que todos debemos de valorar.

Ha sido un tema fundamental para el Presidente Fox y también para el Secretario de Gobernación, como lo manifestó el día de ayer en su comparecencia, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y para hablar del Estado de Derecho debemos de hablar de tribunales independientes, de tribunales que puedan cumplir con su función en forma adecuada.

Ya lo mencionaba uno de nuestros compañeros diputados, la justicia no tiene partido. La justicia no puede tener, en un momento determinado, un tinte ideológico, sino que debe de cumplirse para todos. Los temas que han tratado el día de hoy son fundamentales. El del federalismo judicial, ha sido un tema que ha tratado Acción Nacional y ha presentado en sus diferentes plataformas político electorales y lo ha presentado al pueblo de México como una opción.

Estamos convencidos en que es necesario darles mayores competencias a las entidades federativas y en este caso específico a los poderes judiciales estatales.

Este tema tan importante nos llevará también, en su momento, a definir, posiblemente, por lo que he escuchado con todos los demás partidos políticos, que no va a ser el momento de dictaminar una ley de amparo, de que es necesario primero hablar del tema fundamental que Acción Nacional ha presentado en la mesa de todos, que es la reforma del Estado, la reforma de las instituciones.

Es necesario, por lo tanto también, reformar a fondo el Poder Judicial de la federación y por lo tanto también el poder judicial de cada una de las entidades federativas.

Es evidente que, si es ese el caso, y así lo hemos contemplado, en esta legislatura, se ha formado una comisión especial de Reforma del Estado, una mesa especial de trabajo sobre el Poder Judicial que está con el objetivo de tener productos adecuados, como será en este caso el tener supremas cortes de justicia estatales o como algunos se han manifestado, como cortes estatales.

Habrán temas que podemos discutir a detalle y ya en el momento de esta iniciativa o este proyecto de la corte en materia de Ley de Amparo. Ya desde Yucatán se había manifestado una objeción clara a la parte o al capítulo relacionado con la ejecución de los actos reclamados en materia de sanciones y responsabilidades.

Es para mi un honor el estar en una mesa como la que tenemos el día de hoy, en donde iniciamos una relación los legisladores federales con los representantes de un poder a nivel local y que vean a sus representantes populares en personas, mujeres y hombres diputados que tenemos la sensibilidad política y la decisión de cambiar este México en forma adecuada.

DIPUTADO ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Con el permiso de nuestro presidente, compañeros diputados, señores magistrados y presidentes de los tribunales superiores de justicia del país, a nombre de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, les doy la más entusiasta, fraternal y cordial bienvenida a este evento y les digo que nos congratulamos por participar en esta reunión con ustedes.

En nuestra bancada tenemos como una de nuestras divisas, parte de lo que nosotros estimamos como la Reforma del Estado, la independencia plena de los poderes locales frente a los federales. Es decir, que viva México un auténtico federalismo.

Hemos escuchado muchos conceptos muy valiosos y a juicio de quien les habla, todos no solamente aceptables sino inequívocos en cuanto a lo que debe ser la justicia mexicana, particularmente, como decía Sotelo, nuestro proyecto de protección constitucional, tanto a los ciudadanos como a las propias autoridades sujetas a la Carta Magna.

Ahora voy a hablar a título personal. Ya no estoy hablando en función de la bancada, que quede muy claro. Conceptos como la declaración de inconstitucionalidad, el principio de estricto derecho, de legalidad, de constitucionalidad, la fórmula Otero, la subordinación, los tribunales o las cortes estatales de casación, las sanciones, los tecnicismos, las nuevas figuras que encontramos, en este documento que ha elaborado la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, son todos ellos temas que en esta Comisión, y en lo particular del que les habla, los vamos a discutir muy de fondo.

Al igual que alguno de los miembros muy respetados y mejores, mucho mejores abogados que el que les habla, yo tampoco considero que requerimos en este país una nueva Ley de Amparo. Creo que quizá requiere algunos ajustes, no digo actualización, digo ajustes. Y creo también que esta protección constitucional que nos confiere a los mexicanos y mexicanas para estar a tono con la época, nuestra Ley de Amparo y nuestra propia constitucional, indiscutiblemente que debe ser tema de actualidad y en lo cual en la Comisión de Justicia estamos muy preocupados por lograr una legislación acorde con las necesidades del país.

Creo que lo que han dicho ustedes es indiscutible. El Poder Judicial de los estados está subordinado al Poder Judicial de la federación de una manera tan lamentable, que yo he escuchado expresiones como la siguiente, cuando hablamos de las facultades de revisión constitucional de los tribunales con respecto a nuestras propias constituciones allá en los estados, y dicen: "Están en pañales. Todavía son menores de edad. Después de México, todo es Cuautitlán", sin decirlo en sentido peyorativo. Y creo que debemos poner un hasta aquí a esa situación tan lamentable.

Me consta que hay muchos tribunales del país que están integrados y que funcionan mejor que la mayor parte de los tribunales colegiados o unitarios de la federación, ya no digamos de los jueces de distrito. Me consta también que el proceso selectivo o electivo en algunos estados, de los magistrados locales, es mucho más riguroso que los de los tribunales de la federación, incluyendo la Corte.

La actual Corte, fue integrada por cuestiones esencialmente políticas, con todo respeto para los señores magistrados, a los cuales considero como unos jueces y abogados de primera. Sin embargo, en cualquier estado, cuando hay un nombramiento, cualesquiera que sea el procedimiento en los diversos estados, de hecho o de derecho o políticamente hablando, a cualquier aspirante a magistrado se le pone abajo del microscopio, por los colegios de abogados, por las autoridades, por el congreso local, por la propia sociedad, cosa que nunca sucede con los funcionarios federales.

Eso es en cuanto a la calidad, al aspecto cualitativo. En cuanto al aspecto cuantitativo, y voy a referirme en primera instancia, al orden penal, los tribunales federales solamente atienden menos del 5 por ciento de las causas penales en el país y el resto, más del 95 por ciento, les corresponde y realmente deciden los tribunales locales, jueces y magistrados.

En consecuencia, no hay un equilibrio. Y no voy a hablar de pesos y centavos, que ganan mucho más los funcionarios federales, que los magistrados. Todos los jueces de distrito del país y yo creo, hasta donde la memoria, mejor dicho, hasta donde yo sé, ganan más que todos los magistrados de los honorables tribunales de justicia de los estados.

Hay muchas maneras de expresar nuestra inconformidad con esta situación, con este estado de cosas. Yo creo que debemos de avanzar, creo que no es el único tema del federalismo.

En materia fiscal, en este tema, hemos andado como la burrita de mi tío Chencho: un pasito pa´ delante, y no dos, cuatro para atrás.

En materia electoral, igual. El Tribunal Federal Electoral de la Suprema Corte, el famoso Trife, decide ahora sobre cuestiones locales, cuando es un asunto en todas partes, de esencial competencia local. Y para no abusar de mi tiempo en este micrófono tan honorable, yo quiero decirles que el federalismo tiene que ser una realidad en este país.

Fuimos, como decía Sotelo, siempre abusa Sotelo de mí porque es más inteligente, dice lo que yo voy a decir, fuimos una calca del modelo norteamericano, sin embargo, lo mencionaron muchos de ustedes, desde la Constitución de 1824 y en el texto de la 57, también, aunque no con tanta claridad, la competencia de los tribunales estatales era total sobre la legislación local.

Creo que se ha avanzado, no voy a decir tampoco que todo lo que se ha hecho ha sido para atrás, pero creo que en el aspecto de la justicia es esencial este federalismo.

Es también esencial en lo económico y en lo político, pero ¿por qué le doy prioridad a la justicia? Lo he repetido mucho y no me canso de repetirlo y lo voy a volver a repetir ahora, la justicia es la principal función del Estado, de cualquier estado en cualquier época, por una parte, y por la otra, lo que estamos viviendo en el país, este cambio, yo lo leí en expresiones de varios de ustedes, particularmente en el señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, cuando nos dijo: "Si les interesa". Sí, señor Presidente, le doy respuesta. Nos interesa y mucho. Es esencial para nosotros esta tarea, este tema, este documento, este borrador, como quieran ustedes llamarle, de lo que podría llegar a ser una nueva ley de amparo, es esencial para nosotros. Y es esencial que se aborde también el concepto del federalismo y es esencial también que le demos mayores atribuciones a los tribunales locales, desde todo punto de vista.

Ya tiene el Estado mexicano muchos causes. Por el lado económico podría ser el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Podemos también implantar en la Constitución, el diputado Barbosa hizo una propuesta, de que el 2 por ciento del presupuesto nacional, de fijo, sustantivamente, se dedique al Poder Judicial respectivo.

Así podría los estados o podría ser más. A la Corte, a nuestra Suprema Corte de Justicia, este año, esta Cámara, esta Legislatura, le autorizó un aumento de más del

40 por ciento. Ciertamente, no le dimos el 50 que pedía, porque ahí los compañeros del campo nos quitaron un pedazo para apoyar a la comercialización agropecuaria, y vamos a seguir apoyando a la Corte.

Pero creo que debemos tener como divisa principal que tan o más importante que las funciones de la Corte, son las funciones de los si acaso.

Es lo que siento y es por lo que tengo convicción. Muchas gracias por haberme escuchado.

ARTÍCULO 77 DEL PROYECTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LICENCIADO CLAUS VON WOBESER
PRESIDENTE DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS

Realiza un estudio del artículo 77 del Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de la autoridad que conoce el juicio de amparo, de suplir la deficiencia de la queja, de los conceptos de violación en los casos de la fracción VI, en materia laboral, a favor del trabajador, y del penúltimo párrafo de este artículo que dispone

"En los casos de las fracciones I, II, III, y IV de la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios".

Propuesta: Se supriman las fracciones IV, V, relativa a cuestiones civiles y administrativas y penúltimo párrafo del artículo 77 del proyecto de la Ley de Amparo, toda vez que equiparan la suplencia de la queja a favor del trabajador al derecho penal, considerando que los valores que están en juego en los juicios laborales, no tienen la misma importancia que la vida y la libertad.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY DE AMPARO

LICENCIADO FERNANDO MANCILLA OVANDO.
ASESOR JURÍDICO

Tratándose de amparo directo o amparo en revisión, o queja ante los Colegiados, las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera factible que en el artículo relativo, se formule una redacción en donde se incluya la obligación de los Tribunales para que al momento de listarse los asuntos que habrán de revisarse en sesión próxima, se permita a las partes o sus representantes acreditados, el acceso al proyecto, mediante la entrega de una copia, para que estén en posibilidad, antes de efectuarse la sesión, de hacer las observaciones pertinentes vía memorándum.

Respecto a amparo uninstancial, en el Proyecto se otorga a la responsable el término de cinco días a partir de su recepción, para proveer lo conducente y remitirlo conjuntamente con los autos al Tribunal Colegiado que habrá de conocer. Se prevé que el Presidente del Tribunal Colegiado al recibir el amparo directo, analice si la responsable cumplió con los requisitos de remitir las actuaciones y la demanda de garantías en cinco días y se posibilita la aplicación de una multa por incumplimiento.

Propone se agregue además la posibilidad que cuando a una misma autoridad responsable se le sancione con un número determinado de multas (10 por ejemplo) en el lapso de un año, por omitir la remisión a tiempo, de la demanda de amparo y los autos, se equipare su actitud al incumplimiento de las ejecutorias de amparo y se le remita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la certificación correspondiente por parte del Tribunal Colegiado, a efecto que el más alto Tribunal de la Nación provea su destitución.

ANÁLISIS DEL ARTICULO 59, FRACCION XV, PARRAFO SEGUNDO DEL PROYECTO DE LA LEY DE AMPARO

LIC. MIGUEL ANGEL AGUILAR LÓPEZ
MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO

Analiza el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo vigente y el correlativo artículo 59, fracción XV, párrafo segundo del proyecto de la Ley de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que previenen como causa de improcedencia, cuando se trata de actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

El texto de la ley vigente incluye un segundo párrafo "cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga del juicio de amparo pendiente".

Esto es, por disposición legal, no opera el cambio de situación jurídica hasta sentencia, por las violaciones a los artículos 19 y 20 constitucional; sin embargo, el juicio constitucional es improcedente cuando se reclama la protección federal de garantías establecidas en el dispositivo 16 de la norma fundamental. No debe soslayarse que previo a las reformas de mil novecientos noventa y nueve, no existía la procedencia de esta causal en tratándose de la petición del amparo en contra de la orden de aprehensión o la ratificación judicial de la detención, por tanto, era obligación de los jueces de amparo estudiar el fondo del asunto, no obstante se hubiere resuelto ya la situación jurídica del inculpado. Lo anterior lleva a concluir que la reforma a la ley de la materia limitó la garantía de seguridad jurídica de los gobernados, pues, al operar el cambio de situación jurídica cuando se dicta el auto de plazo constitucional, en aquellos casos en que se pide amparo contra violaciones al artículo 16 Constitucional en materia penal, (orden de aprehensión y ratificación de la detención),

procede el sobreseimiento del juicio de garantías, luego, se hace nugatorio el medio de defensa constitucional.

Propuesta.

Que en el artículo 59 fracción XV, párrafo segundo del Proyecto de la Ley de Amparo o en el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente se prevean las violaciones al artículo 16 Constitucional, como hipótesis que adquieren, por disposición legal. Característica de no consumadas de manera irreparable, a virtud del cambio de situación jurídica, pese al dictado del auto de formal prisión.

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 171, FRACCIÓN XVI, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL PROYECTO DE LEY DE AMPARO.

LICENCIADO MIGUEL ANGEL AGUILAR LÓPEZ
MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

Efectúa un análisis de los alcances de lo establecido en la fracción XVI, párrafo segundo del artículo 171 de Proyecto de la Nueva Ley de Amparo, refiere que es incuestionable jurídicamente que la ley no faculta a variar en sentencia el delito por el que se siguió el proceso, en el caso de que, al analizarse las pruebas allegadas a juicio, se advierta inacreditado un elemento del delito, pues ello jurídicamente determina una causa de atipicidad, cuya única consecuencia es excluir el delito, refiere que de ninguna manera puede fundamentarse en ello una reclasificación del ilícito, pues esta se constituiría en un silogismo falso, en atención a lo anterior establece las siguientes premisas:

Premisa mayor: La ley establece los elementos de cada delito en particular; Premisa menor: Las pruebas del procedimiento permiten tener por acreditados todos y cada uno de los elementos con que se construye el delito previsto en abstracto; lo que permite llegar a la conclusión que se excluye el delito y, en consecuencia, debe ordenarse la libertad del procesado.

Propone:

Se elimine el contenido del párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 171 del Proyecto de Ley de Amparo, que establece como excepción de violación al procedimiento penal, se dicte sentencia por delito diverso al que quedó determinado en el auto de formal prisión y constituyó la materia del proceso. Y para el caso de que no prospere el proyecto, se pugna por derogar el actual párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 160 de la vigente Ley de Amparo.

Texto vigente en Ley de Amparo	Texto propuesto en Proyecto
Artículo 171 En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Fracción XVI, Sea condenado por diverso delito al determinado en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. No se considerará que el delito es diverso, cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que,, en este último caso, el Ministerio Público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y haya sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio.	Artículo 171 En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando Fracción XVI, Sea condenado por diverso delito al determinado en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Se elimina este párrafo segundo

ESTUDIO A LOS ARTÍCULOS 5°, FRACCIÓN III, INCISO B), Y 10 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE

LICENCIADO RODOLFO CAMPOS MONTEJO
PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Realiza un estudio a los artículos 5°, fracción III, inciso b), y 10 de la Ley de Amparo vigente, exponiendo la notaria injusticia y estado de indefensión que colocan a la víctima del delito, al no brindarle el carácter de ser parte de forma plena y sin limitaciones en el juicio de amparo, ya que dichos numerales indican que son parte en el juicio de amparo entre otros:

> "El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, o en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que estas afecten dicha reparación o responsabilidad".

Que la víctima y el ofendido sólo podrán promover amparo:

A. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil.

B. Contra actos surgidos dentro del procedimiento penal relacionados directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.

C. Contra las resoluciones del ministerio público que conformen el no ejercicio ó el desistimiento de la acción penal.

En base a ello propone que cuando el acto reclamado consista:

a. En la negativa a la orden de aprehensión;

b. En un auto de excarcelación; o

c. Una sentencia absolutoria;

Se permita al ofendido, previo al agotamiento de los recursos ordinarios, poder acudir al juicio de garantías en calidad de quejoso; y no sólo cuando los actos afecten inmediata y directamente los intereses civiles del quejoso.

Propuesta que se realiza, dado que hasta la fecha, sólo puede acudir el ofendido al amparo, cuando el acto reclamado consista en alguna resolución dictada a propósito de la reparación del daño o de responsabilidad civil proveniente de la comisión de delito o cuando se traten de actos dentro del procedimiento penal, pero relacionado inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 80 Y REFORMAR EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVI DEL 160, AMBOS NUMERALES DE LA LEY DE AMPARO.

LICENCIADO ALEJANDRO SOSA ORTIZ
DOCTOR EN DERECHO Y MAGISTRADO DE CIRCUITO

Con lo propuesto, pretende reubicar al amparo en su justa dimensión que es la de proteger al acusado cuando verdaderamente se han infringido sus garantías individuales, restableciendo, sólo, las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mas no el de ser un medio de aprovecharse de las deficiencias del órgano jurisdiccional y/o representante social, para bajo ese único argumento, lograr su absolución y consecuente impunidad, en perjuicio de la sociedad entera y, en su caso, de las víctimas de esos ilícitos quienes, al no tener autorizada mayor intervención en el proceso, quedan impotentes ante esta denegación de justicia.

Propuesta de reforma a los artículos 80 y 160 fracción XVI de la Ley de Amparo:

Texto vigente	**Texto propuesto**	**Observaciones**
Artículo 80 La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.	Artículo 80 La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en e el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. "Tratándose de concesiones de amparo en materia penal, aun cuando sean por aspectos de fondo, las autoridades responsables una vez que dejen insubsistente la resolución reclamada podrán, si así procede, emitir otra desfavorable al quejoso con la única limitante de no reiterar las consideraciones que se estimaron ilegales ni contradecir los razonamientos de la ejecutoria."	Se adiciona un segundo párrafo al artículo 80

Texto vigente	Texto propuesto	Observaciones
Artículo 160 En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso: XVI Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito.	Artículo 160 En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso… XVI Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión o sujeción a proceso el quejoso fuere sentenciado por diverso delito “No se considerará que el delito es diverso, cuando el que se exprese en sentencia verse sobre los mismos hechos que fueron objeto del proceso y la variación no hubiere generado indefensión”	Se reforma el segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 160

Preceptos los anteriores que se corresponden con los artículos 75 y 171, fracción XIII, respectivamente del proyecto de nueva Ley de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manteniéndose en lo fundamental el primero y sin variación el segundo.

¿UNA NUEVA LEY DE AMPARO O LA RENOVACIÓN DE LA VIGENTE?

DOCTOR IGNACIO BURGOA ORIHUELA

DOCTOR EN DERECHO Y MAESTRO EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE MÉXICO.

El Doctor Burgoa hace una severa crítica al Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual está en total desacuerdo por considerar que la respuesta al mejoramiento de nuestro sistema de protección constitucional no es necesariamente una nueva Ley de Amparo sino la renovación de la Ley de Amparo vigente, la cual desde 1936 ha normado la actividad judicial federal en propensión a la defensa de la Constitución, de las garantías del gobernado que ésta proclama y de la protección de los derechos humanos.

Considera que la ley de amparo vigente es legítima y eficaz

Refiere que el amparo es una institución procesal constitucional gestada y normativizada en México, que su existencia y desenvolvimiento acusan más de un siglo y la ley y la jurisprudencia mexicanas le han proporcionado su fisonomía jurídica mediante la elaboración paulatina de conceptos y principios propios, adscribiéndole su terminología específica insignes jurisconsultos nacionales que han explorado sus diferentes aspectos y brindado a la posteridad importante e insoslayable doctrina sobre ellos.

No obstante alude que la actual Ley de Amparo como toda obra humana, adolece de imperfecciones que deben subsanarse con el objeto de lograr que el juicio de garantías sea más eficaz en la realidad.

Críticas al Proyecto de Ley de Amparo

Puntualiza que toda ley debe ser inequívoca, clara y precisa que sus disposiciones no deben contener expresiones y conceptos susceptibles de interpretarse diversa y hasta contradictoriamente; refiere que sin estos atributos su aplicación puede resultar incierta y errónea en detrimento de todo sujeto que la invoque.

Alude que el proyecto elaborado por la Comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, complica el juicio de amparo y lejos de mejorar su actual normatividad la deteriora; considera que la Nueva Ley de Amparo debe necesariamente revisarse para despojarla de los errores y omisiones en que incurre y que la colocan en situación inferior a la ley vigente que durante más de seis décadas ha normado el juicio de amparo; además de advertir que el proyecto no es del todo legítimo puesto que en su elaboración no participaron juristas especialistas en amparo.

El Doctor Burgoa hace observaciones críticas a dicho documento al señalar omisiones y graves errores que advierte en su contenido; refiere entre otros que:

* El proyecto se desentiende de intereses grupales o difusos;

* Elude la abolición de la "fórmula Otero" tratándose de amparo contra leyes o normas generales, cuando exista jurisprudencia que declare su inconstitucionalidad;

* Fueron inadvertidos por la Comisión los razonamientos formulados con anterioridad respecto a la conveniencia de eliminar "el amparo para efectos" por vicios in procedendo e in judicando en las demandas de amparo directo contra sentencias o laudos.

*No se afrontó el problema concerniente respecto a si los órganos públicos descentralizados pueden ser considerados como autoridades para los efectos del amparo.

Destaca errores como el que se cita en el artículo 1° del Proyecto que declara procedente el amparo por violación a las garantías constitucionales y a los Derechos

Humanos que protegen los Tratados Internacionales. Refiere que el artículo 4° del Proyecto indebidamente considera como quejoso al titular del derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo; exigencia que es indebida pues el quejoso es el promotor del amparo sea o no titular de un derecho o de un interés legítimo.

Se considera que la expresión “especial situación frente al orden jurídico”, invocada en el artículo 4 no tiene ningún sentido.

Por su parte Arturo Serrano Robles hace una exhaustiva crítica al Proyecto de la Nueva Ley de Amparo, efectúa apreciaciones de carácter general y examina específica y concretamente los preceptos que integran el proyecto y con los cuales esta en desacuerdo.

Así mismo el Doctor Ignacio Burgoa presenta propuesta de reformas que deben practicarse a la Ley de Amparo vigente con objeto de lograr su renovación, las cuales somete a consideración de los juristas especializados en el juicio constitucional; refiere cambios respecto a los rubros siguientes.

*El amparo y los organismos Públicos descentralizados, propone adicionar un párrafo al artículo 1° de la Ley de Amparo concebido en los siguientes términos:

Texto vigente	**Texto propuesto**
1° El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:	1° El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
I.- Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales;	I.- Por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales;
II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;	II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;
III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la espera de la autoridad federal	III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la espera de la autoridad federal
	Tratándose de organismos públicos descentralizados, sus actos podrán ser impugnados en vía de amparo si se traducen en decisiones que, conforme a la ley, deben ser ejecutadas o cumplidas por cualquier autoridad estatal sin que ésta tenga facultades de acuerdo a su competencia legal, para someterlas a su resolución o cuando se emitan en aplicación de una ley.

*Cambio en la designación “Tercero Perjudicado” por la de “Tercero Interesado”, artículo 5° fracción III

Texto vigente	Texto propuesto
5°Son partes en el Juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados; II.- La autoridad o autoridades responsables; III.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: a)….. ….. ….. IV.- …	5°Son partes en el Juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados; II.- La autoridad o autoridades responsables; III.- El tercero o terceros interesados, pudiendo intervenir con ese carácter: a)….. ….. ….. IV.- …

*El ofendido como quejoso, el artículo 10 de la Ley de Amparo de derogarse, para sustituirlo con un nuevo precepto:

Texto vigente	Texto propuesto
10.- El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo podrán promover el juicio de amparo contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil. También podrán promover el juicio de amparo contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.	Derogado El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo contra las resoluciones del Ministerio Público que nieguen el ejercicio de la acción penal o determinen su desistimiento.

*El ofendido como Tercero Perjudicado, estima necesario reformar el inciso b) de la fracción III del artículo 5° de la Ley de Amparo;

Texto vigente	**Texto propuesto**
5°Son partes en el Juicio de amparo: .- El agraviado o agraviados; II.- La autoridad o autoridades responsables; III.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: a)….. b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales de orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad; c)….. IV.- …	5°Son partes en el Juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados; II.- La autoridad o autoridades responsables; III.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: a)….. b) El ofendido, su sucesión o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal. c)..... IV.- …

*Prueba Pericial y Testimonial en el Amparo indirecto o bi-instancial, propone reformas al artículo 151;

Texto vigente	Texto propuesto
151.-Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacerlo verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial o la pericial. Al promover la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o dicta dictamen por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta Ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad que no tiene ninguno de los impedimentos legales. La prueba pericial será calificada por el juez según prudente estimación.	151.- Cuando el quejoso pretenda rendir prueba testimonial o pericial, deberá anunciarla en la misma demanda de amparo, exhibiendo copias de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos; el juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente preguntas al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Si el tercero, perjudicado o las autoridades responsables pretenden rendir dichas probanzas deberán anunciarlas dentro del término de tres días siguientes al en que hubiesen sido emplazados, cumpliendo con las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.

*Eficacia de las sentencias de primera instancia en el Amparo sobre Materia Penal, se propone adicionar el artículo 87 de la Ley de Amparo con un párrafo redactado de la siguiente manera

Texto vigente	**Texto propuesto**
87.- Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación o quienes los representen en los términos de ésta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión	87.- Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación o quienes los representen en los términos de ésta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión. Tratándose de sentencias dictadas en juicios de amparo sobre materia penal que hayan otorgado la protección federal al quejoso, la interposición del recurso de revisión no suspenderá su ejecutabilidad ni eficacia, debiendo el Juez de Distrito decretar las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para que, en caso de que se revocara el fallo recurrido, el mencionado quejoso pueda ser fácilmente puesto a disposición de las autoridades responsables.

*Se propone la supresión de la Jurisdicción Concurrente, propone derogar la fracción XII del artículo 107 constitucional y el artículo 37 de la Ley de Amparo que consignan tan desacreditada figura procesal.

Derogación de la fracción XII del artículo 107 Constitucional

Texto vigente	**Texto propuesto**
107.-Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-… II.-… III.-… IV.-… V.-… VI.-… VII.-.. VIII.-… IX.-… X.-… XI.-… XII.- La violación a las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el juez de distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residiere en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca.	|07.-Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-… II.-… III.-… IV.-… V.-… VI.-… VII.-… VIII.-… IX.-.. X.-… XI.-… XII.-…Derogada

Derogación del artículo 37 de la Ley de Amparo

Texto vigente	Texto propuesto
37.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracción I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el juez de Distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación.	37.- Derogado.

*Cumplimiento de las ejecutorias de amparo, se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 105 de la Ley de Amparo

Texto vigente	Texto propuesto
105.- Si dentro de las veinticuatro horas …….	105.- Si dentro de las veinticuatro horas …….
Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar…….	Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar…….
Cuando la parte interesada no estuviere…….	Cuando la parte interesada no estuviere…….
El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.	Cuando los actos contra los que se haya concedido el amparo por sentencia ejecutoria se hubiese ejecutado materialmente por modo irreparable, el quejoso podrá promover ante el Juez de Distrito contra las autoridades responsables y tercero perjudicado, si lo hubiere, incidente para exigir el pago de daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado con motivo de dicha ejecución. Este incidente se tramitará ante el Juez de Distrito que hubiese conocido del amparo en primera instancia y se normará conforme a las disposiciones conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. La resolución que dicho Juez dicte en el mencionado incidente será recurrible en queja ante la Suprema Corte o ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, según la competencia que tengan éstos órganos que en materia de revisión en relación con el caso concreto de que se trate.

*Evaluación del interés social en la suspensión del acto reclamado, propone la adición cómo último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo

Texto propuesto	**Texto vigente**
124.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I.-… II.-… III.-… El juez de Distrito, al conceder…	124.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I.-… II.-… III.-… El juez de Distrito, al conceder… Para determinar en cada caso concreto si con la suspensión solicitada por el quejoso se violan normas de orden público o se afecte el interés social, el Juez de Distrito, analizando la finalidad propia de los actos reclamados, tomará en cuenta si éstos, por modo directo o inmediato, tienden a satisfacer una necesidad pública a evitar o resolver un problema social o a mejorar las condiciones generales de vida de grupos mayoritarios de alguna colectividad humana, debiendo razonar su criterio en la resolución suspensional que se pronuncie.

*Abolición del otorgamiento del amparo para efectos en el juicio de garantías uni-instancial y por vicios in judicando, propone la adición de un párrafo al artículo 183 de la Ley de Amparo

Texto vigente	**Texto propuesto**
183.-Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada; o cuando, por no haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja, conforme al artículo 76 bis, se abstendrá de entrar al estudio de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha violación, entrará al examen de las demás violaciones.	183.-Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá estudiarla de preferencia; en el caso de que la estime fundada; o cuando, por no haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficiencia de la queja, conforme al artículo 76 bis, se abstendrá de entrar al estudio de las otras violaciones. Si encontrare infundada dicha violación, entrará al examen de las demás violaciones. Cuando se trate de vicios de ilegalidad cometidos en la sentencia o en el laudo definitivos que se reclamen, el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, al declarar fundados los conceptos de violación respectivos que se hayan formulado en la demanda de garantías, se abocará al estudio de la controversia en que la resolución reclamada se hubiese pronunciado, dictando la ejecutoria pertinente, sin ordenar reenvío alguno al tribunal responsable.

*Se sugiere la modificación del artículo 152 de la Ley de Amparo;

Texto vigente	Texto propuesto
152.-A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. Al interesado que informe al juez que se le ha denegado una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario. Cuando se trate de actuaciones concluidas podrán pedirse originales, a instancia de cualquiera de las partes.	152.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. En este caso, el juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por una sola vez para el efecto de que el Actuario del Juzgado, asociado de la parte oferente de la prueba y con asistencia de las demás partes si así lo desearen, se constituya en las oficinas de la autoridad o funcionario para que, con vista a las constancias que obren en su poder, practique la compulsa de las mismas, a costa del oferente, y la agregue a los autos o asiente en la razón respectiva de que no se encontraron. La citada diligencia deberá efectuarse antes de la nueva fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a cuyo efecto el Juez fijará el día en que deba practicarse. Si la parte interesada, su mandatario o el autorizado en los términos del artículo 27 de esta Ley no concurren para este último efecto, la prueba documental que se haya pretendido rendir se declarará desierta y el juez les impondrá una multa de quinientos a dos mil pesos. Cuando se trate de actuaciones concluidas podrán pedirse originales, a instancia de cualquiera de las partes.

*La Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte; modificación del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo;

Texto vigente	**Texto propuesto**
192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas entratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales Administrativos y del trabajo, locales o federales	192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas entratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales Administrativos y del trabajo, locales o federales
Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los casos de las jurisprudencias de las Salas.	Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo decidido en ellas, se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas.
También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.	También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.

*La Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; debe modificarse el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo;

Texto vigente	**Texto propuesto**
193.-La jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los Juzgados de Distrito los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales.	193.-La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo versará respecto de la interpretación de reglamentos locales autónomos y en materia suspensional. Dicha jurisprudencia será obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales.
Las resoluciones…….	Las resoluciones…….

*El amparo contra leyes. Fórmula de Otero, agregar un párrafo al artículo 35 de la Ley de Amparo;

Texto vigente	**Texto propuesto**
35.- En los juicios de amparo no se substanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente establecidos por esta ley. En los casos de reposición de autos…… Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren….	35.- En los juicios de amparo no se substanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente establecidos por esta ley. En los casos de reposición de autos…… Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren…. Contra todo acto de autoridad aplicativo de una ley, reglamento heterónomo o tratado internacional declarados inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte que lesione a cualquier sujeto, el agraviado podrá promover ante el Juez de Distrito competente incidente de queja dentro de los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta Ley. Promovido dicho incidente, se correrá traslado con la copia del escrito en que se interponga, a la autoridad que sea la responsable del acto impugnado, para que exprese lo que tenga a bien en derecho dentro de un plazo no mayor de diez días improrrogables, transcurrido el cual el Juez dictará las resoluciones que corresponda. Si el incidentista demuestra la existencia de la jurisprudencia que haya declarado la inconstitucionalidad de la ley, reglamento heterónomo o tratado internacional de que se trate y si el acto aplicativo impugnado lo agravia en sus intereses jurídicos, el Juez de Distrito dictará resolución invalidando tal acto, pudiendo la autoridad respectiva reclamarla dentro de un plazo de tres días ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda.

Responsabilidad Oficial de los Ministros de la Suprema Corte y Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, debe agregarse el artículo 203 bis;

Texto vigente	Texto propuesto
203.-La imposición de cualquier pena privativa de la libertad por causas de responsabilidad, importa la destitución del empleo o suspensión de derechos para obtener otro en el ramo judicial, en el del trabajo o en el Ministerio Público por un término hasta de cinco años.	203.-La imposición de cualquier pena privativa de la libertad por causas de responsabilidad, importa la destitución del empleo o suspensión de derechos para obtener otro en el ramo judicial, en el del trabajo o en el Ministerio Público por un término hasta de cinco años. 203 bis.- Los ministros de la Suprema Corte y los magistrados de Circuito tendrán la responsabilidad prevista en el Título Cuarto de la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

*Suspensión en el Amparo Penal, se debe cambiar el artículo 136;

Texto vigente	Texto propuesto
136.-Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.	136.-La eficacia y alcance de la suspensión en materia penal se sujetarán a las siguientes reglas: a) Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.
Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.	Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.

Texto vigente	Texto propuesto
De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.	b) De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existír flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.
Si se concediera la suspensión en los casos de ordenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.	En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado.
Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.	c) Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.
Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.	Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Texto vigente	Texto propuesto
En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga del mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en éste sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado.	En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado.
La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo. Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado.	d) La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal que afecten la libertad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. El juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso; II. La situación económica del quejoso, y III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

*El amparo y los intereses grupales o difusos; adicionar un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de Amparo.

Texto vigente	**Texto propuesto**
4.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por si, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor	4.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por si, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor En el caso de que, por actos u omisiones de cualquier autoridad, se lesionen intereses colectivos, el grupo agraviado, a través de alguno o algunos de sus miembros, podrá promover amparo contra tales actos u omisiones, teniendo el promotor o los promotores la representación legal del propio grupo.

ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEY DE AMPARO

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL AMPARO AGRARIO EN EL PROYECTO DE LA LEY DE AMPARO QUE PRESENTA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

El que la propuesta no contemple un libro segundo relativo a la materia agraria como sucede en la ley vigente no significa que se pretendan desaparecer los beneficios con los que cuentan hoy los ejidatarios o comuneros, simplemente se incorporaron las prerrogativas procesales a los capítulos correspondientes del proyecto.

Se elimino el sistema de representación en materia agraria previsto en la ley vigente, pues en la práctica generó a los núcleos agrarios más problemas que beneficios.

Plazos

En los casos en los que se promueva el juicio de amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, se establece un plazo de dos años, período suficientemente amplio para posibilitar la defensa de los posibles derechos vulnerados de los núcleos de población ejidal o comunal, la inexistencia de un plazo para el ejercicio de tal derecho afectaba gravemente la seguridad jurídica de los gobernados y de los propios sujetos de derecho agrario.

Competencia

Para la resolución de los amparos en materia agraria se determine la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito de amparo tomando en consideración el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Esto difiere de la regla general sobre la determinación de la competencia en el juicio de amparo directo, ya que para su resolución es competente el tribunal con jurisdicción en el lugar donde resida la autoridad que emita el acto reclamado.

Suspensión

El proyecto establece un sistema equilibrado que permita que esta medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvían su objeto natural.

De acuerdo con el sistema vigente, en los casos en que el órgano jurisdiccional puede de oficio decretar la suspensión del acto reclamado, lo hace de plano; sin procedimiento alguno: Con el proyecto se pretende que las suspensiones de oficio se siga decretando de plano en los casos de extrema gravedad que son aquellos que importan peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación, destierro, los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales; pero que se decrete de oficio, con el trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los casos en que se deba suspender un acto debido a que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado y en los amparos contra actos que puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen de propiedad ejidal o comunal.

Parte especial del Juicio de Amparo en Materia Agraria

La labor jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y las diversas reformas del marco legal que regula el juicio de garantías han reflejado la preocupación de establecer algunos beneficios procesales a favor de los núcleos de población ejidal o comunal.

El proyecto pretende preservar la gran mayoría de esas prerrogativas; al respecto en el artículo 11 del proyecto se incorpora la norma tutelar prevista en los artículos 107, fracción II, párrafo cuarto, constitucional y 231 fracción I, de la actual Ley de Amparo, precisando que no procede el desistimiento de los sujetos de derecho agrario salvo que sea acordado expresamente por la Asamblea General; en cuanto a la falta de copias del escrito mediante el cual se presenten la demanda de garantías y el recurso de revisión, el proyecto reitera en sus artículos 86, 98, 113 y 175, la obligación del juzgador de amparo de obtenerlas oficiosamente.

Respecto a la obligación del juzgador de garantías de recabar de oficio las pruebas y de acordar las diligencias que se estimen necesarias para precisar los derechos agrarios, prevista en el artículo 225 de la Ley vigente, la misma se reitera en el diverso 73 de la nueva Ley de Amparo.

En el artículo 116 del proyecto se precisa la información y documentos que las autoridades agrarias deben brindar al juzgador de garantías en su informe con justificación, tratándose de amparo indirecto, como lo prevén los numerales 223 y 224 de la vigente Ley de Amparo.

En materia de suplencia de la deficiencia de la queja, en el artículo 73, fracción III, del proyecto, se reitera la obligación del juzgador de garantías de realizarla a favor de los sujetos de derecho agrario.

La representación procesal de los sujetos de derecho agrario se reiteran en forma genérica en el artículo 9° del Proyecto.
Respecto a la suspensión del acto reclamado, en el artículo 130 del proyecto se establece que tratándose de núcleos de población para la obtención de la medida cautelar, no se exigirá garantía alguna (se reitera lo contenido en el artículo 234).

Se suprime la suspensión de oficio en materia agraria ya que el otorgamiento de plano de tal medida llegó a causar graves perjuicios a los mismos sujetos de derecho agrario y a terceros.

COMENTARIOS AL PROYECTO DE NUEVA LEY DE AMPARO.

MAGISTRADO VÍCTOR ROLANDO DÍAZ ORTIZ

Destaca algunas ideas propias y que se habían venido exponiendo en foros y revistas especializados sobre el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo, como la existencia de tribunales Colegiados de apelación y de amparo.

El alcance que se le da al término de autoridad responsable, ya que anteriormente sólo podía ser señalada con este carácter, quien tuviese la jerarquía de autoridad y por autoridad se entendía aquella que podía hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, quedando fuera de esta interpretación los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública aún cuando en jurisprudencias recientes se fue ampliando el término de autoridad responsable.

Sin embargo, sostiene que hay una novedad en el proyecto que puede resultar una contradicción, por que el juicio de amparo o juicio de control constitucional se da para todas las personas que consideren violadas sus garantías individuales o sociales y por tanto por emanar esta disposición directamente de la Constitución General de la República, a nadie se le puede coartar este derecho fundamental; sin embargo, expresamente se establece la no procedencia del amparo contra resoluciones del Consejo de la Judicatura que no es más que un órgano de administración, vigilancia y disciplina que emite resoluciones administrativas que pueden lesionar las garantías de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a quienes vayan dirigidos.

Si bien la propia constitución establece que contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura no procede juicio o recurso alguno, esto no puede entenderse hasta el grado de privar a un gobernado del derecho de reclamar una violación a sus garantías fundamentales.

Entre otros temas, resalta la procedencia del amparo indirecto en relación con las reformas que se hagan a la Constitución Política, pero sólo en cuanto a posibles vicios que se hubieren presentado en el procedimiento de reformas, sin que proceda el amparo en contra del fondo de la reforma en sí.

También destaca la no procedencia del amparo indirecto en cuanto a las resoluciones dictadas en ejecución de sentencias, si no sólo en contra de la última resolución y por

tanto ya no procederá el amparo indirecto por aprobar o no remates, si no sólo en contra de la orden de escrituración.

DISCREPANCIAS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE

LICENCIADO DELIO COLOMÉ RAMÍREZ
PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO.

Refiere que la Ley de Amparo vigente, presenta discrepancias, como por ejemplo mientras que en su artículo 42 señala la competencia para conocer de los actos de un Tribunal Unitario a un Juez de Distrito que no pertenezca a su jurisdicción, el artículo 29 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación establece la competencia para otro Tribunal Unitario. Por otra parte, el artículo 23 de la Ley Reglamentaria, señala los días inhábiles y el numeral 163 de la Ley Orgánica prevé también los días inhábiles, pero con cierta diferencia. Aunque a través de acuerdos de los Ministros de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación se resuelven estos casos, es la Ley la que debe imperar.

Observaciones:

El artículo 1°- de la Ley de Amparo es demasiado claro, para pretender, en el proyecto, agregarle los derechos humanos, que protegen los diversos tratados internacionales, porque sencillamente todos los derechos humanos están protegidos por las garantías Constitucionales o Individuales.

El artículo 9° - de la Ley de Amparo señala claramente que las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de Amparo, por conducto de los funcionarios o representantes, cuando el acto o Ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. Sin embargo el proyecto en su artículo 6° -, lo hace difícil.

El artículo 117 del nuevo proyecto prevé dos momentos procesales para ofrecer las pruebas testimonial, pericial y de inspección judicial. Haciendo este artículo impreciso y confuso.

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO QUEZADA ORNELAS
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL, ABOGADOS Y LITIGANTES DE NAYARIT

Manifiesta que el artículo 74 fracción V de la Ley de Amparo es inconstitucional, ya que las personas que acuden en demanda de justicia no tienen la culpa que los Tribunales tengan excesiva carga de trabajo o no exista una suficiente organización y resolución dentro del Poder Judicial de la Federación, pues claramente sin distinción y después de que una persona quejosa haya interpuesto en tiempo y forma Demanda de Garantías, expresando sus conceptos de violación y haciendo un detalle razonado, motivado y fundado de las violaciones en que incurrió la Responsable y que además el haberse turnado para sentencia y algunas listadas para ello, después de 300 días que establece dicho precepto en comento, opera el sobreseimiento por caducidad, debido a la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente, la sentencia que reclama que es violatoria de sus Garantías se le declare firme, sin que el Tribunal ante el cual esta obligado a impartir justicia dentro de los plazos y términos, no lo hizo o sea, que los tribunales no administran justicia dentro de los 300 días que estaban obligados a ello de acuerdo con el artículo 17 constitucional, por ello resulta absurdo e injusto que siga en vigencia y se aplique el numeral 74 fracción V de la Ley de Amparo.

DEFICIENCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL, SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.

LICENCIADO DANIEL MERCADO DÍAZ
ABOGADO POSTULANTE

El derecho laboral debe constituir de acuerdo a sus raíces, no solo el aspecto normativo que regule las relaciones de trabajo, sino además, deberá servir como el medio de tolerancia y reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad, y ello será el galardón para aquellas personas que le dieron forma, logrando darnos la pauta para dentro de nuestra sociedad, ser más justos y ecuánimes con los que menos tienen.

Es el medio de control Constitucional que debe considerarse como elemento político, jurídico y social, que mantiene la tolerancia entre individuos y autoridades, siendo el ligamiento que consagra la unión y democracia dentro de nuestro régimen político, de ahí el gran papel que desempeña el Juicio de Amparo y en general el Poder Judicial ya que equilibra y resguarda las relaciones entre los demás poderes de la unión, y de estos con los gobernados.

El Juicio de Amparo en materia Laboral, contiene los mismos elementos que el amparo en general, más sin embargo, algunos de ellos, de acuerdo a la materia laboral resultan antagónicos a la esencia y objeto del juicio de garantías, de ahí la necesidad de consagrar y postular razonamientos válidos para alcanzar la teleología planteada y perseguida por los constituyentes.

Sin lugar a duda, los artículos 1° y 158 de la Ley de Amparo, que regulan la procedencia del juicio de Amparo Directo constituyen la intensión real del legislador por salvaguardar las garantías del gobernado, más sin embargo distan mucho para dar lo que se persigue en materia social. Tanto las violaciones dentro del procedimiento, así como dentro de los laudos que se dicten en materia laboral, son en parte atacadas efectivamente por el juicio de amparo, y sólo en parte, porque a la parte obrera se le logran subsanar en gran medida las garantías y principios que se le hayan violado por la autoridad responsable del trabajo, y no así en lo que respecta a la parte patronal, siendo que el fin del juicio de amparo pugna por dar o restituir a todo gobernado el goce y disfrute de las garantías violadas por la autoridad del trabajo.

Por lógica y derivada de la propia Constitución General, así como de sus Leyes Reglamentarias, el Juicio de Amparo en materia Laboral, no debe, ni deberá reglamentarse, ni aplicarse en los mismos términos, como si se tratase de cualquier

otra rama del derecho, ya que hacer lo contrario, resultaría antagónico y por demás alarmante, ya que la materia social persigue fines distintos a los perseguidos por el derecho individualista, por ello no se puede seguir reglamentando al juicio de amparo en materia laboral con los mismos lineamientos de las demás ramas del derecho, ya sean del tipo privado o público; pero tampoco deberá anteponerse el derecho social a los principios y garantías estipuladas para los gobernados en lo individual.

La Suplencia de la Deficiencia de la Queja, constituye en nuestro juicio de amparo, la facultad de que el juzgador de amparo aplique el derecho aún cuando el gobernado quejoso no lo invoque correctamente en sus argumentos y deberá suplir sin distinciones antagónicas con la justicia; por ello tal figura debe ampliarse, para que el juicio de garantías cumpla su cometido.

COMENTARIOS AL PROYECTO DE NUEVA LEY DE AMPARO, FORMULADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

LICENCIADO VIRGILIO SERGIO MENA BECERRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Refiere que el proyecto presenta positivos avances para el mejoramiento del Juicio de Garantías:

a) Señala los derechos humanos como nuevo ámbito de protección de las garantías constitucionales.
b) Acorta a 3 ejecutorias de la autoridad de Amparo, para instituir jurisprudencia.
c) Agiliza el trámite de notificación al tercero perjudicado.
d) Aclaración de sentencias de oficio o a petición de parte.
e) Se propone la procedencia del recurso de queja en contra de la autoridad responsable cuando en amparos directos omite tramitar la demanda, o lo hace en forma indebida.

Observaciones

Al establecer un término mínimo de 30 días para interponer la demanda de amparo, se advierte peligro en virtud a que deberá mencionarse en la introducción, para la efectividad de la ampliación del término, la adecuación del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, ya que hay una notoria disparidad entre la ampliación del término para interponer el amparo y el que establece la Ley Federal del Trabajo para la ejecución del laudo.

Se estima de suma gravedad incrementar las sanciones a la autoridad responsable en materia laboral que en este caso sería la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y Presidentes de las Juntas Especiales, quienes actúan en el proceso de amparo como auxiliares de las propias autoridades de amparo; se cita entre las causas que impiden la atención oportuna el dictaminar interlocutorias de suspensión, rendir informes justificados, cumplimiento de ejecutorias, aunado a la insuficiencia de personal jurídico y operativo.

Se considera notoriamente injustificada la sanción que contiene el artículo 267 del proyecto, en el cual aún después de dejar el cargo por motivos justificados, prosiga la

acción penal en contra (en este caso) del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y del personal jurídico señalado como autoridad responsable.

Asimismo considera de suma gravedad el incremento de las sanciones previstas en la nueva Ley de Amparo en los casos que a continuación se señalan:

El no informar causa de sobreseimiento (artículos 62, 249 del Proyecto); no expedir copias, o que estas sean ilegibles (artículos 119, 252 del proyecto); respecto al caso de inejecución de sentencias de amparo (artículos 190, 191 del Proyecto); falta de informe justificado en amparo indirecto (artículos 10, 258); falta de certificación en la demanda de amparo de los días inhábiles (artículo 158 fracción II del proyecto); falta de remisión de informe justificado (artículo 258 fracción III del proyecto).

El no informar causa de sobreseimiento

Ley de Amparo vigente	**Proyecto de Ley de Amparo**
74.-Procede el sobreseimiento: I.-. . . II.-. . . III.-. . . IV.- Cuando de las constancias. .	62.- Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañará las constancias que le acrediten.

Ley de Amparo vigente	Proyecto de Ley de Amparo
Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a manifestarlo as, y si no cumplen esta obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso	249.- En el caso del artículo 62, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no lo comunique, se le impondrá multa de treinta a trescientos días.

No expedir copias o que estas sean ilegibles

Ley de Amparo vigente	Proyecto de Ley de Amparo
152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia de juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento o aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieran las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y harán uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.	

Respecto al caso de inejecución de sentencias de amparo; falta de informe justificado en amparo indirecto; falta de certificación en la demanda de amparo de los días inhábiles(artículo 158 fracción II del proyecto); falta de remisión de informe justificado (artículo 258 fracción III del proyecto).

LA SUSPENSIÓN EN MATERIA DE AMPARO

LIC. CLAUDIA FLORES AVILA/ JESÚS AGUAYO TERÁN.
ABOGADO POSTULANTE

Considera necesario analizar, una posible reforma respecto a la Suspensión. En el caso de las audiencias incidentales, resulta incongruente el que no se otorgue la Suspensión definitiva por consideraciones netamente formales.

Cuando se solicite amparo en virtud a que se consideran violadas garantías de esencial importancia, si por un formalismo se le permite a la autoridad responsable ejecutar el acto que se reclama, sin que se llegue a resolver el fondo del asunto; se considera que existen dos violaciones, la de la Autoridad Responsable y la del Juez que esta conociendo del amparo, pues evidentemente se permite ejecutar el acto sin que se analice y resuelva definitivamente.

OPINIÓN JURÍDICA SOBRE EL AMPARO AGRARIO

LICENCIADA MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ C.
CATEDRÁTICA DE PROCESO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Crítica: En el proyecto de Ley de Amparo, del 25 de abril de 2001, se quita totalmente la posibilidad de la Representación Substituta, para ejidatarios o comuneros, ya que asegura el citado proyecto, se afectaría mas a los campesinos de México, artículo 9 del Proyecto de reformas.

En el proyecto de la nueva Ley de Amparo, en el artículo 25, desaparecen de plano las notificaciones en materia agraria.

El proyecto de la nueva Ley de Amparo, en el artículo 73, trata de que " no se admitirán ni se tomarán en consideración, las pruebas que no se hubiesen rendido ante dichas autoridades. Considera que este artículo va a afectar a los ejidos y comunidades, ejidatarios y comuneros y aspirantes a dichas categorías, porque como desaparece el libro segundo, se tendrá forzosamente que aplicar este artículo también en materia agraria, aunque en la parte final del citado dispositivo se diga que las pruebas serán oficiosas para las entidades agrarias. Sería mejor dejar los artículos 225 y 226 tal cual están, ya que si son protectores de los ejidos y comunidades, por tal, esta reforma de aplicarse dejaría en total estado de indefensión a los campesinos de México.

El artículo 130 del Proyecto, dice que la suspensión se concederá a petición de parte agraviada, pero también se podrá otorgar contrafianza para dejarla sin efecto, luego entonces, esta suspensión no funcionará para los ejidos y comunidades, ya que las dejaría en estado de indefensión jurídica.

Respecto al término indefinido del amparo agrario, éste término de que habla el artículo 217 de la Ley de Amparo Agrario, debe ser indefinido contrariamente a lo que dice el Proyecto de Ley de Amparo en el artículo 16 fracción III, toda vez que deja en estado de indefensión a las entidades agrarias, al proponer un término de dos años naturales para la interposición del amparo agrario, razones por las cuales debe prevalecer el término indefinidos.

Mientras existan ejidos y comunidades indígenas, no puede desaparecer el amparo agrario, y aún existen 2,800 comunidades y 28,500 ejidos, y muchos de sus integrantes no saben hablar español.

Las comunidades: indígenas y los ejidos viven en poblaciones serranas lejanas y muchas veces ni siquiera se enteran de la existencia de resoluciones judiciales en su contra, solo hasta que los van a despojar de sus bienes agrarios.

El amparo ha sido un catalizador social que ha tutelado derechos subjetivos a los ejidos y comunidades y ha evitado un estallido social en el campo.

En cuanto a la ejecución de sentencia, el anteproyecto de nueva ley de amparo propone que como se va a desincorporar la institución del Ministerio Público, por tal se suprime esta institución, y con esta supresión, las entidades agrarias ejidos y comunidades, así como los ejidatarios, comuneros y aspirantes a dichas categorías, quedan en total estado de indefensión procesal.

Conclusiones

I.- De acuerdo con el artículo 71, de la Constitución Política de México, la suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultad para promover iniciativas de ley, esta facultad es exclusiva del Presidente de la República, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados.

II.- El libro segundo del amparo agrario debe conservarse tal como está, para que sirva de defensa y protección jurídica a los campesinos de México; el riesgo de desaparecer esta Institución Social, sería que podría haber un estallido social en el campo y que sería de graves consecuencias.

III.- En todo caso, la reforma que se puede hacer, sería extensiva a la suspensión de oficio extrajudicial, tal como lo señala el artículo 38 de la Ley de Amparo, para que se aplique en beneficio de ejidatarios, comuneros, aspirantes a dichas categorías, ya que estas entidades individuales sufren demasiados despojos en sus tierras.

IV.- El amparo social agrario no debe de desaparecer, y quizá se le podría denominar como “Amparo Indígena Agrario” ya que tutela y protege los derechos de aproximadamente 2,800 comunidades indígenas y de 28,500 ejidos, y la mayoría de sus integrantes son indígenas.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

LICENCIADO RAÚL CHÁVEZ CASTILLO

PROFESOR POR OPOSICIÓN EN LA MATERIA DE AMPARO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.

Propuesta: Presenta como ponencia, diverso proyecto de Ley de Amparo, el cual fundamenta en las fallas y deficiencias que existen en la actualidad en el juicio de amparo, detectadas tanto en la práctica profesional como en la Ley de Amparo vigente, que no se ajusta a la realidad social por ser obsoleta ya que data del año de 1936. Por lo que envía un proyecto de nueva Ley en la materia que difiere de la que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación**.**

Señala los principales problemas que en la actualidad enfrenta el Juicio de Amparo en México; entre los que destaca rezago considerable de 140,000 asuntos de amparo; creación de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en forma indiscriminada por parte del Consejo de la Judicatura Federal; designación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito por parte del Consejo de la Judicatura Federal en forma ilegal contraviniendo lo dispuesto en la Constitución Federal; como consecuencia de lo anterior, incompetencia, ineptitud e incapacidad de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para iniciar, tramitar y resolver asuntos de amparo de su competencia, al aplicar la Ley de Amparo, resolviendo en contra de la misma a criterio; ineficiencia total del Consejo de la Judicatura Federal; existencia de una ley obsoleta que debe cambiar por una nueva para adecuarse a la realidad social; inexistencia de un verdadero medio de control Constitucional de protección de las garantías del gobernado, ya que se acude al juicio de amparo en busca de justicia y se encuentra con injusticia, por el tiempo que tardan en resolver y por la falta de estudio adecuado de los asuntos.

Asimismo hace un señalamiento de 93 deficiencias notorias que existen en la actual Ley de Amparo, las que requieren remediarse mediante la expedición de una nueva Ley de Amparo.

Refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trató de dar solución a esos problemas con la realización de un proyecto en la materia, el que manifiesta, envió al Ejecutivo Federal para su estudio y en su caso posterior presentación como iniciativa de ley al Congreso de la Unión; sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Corte (que refiere no le competen), ha dejado su proyecto muy semejante a la actual Ley de Amparo, sin que sirva realmente para remediar los problemas, ya que lo ha formulado

de manera incompleta al omitir abarcar una serie de situaciones de gran relevancia e importancia para la modernidad y manejo adecuado del juicio de amparo. Al efecto presenta un estudio comparativo entre las deficiencias detectadas en el amparo y lo efectuado por la Corte.

Manifiesta que de las 93 deficiencias y fallas que actualmente detectó tiene la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende 34 de ellas, siendo indispensable que se atiendan las 59 restantes.

Respecto a omisiones que presenta la Ley de Amparo, propone la redacción de preceptos que debe contemplar una nueva Ley de Amparo, en cada uno de los cuales hace una breve exposición de motivos, donde se razona lógica y jurídicamente la conveniencia de crear preceptos adecuados, que lograrían cubrir las deficiencias existentes

Hace alusión a los preceptos que a su juicio deben ser modificados en a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de las reformas que a su juicio deben realizarse a la Constitución Federal, con motivo de la expedición de una nueva Ley de Amparo y crítica el Proyecto de Nueva Ley de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaborado por una Comisión designada por la Suprema Corte.

Finalmente presenta texto del proyecto de una nuevo Ley de Amparo, basado sobre la actual, pero con modificaciones trascendentes que se adecuan a la realidad social.

ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA MEXICANA

L.A.E. MARIO LUIS PÉREZ MÉNDEZ
RECTOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO AUTÓNOMO DEL ESTADO DE MÉXICO

Existe cierta confusión respecto a la aplicación de la jurisprudencia contradictoria no obstante la existencia del artículo 19 de la Ley de Amparo, lo anterior en virtud a que cuando son remitidos los autos a la suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre contradicción de tesis, ésta analiza y decide sin alterar en absoluto el contenido de la resolución dictada; luego entonces, ¿que beneficio tendría la parte a la que se le aplicó esa tesis contradictoria?, por que el máximo tribunal resuelve dicha contradicción para lo futuro no para aplicarse a los asuntos presentes, por ende que interés tendrían las partes que se consideran afectadas en sus asuntos jurídicos, si aunque acudan al máximo tribunal a denunciar la existencia de tesis jurisprudenciales contradictorias, ya jamás se les modificará su sentencia, esto ha dado lugar a que las partes tienden a abandonar el proceso una vez que se dicta la sentencia, resignándose a admitir el hecho que se emplearon tesis contradictorias en su perjuicio; situación que cambiaría si se les diera la oportunidad de interponer un recurso en contra de la sentencia en la que se aplicó la jurisprudencia contradictoria.

Respecto a la vigencia de la jurisprudencia, sería muy conveniente que el Pleno de la Suprema Corte, después de estudiar y analizar las jurisprudencias que le ponen bajo su consideración, determine si esa tesis ha perdido su validez por ser contradictoria, se haya interrumpido o incluso haya cambiado su contenido, en virtud a que cuando los artículos y leyes sobre los cuales se ha hecho estudio, análisis por parte del Pleno y Tribunales Colegiados de Circuito y que posteriormente los concluyen con una tesis jurisprudencial, que con el paso del tiempo son derogados o abrogados por el Poder Legislativo, es muy conveniente que también esas mismas tesis jurisprudenciales que se dictaron haciendo referencia a los mismos, fenezcan junto con ellos; por lo que sería conveniente que los Ministros que tengan conocimiento de estos casos resuelvan y ordenen colocar al calce de cada una, los datos necesarios para que el público interesado se entere de que esa tesis en particular ya fue analizada, modificada, derogada por el máximo tribunal y así los litigantes sabrán si se solicita o no su aplicación, en asuntos jurídicos en particular.

En lo concerniente a la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo; el artículo 14 Constitucional establece que, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio

de persona alguna, pero ¿que sucede respecto a la interpretación de las leyes que efectúa el Poder Judicial Federal que concluye con una tesis jurisprudencial?; el citado artículo no prohíbe aplicar retroactivamente la jurisprudencia, sino la propia ley, razón por la cual la jurisprudencia al estar dotada de los mismos atributos que la ley resultaría lógico no aplicarla retroactivamente a un asunto en particular.

Propuestas:

a) Establecer que la jurisprudencia dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito sea aplicada preferentemente en su Distrito Jurisdiccional, en razón a que se supone se ha resuelto d acuerdo a los usos y costumbres de la región.

b) Las jurisprudencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito deben aplicarse en el mismo Distrito por los Tribunales Estatales de Justicia, Tribunales Administrativos, Militares y en general a los litigantes que tienen la necesidad de recurrir a esta valiosa institución, preferentemente frente a las dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito de otras zonas, y a menos que no exista jurisprudencia alusiva al asunto en particular en el Distrito, aplicar estas al juicio planteado.

c) Una vez que sean estudiadas, analizadas y resueltas todas y cada una de las jurisprudencias contradictorias por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de la resolución que dicte, deberán de publicar su resolución y colocar en el calce de cada una de éstas una nota o extracto de la resolución a fin de que el público en general se entere de que ésta ha caído en desuso por contradictoria

d) Prohibir la aplicación de la jurisprudencia en forma retroactiva en perjuicio de los particulares y en especial a sus asuntos en particular.

e) Que las tesis jurisprudenciales que se hayan hecho con motivo del estudio, análisis y crítica a un artículo o ley, y que sean posteriormente derogadas o abrogadas, entonces se establezca que aquellas también han fenecido.

EL TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DEL AMPARO EN MATERIA LABORAL.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL ESTADO DE MÉXICO.

La finalidad inicial del Amparo Mexicano fue estrictamente la de constituir un medio de garantizar la Supremacía Constitucional y observancia de la Constitución contra cualesquiera leyes o actos de autoridades que la infringieran, pero la institución del amparo evolucionó hasta convertirse no solo en un medio de control Constitucional, sino también de las leyes ordinarias, a través de la garantía de legalidad.

Tutela el cumplimiento de las garantías individuales consagradas en la Constitución, restituyendo en el goce de las mismas a quienes resulten afectados por las violaciones.

Y tutela además la garantía de legalidad que el artículo 14 de la Constitución consagra como una garantía de correcta interpretación jurídica de la ley; y en el artículo 16 Constitucional, como una garantía de seguridad jurídica.

La debatida cuestión sobre el carácter jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ha quedado resuelto en los términos de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de equipararlas a las autoridades jurisdiccionales, de acuerdo con el artículo 158; en el cual en su primer párrafo, se atribuye a las juntas el carácter de autoridad jurisdiccional, para la procedencia del juicio de amparo.

Dictado un laudo y notificado a las partes, éste deberá cumplirse dentro de las 72 horas siguientes como lo señala el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo (Título XV, procedimiento de ejecución), situación que resulta incongruente con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo que establece que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días contados desde el día siguiente al que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclama.

Así sucede que en la práctica al solicitar la ejecución de los laudos los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, deben esperar a que transcurra el término para la interposición del amparo y poder despachar la ejecución debido a esta falla legal, por lo que resulta necesario reformar el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo y se precise en el mismo que el término será hasta que cause ejecutoria el laudo o bien dentro de los quince días al en que surta efectos la notificación.

Con lo anterior habría mayor seguridad jurídica para las partes en el procedimiento laboral y además congruencia entre estas dos leyes reglamentarias de la Constitución.

CONFUSIÓN EN CUANTO AL MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CORRER EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO DIRECTO.

LICENCIADO ANDRÉS ANTONIO CALDERÓN GALÁN
MAESTRO EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA.

Actualmente los Tribunales Colegiados en Materia del Trabajo, notifican, que la Junta Federal respectiva ha dado cumplimiento fehacientemente a la sentencia de amparo en consecuencia, se determina en los autos:

De vista con el Laudo a la parte quejosa por el término de 3 días computados a partir de la legal notificación del proveído, para manifestarse lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo este Tribunal de Amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

OBSERVACIONES:

Se crea confusión en que momento empieza a correr el término para la interposición del amparo directo.

El Tribunal Colegiado dice tener facultades para notificar el laudo en cumplimiento de ejecutoria, y se basa en la jurisprudencia número 44 emitida por el Noveno tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito.

CONCLUSION

a) Legalmente es la Junta la que notifica los laudos, con fundamento en el capítulo de notificaciones, artículos del 739 al 752, y en particular el artículo 725 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo.

b) Sería conveniente que el Tribunal Colegiado notifique el laudo en cumplimiento de ejecutoria, pues es más rápido, ya que la junta tarda demasiado.

c) Debe ser la notificación apegada a derecho esto es fundamental en la Ley de Amparo, en el capítulo correspondiente de notificaciones.

d) Que la Junta notifique el Laudo que se emite del procedimiento ordinario que señala la Ley Federal del Trabajo

e) La Jurisprudencia 44, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito ha creado confusión e incertidumbre, ya que su fundamento es el artículo 21 de la Ley de Amparo y se encuentra en el capítulo III de los términos.

El artículo 21 se esta contraponiendo con el artículo 752 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, pues este artículo se encuentra en el capítulo de notificaciones; notificación quiere decir acción y efecto de notificar y notificar quiere decir comunicar o dar una noticia.

Por lo que se concluye que Notificación y Término, son palabras de significado diferente y que el Tribunal Colegiado pretende hacerlas sinónimos, lo correcto es poner o insertar en la Ley de Amparo en el capítulo de notificaciones que los laudos en cumplimiento de ejecutoria serán notificados por los Tribunales Colegiados y que a partir de ese momento empezará a correr el término para un posible juicio de garantías.

LA ADHESIÓN A LA REVISIÓN Y EL AMPARO ADHESIVO.

MAGISTRADO ABRAHAM MARCOS VALDÉS
INTEGRANTE DEL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADOEN MATERIACIVIL

Por virtud de las reformas que en 1988 se hicieron a la Ley de Amparo, se adicionó su artículo 83 para establecer la adhesión a la revisión en los siguientes términos:

"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesa de éste".

En el primer párrafo del artículo 80 del Proyecto de Ley de Amparo se conserva esa disposición, añadiéndose únicamente que la presentación y trámite de la adhesión se regirá en lo conducente, por lo dispuesto para la revisión principal.

En el segundo párrafo del citado precepto se introduce lo siguiente:

"Los agravios en la revisión adhesiva pueden fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron el resolutivo favorable al recurrente, o impugnar las que concluyen en un punto decisorio que le perjudica".

Sostiene que, instituir la adhesión ala revisión para fortalecer las consideraciones que orienten el resolutivo favorable al recurrente, mediante la expresión de agravios, como lo hace el Proyecto, equivale a sostener que la debilidad o la deficiencia de la motivación del juez inferior, lesiona o perjudica los derechos del que ha obtenido una decisión favorable, de tal modo que se requiere de expresar agravios para que pueda esa deficiencia ser remediada. Y es tanto como aceptar que los tribunales, al conocer del recurso contra la sentencia de primer grado, han de ceñirse a examinar su legalidad atendiendo estrictamente a los razonamientos del inferior, en los términos en que hayan sido emitidos, con la posibilidad de revocar el fallo por el solo hecho de ser deficientes o débiles tales razonamientos, a menos que éstos los venga a robustecer la contra parte a través de la adhesión al recurso.

En esas condiciones, la ponencia es en el sentido de que se modifique el segundo párrafo del artículo 80 del Proyecto, para quedar como sigue:

“Los agravios en la revisión adhesiva pueden impugnar las consideraciones de la sentencia que no concluyan en un punto decisorio que le perjudique la recurrente”.

En la inteligencia de que, con base en las ideas expuestas, aplicadas en lo conducente, se propone que el segundo párrafo del artículo 180 del Proyecto, relativo al amparo directo adhesivo, quede redactado en la forma siguiente:

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo, podrán estar encaminados a impugnar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que no concluyan en un punto decisorio que le perjudique al interesado, así como las violaciones procesales que se hubiesen cometido, siempre que pudieran trascender al resultado de fallo”.

TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO SCJN	TEXTO PROYECTO SCJN	TEXTO VIGENTE
Artículo 80	Artículo 80. La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por la contraria dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos las notificaciones de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. Su presentación se hará ante el órgano jurisdiccional que admitió el recurso y el trámite se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto en esta sección para la revisión principal, y seguirá la suerte procesal de ésta.	Artículo 83
En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que e le notifique la admisión del recursos , expresando los agravios correspondientes; en esta caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste".	Los agravios en la revisión adhesiva pueden fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron el resolutivo favorable al recurrente, o impugnar las que concluyen en un punto decisorio que le perjudica.	En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, pueden adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recursos, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal.
Artículo 180...	Artículo 180.- La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente. La presentación y tramite de aquel se regirá en lo conducente, por lo dispuesto APRA el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal.	

TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO SCJN	TEXTO PROYECTO SCJN	TEXTO VIGENTE
Art. 180...	Artículo 180.- La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente. La presentación y trámite de aquél se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal.	
"Los agravios en la revisión adhesiva pueden fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron lo resolutivo favorable al recurrente, o impugnar las que concluyen en un punto decisorio que le perjudica".	Los conceptos de violación en el amparo adhesivo podrán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolutivo favorable a sus intereses o impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal y en materia penal tratándose del inculpado. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones se hayan cometido en su contra. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga.	

EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

LIC. SALVADOR DÍAZ DE LEÓN.

De las sentencias de amparo, que las resoluciones que emiten las autoridades responsables en cumplimiento de ejecutoria, contengan la conformidad o inconformidad personal del ciudadano que obtuvo el fallo a su favor, hasta la ejecución total de la resolución en los términos específicos de la sentencia de amparo y que se de cuenta a los Tribunales Colegiados o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha cumplido y ejecutado cabalmente su sentencia.

Esto con la finalidad de evitar que se queden en la mesa de las autoridades responsables los asuntos fallados por los Tribunales y en consecuencia sean manipulados por autoridades y abogados faltos de respeto, criterio y ética profesional.

En un juicio de amparo todos conocen las reglas jurídicas, menos el ciudadano que deposita en manos de un abogado y autoridades responsables su libertad, patrimonio, derechos adquiridos y lo que es más su confianza, al respecto sugiere que a las leyes que apliquen las autoridades responsables se establezca un apartado en donde se le haga saber a todo ciudadano en forma personal el derecho que le asiste de los beneficios y protección que le brinda la Ley de Amparo y si desea o no recurrir a ella, manifestando en forma personal mediante escrito o declaración ante la misma autoridad para que surta todos los efectos legales que proceden cuando la resolución emitida por la autoridad responsable sea favorable o desfavorable y que el ciudadano no este conforme con esto.

El Poder Judicial es una institución de justicia que requiere de mayores facultades para hacer cumplir los preceptos constitucionales en beneficio de todos los ciudadanos, extendiendo su alcance en tiempo y espacio hasta ser cumplidas y ejecutadas sus sentencias desde el más humilde mexicano que ignora sus derechos, hasta el más hábil conocedor en materia de amparo,

Confía en que los nuevos tiempos, sean de claridad, transparencia y confianza, refiere que es justo y lógico que estos altos tribunales de justicia que gozan de confianza absoluta, se coordinen con las autoridades responsables cuando éstas últimas den por concluido un asunto hasta su ejecución total e informen por escrito en forma y términos en que se cumplan los fallos ya sea de los Tribunales Colegiados o de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir que se complementen sus acciones y se ajusten a los tiempos de cumplimiento que la ley establezca en cada asunto, para esto es necesario que los abogados que representen a las autoridades responsables llenen los requisitos indispensables de ética, moral profesional, espíritu de servicio a la sociedad con imparcialidad y oportunidad para dar confianza a la sociedad, que son todos los mexicanos que en su mayoría ignoran la existencia de las bondades y protección que otorga esta ley de Amparo y de quienes la imparten y que sin razón reclamamos justicia, se de a conocer a través de autoridades responsables, lo más elemental de la existencia de esta Ley de Amparo, así como los caminos para llegar a ella, cuando se vean afectados nuestros derechos constitucionales por terceras personas y por la misma autoridad que se niegue a actuar conforme a la ley cuando no tengan un abogado que nos represente.

Se sugiere que en los lugares en donde actúe toda autoridad responsable se coloquen en espacios visibles públicos, anuncios que indiquen lo que es la ley de amparo y el derecho que tiene todo ciudadano de recurrir a su protección cuando no esté conforme con la resolución emitida por las autoridades responsables y de la forma de tramitarla mediante manifestación personal por escrito o declaración ante la misma autoridad.

Invertir en calidad de justicia, es poner en orden un país en beneficio de la sociedad.

COMENTARIOS RESPECTO A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO.

LICENCIADO HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMEZ
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.

Artículo 1° fracción I.- Sustituirse la palabra individuales por la de gobernados, que es más apropiada y comprensiva respecto de los sujetos a quienes se concede la protección constitucional.

Artículo 3° Bis primer párrafo.- Debe reformarse para que se tome como base en las multas que se impongan el salario mínimo general vigente en el lugar en que se haya tramitado el Amparo.

En atención a que el Ministerio Público es considerado como parte dentro del proceso penal, debería ser considerado como parte en el Juicio de Amparo para que este en aptitud de impugnar en la vía constitucional las resoluciones judiciales de segunda instancia que sean absolutorias o que confirmen la libertad por falta de elementos para procesar o que nieguen el libramiento de orden de aprehensión.

Artículo 18.- Es necesario agregar en la parte final del primer párrafo la palabra **Federal** a fin de precisar el representante social que consignara los hechos a que se refiere tal precepto.

A fin de garantizar los derechos de la víctima u ofendido por la comisión de un delito y de buscar el equilibrio o igualdad procesal con el procesado y evitar que se difiera el pago de la reparación del daño, debe señalarse un término breve para que se presente la demanda de Amparo en contra de actos que importen ataques a la libertad personal, cuando se trate de sentencia condenatoria en sentencia penal.

Artículo 23 segundo párrafo.- debe incluirse al fax y al correo electrónico como medios para poder promover en cualquier día y hora el Juicio de Amparo y lo mismo debe suceder respecto de las promociones de las partes que residan fuera del lugar del Juzgado que conozca del juicio o del incidente de suspensión.

En materia de notificaciones en donde se dispone que se realicen por medio de lista, es preferible que se efectúen mediante boletín judicial, que brinda mayor seguridad.

Artículo 28.- Deben considerarse las sentencias como resoluciones judiciales que serán notificadas personalmente entregándole al interesado copia certificada de las mismas para que se entere con prontitud del contenido de ellas y le de oportunidad de preparar con anticipación el medio impugnatorio correspondiente.

Artículo 32.- Es necesario considerar para la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones el caso en el que se haya omitido realizar la notificación.

Es incongruente lo dispuesto por el artículo 73 fracción IX en relación con el 80 de la Ley de Amparo, puesto que siempre existe la posibilidad de restituir al agraviado, aún mediante la substitución.

En atención a que las sentencias que se dicten en el Amparo y que lo concedan se pueden cumplir mediante la sustitución cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que a los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, como lo indica el cuarto párrafo del artículo 105 debe sustituirse el término **imposible** que contiene la fracción IV del artículo 114 de la misma ley por el término **difícil**.

Artículo 146.- Debe hacerse de manera personal la prevención al quejoso para que satisfaga los requisitos omitidos y haga las aclaraciones correspondientes respecto de alguna irregularidad que se advierta en su escrito de demanda, con el fin que sea enterado debidamente de ello.

La prueba confesional debe ser admitida en el juicio de Amparo, en atención al principio de inmediatez en la formación de las pruebas, por lo que el artículo 150 solamente comprenderá como inadmisibles las que fueren contra la moral y el derecho.

En atención a que la mayoría de las pruebas se deben anunciar con la debida anticipación a la celebración de la Audiencia Constitucional, es incongruente que en el artículo 151 se diga que las pruebas deben ofrecerse en la Audiencia del juicio.

A fin que no se difiera indefinidamente la expedición de copias certificadas solicitadas por las partes y que se celebre con oportunidad la Audiencia Constitucional debe adicionarse el párrafo primero del artículo 152, para que proceda la compulsa de las actuaciones judiciales en el expediente que se forme al Juicio de Amparo, respecto de las constancias que sean materia de la solicitud de copias certificadas y que obren en el expediente que haya formado la autoridad responsable

Se considera imprescindible que en la fracción III del artículo 159 se consideren violadas las leyes del procedimiento, cuando se reciban pruebas a la contraparte del quejoso, contrariamente a lo establecido en la Ley Adjetiva correspondiente y para evitar el pronunciamiento frecuente de sentencias para efectos, que generalmente se pronuncian con motivo de la apreciación de que se ha violado alguna Ley del Procedimiento y sería conveniente que ante la falta de recurso ordinario o de desechamiento o improcedencia infundados se incluya nuevamente el incidente de reparación constitucional en lugar de que se invoque la violación como agravio al interponerse la Apelación y abrir la segunda instancia como lo refiere la fracción II del artículo 161.

Que se incluya en el artículo 193 que la jurisprudencia sea obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de adecuar esta disposición con el diverso 192 que prevé la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas.

Debe considerarse la responsabilidad de los Servidores Públicos que conozcan del amparo y de las autoridades responsables, cuando no acaten la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito.

IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DIFUSOS Y/O DERECHOS COLECTIVOS EN EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO MEXICANO.

LICENCIADO CÉSAR JUAN ZAMUDIO AGUILAR
ABOGADO POSTULANTE, CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA, INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES E HISTORIADE MÉXICO A NIVEL MEDIO SUPERIOR.

La importancia que reviste la definición de la figura de los derechos e intereses difusos y colectivos, y la tarea de determinar quienes se encuentran legitimados para ejercer las acciones dirigidas a su protección, es prioritario por la importancia que reviste que, en un Estado Social de Derecho y Justicia, se deba dotar a todos sus habitantes de mecanismos de control para permitir que éstos tutelen la calidad de vida que desean como parte de la interacción Estado-Sociedad; estos mismos derechos difusos o colectivos constituyen, por si mismos, una figura equiparable a los derechos civiles que son inherentes a una verdadera democracia participativa. De este modo los derechos colectivos o difusos si se consideran como derechos civiles dirigidos a proteger la calidad de vida de los miembros de la sociedad, deberían estar contemplados dentro del texto Constitucional mexicano (artículos 103 y 107) y deberían protegerse dentro de la legislación del amparo.

Considerar los derechos difusos como la expansión de los derechos civiles permiten el desarrollo directo de los derechos fundamentales contemplados en la Carta Magna, debiendo corresponder a las Salas Constitucionales el conocimiento de las acciones que tengan por objeto la tutela de tales derechos, mientras la ley no lo atribuya a otro tribunal.

El interés o derecho difuso es aquel que se difunde entre todos los individuos de la sociedad con objeto de garantizar una mejor calidad de vida, de manera que si éstos se ven afectados, surge en cada miembro de esa comunidad un interés en beneficio de él y de los otros componentes de la sociedad.

Vincula a personas que no se conocen entre sí, que individualmente pueden carecer de nexo o relaciones jurídicas entre ellas, que en principio son indeterminadas, unidas sólo por la misma situación de daño o peligro en que se encuentran como miembros de una sociedad.

Debe considerarse que, el derecho o interés difuso se refiere a un bien que atañe a un conglomerado social, genérico e indeterminado; el interés colectivo comparte un bien referido a un sector poblacional determinado

Propuesta:

Que nuestra Constitución contemple, sin distinción alguna, la posibilidad de acceso a la justicia para hacer valer derechos e intereses colectivos y difusos.

Que cualquier persona procesalmente capaz, pueda intentar una acción por intereses difusos o colectivos.

Que el accionante como parte de la sociedad haya sufrido personalmente la lesión..

Que carezca de legitimación para ejercer esta acción quien no este domiciliado en el país

REFORMAS AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE AMPARO Y A LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LICENCIADO JESÚS ESTRADA FERREIRO
ABOGADO POSTULANTE

PRIMERO.- Se adicione al artículo 10 de la Ley de amparo, con las fracciones IV y V con el siguiente texto:

IV. Contra las resoluciones de la autoridad judicial que confirmen la negatoria de una orden de aprehensión o de no sujeción a proceso.

V. Contra las resoluciones de la autoridad judicial que confirmen un Auto de Libertad o sentencia absolutoria.

La adición anterior tendría congruencia con las garantías que pretende otorgar los artículos 1° y 17 Constitucionales.

SEGUNDO.- Se propone la adición de la fracción XI del artículo 20 Constitucional, para quedar con el siguiente texto:

XI. La víctima y el ofendido por algún delito, o quien legítimamente los represente, sin perjuicio de las facultades que esta Constitución le otorga al Ministerio Público; cuando así lo deseen podrán ejercitar acción penal en contra del o los presuntos responsables, con base en las constancias que obren en la averiguación penal previa que haya integrado el Ministerio Público, solicitando las correspondientes órdenes de aprehensión o de sujeción a proceso, y en su caso solicitar la reparación del daño, todo ello con arreglo a las disposiciones que establezcan los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del fuero que corresponda.

Para tal efecto el Ministerio Público proporcionará a la persona interesada legítimamente, todas las constancias, apoyo y asesoría que requieran, y para tal efecto los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal, y de la Federación proveerán lo necesario para hacer efectiva esta garantía.

TERCERO.- Se propone la reforma al artículo 21 Constitucional, en los párrafos siguientes para quedar como sigue:

"Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, pudiendo la víctima y el ofendido de algún delito, o quien legítimamente los represente ejercitar la acción penal correspondiente, en los términos y condiciones que fijen las leyes penales de cada entidad federativa; del Distrito Federal; y de la Federación. El Ministerio público se auxiliará con un policía que estará bajo su autoridad…"

"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley; así mismo serán impugnables en la vía de amparo las resoluciones de la autoridad judicial que confirme la negatoria una orden de aprehensión; de no sujeción a proceso; autos de libertad y sentencias absolutorias…"

CUARTO.- Se reforme la Ley de Amparo, en lo que corresponda y los artículos de la Constitución que sean necesarios, a efecto, de que el Amparo que se conceda contra alguna Ley por ser ésta inconstitucional o anticonstitucional, tenga como consecuencia jurídica la derogación de la ley así declarada, la cual dejará de tener vigencia a partir del momento en que se publique en el diario oficial de la federación en cumplimiento a dicha ejecutoria, entendiéndose con ello que no tendrá efectos retroactivos.

Dicha reforma resulta de trascendental importancia para la República en general, pues no se puede concebir que vivamos en un Estado de Derecho y que se apliquen leyes que han sido declaradas anticonstitucionales por el máximo Tribunal de la Nación, pues quedaría en evidencia nuestro Sistema Jurídico al aplicar ese tipo de leyes a favor o en contra de algunos gobernados, violándose los principios de igualdad, de legalidad y de seguridad jurídica de los Mexicanos en general.

Señores Diputados, integrantes de tal distinguida Comisión de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión; sin duda, ésta es una gran oportunidad que se les presenta para que hagan Historia, al influir de alguna manera, para que la ley de amparo que debe tener como principal objetivo la salvaguarda de las Garantías Constitucionales de los Mexicanos, sean verdaderas reformas de fondo, y no simples modificaciones sin trascendencia; México y los Mexicanos requerimos auténticas garantías de igualdad, de legalidad y de Seguridad Jurídica, plasmadas éstas en nuestra Constitución y en Leyes Reglamentarias que sean claras, precisas y con una terminología sencilla, entendible y comprensible por cualquier Mexicanos que

sepa leer y escribir, no queremos leyes que viertan conceptos rebuscados, con doble interpretación, o con lagunas, o conceptos absurdos que sigan dando margen para que las autoridades encargadas de aplicar la ley, lo hagan a conveniencia de la parte a quien quieran favorecer, considero con todo respeto, que es el momento de tomar decisiones firmes, sin coacciones; que nos conduzcan como país a respetar la ley y el orden; es tiempo ya de terminar con este sistema de fueros e impunidades inaceptables, amparados en leyes ineficientes, aplicadas por Servidores Públicos corruptos y desleales a la Nación; los Mexicanos hasta hoy, hemos estado inmersos en una lamentable indiferencia que nos hace cómplices silenciosos de la corrupción que genera impunidad, y que solo refleja nuestro desamor por el orden, por la ley y por la justicia.

INGENIERÍA PROCESAL JURÍDICA.

LICENCIADO JORGE ANTONIO RAMOS ALBORES
ABOGADO POSTULANTE

Pretende alcanzar de cierta forma no solo la pronta y expedita impartición de justicia, si no corregir los procedimientos y abandonar los arcaísmos jurídicos que solo provocan el retraso de la administración de justicia, se sugiere elevar a rango constitucional los conceptos jurídicos procésales fundamentales, en el precepto constitucional respectivo, es decir, el artículo 17 constitucional, tales como: solemnidad, unistancialidad, pragmatismo, dinamismo, impulso oficial, gratuidad, universalidad y cumplimiento.

Estos conceptos vienen a revolucionar la administración de justicia en todos sus géneros partiendo desde el juicio de garantías así como las demás disciplinas jurídicas. La dinámica social de todo pueblo se refleja naturalmente en sus instituciones jurídicas, el avance cultural de los pueblos estriba necesariamente en la necesidad de alcanzar generosamente: la libertad, el bien común, la justicia, la seguridad pública, la seguridad social y la paz del pueblo. Los fines del estado que sean mencionado solo se logran a través de un estudio concienzudo de los hechos que son analizados por los sociólogos para después crear el derecho y regular esos hechos.

A la fecha el atraso cultural del pueblo mexicano es manifiesto en todos sus aspectos, lo que quiere decir que los hechos han rebasado al derecho, consecuentemente impera la necesidad de legislar profesionalmente ajustando la regulación de la conducto humana mediante el derecho para revertirlo al hecho y así ajustar cuentas inmediatas a los requerimientos sociales conforme la época.

Por lo anterior, es impostergable seguir aplazando la reforma jurídica al texto constitucional para cumplir firmemente con los fines del estado. Por ello la ingeniería procesal jurídica que se propone, busca afanosamente que se cumpla con la legal impartición de justicia.

Conceptos que integran la teoría que se propone.

Que se espera sea aceptada por ese H. Órgano para ser incorporados al artículo 17 de nuestra carta magna.

SOLEMNIDAD.- Se define como el acto público, formal, ceremonioso. revestido de ritualidad para un fin determinado.

Actualmente la administración de justicia se imparte sin ningún respeto a la ley como acto solemne, prueba de ello lo tenemos en los juzgados penales, juntas de conciliación y arbitraje, Juzgados de Distrito, juzgados civiles entre otros, donde los jueces se encierran en sus cubículos y quienes presiden las audiencias son los secretarios de acuerdos en un simple escritorio donde son llevadas las audiencias de ley y que el aspecto e imagen que dan dejan mucho que desear a los ajusticiados, cayendo en una aberrante administración de la justicia por tales, la disolución es basta dada la ausencia de solemnidad.

Al aplicar la justicia de manera solemne y en recintos debidamente revestidos de solemnidad con el mobiliario y espacio apropiado, hará necesariamente destacar la figura del juez, magistrado o ministro, quien será debidamente respetado y homenajeado, así mismo, estos presidirán en todo tiempo y forma los actos oficiales es decir las audiencias de ley, vigilando, amonestando, previniendo y sancionando a las partes contendientes, haciendo cumplir la ley en todo tiempo.

*__UNISTANCIALIDAD__.- La instancia es considerada como el derecho de los particulares de acudir a los tribunales a solicitar se les administre justicia

En nuestro sistema jurídico existe la doble instancia como garantía de los enjuiciados para solicitar la revisión revocación o modificación de las resoluciones.

El procedimiento judicial reviste entuertos, vericuetos, chicanas, retrasos, y sobre todo duplicidad de funciones, lo que determina una inicua administración de justicia, volviéndola retardada y desesperante, por tal al hablar de unistancialidad nos referimos a que únicamente el juez de primera instancia provea la instrucción del juicio, es decir desde el inicio de demanda, hasta la citación para oír sentencia, de ahí, debe remitir los autos del juicio al tribunal correspondiente para que emita la sentencia definitiva, con ello evitar las apelaciones y que finalmente son resueltas por el superior jerárquico. Este sistema puede ser utilizado tanto en el fuero federal como en el fuero común.

*__PRAGMATISMO__.- "Método filosófico divulgado principalmente por el psicólogo norteamericano Wulian James, según el cual el único criterio valido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa, se a de fundar en sus efectos prácticos." Esta disciplina tiene su origen en los Estados Unidos de Norte América y sus resultados han sido satisfactorios para el desarrollo de esa nación, alcanzando la

excelencia cuando es aplicado a pragmatismo, esto es facilitar el que hacer de las cosas, es decir acortar las distancias y procedimientos para alcanzar el fin buscado. En los procesos judiciales el exacerbado formalismo legal raya en la obstaculización práctica de la justicia haciéndola retardada y torpe por ello los jueces bajo la máxima investidura que les confiere la ley y de acuerdo a las atribuciones que le confiere la misma hacer asequible el procedimiento y sus formas, siempre alcanzando la meta con el menor esfuerzo. El pragmatismo viene hacer la formula necesaria para acabar con los arcaísmos legaloides que son inoperantes en la época en que vivimos y que es altamente tecnificada, nótese que los científicos en estas épocas han descubierto el genoma humano en todos sus compuestos orgánicos, así mismo, la tecnología cibernética nos ha llevado ha crear un ser humano en el interior de una computadora para conocer su funcionamiento vital y las reacciones ante los diversos estímulos.

Porque no ajustar la ley y los procedimientos a los alcances y avances científicos que la tecnología nos puede brindar y enterrar de un tajo los formalismos legaloides que no hacen otra cosa que dejar de cumplir el fin para el que fue creado, de ahí la necesidad de ajustar la praxis a la ley.

DINAMICA.- "Parte de la mecánica. que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen". La definición anterior nos permite conceptualizar la transcendencia de este elemento en el proceso judicial toda vez que las fuerzas de acción que se ejercitan en la contienda litigiosa, consecuentemente la inercia que se da en primera instancia con la presentación de la demanda, al respecto, se dan los turnos a determinados Juzgados por determinado número de días, una vez concluido el periodo de recepción de juicios, tendrán la obligatoriedad jurídica de cumplir con la instrucción correspondiente y una vez concluida deberán remitir los expedientes a las salas de sentencia, y de aquellos que no sean terminados, deberán enviarse aun Juzgado de rezago, comenzando de nueva cuenta su turno para instruir nuevos procesos. Este sistema es innegable su utilidad dado que el valor que aporta es sin lugar a dudas el de acortar los tiempos en la ventilación de los procesos judiciales.

ASEPSIA LEGAL. "Ausencia de materia séptica; estado libre de infección. Conjunto de procedimientos científicos destinados a preservar de gérmenes infecciosos el organismo. Aseptización acción y efecto de aseptizar".

Al respecto quiero referir a Ustedes que este concepto es novedoso en cuanto a su trascendencia, aun cuando en los conceptos jurídicos, el cual se conoce con el de probidad, resulta verdaderamente amplio y sustancioso el primero, toda vez que partiendo de la idea SEMMELWS, este gran medico húngaro aporto a la ciencia medica el principio de limpieza hospitalaria, ahora bien llevando este concepto al

derecho procesal, busca la limpieza de todo proceso legal y sobre todo las resoluciones que sean emitidas por el órgano correspondiente, en ese orden de ideas. Verbigracia, a tan notable científico y que hoy por hoy es venerado en la ciencia medica, como se ha dicho, su descubrimiento y experiencia debe ser aplicado a las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales los cuales se encuentran viciados por los siguientes aspectos: corrupción cohecho, tráfico de influencia, entre otras, pero con la fórmula que en este momento se escribe se anularan tales vicios, toda vez que al conformarse un procedimiento uninstancial donde el juez de instrucción al citar a las partes para sentencia, deberá remitir a la sala de sentencia que deberá resolver sobre el particular, con la salvedad de que al momento de ser enviada será turnada a la sala que corresponda el turno que no será conocido por las partes manteniéndose esto en secreto, lo cual favorecerá la imparcialidad, aún cuando muchos juristas aleguen que se esta violando el principio de inmediatez, pero bajo la instrucción, el juez siempre estuvo pendiente de escuchar a las partes y retribuirles la igualdad procesal respectiva. Cuando llegue el expediente a 1a sala, en el aséptico legal, procederán los dictaminadores o proyectistas a elaborar las resoluciones correspondientes sin que ello de lugar a que conozcan a las partes que los puedan sobornar o algún juez o secretario o autoridad superior, puesto que las partes no saben quien va resolver. Esta formula es de singular trascendencia inclusive para la protección de la integridad física de los administradores de justicia principalmente de jueces y magistrados vinculados con el derecho penal, donde lo delincuencia organizada con el objeto de alcanzar la libertad de los presos o disminuir sus penas por delitos del crimen organizado o estupefacientes, ello va a favorecer en este renglón que estos funcionarios no corran peligro y a su vez se asegura la justa administración de la justicia.

IMPULSO OFICIAL.- Esto significa que los jueces, de oficio, ordenen a las partes cumplimentar todos y cada uno de los avances procesales, o la perdida de los derechos respectivos declarando su preclusión o lo que en derecho proceda, siempre, buscando llegar a la meta en este caso al cierre de instrucciones, y no seguir dilatando los juicios como se hace actualmente donde se deja a albedrío de las partes el impulso procesal, que genera de manera extraordinaria el rezago de juicios que incluso duran décadas, a su vez, con ello causa un verdadero descontrol en el manejo de los asuntos al hacerlos abundantes y abultados, en consecuencia genera un gasto inútil para el erario público. Cuando un asunto jurídico es manejado por el administrador de justicia vigilando su impulso y avance, estamos en presencia de un estado que esta cumpliendo el fin de la justicia que tanta falta hace.

GRATUIDAD.- Este concepto es entendible en su esencia y cuando los gobernados acuden a solicitar la administración de justicia se enfrentan a múltiples vicios que

existen en los juzgados y tribunales, donde una notificación debe de ser pagada al empleado, así mismo, pagar al actuario para que proceda a realizar las mismas, así como honorarios de peritos, policías, copias, ejecuciones de sentencias, etc., todo debe de ser pagado por las partes para que proceda la acción legal intentada, luego entonces donde esta la garantía de gratuidad de que habla la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por ello el estado debe vigilar y garantizar que ya no se lucre con la administración de justicia por parte de los empleados y funcionarios y que los gobernados vean satisfechos que su patrimonio no se disminuye por tal concepto.

UNIDAD.- Debe considerarse como todo aquello que rige en un solo sentido de manera absoluta, el tronco común es la teoría general del proceso de ahí que se den diversas ramas procesales, partiendo de la utilidad y significación a la administración de justicia que puede aportar la teoría general del proceso en el sentido de unificar los criterios y procedimientos en una sola forma, que garantice primordialmente la prontitud y expedites, toda ves que las corrientes doctrinarias han favorecido en acarrear vericuetos y entuertos a dicha administración, haciendo las disciplinas inaccesibles y llenas lagunas y recovecos injustificables, por ello asentir en el criterio de unificar los procedimientos jurídicos en un sentido, consiguiendo la optimización de tiempos y alcances y ajustar dichas disciplinas a la realidad y no como se pretende aplicando criterios arcaicos que no responden a los usos y costumbres de nuestra época.

CUMPLIMIENTO.- Las resoluciones que emiten las autoridades muchas de las veces quedan sin ejecutarse debido a la negligencia o falta de recursos correspondientes, por lo que las resoluciones pasan a engrosar los archivos judiciales donde la justicia simplemente trabajo pero no se cumplió. Sobre esto último infinidad de individuos han aprovechado este aspecto para enriquecerse u obtener un bien de manera ilícita ya que en muchas de las ocasiones por cansancio o falta de recursos o chicanas no se ejecutan las resoluciones. El estado esta obligado a vigilar y garantizar que a los gobernados se les haga justicia y que ella se cumpla. Por tal, siempre que haya un juicio debe terminar con su ejecución basado en el principio de impulso oficial que hemos explicado anteriormente.

Como puede verse, la teoría que propongo sustenta notablemente múltiples principios jurídicos procesales que no se contienen en las reformas a la ley de amparo, por lo que esa H. Representación Social debe considerar se apliquen en las reformas para alcanzar la más justa administración de justicia que tanta falta hace.

Quiero hacer remembranza a las reformas propuestas por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, mediante las cuales se modifican diversos dispositivos

constitucionales de suma trascendencia a la administración de justicia federal, principalmente la que atañe a disminuir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia y la desaparición de las cuatro salas, al respecto, penosamente me permito expresar con todo respeto que los ministros que se ha vuelto "todologos" del derecho al haberse integrado dos salas híbridas, que solo emiten resoluciones o jurisprudencias verdaderamente contrarias al derecho y a los principios generales, ello me recuerda la frase de un amigo añejo que decía en una empresa que laborábamos que: "parecemos chivos en cristalería", sobre el particular propongo que se regrese al anterior sistema de cuatro salas por materia y a su vez poder incrementar el número de ministros para atender las demandas de la nación que tanta falta hace, la cantidad debe de ser de cuatro ministros por cada estado y así mismo en unidad colegiada operar en pleno con todas las debidas facultades constitucionales, es menester hacer mención de que este órgano de poder supremo debe ser ocupado por los más excelsos jurisconsultos que hayan demostrado a lo largo de su vida un altísimo conocimiento del derecho y sobre todo una elevada moral que garantice de que quienes nos juzgan son digno de hacerlo, esto debe ser objeto de análisis y discusión.

Una facultad primordial que debe de ser exclusiva de la Suprema Corte de Justicia es la relativa a la de emitir jurisprudencia así como definirla, esto debido a los múltiples criterios que sustentan los tribunales colegiados y unitarios, lo cual deja mucho que desear al descubrirse que posiblemente se sustente un criterio en atención a un interés particular o a su vez por imposición, salta a la vista que también se emiten jurisprudencias por dichos órganos con ignorancia o confusión a los conceptos jurídicos, por tal, debe anularse diversas facultades a esos órganos de justicia por las razones expuestas, queriendo expresar también que en muchas de las expresiones que ellos al interpretar la ley violan la voluntad de legislador en determinado sentido, con la cual se convierten en políticos y no juristas por lo que este riesgo debe anularse de la Carta Magna y trasladarlo a quien verdaderamente le corresponde interpretar el sentido epistemológico de nuestra carta Magna. Sobre esto último generalmente el constituyente elabora la parte dogmática observo atinadamente con mucha minuciosidad la protección de los intereses sociales los cuales no pueden ser trastocados ni interpretados por menores instancias, ello sólo compete la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por sabida cuenta son filósofos del derecho y ello de bien en que como guardias eméritos de la Constitución sabrán hacerlo como lo ordena ella misma.

Un punto es el relativo a la facultad de iniciar leyes que se le da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dada su pericia y conocimiento de las necesidades jurídicas del pueblo mexicano, si esta facultad la tienen los otros poderes por que no habrá de tenerla ésta.

CONCLUSIONES.- Como puede observarse a lo largo de lo anteriormente expuesto, estriba en una nueva concepción de lo que puede ser la administración de justicia en México utilizando la teoría de INGENIERIA PROCESAL JURIDICA, cuyos principios procesales se propone sean elevados a la categoría de rango constitucional para que se garantice la eficacia y optimización correspondiente. Por lo que hace a las reformas a la nueva ley de amparo considero que son pinceladas de juristas que merecen respeto pero que no resuelven en si la problemática a la administración de justicia, por ello debe regresar dichas reformas a la cámara de origen para que el eco de mi voz pueda servir en algo a mi país que tanto amo. HOY POR HOY POR MI RAZA HABLARA MI ESPIRITU.

LAS EJECUTORIAS CONDENATORIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LEYES CON EFECTOS ERGA OMNES

LICENCIADO FARUK FAYAD ZELLEK
ABOGADO POSTULANTE

Conclusiones

PRIMERA.- El control de la constitucionalidad es una importancia tal, que atañe no sólo a la ley suprema, sino a toda la ordenación jurídica existente y por ende, a la integridad misma de la forma de organización social Estado.

SEGUNDA.- Son clasificables en cinco tipos las formas de tutela constitucional adoptadas universalmente, a saber: a).- Por órgano especial político, b).- Por órganos especial jurisdiccional; c).- Por órgano legislativo; d).- Por órgano judicial; y e).- Por órgano judicial político.

TERCERA.- En nuestro país, históricamente se han experimentado tres tipos: a).- Por órgano especial político; b).- Por órgano legislativo; y c).- Por órgano Judicial. Más en virtud del sistema político-económico que nos rige, la forma más recomendable para México (que es además la que actualmente impera), la constituye la ejercida por el órgano judicial en tanto actúa cumpliendo su función natural, esto es, la función jurisdiccional.

CUARTA.- Aunque no es el único, el juicio de amparo es el principal medio de protección constitucional mexicano, el cual es definible como un medio impeditivo-restitutorio de garantía jurisdiccional directa de los derechos fundamentales del hombre establecidos en la constitución, indirecta de casi la totalidad de su parte orgánica, e indirecta también, del régimen de legalidad que de ella emana.

QUINTA.- No obstante lo anterior, que lo sitúa entre las más importantes fórmulas controladoras del mundo, podemos afirmar que el juicio de amparo es un medio de control limitado, que no constituye la institución procesal que la auténtica garantía de la supremacía constitucional exige; pues algunos casos de violaciones constitucionales quedan fuera de su órbita, y otros los tutela en forma ineficaz, particularmente los de inconstitucionalidad de leyes, motivado por el principio de a relatividad de las sentencias.

SEXTA.- Para llenar los casos que quedar fuera de la órbita del amparo (por el principio de la instancia de parte agraviada), estimo que se debe adicionar el artículo 105 de la ley suprema, para dejar acción a las autoridades, consideradas como tales, de impugnar las violaciones de soberanía o las invasiones de competencia en una forma ordinaria, el cual podría quedar e la siguiente manera: Artículo 105.- Corresponde solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno, conocer de las controversias que, sobre la constitucionalidad de sus actos, se susciten: entre dos o más Estados; entre los poderes de un mismo Estado; entre la Federación y una o más Estados y entre los poderes de la Federación.

Además se tendría que adicionar el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual en sus fracciones I y II, fija la competencia del pleno de la Suprema Corte para conocer los casos anteriormente citados, agregándole la hipótesis de invasión de competencias "entre los poderes de la Federación", que actualmente le falta.

SEPTIMA.- A fin de subsanar la última anomalía señalada en la conclusión quinta, la cual es gravísima no tan solo por lo ahí mismo anotado, sino porque además contraría los valores de más alta jerarquía en el derecho como son la seguridad jurídica y la justicia, considero que las ejecutorias condenatorias de inconstitucionalidad de leyes, cuando sean dictadas por unanimidad de votos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tener efectos erga omnes.

La inaplicabilidad absoluta de las leyes anticonstitucionales indudablemente constituye un ideal del derecho, alcanzado por la mayoría de los países, y que, en mi concepto ya es adoptable a la superada realidad jurídica mexicana.

INTEGRANTE DE LA
COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIPUTADO FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO

Me han pedido hacer una muy breve reflexión, de un minuto, porque esto se ha prolongado demasiado, pero como miembro de esta Comisión creo que todos estamos convencidos que la celebración de este tipo de eventos como el que hoy nos congrega, resultan esenciales para el Poder Legislativo.

Ambas cámaras deben privilegiar el ejercicio de este tipo de eventos en el que se puedan expresar las diversas corrientes del pensamiento jurídico, los intereses personales o particulares de grupos, en cuanto aquí por ejemplo lo expresaba con gran pasión el licenciado Levy, por ejemplo, que fue de los últimos.

Y aquí tengo entendido que el día de hoy y ayer, que no estuve yo presente, estuvieron también funcionarios de la administración pública, esto es académicos, miembros de asociaciones profesionales, de colegios de abogados, de abogadas, personas que a título particular, personal, vinieron y expresaron su punto de vista sobre este documento jurídico que se ha venido analizando.

Yo en lo personal, soy de la idea que este tipo de foros deben enriquecerse aún más, porque por ejemplo el día de hoy me di cuenta de opiniones contrarias, ricas, convencidas de uno y otro expositor, sin oportunidad de réplica; no dejaron a los diputados ayunos, seguramente, de argumentos jurídicos que seguramente nos iban a dar luz sobre este documento jurídico que hoy se analiza.

Entonces, por ello me felicito como miembro de esta Comisión, que el ejercicio de este tipo de eventos se estén prácticamente popularizando en varias comisiones para poder ejercer mejor nuestra función de legisladores. Muchas gracias a todos ustedes.

SECRETARIO DE LA
COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS

Por mi parte, señores ponentes. Señoras y señores. Como miembro de la Mesa Directiva y miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, estacamentado por el Partido de la Revolución Democrática, yo quiero manifestarles lo siguiente.

Reiterar para quienes no lo han escuchado y también para quienes nos ven a través del Canal Legislativo lo siguiente. Cuando inicia la Legislatura, la LVIII Legislatura, una serie de diputados, entre ellos el de la voz, presentamos diversas reformas a la Ley de Amparo.

Dentro de la Comisión de Justicia, nos dimos a la tarea con la atingente y acertada dirección y presidencia de José Elías Romero Ápis, de analizar no solamente las iniciativas propuestas por los ciudadanos diputados de esta Legislatura, sino también de anteriores legislaturas con la atingente y acertada dirección y presidencia de José Elías Romero Apis, de analizar no solamente las iniciativas propuestas por los ciudadanos diputados de esta Legislatura, sino también de anteriores legislaturas que habían quedado o que han quedado hasta el día de hoy en la denominada *congeladora*.

Nos dimos cuenta que había que sacarlos de ahí para darles vida y analizarlos a la luz del Derecho, desprendidas de las banderillas políticas y de las ópticas ideológicas a través de la óptica que siempre será de la balanza y de la justicia porque es la del Derecho, desde la ciencia del Derecho. Así es como hemos trabajado y seguiremos trabajando en esta Comisión de Justicia.

Y también nos dimos cuenta que hay los esfuerzos de asociaciones, de barras, de colegios, de institutos, de facultades, y también los esfuerzos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han venido trabajando en un proyecto denominado *Hacia una Nueva Ley de Amparo*. Como tal lo hemos visto, como propuestas que pueden enriquecer las reformas a la Ley de Amparo.

Tengan ustedes la seguridad de que con todas responsabilidad, con verdadero sentido del deber, pero también desde la óptica y perspectiva del derecho, porque afortunadamente en la Comisión de Justicia existen sus miembros son destacados

juristas, exceptuando al de la voz, que veremos la pertinencia o no de las reformas a la Ley de Amparo. Si es necesaria una nueva, si es única y exclusivamente el ver en qué capítulos o títulos o artículos se operan estas reformas, en los que hemos escuchado a lo largo y ancho del país, diferentes opiniones.

No termina aquí esta consulta. Todavía tendremos unos dos o tres ejercicios más con diferentes magistrados a lo largo y ancho del país, de diferentes entidades de la República, que van a enriquecer nuestro trabajo, un trabajo que finalmente haremos los legisladores.

Por primera vez en muchos, muchos años, esta Legislatura expresa auténtica y efectivamente la voluntad nacional. Somos representantes auténticos porque así nos lo ganamos el 2 de julio del año pasado, nuestra representación de los ciudadanos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y sentimos todos nosotros, independientemente del partido político al que representamos, el deber y la responsabilidad de hacer que tenga este país un Sistema de Protección Constitucional real, efectivo, eficaz, pronto y expedito en la realidad, para que ya no haya más, ya nunca más haya, el *obedézcase pero no se cumpla*. Hay que temerle a la ley para no tener que temerle a nada ni a nadie; y en ese empeño estamos los diputados de esta Legislatura. Muchas gracias.

PRESIDENTE DE LA
COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS

En nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos quiero una vez más agradecer a todos quienes han participado en este proceso que a lo largo de tres meses se ha llevado a cabo en lo que constituye una primera etapa de análisis y reflexión rumbo al perfeccionamiento de nuestro Sistema de Protección Constitucional y Amparo.

Ha sido muy enriquecedora para esta representación nacional la participación de todos los ponentes que han participado en ella. Desde luego que no concluye aquí todo el trabajo de reflexión y análisis, sino como ha sido mencionado previamente, habrá de seguir, a los señores ponentes les rogaremos que sigan colaborando con esta Comisión, tanto en Pleno como con los diputados a quienes se les encargue encomiendas específicas en torno a este tema a efecto de poder estar en las mejores condiciones de tomar las decisiones congresionales que nos corresponden.

Mucho es lo que hay que hacer y los tiempos futuros habrán de resolver muchas de las cuestiones que en el presente todavía resultan incógnita. Ellos despejarán la suerte del principio de relatividad, ellos nos señalarán la mejor distribución competencial de los Tribunales de Amparo, ellos nos dirán la forma y el procedimiento más certero, más ágil y más sencillo.

Pero no nos dirán con la misma automaticidad lo que tendremos que hacer los hombres ante el amparo y con el amparo. Ello habrá de formarse no sólo con ciencia y con paciencia, sino fundamentalmente, además con leyes idóneas y con una vigorosa voluntad y una firme conducta.

Leyes, voluntad y conducta en el quejoso, uno de los hombres del amparo, para usar y no abusar el amparo, para acceder con él a la justicia y a no postergarla para otros, para no retardar ejecuciones o resoluciones ni paralizarlas, para conducirse con probidad y sinceridad, para entender que la justicia o existe para todos o no existe para nadie.

Leyes, voluntad y conducta en las autoridades responsables para informar con oportunidad y veracidad, para asumir el cumplimiento de la ley y no para ufanarse de su elusión, para acatar la resolución emitida en debida contienda, para recordar que no sólo está en juego en efecto del acto reclamado sino el conflicto y la angustia humana de la sociedad o de los individuos a los que sirve.

Leyes, voluntad y conducta en los terceros perjudicados, personaje que en ocasiones parece casi anónimo en contraste con una autoridad responsable e impetuosa, y en otras, por el contrario, resulta un litigante solitario frente a una responsable desinteresada.

Leyes, voluntad y conducta en el Ministerio Público para asumir la importancia fundamental de su cometido y para representar con todo celo a la sociedad cuando están en juego sus intereses o para no entorpecer el procedimiento cuando la sociedad es ajena al interés en juego. Leyes, voluntad y conducta en todos aquéllos que sin ser parte tienen tanta injerencia en el amparo o acaso más que quienes lo somos. En los juzgadores para sobreponer la vitalidad de la norma a su perfección formal, para conjugar entrega y valor en el afán de la justicia, para asumir la muy difícil y muy comprometida tarea de hacer triunfar a la justicia con más vehemencia aún que como lo harían las partes.

Leyes, voluntad y conducta en los litigantes y en su fortaleza para resolver el conflicto secular que existe entre los medios y los fines; para decidir la lucha procesal y en ocasiones, la anímica entre el éxito del patrocinio y la victoria de la justicia, entre el triunfo de la pericia o el triunfo de la conciencia.

Además, voluntad y conducta en los maestros para que su enseñanza sea oportuna y precisa, constante y suficiente. Sólo con ello habrá de ampliarse el acceso a una instancia que por su complejidad técnica es a veces inaccesible aun para la mayoría de los abogados, reconociendo que el problema del amparo no comienza con el acto reclamado; quizá comienza con su comprensión desde la Escuela de Derecho.

Por eso también requerimos voluntad y conducta en nosotros, los legisladores, para fortalecer una institución que como muchas otras en el Sistema Jurídico Mexicano reclama adecuación a las necesidades cotidianas del presente, que requiere adaptación como instrumento a los fines que inspiraron su creación, que está urgida de la eliminación y de la superación de obstáculos con los que la astucia y a veces la perfidia, la han ido desgastando.

En fin, como vemos son decenas y a diario surgen más las cuestiones a las que habremos de aplicarnos quienes estamos a cargo de las responsabilidades fundamentales de la nación; no para hacer una ley al acomodo de los juzgadores, no para hacer una ley a la conveniencia de las autoridades responsables, no para hacer una ley al mero gusto de nosotros, los legisladores, sino para hacer una ley que revitalice y perfeccione un sistema que está urgido de nueva vida y de más nobleza.

Muchas gracias